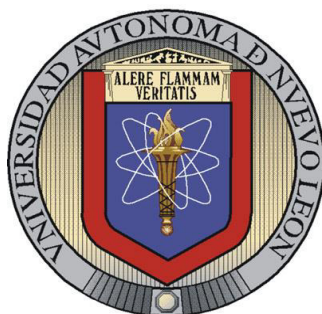


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES



TESIS

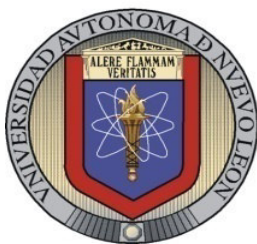
**“PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE PERSONAS
INDÍGENAS EN CIUDADES INDUSTRIALES. ANÁLISIS DE
MONTERREY Y SU ÁREA METROPOLITANA”**

PRESENTADA POR:

JOSÉ FREDMAN MENDOZA IBARRA

**COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN FILOSOFÍA
CON ORIENTACIÓN EN CIENCIAS POLÍTICAS**

2019



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
RELACIONES INTERNACIONALES



PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE PERSONAS INDÍGENAS EN
CIUDADES INDUSTRIALES. ANÁLISIS DE MONTERREY Y SU ÁREA
METROPOLITANA

Tesis presentada por

José Fredman Mendoza Ibarra

Para obtener el grado de

DOCTOR EN FILOSOFÍA CON ORIENTACIÓN EN CIENCIAS POLÍTICAS

Directora de Tesis

Alma Rosa Saldierna Salas, Ph.D.

Co-Directora de Tesis

Claire Wright, Ph.D.

Monterrey, Nuevo León, México 2019

ÍNDICE

CAPÍTULO I. METODOLOGÍA.....	7
1.1 Introducción	7
1.2 Antecedentes	8
1.3 Planteamiento del problema	11
1.4 Preguntas de investigación	14
1.5 Justificación	14
1.6 Objetivos	16
1.7 Hipótesis de Investigación	16
1.8 Marco conceptual.....	17
1.9 Modelo de investigación.....	19
1.10 Diseño de la investigación.....	19
1.10.1 Aproximación mediante entrevistas semiestandarizadas	20
1.10.2 Aproximación mediante grupos de enfoque.....	21
1.11 Matriz de congruencia	22
CAPÍTULO II. EL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA DEMOCRACIA	23
2.1 El Estado. Un análisis desde el centro hasta la periferia	26
2.1.1 Del mundo antiguo. Pautas interpretativas del Estado ideal de Platón	26
2.1.2 Del mundo moderno. Sobre el estado de naturaleza y el contrato social	30
2.1.3 Del mundo contemporáneo. Sobre la formación del Poder Político en el Estado	33
2.2 El Estado Latinoamericano y sociedad	40
2.3 Democracia occidental	43
2.4 Democracia intercultural como incentivo de la participación política.....	46
2.5 Participación electoral como dimensión parcial y concreta de la participación política.....	54
2.6 Participación política indígena	58
2.7 Participación política indígena como elemento axial del sistema político	66
CAPÍTULO III. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICO ELECTORAL INDÍGENA COMO BASE DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO	76
3.1 Participación electoral indígena como problema procesal.....	76
3.2 Factores que obstaculizan la participación electoral indígena	80
3.3 El Aspecto jurídico-normativo-procedimental de la participación electoral indígena.....	81

3.4 Las prácticas reales de los partidos políticos	87
3.5 Procesos identitarios y culturales para la participación electoral indígena en México.....	93
3.5.1 Usos y costumbres	94
CAPÍTULO IV. EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. ¿GARANTÍA, PROMOCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS INDÍGENAS?....	
4.1 El boom industrial en Monterrey. Momentos histórico-políticos del pasado, dinámicas del presente.....	100
4.2 Cómo es el Monterrey del siglo XXI.....	104
4.3 ¿Qué estipula la Ley de Derechos indígenas en el Estado de Nuevo León?	107
4.4 ¿Bajo qué enfoque se podrá explorar y describir la participación electoral indígena en Monterrey?	109
4.5 El análisis Institucional como mecanismo interpretativo	111
4.5.1 La Ciencia Política y las Instituciones: ¿Qué son las Instituciones y qué cambios han tenido éstas en el decurso de los años?	112
4.5.2 Institucionalismo normativo e Institucionalismo empírico.....	115
CAPÍTULO V. APROXIMACIÓN CUALITATIVA A TRAVÉS DE DOS MÉTODOS: ENTREVISTAS SEMI-ESTANDARIZADAS Y GRUPOS DE ENFOQUE	
5.1 Aproximación cualitativa. El enfoque cualitativo como pauta interpretativa del problema de investigación	118
5.2 ¿Cómo se abordará el objeto de estudio?	119
5.3 Aproximación a las dos Instituciones clave en materia indígena en el Estado de Nuevo León	121
5.4 Método primero. Entrevistas semiestandarizadas a informantes clave en tema indígena en Nuevo León y el área metropolitana de Monterrey	123
5.4.1 Selección de participantes. Entrevistas a funcionarios de las Instituciones Gubernamentales.....	124
5.4.2 Selección de participantes. Entrevistas a Académicos	125
5.4.3 Selección de participantes. Entrevistas a Dirigentes Estatal de Partidos Políticos en Nuevo León	126
5.4.4 Selección de participantes. Entrevistas a Asociaciones Civiles indígenas y pro indígenas y activistas indígenas.....	127
5.5 Método segundo. Grupos de enfoque con personas indígenas	128
5.5.1 Grupos de enfoque con personas indígenas y los problemas de accesibilidad a la comunidad	129
5.6 Diseño de los grupos de enfoque	131

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DEL VOTO INDÍGENA EN MONTERREY Y SU ÁREA METROPOLITANA	133
6.1 El Voto como variable dependiente: revisión histórica como pauta interpretativa del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana	133
6.2 El voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana: la Educación, las Instituciones, las Leyes y la Homogeneidad como elementos axiales del voto indígena.	136
6.2.1 La falta de información en torno al voto indígena en Monterrey y el desconocimiento del registro para votar	137
6.2.2 El clientelismo electoral en Monterrey y su Área Metropolitana. La compra de voto como generador de desconfianza y falta de interés en la participación electoral indígena ..	144
6.2.3 Los líderes indígenas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil y su relación con el voto indígena en Monterrey. Una aproximación desde los actores clave	148
6.3.4 La homogeneidad y la agenda política indígena como pauta interpretativa del voto indígena en Monterrey y su área metropolitana	151
6.3 A manera de conclusión. Esbozos del voto indígena en Monterrey y su área metropolitana	153
CAPÍTULO VII. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DEL VOTO INDÍGENA EN MONTERREY Y SU ÁREA METROPOLITANA.....	156
7.1 Las variables independientes como variables interpretativas y explicativas del voto indígena. Una aproximación cualitativa al análisis político de la participación electoral indígena en Monterrey.....	156
7.2 Las variables clásicas del voto como claves interpretativas del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana	158
7.2.1 La proximidad a los Partidos Políticos. ¿El camino correcto para la participación electoral indígena?	158
7.2.2 La afección y desafección política como variable explicativa clásica del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana	169
7.2.3 La confianza en la política como componente mental y operativo de los principales actores en la participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana	171
6.2.4 El conocimiento político indígena. Una reinterpretación de los cánones clásicos.....	176
7.3 Las variables étnicas del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana. Una interpretación dual.....	185
7.3.1 El conocimiento de derechos indígenas. El baluarte instrumental para la participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana	185
7.3.2 La proximidad a las OSC indígenas y pro-indígenas, ¿incentiva a la participación político-electoral en Monterrey y su Área Metropolitana?	205

7.3.3 Usos y Costumbres como variable que influye en el voto de la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana. Análisis de sus alcances y problemáticas.....	213
7.4 Las variables emergentes. Una interpretación sobre los nuevos componentes y las formas en cómo se materializa el voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana.....	235
7.4.1 La Voluntad Política como variable emergente. Aproximaciones desde la construcción de una Agenda Política Indígena, la Sinergia Institucional y el papel de la información y su relación con el voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana	237
7.4.2 Discriminación hacia la población indígena. Análisis de la discriminación social y discriminación institucional como variables que influyen en la participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana	252
7.4.3 La inoperabilidad de la Ley de Derechos Indígenas en Nuevo León como variable emergente. Análisis de las causas de la inoperabilidad y su influencia en el voto indígena..	261
7.4.4 El Padrón de Personas Indígenas y su categorización como variable emergente. Un análisis de su influencia positiva y negativa en el voto indígena en Monterrey.....	266
7.4.5 La Organización Política Indígena como variable emergente del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana. Un análisis del Comité Interinstitucional, el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas y los Líderes Indígenas.....	271
7.4.6 La proximidad de las personas indígenas a la Academia como variable emergente. Análisis del papel de la academia y de la educación y su influencia en el voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana	280
7.5 A manera de conclusión. Las variables independientes como influyentes del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana: las variables clásicas, étnicas y emergentes	284
CAPÍTULO VIII. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES GENERALES.....	287
Referencias	293

Índice de Figuras

Figura 1. Conocimiento social a partir de conceptos platónicos	28
Figura 2. Bases de la existencia social.....	39
Figura 3. Influencia de la participación política indígena en la reconceptualización de los sistemas políticos.....	67
Figura 4. Esquema para un análisis político general	69
Figura 5. Principio de la participación política indígena	74
Figura 6. Principios de los derechos políticos indígenas en México	94
Figura 7. Variables que influyen en el voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana	157

Índice de Tablas

Tabla 1. Principios planes de acción de los partidos políticos nacionales más representativos en México	91
Tabla 2. Sistema de Usos y Costumbres	96
Tabla 3. Aspectos instrumentales y sustantivos de la Ley de Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León.....	108
Tabla 4. Instituciones y actores-informantes clave.....	123
Tabla 5. Características de los grupos de enfoque	132
Tabla 6. Variables-categorías emergentes y sub-nodos	236

CAPÍTULO I. METODOLOGÍA

1.1 Introducción

En el decurso del tiempo las modalidades a las que están sujetas determinadas civilizaciones encuentran su cauce ya sea en el “desarrollo” o “progreso” de lo que otrora podrá denominarse la evolución de los pueblos (siguiendo la lógica evolucionista darwinista), con ello dejando al anacronismo las culturas, los pueblos y/o las civilizaciones que no llegaron a compartir las mismas visiones occidentales desde principios del Siglo XVIII hasta ya entrado el siglo XX. Ejemplo de lo anterior reside en la América Latina desde sus albores coloniales hasta la entrada de la región a la dinámica global¹, donde la *marginación integral* se encuentra, hasta la fecha, materializada en las personas pertenecientes a pueblos indígenas y que no fue sino a partir de la irrupción de aquellos a las arenas políticas en las últimas décadas que se comenzó a concientizar sobre distintas formas de vida política que no fuesen las construidas decimonónicamente y mantenidas a lo largo del siglo XX.

Los procesos culturales y políticos que suceden en Latinoamérica han superado las visiones economicistas de la sociedad. En México, y sobre todo en Monterrey y su Área Metropolitana, resulta acuciante la incorporación de las personas indígenas al escenario político-electoral para la consolidación democrática propia del siglo XXI. En tal tenor, y con basamento en las normas jurídico-normativas por un lado y las empíricas/políticas por el otro, es relevante dar cuenta de cómo se ha desarrollado la participación electoral indígena en un contexto migratorio como lo es Monterrey y su Área Metropolitana. Además, y en función de lo que se llegue a conocer de la partición electoral indígena, se podrá analizar

¹ Resulta importante tomar en cuenta la versión que Enrique Dussel, en su *Política de la Liberación*, presenta en torno al esclarecimiento del papel de América Latina en los procesos económico-industriales primero, económico-globales después. Para los primeros, el trabajo de las personas originarias de los países clave en la colonia (México y Perú), que se concentraba en la extracción de recursos minerales, fue pieza nodal en el capital para que se desarrollase la Revolución Industrial propiamente. Para los segundos, la apertura comercial de países como México significó una rápida dispersión tanto geográfica (cesión, venta y explotación territorial) como migratoria que suponía o 1) progreso y desarrollo económico o 2) incapacidad de competencia y la consecuente estrechez de capacidades comerciales que orillaban a una considerable cantidad de población a destinar sus esfuerzos a mano de obra que en comparación con otros países se encontraban encarecidas de manera exponencial. Para una mayor reflexión consultar Dussel (2007; 2009).

cómo se dan las relaciones entre la participación electoral, las Instituciones y la influencia de los actores políticos en las acciones gubernamentales/institucionales.

Con todo lo anterior, el estudio de la participación electoral indígena en ciudades industriales como lo es Monterrey y su Área Metropolitana permitirá 1) sistematizar lo referente a la participación política indígena en México, 2) dar cuenta tanto de los avances democráticos en la materia como de los escollos que se presentan en torno a la participación y representación indígena en México en general y en Monterrey y su Área Metropolitana en lo particular, y 3) comenzar los estudios del fenómeno desde la trinchera de la Ciencia Política en la arena académica en Nuevo León.

1.2 Antecedentes

Ante cambios de paradigmas económicos y políticos surgidos con el paso de los siglos, resulta perentorio analizar los procesos políticos y culturales que se inscriben a la par de específicos cambios sociales. De cara a posibles viajes semánticos, pues el lenguaje cambia al transformarse las civilizaciones a raíz de implicaciones-transformaciones-consecuencias sociopolíticas y culturales (Gramsci, 2009; Wilk-Racieska, 2012), aparecen a relieve categorías desarrolladas a través del tiempo que oscilan entre el determinismo, entendido como “formaciones tradicionales a las que se añaden los mecanismos del poder autoritario, de la educación y de las industrias culturales” (Monsiváis, 2004, p. 28) –tales como la industrialización y occidentalización–, y las categorías de multiculturalidad e interculturalidad, éstas acuñadas en las olas migratorias dirigidas a las grandes zonas conurbadas; produciendo procesos culturales y políticos que superan la importancia demográfica del fenómeno migratorio (Bartra, 2013).

En ese sentido, la exclusión del paradigma político-social de minorías étnicas cristalizó en América Latina, a finales del siglo XX, en múltiples movimientos y organizaciones indígenas que pusieron en jaque la forma de operar de los gobiernos y que, además, precisaron de respuestas institucionales e instrumentales para hacer frente a sus demandas (Van Cott, 2004). Tales movimientos y organizaciones encontraron su crisol teórico en la estructura de oportunidades políticas (EOP) (Tarrow, 2012) y en la teoría de la acción colectiva en

general; propiciando, a partir de la identificación de oponentes y en un brío internacional en torno a lo político (Melucci, 2010), el diálogo con las instituciones y el gobierno en turno. Siendo Ecuador, Bolivia y Perú los países más representativos de tales procesos (Martí S. , 2013).

En el caso de México, y a pesar de los esfuerzos gnoseológicos por enaltecer la mexicanidad en términos filosóficos, que van desde la superación del sentimiento de inferioridad y tendencia a la imitación con Alfonso Reyes (1942) y Leopoldo Zea (1978), hasta la aceptación e interpretación de la realidad mexicana a partir del conocimiento de la cultura y del desarrollo educativo en México de acuerdo con Samuel Ramos (1997) y José Vasconcelos (2014), la emancipación política del mestizo no ha concommitado con la emancipación política de los pueblos indígenas (Salazar, 2006). Lo anterior ha desembocado en una falsa representación de comunidades indígenas en los medios de comunicación (Marañón, Saldierna, & Muñiz, 2013), así como la sobreabundancia, en la América Latina en general, de represiones a pueblos indígenas por parte de “actores estatales y paraestatales” (Wright C., 2013) y en una serie de medidas gubernamentales igualitarias que han rozado el paternalismo, autoritarismo y la desigualdad estructural (González Casanova, 2013; Monsiváis, 2004).

La variedad étnica e histórica que cada Estado posee en México dista de constituir una sociedad homogénea. Debido al contexto político, social y económico a finales del siglo XX, la movilidad de habitantes de zonas rurales hacia ciudades industriales se convirtió en opción viable para sobrevivir (Granados, 2005); ante tales fenómenos, la diversidad cultural mexicana hizo conspicuos los procesos migratorios suscitados dentro del territorio nacional mismo. Como muestra de ello, se habrá de visibilizar el caso de Monterrey y su Área Metropolitana que por su constitución social –cabe destacar que carece de comunidades indígenas originarios de la región (García, 2013) –, geográfica y el boom industrial que surgió en la ciudad al entrar el siglo XX, ha desarrollado dinámicas de aculturación como condición sine qua non se consolidasen los procesos migratorios (Nuncio, 1982). A éstos últimos, entendidos como “el movimiento territorial de personas que trasladan su espacio de vida a otro” (Cárdenas, 2014) así como “sentimientos, imágenes y reacciones con respecto al

simbolismo espacial que rodea al individuo” (Harvey, 1977, p. 28), han de agregárseles particularidades sociales y culturales propias de los procesos políticos de la región.

En ese sentido, el plexo de características que hacen dable la incorporación de minorías etnoculturales, éstas entendidas como grupos indígenas, minorías nacionales e inmigrantes (Wright & Aguirre, 2015), al escenario político y en un contexto de migración, se suscriben en una realidad socio-histórica donde los desafíos colectivos, entendidos como “interrupción, obstrucción o introducción de incertidumbre en las actividades de otros” (Tarrow, 2012, pág. 37), resultan imprescindibles. Es decir, habrá todo un proceso social para que el reconocimiento de múltiples culturas, dentro de una mayoría cultural excluyente como lo es Monterrey y su Área Metropolitana (Wright & Aguirre, 2015), sea llevado a la arena política y así consolidar la promesa intercultural, entendida como la “construcción de un horizonte de convivencia entre culturas o pueblos” (Cabrero, 2013, p. 68), en un contexto de migración indígena en ciudades industriales como Monterrey.

Empero, es necesario destacar que los procesos migratorios en Monterrey se han caracterizado por su acelerado desarrollo, y por consiguiente un drástico cambio en los modos de vida se torna visible. Por un lado, el desarrollo propio de México ha desencadenado la movilización de la población rural a los espacios urbanos constituyendo nuevas formas de vida (González Casanova, 2013, pág. 134) y, por el otro lado, la rápida industrialización de Monterrey adquirió características peculiares al abordar las condiciones y supuestos dados por los conceptos tradicionales de participación política, sobre todo cuando de participación político-electoral indígena, en un contexto migratorio, se trata.

La construcción de un estado intercultural, apoyado teóricamente por el realismo crítico que convierte las utopías en posibilidades asequibles en el presente y perfectibles en el futuro (Dussel E. , 2009), se torna dable cuando las fuerzas centrípetas de la sociedad convocan la representación de sus demandas en términos gubernamentales e institucionales, ora en cambios de gobernanza y de gestión pública, ora en el desarrollo humano de aquellos grupos minoritarios y vulnerables que provoquen una mayor participación política (Gómez, 2015). Para lo anterior se observa que, en una revisión

histórica del fenómeno migratorio y su desenvolvimiento, cuando la élite industrial regiomontana abogaba por un orden social, disciplina y visiones moralistas, otrora ellos mismos propiciaban, irónicamente, el derecho de disentir cuando la acción del Estado intervencionista asechase (Saragoza, 2008, pág. 227) que después cristalizó en otras formas de disenso de diversos sectores socioeconómicos regiomontanos.

En ese sentido, era de esperarse que los nuevos vientos en la sociedad también transformasen al Estado (Córdova, 1973, págs. 31-37) y con ello sus mecanismos y el reconocimiento de nuevos actores en la arena política. Pues metafóricamente “si los que están en la cima del Estado tocan ¿qué cosa más natural sino que los de abajo bailen?” (Marx K., 1968, págs. 74-75). Los elementos primigenios de la política, en cuanto la existencia inexorable de gobernantes y gobernados (Dussel, 2009; Garmsci, 2009; Mouffe, 2011), precisan de la participación política de los gobernados, al tiempo que los gobernantes adquieran los conocimientos que la ciencia y el arte política pregona; ello, implica un reto mayor cuando se refuta la lógica y el espejo democrático de occidente, pues los nuevos agentes de cambio matizan en el componente cultural. El carácter multilingüístico y multiétnico en Monterrey sugiere la reconceptualización de la participación política y el humano desarrollo de la convivencia intercultural.

1.3 Planteamiento del problema

A pesar que históricamente las ciudades representan el punto nodal donde confluyen habitantes, y éstos van forjando sociedades a partir de formas de existencia y de gobernabilidad, los problemas ahí erigidos, que pueden ser de corte político, físico-espacial, económico y de gobernabilidad, dilucida la condición humana del sitio (Sousa, 2008). En tal sentido, Monterrey y su Área Metropolitana ha pasado de ser un simple territorio de transacción de mercancías, con sus grandes holdings y división de trabajo en sentido propiamente marxista (burgués-proletariado), a constituir un espacio-físico de “encuentro y sociabilidad diferenciada” (De Almeida, 2011, p. 219) donde la migración de minorías etnoculturales se ha convertido en parte liminar de los procesos políticos, económicos y sociales en Monterrey y su Área Metropolitana.

Nuevo León, estado de la República Mexicana donde Monterrey funge como capital, ha sido cuna de fenómenos migratorios desde sus comienzos; sin embargo, y resulta necesario aclarar y especificar, la migración indígena ha ido en aumento. La migración a la ciudad significó un incremento de matices culturales que permitieron dar cuenta de la individualización del regiomontano promedio (Cárdenas, 2014; Córdova, 1974; Durín, 2007). El incremento de personas indígenas a la ciudad representa un reto no sólo para el aparato gubernamental, sino también para la esfera socio-cultural y política de la región y, por antonomasia, para la democracia misma.

Monterrey y su Área Metropolitana ha pasado de tener 81,909 habitantes indígenas en 2010 (CDI) –provinando, principalmente, de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo y predominando los náhuatl, otomíes, mixtecos y mazahua (Rodríguez, 2013) – a más de 350,000 habitantes que se sienten autoidentificados con los pueblos indígenas en 2016 (INEGI, Encuesta Intercensal, 2015). Ello ha servido de acicate para que la lógica de participación política, entendida como el derecho de personas y grupos a incidir en la arena pública como eje rector en las democracias modernas (Cohen & Arato, 1992), se adapte a la realidad etnocultural (Assies, 2009) y social de Nuevo León y, sobre todo, de Monterrey y su Área Metropolitana.

La incorporación de minorías etnoculturales –o es decir: de personas indígenas– al escenario político es considerada parte axial de la participación ciudadana moderna. Existen esfuerzos internacionales en pro de la incorporación indígena a los procesos de decisiones políticas; por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga, a los Estados miembros, a implementar procedimientos ad-hoc que permitan a pueblos indígenas ser consultados previo a cualquier acción que involucre la explotación de recursos naturales existentes en sus tierras. Sin embargo, la discusión en torno al cómo deberá de implementarse tal consulta: a través de mecanismos de democracia directa o utilizando mecanismos de democracia representativa, si los resultados son vinculantes en la toma de decisiones gubernamentales o sólo aparecen en forma de exhorto (Linares, 2013), es problema propio de las democracias modernas. Además adquieren un grado mayor de complejidad cuando se trata de hacer participar políticamente a un colectivo que

durante siglos ha sido apartado de las decisiones nacionales, o han sido considerado como los “excluidos entre los excluidos: los pueblos indígenas” (Cabrero F. , 2013).

Ante lo anterior, la constitución política del Estado de Nuevo León, en su artículo 2º, ha reconocido los derechos que tienen las comunidades de migrantes indígenas en el Estado; y aunque es conveniente señalar que tal reconocimiento fue una victoria de la iniciativa de los propios migrantes indígenas que nació desde abajo (Wright & Aguirre, 2015), el reconocimiento jurídico de identidades y culturas indígenas en el Estado-nación mexicano no ha cristalizado en políticas explícitas, participativas y congruentes (Muñoz, 2014). Es decir, a pesar de los esfuerzos exegeticos por adecuar normas federales e internacionales a un contexto de migración indígena en el Estado, la participación política indígena, y más en su ambiente electoral, difícilmente podrá ejercerse con plenitud si sólo se estriba en reconocimientos/instrumentales igualitarios cuando de manera sustantiva persiste la desigualdad (Kymlicka, 2009). Cabe destacar que los fenómenos de marginación, discriminación y exclusión que padecen día a día los integrantes de comunidades indígenas en las grandes ciudades, constituyen el cohorte interpretativo para dar cuenta de las realidades sociales inscritas en la noción de la democracia y en la manera de dilucidar el Estado (Mendoza, 2010).

Es acuciante dar cuenta que no toda la migración se adscribe a la lógica comunitaria, pues existen casos en los que la migración se da en forma individual y parcelada en distintos puntos geográficos de la ciudad; por ello se asumirán las categorías desarrolladas por Durin (2008) al momento de indagar sobre las características organizacionales de los migrantes indígenas en Monterrey que son: asentamientos “aislados” (personas indígenas que viven en el mismo lugar de trabajo), “dispersos” (habitantes indígenas que viven de forma dispersa en la ciudad) y “congregados” (asentamientos en los que viven al menos 20 familias del mismo lugar de origen en la misma área residencial). De tal forma que la aproximación a conocer cómo se ha desarrollado la participación político-electoral de los migrantes indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana, en el sentido endógeno y exógeno del fenómeno, representa el fuste reticular que incentiva, con gran ahínco, ahondar en las pautas sociales de los migrantes indígenas en la lógica de la ciudad regiomontana.

Por tanto, el problema de investigación es conocer cuáles son las características sociopolíticas de las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana que hacen dable su participación político electoral para darse representantes dentro del sistema político vigente.

1.4 Preguntas de investigación

Por mor que problema de investigación se podrá resumir en el esfuerzo por conocer cuáles son las características socio políticas de las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana que tornan dable su participación política dentro del sistema político vigente en la región, se esbozan las siguientes preguntas de investigación que dirigirán en todo momento los esfuerzos cognitivos, empíricos e interpretativos de la tesis:

¿Cómo se ha desarrollado la participación político-electoral de personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana?

¿Cuáles son las características de la participación política de las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana para incidir en las decisiones gubernamentales, políticas, económicas y sociales?,

¿De qué manera influyen los Usos y Costumbres de las personas indígenas en la lógica electoral de Monterrey y su Área Metropolitana?

De tal manera que la exégesis interpretativa de la teoría, construcción de diseño de investigación, trabajo empírico de la recolecta de datos y el posterior análisis interpretativo de éstos, será un función de las preguntas de investigación anteriormente señaladas.

1.5 Justificación

El tema de participación política es acuciante para las democracias modernas, así como menesteroso de matices que complementen el desarrollo igual e incluyente propio de las sociedades del siglo XXI. Cabe señalar que el principal reto con el que se topan las ciudades industriales, como Monterrey y su Área Metropolitana y en un contexto de migración indígena, consiste en la eficiente estimulación de mecanismos de participación político-electoral para las minorías migrantes, pues a éstas se les da por sentado que regresarán a

su lugar de origen o representan un “problema de pobreza, de marginalidad, de atraso o de personas tercas que no quieren adaptarse al estilo de vida ciudadano” (García, 2013, p. 61), así como esfuerzos por consolidar una mentalidad social que evite la hostilidad frente al extraño, a quien mantenga otro tipo de vestimenta, color de piel, idioma o un pensamiento inusual (Horkheimer M. , 2007). En ese sentido, lo que pretende la presente investigación es 1) conocer cómo ha sido la organización de las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana al momento de participar político-electoralmente para darse sus representantes; 2) asirse a los esfuerzos de aceptación social de personas indígenas en la región; y 3) conocer cuáles han sido las herramientas y discursos gubernamentales para la materialización de las demandas y participación política de los indígenas en Nuevo León; para así, desde la trinchera académica, consolidar lo que ha sido proyecto político-social de México y de la humanidad en general: el respeto al otro.

Para lo anterior, la presente investigación se yergue sobre análisis ya establecidos como lo son: el 1) reconocimiento jurídico de comunidades indígenas en un contexto de migración (Wright & Aguirre, 2015); la representación indígena en medios de comunicación (Marañón, Saldierna, & Muñiz, 2013); y categorías como interaccionismo simbólico y la hermenéutica diatópica (Santos, 2010), para realizar un abordaje de corte político, pues éste ha sido poco explorado. Además de enriquecer el ámbito teórico y metodológico, es decir, desarrollando y adecuando categorías teoréticas por un lado y realizando aproximaciones etnográficas por el otro.

Se ha de destacar que la importancia del estudio radica en que la migración indígena en Monterrey y su Área Metropolitana ha llegado a puntos álgidos; y a pesar que en términos educativos, laborales y de asociaciones civiles se han realizado múltiples acciones, el tema de participación político-electoral se torna imprescindible para el ejercicio de inclusión social e interculturalidad propios de las democracias modernas, pues como Habermas (1998) lo afirmaba: “la fuerza del entendimiento intersubjetivo que en caso de conflicto es la única alternativa a la violencia” y este sólo se dará en el reconocimiento y promoción de Derechos políticos, el consenso y la argumentación. Por ello, una investigación como la que se desarrolla en la presente tesis permitirá conocer el aspecto político del tema, y, sobre

todo, explorar la forma en que las personas indígenas se organizan y participan en la política de manera electoral. De tal forma que el abordaje político se verá esponsorizado del aspecto sociológico y antropológico, pues con éstos se complementa y regenera la visión política del tema, además que complementan la teorización y la aproximación empírica en cuanto a participación política de un colectivo pilar de la cultura mexicana.

1.6 Objetivos

En función de los antecedentes descritos y el problema de investigación planteado con anterioridad, se tiene por Objetivo General:

Conocer la participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana y su relación con las Instituciones del Estado

De tal manera que para alcanzar el objetivo estipulado, y mediante aproximaciones cualitativas como lo son la entrevista semiestandarizada y los grupos de enfoque, se determinan los siguientes Objetivos Particulares:

Analizar los factores que inciden en la participación electoral de personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana

Identificar los factores que influyen para que las personas indígenas voten en las elecciones municipales del Área Metropolitana de Monterrey y en las estatales

Analizar la relación entre el votante indígena y los partidos políticos en Nuevo León

Identificar la manera en que influyen los Usos y Costumbres de las personas indígenas en la lógica electoral en Monterrey y su Área Metropolitana

1.7 Hipótesis de Investigación

Es menester dilucidar la siguiente hipótesis de investigación que, elaborada a partir de un cuerpo teórico lo bastante sólido como lo es el de la participación electoral clásica (Dahl, 1992; Downs, 1957; Nohlen, 2004; Nohlen, 1999) y de las dimensiones internas y externas de la participación política indígena (Aguilar, Trejo, & Pintado, Usos y costumbres en

comunidades indígenas y procesos políticos electorales, 1999; Carbonell, La reforma constitucional en materia indígena. Un primer acercamiento, 2003; Domínguez Cuevas & Santiago Benítez, 2014; Tomaselli, 2016), permita dar cuenta que dentro del enfoque institucional del voto son las condiciones, el proceso y la cercanía a partidos lo que provoca una mayor participación electoral (Nohlen, 2004) y en el sistema de usos y costumbres, como forma de gobierno, son las normas, instituciones y procedimientos los que incentivan la participación política en su forma de voto hacia dentro de la comunidad (González Galván J. , 2010).

En suma, la presente tesis toma de punto de partida la hipótesis de que el conocimiento de los derechos políticos, el previo conocimiento y práctica del Sistema de Usos y Costumbres y la proximidad a los partidos políticos, inciden en la participación político-electoral de las personas indígenas y en las decisiones gubernamentales, políticas, económicas y sociales en un contexto migratorio en ciudades industriales como lo es Monterrey y su Área Metropolitana.

No obstante lo anterior, y más allá de lo consolidado que esté el cuerpo teórico y empírico de la bibliografía consultada, la investigación se encuentra susceptible desde un comienzo a los descubrimientos surgidos desde una realidad ajena a lo documentado, pues el sujeto de investigación y el contexto antoja la utilización del método inductivo que permita generar nuevo aportes que consoliden el cuerpo teórico y documenten realidades empíricas de la participación electoral indígena en un contexto migratorio en ciudades industriales en México.

1.8 Marco conceptual

A raíz de las diversas bifurcaciones existentes en las teorías de participación y representación política, así como en lo referente a los pueblos indígenas propiamente, se determina en el presente apartado los principales conceptos de los que se echarán mano tanto para la teorización como para la consecuente construcción de categorías por mor del trabajo empírico:

- a) Personas indígenas:** en relación con la narrativa y objetivos de la presente investigación, el concepto se determina 1) de manera individual, a pesar de que el acceso a derechos de participación y de representación para las personas pertenecientes a los pueblos indígenas podrá efectuarse de manera colectiva o como sujetos colectivos (Henrard, 2005; Tomaselli, 2016), y 2) en el marco del reconocimiento jurídico Internacional y Nacional. Por lo tanto, se entiende como personas indígenas a las personas a toda aquella persona que se autoidentifica con algún pueblo o comunidad originaria radicada en el país previo a la colonización y que, además, comparte símbolos, cultura, derechos y lengua diferenciándose del resto de la población.
- b) Voto:** por voto se entenderá al acto empleado por los ciudadanos de un país, en el pleno ejercicio de sus derechos, que permite legitimar y consolidar la democracia (Dahl, 1992; Nohlen, 2004) por medio del enfoque institucional de la participación electoral, a saber: a) mejorar condiciones de voto; b) proceso electoral; c) sistema de partidos (Crewe, 1981; Powell, 1986; Lijphart, 1997).
- c) Sistema de Usos y Costumbres:** será entendido como un Sistema de Gobierno caracterizado por: 1) Normas, 2) Instituciones y 3) Procedimientos, que permiten establecer una estructura integral sustentada por elementos sociopolíticos de comisiones y servicios comunitarios que fundamentan 1) el pluralismo jurídico en México y 2) el ejercicio del derecho de autogobierno de pueblos indígenas reconocido a nivel nacional e internacional.
- d) Participación política indígena:** estará determinada por dos dimensiones, a saber: 1) la dimensión interna –dentro de la comunidad– y 2) dimensión externa –materializada en el voto a nivel local y nacional– y que, a su vez, estará sustentada a partir del reconocimiento de las personas indígenas en México como sujetos de derechos individuales y sujetos de derechos colectivos que permiten materializar sus voluntades políticas (González Galván, 2013; Tomaselli, 2016; Wright, en prensa).

1.9 Modelo de investigación

La presente tesis se asirá a los principios epistemológicos del constructivismo, donde a partir de la comparación –mediante entrevistas semiestandarizadas– de estructuras semánticas, legales y prácticas de 1) funcionarios encargados de la promoción de los derechos políticos de personas indígenas en el Estado de Nuevo León en forma general, y en los municipios del Área Metropolitana de Monterrey en lo particular, de 2) líderes de asociaciones civiles indígenas y pro-indígenas y de 3) actores académicos estratégicos del tema en Universidades –públicas y privadas– de la entidad, con las estructuras semánticas, cognitivas y pragmáticas en el marco del conocimiento de derechos y prácticas, goce y disfrute real de éstos de las personas auto-identificadas como indígenas, mediante la técnica de grupos de enfoque, que permitan revelar la realidad indígena en la región.

De tal suerte que el paradigma de investigación pretende establecerse sobre las bases metodológicas que rigen la investigación cualitativa y así, con la comparación de los actores anteriormente señalados, dilucidar la forma en 1) cómo las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana participan político-electoralmente en la entidad, 2) cómo se da la relación entre las Instituciones del Estado y las personas indígenas y 3) cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las personas indígenas para materializar sus voluntades políticas y electorales en ciudades industriales como lo es Monterrey y su Área Metropolitana y en el estado de Nuevo León.

1.10 Diseño de la investigación

Cuando de investigar en las ciencias sociales se trata, la ciencia política contemporánea presume de su estatus científico con capacidad metodológica de formular hipótesis susceptibles a ser demostradas, controladas y probadas (Sartori, 2002); no obstante, la otra cara de la investigación podría presumir de emerger con el ímpetu necesario para conocer las realidades sociales de manera inductiva, cualitativa, y sin ambiciones de controlar o probar la realidad mediante generalizaciones de corte numérico/cuantitativas, sino, más bien, dar a conocer cómo es que las relaciones dentro de la sociedad se dan, cuáles son las características de ello y cómo es que la hegemonía de poder dentro de la sociedad se ve

reflejada en las pautas interpretativas que incluso rodean a la academia. De tal suerte que, como analogía para lo anterior, la interpelación a los cánones imperantes en la investigación aplicada en la ciencia política ya no son meras especulaciones carentes de validez, sino que de la misma forma en que la participación política indígena tiene la capacidad de hacerlo dentro del marco institucional de forma legítima y válida (Tricot, 2010), la investigación cualitativa, con todo y sus análisis inductivos-interpretativos, tiene el rigor científico necesario para dar a conocer por sí sola fenómenos característicos de sujetos colectivos que han sido relegados de la sociedad moderna en el terreno de la ciencia política.

Por lo tanto, el diseño de la presente tesis se erige, como anteriormente se ha mencionado, en la epistemología del constructivismo; donde la realidad se entiende como un constructo mental y donde metodológicamente la realidad será abordada a través de técnicas de investigación aplicada a sujetos de estudio más que objetos de estudio y con ello apegado a estrictos valores éticos que aporten relevancia científica al estudio. Enseguida se señalará el diseño de cada herramienta utilizada, a saber: entrevistas semiestandarizada y grupos de enfoque.

1.10.1 Aproximación mediante entrevistas semiestandarizadas

Debido al carácter constructivista de la tesis, y que ello significa entender a la realidad como construcciones mentales de cada uno de los miembros, colectivos y/o comunidades, la primera aproximación se realiza mediante entrevistas semiestandarizadas a 1) titulares de funciones gubernamentales en lo referente a personas indígenas en el Estado (SEDESOL, CDI, Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, CEE, Municipio de Monterrey y Municipio de San Pedro Garza García), 2) representantes de partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PT Y MORENA), 3) Instituciones académicas (U-ERRE, CIESAS y UANL) y 4) Representantes de la Sociedad Civil en materia de la promoción y garantía de derechos indígenas en el Estado (Zihuakali, Zihuame Mochilla, Enlace Potosino, Nuevo León Árbol de Todas las Raíces y Asociación de Estudiantes Indígenas N.L.). Teniendo como total 20 entrevistas.

Una vez realizadas las entrevistas que permitan dilucidar el conocimiento de cada entrevistado sobre el tema y la confrontación de tal conocimiento con preguntas basadas en la teoría establecida, se pretende obtener material para su posterior análisis que permita la comparación con la información recabada en el siguiente paso del diseño, a saber: los grupos de enfoque. Aproximación que será especificada a continuación.

1.10.2 Aproximación mediante grupos de enfoque

Una vez realizadas las entrevistas semiestandarizadas, la aproximación siguiente será mediante grupos de enfoque a personas indígenas. Debido a que la identificación de la población indígena en Nuevo León resulta empresa compleja, se echará mano de los centros Interculturales de la SEDESOL, así como de lo que “conforme a la marcha” vaya presentándose en la realidad político-social de Monterrey que permita reunir de 6 a 8 personas que, de preferencia, no sean militantes de partidos, de asociaciones de la sociedad civil o trabajadores de gobierno; todo ello, con la única finalidad de poder contrastar de manera real la situación indígena en el Estado.

De tal suerte que desde el comienzo de la planeación del trabajo empírico, se pretende realizar cuatro grupos de enfoque (debido a que son cuatro los centros interculturales de la SEDESOL) y así poder efectuar el análisis comparado y otorgarle validez interna como externa a los datos obtenidos en campo. Los grupos de enfoque se realizan a inicios del año electoral 2018 con la finalidad de que las personas pudiesen estar más politizadas y así la teoría subjetiva de cada cual esté susceptible al contexto político de la región. Una vez obtenidos los datos de las dos aproximaciones antes mencionadas, se utilizará el programa QSR NVivo 11 para su análisis.

1.11 Matriz de congruencia

Participación político-electoral de personas indígenas en ciudades industriales. Análisis de Monterrey y su Área Metropolitana								
Problema de Investigación	Preguntas de Investigación	Objetivo General	Objetivos Específicos	Marco Teórico	Hipótesis	Categorías	Método	Instrumento de Medición
Los procesos culturales y políticos que suceden en Latinoamérica han superado las visiones economicistas de la sociedad. En México, y sobre todo en Monterrey y su Área Metropolitana, resulta acuciante la incorporación de las personas indígenas al escenario político-electoral para la consolidación democrática propia del siglo XXI. En tal tenor, y con basamento en las normas jurídico-normativas por un lado y las empíricas/políticas por el otro, resulta relevante dar cuenta de cómo se ha desarrollado la participación electoral indígena en un contexto migratorio como lo es Monterrey y su Área Metropolitana	<p>¿Cómo se ha desarrollado la participación electoral de las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana?</p> <p>¿Cuáles son las características de la participación política de personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana para incidir en las decisiones gubernamentales, políticas, económicas y sociales?</p> <p>¿Cuál es la relación entre el votante indígena y los partidos políticos en Nuevo León?</p> <p>¿De qué manera influyen los Usos y Costumbres de las personas indígenas en la lógica electoral en Monterrey y su Área Metropolitana?</p>	Analizar la participación política de personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana y su impacto en la participación electoral	<p>Identificar los factores que influyen para que las personas indígenas voten en las elecciones municipales de Monterrey y del Área Metropolitana y en las elecciones estatales</p> <p>Conocer la relación entre el votante indígena y los partidos políticos en Nuevo León</p> <p>Identificar la manera en que influyen los Usos y Costumbres de las personas indígenas en la lógica electoral en Monterrey y su Área Metropolitana</p>	<p>Democracia intercultural (Bartolomé, 2006; Kymlicka, 1995, 2009, 1997; Santos, 2010; Wilhelmi, 2007)</p> <p>Participación político-electoral (Dahl, 1992; Dalton & Wattenberg, 1993; Leighley, 1990; Milbrath & Goel, 1977; Nohlen, 2004)</p> <p>Participación política indígena (Ramos, 1997; Lee Van Cott, 1994; Pajuelo, 2006; Hémond & Recondo, 2002; Brysk, 1994; Ruíz, 2003; Tomaselli, 2016;)</p> <p>Participación electoral indígena (Vann Cott, 2002; Schilling-Vacaflor, 2008; De la Peña, 1999; Aguilar, Trejo, & Pintado, 1999; Tejera, 1994; Martínez-Espinoza, 2012; Pérez-Luño, 2002; Santiago Benítez & Domínguez Cuevas, 2014; Recondo, 2007; Zolla & Zolla, 2004; González Galván, 2013)</p>	La presente tesis toma de punto de partida la hipótesis de que el conocimiento de los derechos políticos, el previo conocimiento y práctica del Sistema de Usos y Costumbres y la proximidad a los partidos políticos, inciden en la participación político-electoral de las personas indígenas en un contexto migratorio en ciudades industriales como lo es Monterrey y su Área Metropolitana.	<p>Voto</p> <p>Conocimiento de derechos políticos</p> <p>Sistema de Usos y Costumbres</p> <p>Partidos Políticos</p>	<p>A través del enfoque constructivista y mediante aproximaciones cualitativas se pretenderá abordar el sujeto de estudio.</p> <p>Asir a la política comparada permitirá reencontrar la fecundidad teórica con la realidad, una realidad susceptible a los cambios propios de la sociedad y donde las cualidades del fenómeno precisan de un abordaje inductivo que explore e interprete, más que cuantifique, la participación político-electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana</p>	<p>Entrevistas semiestandarizadas</p> <p>Grupos de enfoque</p>

CAPÍTULO II. EL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA DEMOCRACIA

Para realizar el abordaje teórico del problema de investigación, resulta necesario esclarecer conceptos que permitan, en la medida de lo posible, cavilar sobre la realidad política, social y económica en determinadas sociedades. Para ello, se habrá de tomar como punto de partida la complejidad del progreso de la humanidad en cuanto a la organización de ésta, los mecanismos que se disponen para alcanzarla y lo que ello ha implicado en la convivencia de distintas comunidades a lo largo y ancho del mundo. De tal forma, el concepto de Estado-nación será puesto en tela de juicio para dilucidar sus posibles viajes semánticos y reconocer la definición que más se aproxima a la realidad mexicana y, en específico, a la realidad de Monterrey y su Área Metropolitana en el primer cuarto del siglo XXI.

El concepto clásico de Estado se desarrolló en medio de crisis en Europa y sobre el terreno de monarcas, absolutistas y de estamentos (Hardt & Negri, 2005) que hacían dable un ente regulador de comportamientos humanos, pues el estado de naturaleza, entendido como el deseo y la voluntad del ser humano a hacer daño y su imposibilidad de efectuar algún tipo de convenio o a ceder derechos y libertades –pues la naturaleza ha dado todo a todos (Hobbes, 1994) –, precisaba de esquemas conductuales que constriñeran anacrónicas prácticas como el derecho a tener esclavos y el derecho de conquista a partir de la ley del más fuerte como lo afirmaba Locke (1990). No obstante, el planteamiento de concebir las relaciones sociales como un contrato que protege derechos y posesiones a partir de una Voluntad General y de una libertad a no-pertenecer a límites estatales (Rousseau, 1996), queda socavado si se reconoce que el Estado “apareció como una horrible tiranía, como una máquina trituradora, desconsiderada, y continuó trabajando de ese modo hasta que aquella materia hecha de pueblo quedara bien amasada y maleable, por tener también una forma” (Nietzsche, 2014, p. 110).

Lo anterior denota que el desarrollo humano y civilizatorio en el Estado confluye con las atribuciones que los integrantes de la sociedad adquieren y los límites que esto conlleva. Es decir, desde un inicio la historia ha dilucidado diferenciaciones dentro de la sociedad que

reproducen antagonismos de clase (Marx K. , 1976) y hegemonía de clase a través de aparatos ideológicos, políticos y económicos (Althusser, 2008; Poulantzas, 2005). Cabe destacar que el desarrollo de la humanidad ha sobrepasado por mucho los mecanismos que hacen visibles sus diferenciaciones sociales o de rol social, al tiempo que devana la conciencia subjetiva hasta convertirla en un pensamiento unidimensional, esto es: incapacidad de pensar cualquier cosa que no esté en un repertorio ya establecido, haciendo manifiesta la debilidad de comprensión teórica que precisa la actualidad y abandonando, voluntariamente, el elemento crítico para convertirse en un mero instrumento (Adorno, 2007).

Dado lo anterior, el concepto de Estado (moderno) que más sombra ha proyectado en el siglo XX es la definición de Max Weber (1969), éste concibe al Estado como “aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima” (p. 1056) y que ha sido respaldado cuando se alude que “está caracterizado por relaciones de subordinación entre gobernantes y gobernados, esto es, entre detentadores del poder de mandar y destinatarios del deber de obedecer” (Bobbio, 1985, p. 15). Tales definiciones suponen una dicotomía dentro del entramado societal; no obstante, la forma de abordar la complejidad social en términos de “coacción física legítima (violencia)” y el destino insoslayable de subordinación entre gobernantes y gobernados, entre amigo/enemigo, socava la voluntad primigenia de los seres humanos, esto es: la voluntad de vida (Vasconcelos, 2014).

La exégesis de lo que constituye el Estado-nación en términos territoriales y en tanto a la población a quien van dirigidas sus acciones, representa desde sus inicios una dicotomía que, a varios siglos de su aparición, significó la dominación del Otro en términos culturales, sociales, políticos y económicos. Por un lado, determinar al Estado como aquel poder soberano posado en un territorio previamente delimitado y con el monopolio de violencia legítima, ha significado la necesidad de la “unidad cultural” que extienda sus valores, formas y visión de vida y del mundo en detrimento de otras. Mientras que, por otro lado, el desarrollo de las concepciones del Estado-nación han cambiado en función de las corrientes políticas, filosóficas y económicas que permitan la materialización de lo antes mencionado.

Empero -y es aquí que se dará paso a una definición alternativa del Estado moderno- la imposibilidad de concebir homológamente al Estado en distintas partes del mundo ha provocado diversas concepciones de éste; como ejemplo de ello se vislumbra la concepción que define al Estado como un “campo de poder marcado por el uso y la amenaza de violencia y conformado por 1) la imagen de una organización dominante coherente en un territorio, que es una representación de las personas que pertenecen a ese territorio, y 2) las prácticas reales de sus múltiples partes” (Migdal, 2011, p. 34). Tanto en concepciones clásicas, modernas y/o alternativas, la existencia del Estado concommita con la noción y existencia de la Nación que, en coalescencia, advierten que el poder político “se ejerce sobre una población en espacios territoriales definidos” (Osorio, 2014, p. 33) y además supone la construcción de identidad (lengua, territorio y cultura); es decir, se le atribuye a un imaginario político-colectivo que logra diferenciarse de otros Estado-nación y pueblos.

La naturaleza constitutiva del Estado-nación, en términos pragmáticos, se apropia de la concepción de pueblo para erigir un concepto general que se resume en que “el Estado es poder; la Nación es su representación; el pueblo su cimiento sólido y natural; y la soberanía nacional es la cima de la historia” (Hardt & Negri, 2005, p. 124). Sin embargo, la historia de México y de la América Latina en general, llena de conquistas e imposiciones, supone no una homologación de identidades étnicas, lingüísticas, religiosas o culturales, sino más bien la formación de un Estado a partir del predominio de otras nacionalidades (Dussel, 2007; Pajuelo, 2007).

No obstante, antes de continuar, es preciso señalar algunas particularidades del Estado y sus determinantes históricas que ayudarán a una futura cavilación en torno a la figura del Estado en América Latina, en México y su concepción en la sociedad de Monterrey y su área metropolitana.

2.1 El Estado. Un análisis desde el centro hasta la periferia

2.1.1 Del mundo antiguo. Pautas interpretativas del Estado ideal de Platón

Durante el decurso de los siglos, la humanidad ha pasado a través de distintas facetas que corresponden, o determinan, al Estado. Se podrá entrever que para responder a la fatídica pregunta sobre ¿Qué es el Estado? Ineluctablemente la empresa deberá asirse a diferentes corrientes del pensamiento que conjuran, al tiempo que determinan, el futuro propio de la Ciencia Política y sus variables acepciones modernas que, a su vez, reconfiguran el concepto de Estado.

Por ejemplo, para los filósofos griegos el problema de la filosofía tropezaba con la interpretación de dos tipos de objetos o cosas: 1) las llamadas naturales y 2) los hombres; de tal suerte que las cavilaciones para dar cuenta de qué instrumentos conceptuales dio mano el filósofo griego estriban en conocer de qué mundo tomó los conceptos: ya del mundo natural, ya del mundo social (Zea L. , 1953). De tal manera que la filosofía griega adquiere un orden tripartito, a saber: 1) el período cosmológico – presocrático–; 2) período humanista – reflexiones sofistas y socráticas–, y 3) período sistemático –propio de la filosofía platónica y aristotélica–. Es menester dilucidar, aunque por supuesto de manera un tanto escueta, pues no es empresa del presente capítulo ni de la presente entrega los problemas de la filosofía, los principales representantes de cada etapa de ese orden tripartito y, sobre todo, las ideas que movían determinadas corrientes².

El primero de ese orden tripartito mencionado con anterioridad lo podemos interpretar a partir de Tales de Mileto. Con él el pensamiento occidental, propiamente concebido en el

² La historia determinará siempre el actuar del presente y la visión del futuro. La determinación con la que José Gaos diferencia la historia con la historiografía (En su libro: Historia de nuestra idea del mundo) recae sustantivamente en las dos acepciones que se tengan de una “idea” y que, mas adelante, ayudarán a interpretar lo que por idea, sociedad, estado y política se concibe en América Latina; sin embargo, y para fines meramente explicativos, las dos “ideas” de las que se pueden interpretar las ideas, corresponden a lo siguiente:

- 1) Las ideas que tienen una sustancialidad y causalidad, y
- 2) Las ideas que son efecto de las entidades verdaderamente sustanciales y causales (son éstas las que van de la psique humana hasta las de corte propiamente social)

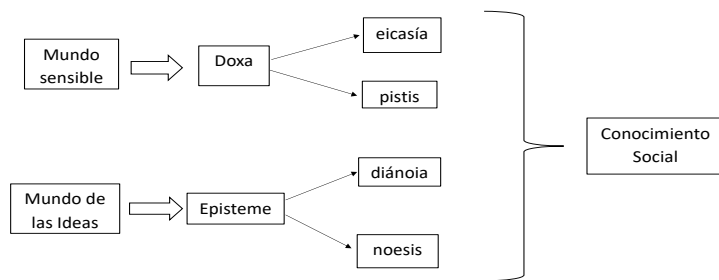
Conforme se avance en los párrafos se retomará el argumento para mayor claridad.

argot universal, se mueve hacia preguntas que conllevan a conocer el principio básico de lo que se constituyen las cosas y la naturaleza, y con fragmentos como “todas las cosas están llenas de dioses” se puede instaurar lo que otrora representa la animación psíquica que el ser humano le da a las cosas y que ha conllevado a la evolución de las sociedades.

Como segundo período, se identifica a los sofistas y, sobre todo, a Sócrates. Como un destacado sofista se encuentra Protágoras, quien a partir de “el hombre es la medida de todas las cosas” se da cuenta que cada cual actúa de acuerdo a su propia conciencia y que la responsabilidad de cada elección es propia de la persona que actúa; obteniendo con ello la dualidad de la moción de Protágoras, pues si bien cada cual actúa conforme su propia conciencia, hay un ente superior que juzga el actuar de cada quien y el hombre no es criterio último, sino la realidad en sus múltiples formas (Gutiérrez Saenz, 1995). Mientras que con Sócrates dar cuenta de las propias capacidades y limitaciones; por ejemplo, con la moción “sólo sé que no sé nada” o la repetición de “conócete a ti mismo”, significaba humanizar a la filosofía, o más bien a las preguntas propias de la filosofía, hasta el grado de hacerla accesible al mundo (Zea L. , 1953). Preguntarse por la vida, la costumbres, lo bueno, lo malo comenzaba a ser accesible para los miembros de la polis. Es, seguramente, el principio de la ética en el ser humano.

El tercer período, el de Platón y Aristóteles propiamente, consiste en la coalescencia de lo natural y lo cultural. Sobre todo con el primero, con Platón, y con obras como las Leyes y la República, es que las ideas, o mejor aún, el mundo de las Ideas se contraponen a las cosas del mundo sensible y donde la intuición central del filósofo griego, fundador de la Academia, radica en las Ideas, “verdadero ser y paradigma (modelo) de este mundo captado por los sentidos” (Gutiérrez Saenz, 1995, pág. 43). De tal suerte que las aproximaciones primarias al pensamiento platónico radican en la adquisición del conocimiento y en cómo éste y las ideas configurarían el orden social:

Figura 1. Conocimiento social a partir de conceptos platónicos



Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que en el nacimiento del pensamiento occidental es la naturaleza y el orden cosmológico el que da la pauta al orden social. El ser humano, de acuerdo al pensamiento occidental-europeo, utilizó los conceptos dados por la naturaleza para aplicarlos y explicar el comportamiento humano; empresa similar sucedió al estribarse el concepto de Estado.

Sin embargo, es perentorio destacar que el conocimiento social, desde un punto de vista platónico, aparece a partir de la doxa u opinión que estará, a su vez, determinada por la eicasía (conocimiento ilusorio) y la pistis (conocimiento verdadero pero sin conciencia de ello), y de la episteme, que a su vez podrá ser diánoia (de orden geométrico) o noesis (conocimiento propio de las Ideas) tal y como aparece en la Figura 1. Con lo anterior se destaca la importancia de las Ideas y la adquisición de conocimiento para un posterior análisis del concepto de Estado y de todas las cavilaciones propias de la presente entrega.

Ahora bien, una vez explicitado someramente el nacimiento de las Ideas y sus principales corrientes filosóficas, se dará paso a las exegesis en torno a la figura del Estado. Es quizá con Platón con la que nace la idea de Estado y la de político. Heredero de la premisa de que el orden dentro de la sociedad y de la adquisición de conocimiento para el provecho de aquella y de sus ciudadanos debería de ser trabajo del Estado, se forjó en el pensamiento

platónico un Estado ideal, es decir, una idea de Estado que se asemeje a un organismo garante de satisfacer las necesidades de los ciudadanos a partir de la organización hacia el interior: 1) gobernantes: filósofos y legisladores 2) guerreros que defiendan el territorio y 3) comerciantes y artesanos, donde la virtud de la sabiduría, la fortaleza y la templanza, respectivamente, imperará dentro del Estado. Además, la justicia sería la virtud resultante de la coalescencia de aquellas tres virtudes (sabiduría, fortaleza y templanza) y la educación sería trabajo propiamente del Estado (Gutiérrez Saenz, 1995; Platón, 2012).

Es con Platón que la idea de Estado se desprende de la idea de la naturaleza, pues a la luz de la democracia el poder cambia de manos y son éstas poseedoras de lo convencional que hacen peligroso el sendero donde los asaltos del egoísmo, los caprichos y la fuerza por la fuerza pueden significar la destrucción de la sociedad, el Estado y el otro también llamado sistema político. De tal manera que con Platón encontramos el primer elemento constitutivo del Estado: *la fuerza*; elemento tan antiguo como el mismo ser humano y que desde la República de Platón aparece como insignia propia del Estado y la Sociedad.

No obstante, se puede advertir que la política ha sido conceptualizada a partir de dos momentos: el antiguo y el moderno. Ya explicitado el primero, se dará paso solamente a la mención de los puntos nodales de las principales diferencias: 1) en la antigüedad, sobre todo con Platón y Aristóteles, se presenta el estudio de la política desde un corte más general, donde las soluciones a los problemas políticos se subordinan orgánicamente a las soluciones religiosas, filosóficas o éticas; mientras que en el pensamiento moderno, sobre todo a partir de Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau, el pragmatismo, la técnica y el dinero promoverán más el pensamiento que la búsqueda de la verdad, dejando para esto último la esfera de las conciencias en lo individual (Cerroni, Introducción al pensamiento político, 2013); y 2) los conceptos adquieren ahora una definición de pronto más universal que propicia la aplicación de estos a una escala internacional y que chocará, como se verá más adelante, con las estructuras sociales y políticas establecidas previo a la mundialización de la cultura política occidental.

2.1.2 Del mundo moderno. Sobre el estado de naturaleza y el contrato social

Primero con Grocio, y después con Hobbes, el siglo XVII vislumbra los dos conceptos clave de la vida política, la teoría política y, posteriormente, el estudio de la ciencia política: el Estado de naturaleza y el contrato social. En las obras de Locke y Pufendorf se puede apreciar el ánimo con el que el estado de naturaleza del ser humano es concebido, y la garantía que da por sí mismo el estado de naturaleza para determinar el rumbo de las relaciones sociales entre las personas.

Las ideas de igualdad natural, propias de Hugo Grocio, responden a cualquier recusa por adherir a alguna persona el principio de superioridad natural o de nacimiento y, además, construye las bases del Derecho Internacional y la universalidad del derecho en tanto sus principios de legitimidad válidos en todos los lugares y épocas sin importar el relativismo y particularismo propio de cual o tal localidad. Empero, la interrogante se posa sobre lo edificado hasta entonces y la legitimidad de las leyes e instituciones que las personas se dieron para sí, ya sea mediante un parlamento o ya sea mediante el designio del monarca, pero siempre con insuficiencias en la construcción de ese derecho y leyes válidas para las personas en general.

Los principios del estado de naturaleza del hombre, desde sus comienzos como se ha indicado con anterioridad, han sido dejados al espíritu de las leyes que, en teoría, debieron haber estado en armonía con las necesidades fundamentales del hombre. En suma, en Pufendorf y Locke se establece que el 1) hombre es un ser razonable y sociable, 2) que las sociedades civiles permiten el intercambio para que el estado natural de las cosas no sea miserable y carente de capacidad de disfrute y garantía del trabajo y 3) que el complejo sistema de derechos y deberes es dado por la naturaleza y cualquier tipo de institución creada por el hombre solamente les da garantía para la consolidación universal de tales derechos y deberes. Todo lo anterior, lo determinará siglos después los estudios de 1) la razón y 2) el lenguaje. Cabe destacar que todo esto siempre fue pensado en términos europeos, pues ha sido el mismo Locke, que en sus tratados sobre el gobierno civil criticaba

la posición aristotélica en cuanto a la justificación de la esclavitud por naturaleza, quien sí justificaba el derecho de conquista; siendo ésta uno de los mayores males de las regiones conquistadas en un ya entrado siglo XXI.

No obstante, existe un punto de inflexión en torno a cómo se concibe al estado de naturaleza de manera pragmática. Mientras que, para Grocio, Pufendorf y Locke, el estado de naturaleza, además de haber sido ordenada por el Creador, daba a cada cual derechos al tiempo de imponer obligaciones; también imponía un sistema moral que mediante la normatividad de la sociedad civil establecía una “moral natural” que tenía por finalidad en buen funcionamiento de la sociedad y del Estado. Empresa distinta fue la que comenzó a partir de Hobbes y Rousseau. En éstos, pero sobre todo para Hobbes, no existe lo que otrora llamaban moral natural, sino, más bien, lo natural son los apetitos y los deseos del hombre.

De tal suerte, que es con Hobbes que el hombre se sabe no un ser de deber sino un ser de deseo³, y estará condicionado a ceder “su derecho natural ilimitado en beneficio de un derecho civil limitado pero garantizado por el poder soberano” (Spitz, 2001, pág. 264). De igual manera, en lo sustantivo Rousseau establece que por naturaleza no hay derechos ni deberes sino deseos de paz y bienestar ilimitado que precisarán de la razón para establecer los mecanismos y normativas necesarias para la regulación de los apetitos del hombre. Es decir: “pasar del deseo al derecho”. Y es entonces cuando encontramos el segundo elemento constitutivo del Estado: *el contrato social*.

¿Por qué se establece para la presente entrega al contrato social como segundo elemento constitutivo del Estado? La respuesta versa sobre lo siguiente, si se establece que el elemento principal del Estado, es decir, aquel elemento que resulta imprescindible desde cualquier punto de vista, época, gobierno, región etc, es la población, el ser humano, el contrato social es el acto humano que da origen a la forma en cómo se establecen las relaciones entre los individuos. Se ha establecido en los párrafos anteriores que las

³ Deseos que están siempre supeditados a la razón y al lenguaje. Se sugiere revisar para un análisis detallado: Zea, Leopoldo (1953). La conciencia del hombre en la filosofía. Introducción a la filosofía. Méxco: Imprenta Universitaria. Sobre todo el punto 75: El problema de la felicidad humana, páginas: 345-348.

relaciones nacidas de contrato social se establecieron a partir de dos direcciones. La primera: un contrato social que está determinado por el estado de naturaleza y que materializa y hace presente las relaciones de derecho y obligaciones, sin que el mismo Creador pueda intervenir en ello. La segunda dirección: un contrato social que es un acto humano que provoca y da origen al derecho y, por lo tanto, la razón y el lenguaje serán elementos imprescindibles para ello. En la primera dirección se toma a Locke y Pufendorf; en la segunda dirección se toma a Hobbes y Rousseau.

El contrato social aparece como una convención entre individuos que se saben que no integran una comunidad natural y que es preciso establecer una voluntad única, general, que forme una comunidad política que esté por encima de los intereses particulares de sus miembros. Es quizá con Hobbes y Rousseau con quienes se establece la diferencia entre los conceptos que regirán la Ciencia Política y Sociológica en siglos posteriores: Pueblo y Multitud. Además de establecer a la *Voluntad Política* como el parteaguas que provocará la formación del Estado, como se verá más adelante.

Hobbes, en *De Civitas*, mantenía que en donde está el rey, está el pueblo, y lo que significaba eran los principios de representación, es decir, la delegación de las voluntades particulares en una sola que era representada a través del Soberano. Mientras que el contractualismo rousseanniano va más allá de conocer la forma en cómo el pueblo se da a un rey o a un soberano, y se posa en el debate en torno por qué un pueblo es un pueblo (Rousseau, *El contrato social*, 1996). Lo que Rousseau identificaba era la imposibilidad de que por naturaleza el hombre constituyera una comunidad política y, además, rechazaba el esquema de justicia natural que solamente favorecía a los más fuertes, dejando a los débiles destinados a la servidumbre. Estos elementos servirán más adelante para teorizar el papel de las personas indígenas en la construcción del Estado latinoamericano.

En suma, lo que aparece a relieve dentro del contrato social es la idea de un bien común en detrimento de la libertad individual ilimitada. Siendo la Voluntad de cada cual, expresada también como *Voluntad de Poder*, un tercer elemento constitutivo del Estado. De tal manera que el pueblo, como categoría, más allá de existir por naturaleza, existe a partir de

un contrato social en donde el hombre pierde libertad natural y gana libertad civil; la igualdad natural en donde las desigualdades físicas naturales determinaban lo establecido entre los hombres, pasan a ser todas iguales por convención y derecho más que desiguales por fuerza o talento (Rousseau, El contrato social, 1996). Por primera vez, la aparición de la política como ciencia, como estudio riguroso del por qué y del cómo se establecen las relaciones sociales dentro de una comunidad política, está destinada hacia aquellos quienes están ajenos a su práctica:

Si se me preguntara si soy príncipe o legislador para escribir sobre política, contestaría que no, y que precisamente por no serlo lo hago: si lo fuera, no perdería mi tiempo en decir lo que es necesario hacer; lo haría o guardaría silencio (Rousseau, 2008, pág. 9)

Tras lo anterior, sólo queda establecer la última categoría de análisis del Estado preparada para la presente entrega: *Poder Político*.

2.1.3 Del mundo contemporáneo. Sobre la formación del Poder Político en el Estado

El esfuerzo exegético y gnoseológico que seguirá a continuación representa, o intenta representar, una síntesis de lo que la presente entrega pretende justificar a la luz de la composición del estado contemporáneo a partir de diversos autores. Para nada significa la totalidad del pensamiento en torno al Estado y, mucho menos, la definición clara y precisa de lo que el Estado significa en la actualidad. Por ello, y en ese mismo orden de ideas, el siguiente apartado refleja un vaivén entre el pensamiento propio del Siglo XVIII y del que encuentra su maduración en el Siglo XX.

El Estado en el mundo contemporáneo es cosecha de las siembras epistemológicas que comenzaron a realizarse desde el mundo griego; la antesala de aquel, es la dicotomía Estado-Sociedad Civil. Si para Aristóteles, el logos, es decir: lengua y razón, es lo que distingue al hombre como el animal político de los demás seres del reino animal, la secuencia que se da entre el vivir y el vivir bien está supeditada a la naturaleza, como la se ha visto en los párrafos anteriores. Con Juan Bodino la naturaleza se desdibuja para

maquetar una relación de poder más relacionada a lo que se conoce en pleno Siglo XXI que recae en el poder soberano que distingue a la República de las demás formas de asociación dentro de la comunidad política.

En el mundo contemporáneo se sabe que la dicotomía del Estado-Sociedad Civil se da porque 1) el poder de cada cual es delegado a sus representantes políticos y 2) la organización social, propia del contractualismo, decanta a establecerse de manera vertical y fundamentándose en una autoridad soberana que impone y un cuerpo de ciudadanos que componen a la autoridad y otorga su propia sujeción al cuerpo político que nace de tal dicotomía.

De tal suerte que el elemento último, constitutivo del Estado, aparece ahora a relieve: el poder político. Éste poder podrá teorizarse a través de las actividades de los ciudadanos, desde el lado de la sociedad civil. A saber, el poder estará supeditado para efectos de este apartado como la superioridad que existe entre un ente y otro, y que se servirá de múltiples herramientas para materializarlo. El pensamiento anglo, tomando distancia de los griegos y del mundo latino-románico, pone siempre al Estado desde una perspectiva reguladora más que de significación ética; y las actividades económicas, de trabajo e intercambios monetarios comerciales definirán el nuevo rumbo de la sociedad y de la comunidad política en su conjunto.

Mientras que el pensamiento alemán irrumpe con una noción jurídica de la sociedad y su relación con el Estado. Si para los griegos la sociedad civil era a partir de la naturaleza, para los anglos y contractualistas ese estado de naturaleza estará supeditado a actividades de corte económico y de delegación de poder en un soberano, para los alemanes el estado de derecho en términos sociales y naturales pone a relieve la posibilidad de eliminar el contrato social para darse uno nuevo. Así, en Kant se puede entrever que el estado civil es ante todo un estado jurídico:

Este estado de relación mutua de los particulares reunidos en un pueblo, se llama el estado civil (*status civilis*); y el todo de este estado con relación a sus propios miembros se llama la ciudad (*civitas*). La ciudad, a cause de su forma (hallándose

unidos los ciudadanos por el interés común de mantenerse en el estado jurídico), se llama en un sentido más extenso cosa pública (*res publica, latius sic dicta*). (Kant, 1968, pág. 464)

No obstante, la formación del poder político que determina al Estado está constreñida, desde sus comienzos, a la coalescencia entre las interpretaciones jurídicas y las económicas. Hegel, en sus Fundamentos de la filosofía del derecho, establece, a partir de Say, David Ricardo y Adam Smith, que el “sistema de necesidades” determinarán la forma en cómo la sociedad civil se conforma y cómo ésta precisa del Estado para dar garantía a la satisfacción de las necesidades. Y son estas mismas necesidades las que un Marx joven y de producción temprana, en su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, hace la distinción que Hegel no deja claro en cuanto a la diferencia y/o sujeción de la Sociedad Civil y el Estado. Marx reconoce que, en la primera, en la sociedad civil, existe una división de corte socioeconómico: burgués y ciudadano proletariado; y, para el segundo, el Estado, la monopolización de la política y la despolitización de la sociedad civil han sido provocadas por los órganos del Estado. Y más aún, Marx determina el trabajo del Estado entablándola con las necesidades de una sola clase social, la burguesía:

Por el hecho de que la propiedad privada se emancipara de la comunidad, el Estado adquirió una existencia particular a lado de la sociedad civil y fuera de ella; pero dicho Estado no es otra cosa que la forma de organización que los burgueses se dan por necesidad, para garantizar exteriormente su propiedad y sus intereses, tanto en el interior como en el exterior. (Marx C. , 1992, pág. 105)

Ahora bien, la formación del poder político como elemento constitutivo del Estado deberá establecerse a la luz del, lo que a partir del Siglo XVIII se considerará como punto de partida por excelencia, Lenguaje y la Razón (Habermas, 2014). Con el pensamiento económico, imperando por sobre el filosófico, en la concepción del Estado, la capacidad de satisfacción de necesidades a través de un ente garante de ellas encuentra su madurez en lo que Habermas, en Más allá del Estado nacional, estipuló como la “promesa liberal” que, a partir de Smith, Say y Ricardo, versa como 1) la sociedad liberal se basa en los “derechos de

propiedad” en términos “naturales y justos”, 2) por ser normativamente justo es “posible” y 3) si es justo y posible, y además se autorregula por la dinámica de producción, compra y venta, es un sistema “eficiente e innovador” (Habermas, 1998, págs. 14-15).

De tal manera que se encuentra aquí el “poder político”, como elemento constitutivo del Estado, supeditado de manera total a las relaciones económicas y de producción dentro de la Sociedad. Empero, la sociedad civil, que al final resulta ser por un lado la que forja al Estado al tiempo que, por el otro lado, es agente axial de sus cambio y, por ende, del Estado, encuentra su autonegación, de corte liberal, en una dialéctica hegeliana donde las particularidades de exclusión y segregación de la promesa liberal hace que la esfera de la sociedad civil pase al Estado (Habermas, 1998).

Siguiendo la línea occidental de pensar al Estado como ente regulador, Hegel define que los “diversos intereses de productores y consumidores pueden entrar en conflicto entre sí...[y para evitar esto] exige una regulación consciente que esté por encima de ambas partes” pero también se advierte los posibles problemas de precarización para el sector de la población que se ve imposibilitada para la acumulación de riqueza y que la “mano invisible”, lejos de regular, propicia un karma que acentúa la desproporcionalidad de la acumulación. Además, el sector de la población que cae “por debajo de un cierto nivel mínimo de subsistencia que se regula por sí solo” está posicionado entre la baluma de “pérdida del sentimiento del derecho, de lo jurídico y del honor” es la muestra empírica del movimiento dialéctico de la sociedad civil cuando, por mor de la promesa liberal, su propio principio de independencia e individualidad genera exclusión y segregación genera, a su vez, el aporético vaivén de la producción y acumulación que encuentra su consumación más allá de sus propia sociedad a partir de dinámicas expansivas de conquista y de promulgación de nuevas sociedades o “nuevos mundos” (Habermas, 1998). Así es como el contacto epistemológico, y de conformación del Estado, se piensa a la luz de los que conquistan; habrá que visualizar, más adelante, cuáles fueron las características de los pueblos conquistados.

La madurez de la lógica expansionista de los Estados, y que ya es propio de finales del Siglo XX y comienzos del Siglo XXI, pende sobre el resultado que existe entre la pesadez monolítica del Estado y la “vía” libre de la teoría económica e ideologías políticas que, a causa de “las nociones de la iniciativa democrática, la planificación y redistribución económicas y la autonomía y soberanía nacionales” (Orozco J. , 1997, pág. 20), despolitizan y desideologizan a la Sociedad.

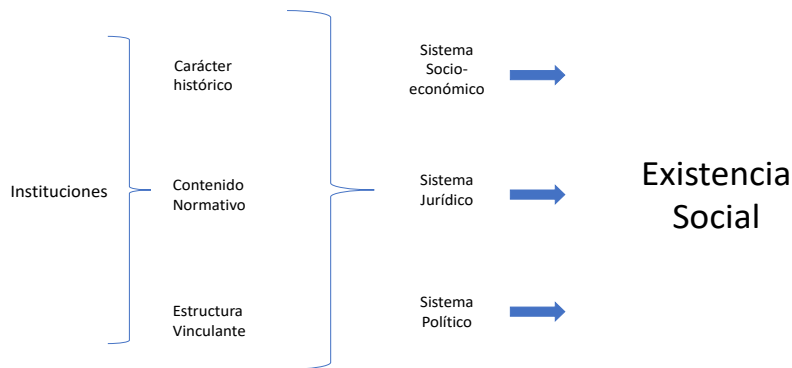
Todo lo anterior, supone una “hibridez empírica” que hace del Estado un ente ininteligible de la urdimbre contemporánea de estructuras que Orozco llama: 1) estructuras subestatales, transestatales, supraestatales y metaestatales; teniendo como resultado una suerte de “igualdad” entre Estados, y formas de Estado” que soslaya la hegemonía real en un mundo de “supuestos” plurales donde nadie manda, pero sí se acentúan las paradojas de crisis y dominación propiciadas por el Estado (Orozco J. , 1997, pág. 21). Las herramientas con las que echa mano el Estado para propiciar la crisis y la dominación no son más las propias del totalitarismo, sino, más bien, las del Derecho, la Escuela y otras Instituciones que utiliza el Estado para “crear y mantener un cierto tipo de civilización y de ciudadano (y, por consiguiente, de convivencia y de relaciones individuales), haciendo desaparecer ciertas costumbres y actitudes y a difundir otras... con la finalidad de que sea máximamente eficaz y productor de resultados positivos” (Gramsci, 2009, págs. 191-192).

Es así como se llega a la función educativa del Estado. El Estado contemporáneo, a pesar y a través de sus múltiples caretas, sigue siendo interpretado a partir de la concepción weberiana: “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo) reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima” (Weber M. , 2016, pág. 8), y se le suma, en el ya entrado Siglo XXI, lo que Joel Migdal, en “Estados débiles, Estados fuertes”, reconoció como 1) la imagen coherente e institucional del Estado y 2) las prácticas reales de sus múltiples partes, y que se realiza en función de 1) su carácter institucional, 2) sus funciones y 3) su recurso de coacción (Migdal, 2011, págs. 142-143). Y para ir cerrando el presente apartado, se dará cuenta de la importancia de las Instituciones para la formación del Estado.

Lo que caracteriza al Estado actual es la capacidad Institucional que tiene para darse, a sí mismo, los elementos constitutivos de los que se habló en los párrafos anteriores: *Fuerza*, *Consenso dentro del Contrato Social*, *Voluntad y Poder Político*. Con Mijail Bakunin, y una gran parte de la corriente marxista, se estableció que en el fondo “la conquista no sólo es el origen, es también el fin supremo de todos los Estados” (Bakunin, 2009, pág. 159) y que la moral política es contraria a la moral humana. O, como con Engels, que el Estado es producto de un desarrollo social determinado y que su poder emana de la sociedad, al tiempo que “se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más” (Engels, 2010, pág. 242).

Para la presente entrega, la óptica con la que se analiza al Estado será desde su vertiente institucional; pues, ante todo, la moral política sí está vinculada a la moral humana, dado que ésta es la que hace funcionar a aquella y la sociedad forma la base en la que el Estado se sostiene, así que difícilmente habrá una bifurcación entre Sociedad y Estado. Los análisis del neoinstitucionalismo de Guy Peters (Peters G. , 1999; Peters B. G., 2003) dan cuenta de ello. De tal manera que el norte que permitirá concomitar los 4 elementos constitutivos del Estado se establecerá a partir de la premisa de que las instituciones son “las bisagras sociales que garantizan la reproducción de la sociedad misma” (Cerroni, 2010, pág. 123) y constituyen, a su vez, un puente con estructura representativa en donde transitan las voluntades de los intereses particulares de cada cual con destino a la formación de la Voluntad Política General.

Figura 2. Bases de la existencia social



Fuente: Elaboración propia a partir de Umberto Cerroni

Cabe destacar que históricamente en la región latinoamericana la bifurcación de las realidades sociales, políticas y económicas representa lo que Marx (1991) llamaba, en cuanto al proceso de la “acumulación originaria”, “la disociación entre el productor y los medios de producción” (p. 608) pues reproducen, a su vez, polisémicas concepciones de la “desigualdad económica” y la “desigualdad epistemológica”. Desigualdad, dicho sea de paso, ha significado la reproducción de distintas formas de vida donde una cultura imperante puede provocar la autoanulación y la anulación de lo otro como condición sine qua non inclusive de su propia reproducción (Bolívar Echeverría, 2010).

Para ésta última existen múltiples trabajos en torno al cómo forjar un pensamiento propio de América Latina, sírvase de ejemplo los textos de Leopoldo Zea (1978), José Vasconcelos (2014), Salazar Bondy (2006), Alfonso Reyes (1942), José Revueltas (1979), Enrique Dussel (2007) o Samuel Ramos (1997), que, y guardando distancia entre sí, proponen el regreso de la significación de una realidad desplazada por la función técnica en tanto la automatización del lenguaje como la instrumentalización de las escuelas del pensamiento: éstas constantemente importadas para teorizar los problemas propios de América Latina, abandonando, así, el pensamiento con sentido propio e instrumentalizando tanto la

semántica contemporánea como los métodos de enseñanza en general (Horkheimer M. , 2007).

2.2 El Estado Latinoamericano y sociedad

Es entonces que comienza, a partir del presente párrafo, la problemática en torno a cómo interpretar los esquemas asociados con el Estado latinoamericano, la dimensión antagónica y heterogénea constitutiva de las sociedades modernas (Mouffe, 2011), así como lo contingente de su organización institucional. Además, y en base a que el ciudadano es el centro de la democracia, es a éste, y no la figura retórica de pueblo, por quien el andamiaje estatal deberá trabajar en función del cumplimiento primigenio de los pilares de la democracia: igualdad intrínseca y comprensión esclarecida (Dahl, 1992); es decir, que cada ciudadano esté en 1) igualdad de condiciones y 2) que tenga uso razón en torno a lo que hace, para qué y por qué lo hace cuando de vincularse con la democracia se trata⁴.

Determinar ¿quién es la población a la que el Estado estará supeditado?; ¿qué mecanismos institucionales existirán para la inclusión de los habitantes en determinado territorio?; ¿existen identidades nacionales y homogeneidad en idioma y cultura? representa una acentuación de la problemática. Pues cuando se trata de sociedades como la mexicana, donde el espíritu occidental –entendido en términos hegelianos como el momento en que “el hombre alcanza su verdadera identidad como vehículo del espíritu cósmico, y si uno de los medios indispensable en que se expresa esta identidad es la vida pública de su sociedad política, entonces, es esencial que llegue a identificarse en relación con esta vida pública” (Taylor, 2014, p. 181)– no es compatible con el espíritu propio de los habitantes originarios, comienzan a esbozarse tropiezos por motivo de determinismos excluyentes y racistas (Zea L. , 1978).

La identidad nacional y cultural mexicana, que hasta finales del siglo XX sino es que ya entrado el siglo XXI, ha sido reconocida con sus diferencias y con aportes a la sociedad imperante por parte de la población indígena; sin embargo, las visiones de Estado, y por lo

⁴ Otrora se reconoce como el ejercicio pleno de la Cultura Política y Cultura Cívica, y el ejercicio de inclusión de grupos vulnerables y minorías a la arena política.

tanto su operación institucional y de políticas públicas en la mayoría de los países latinoamericanos con presencia indígena, han ido de la mano de paternalismos ya sea para manipulación y/explotación o ya sea para su redención. Pero la constante es y ha sido que el mestizo y el criollo deciden y han decidido por lo indígenas durante siglos, mientras que el supuesto al que se deberá asir versa sobre lo siguiente:

La verdadera liberación del indio es reconocerlo como sujeto, en cuyas manos está su propia suerte; sujeto capaz de juzgarnos a nosotros según sus propios valores, como nosotros los hemos siempre juzgado; sujeto capaz de ejercer su libertad sin restricciones, como nosotros exigimos ejercerla. (Villoro, 2017)

De tal manera que la figura del Estado en Latinoamérica ha tomado peculiares formas. De acuerdo con Kaplan (1983) el Estado, como figura preexistente a la Nación, es más productor que producto de las condiciones sociales y económicas y se reproduce y autorreforma según los intereses de las élites, instituciones y figuras personales que lo componen. En mayor o menor independencia, el Estado en América Latina ha presentado dos facetas en su desarrollo: 1) proteccionista-benefactor y 2) intervencionismo liberal.

Para la etapa proteccionista-benefactor de Estado en América Latina se reconocen 3 etapas que se desarrollan en función de la relación centro-periferia en la arena político-económica mundial: a) ventaja comparativa, b) nueva división del trabajo y c) los movimientos sociales en relación con conflictos político-ideológicos en momentos de autoritarismo y democratización (Bulmer-Thomas, 1994; Kaplan, El Estado Latinoamericano, 1996)(Osorio, 2014). Ello, provocando por un lado el sometimiento de una clase trabajadora a lo que otrora se reconoce como pauperización de la mano de obra y el abaratamiento de la misma, y, por el otro lado, la invisibilidad de un sector de población que no se reconocía como tal y en el mejor de los casos se creaban instituciones estatales como el Instituto Indigenista en México en 1948 pero con un sentido proteccionista y en aras de la eliminación de un pasado y, peor aún, una cultura para la asimilación de la cultura dominante (Echeverría, 2010; Villoro, 2017).

El intervencionismo neoliberal en el Estado en América Latina, y en general para los países del Sur global, significó el debilitamiento de la estructura estatal, crisis económicas y, sobre todo, el ensanchamiento de las brechas de desigualdad en la región. Basta reconocer el épico momento en que por un lado México en 1994 entraba en uno de los mayores acuerdos de comerciales de un país latino con E.U.A (TLACAN), mientras que por el otro lado la irrupción del movimiento indígena zapatista marcaba una pauta y giro sustantivo a la forma en cómo se reconocían a los pueblos indígenas, sus demandas y su autonomía (Martí S. , 2013). O quizá sirva de ejemplo de políticas y regímenes neoliberales en América Latina lo sucedido en Chile después del golpe de estado al gobierno de Salvador Allende en 1973 que condujo a la eliminación de disidencia política y de pueblos indígenas como los mapuches en nombre del progreso y del desarrollo (Tricot, 2010).

De tal manera que la configuración del Estado-nación en América Latina comprende amplios marcos de análisis. Por un lado, se tiene el aspecto político-económico con grandes crisis, reformas y visiones de estado, a veces desarrollista a veces benefactor (Martí, Wright, Aylwin, & Yáñez, 2013), y, por el otro lado, lo concerniente a los aspectos políticos, sociales y culturales que promueven a veces el respeto y autonomía de las minorías y pueblos indígenas y otras veces la censura, represión y discriminación al Otro, al diferente, al indígena.

En ese sentido, se toma como punto referencial que la coalición entre el Estado y sus integrantes supone un entendimiento entre los hombres ya sea de manera “agregativa”: de “racionalidad instrumental” (Mouffe, 2011), o de forma “deliberativa”: de “racionalidad comunicativa” (Habermas, 2014), que asegure la convivencia y sanas relaciones sociales en términos positivos, o, en su sentido negativo, que permitan la subordinación de los destinados a obedecer. Sin embargo, el Estado, tanto en su forma clásica (sociedad de clases) como en su versión utópica (sociedad sin clases), precisa de aparatos ideológicos que “aseguren la ligazón de los hombres entre sí en el conjunto de las formas de su existencia, la relación de los individuos con las tareas que les fija la estructura social” (Althusser, 2008, p. 127) y sirvan de representación de un mundo en el cual puedan

permanecer y soportar la existencia (Revueltas, 1979) de forma inconsciente y mecánica o en forma consciente y reflexiva.

Asumiendo que el desarrollo del Estado ha significado cambios en los mecanismos tanto de represión como ideológicos para contener determinado “orden social”, las cavilaciones que ahora tocarán realizar encuentran su plexo conceptual a partir de cómo se desarrollan las relaciones de poder dentro de la sociedad y el Estado. Para ello, Hardt y Negri (2005) han concatenado el paso de las sociedades disciplinarias –que con Foucault (2009) se entienden como una serie de instituciones que regulan las costumbres, hábitos y prácticas productivas–, a las sociedades de control entendidas como “aquellas sociedades en la cual los mecanismos de dominio se vuelven aún más democráticos...de modo que los sujetos mismos interiorizan cada vez más las conductas de integración y exclusión social adecuadas para este dominio” (Hardt & Negri, 2005, p. 44).

Lo anterior conlleva múltiples problemas en cuanto a determinar quiénes son los antagonistas en las sociedades modernas, así como el reconocimiento mismo de problema. Se asume que “la condición final de la producción es la reproducción de las condiciones de producción” (Althusser, 2008, p. 7) y las diferentes “operaciones lingüísticas” (Von der, 2004) que significó el paso del capitalismo a la economía de mercado, por ejemplo: la locución de guerra contra el terrorismo o simplemente democracia y libertad como armas para una serie de atrocidades en el mundo, suponen un desafío teórico obligado a esclarecer de qué forma se dan las relaciones de poder dentro de la sociedad. Lo anterior incentiva a que se pueda abordar el problema de la presente tesis con un corpus teórico óptimo que se aproxime a la realidad de México y, en específico, de Monterrey y su Área Metropolitana.

2.3 Democracia occidental

Para conservar el hilo conductor argumentativo en el presente apartado, es preciso pincelar algunas nociones sobre democracia. En ese sentido, y en una descripción analítica en torno al sentido gramático, la democracia, etimológicamente, mantiene un significado construido a partir de los vocablos: Demos (pueblo) y Kratos (poder) que en sinergia responde a la

noción “poder del pueblo” y se acompaña del concepto gobierno, siendo éste a su vez construido por el significado de “quien timonea el barco”; de tal forma que el fundamento tanto del Estado, como de todos los componentes instrumentales que llegasen a surgir de la sociedad, conservarán en esencia y existencia al pueblo como origen y su voluntad como fuente de poder (Dussel E. , 2007).

Sin embargo, la noción de democracia ha mantenido una serie de viajes semánticos en la teorización de la misma; Bobbio (1986), que gran influencia teórica ha ejercido en occidente, concibe a la democracia como “un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados” (p. 9). De la misma forma Bovero (2002) sugiere una serie de verbos: elegir, representar, deliberar, decidir y tejer para marcar las “reglas del juego” en el “gran juego” que lleva por nombre democracia. Aunque ciertamente éste último teórico argumenta preferencia hacia la democracia parlamentaria, tales nociones no escapan de una lógica amigo/enemigo que, y siguiendo a Canetti (2005), alimenta a la naturaleza del sistema parlamentario, sugiriendo conservar una estructura psicológica de “ejércitos adversarios” en cuya guerra se ha eliminado la opción de matar. Empero, la dinámica parlamentaria y deliberativa no abandona liquidaciones de grupos antagonistas pues, y aunque ésta se refleja en números, “quien juega con estos números, quien los borra o falsifica, vuelve a dar lugar a la muerte sin darse cuenta” (Canetti, 2005, p. 301).

Por último, y para cerrar la descripción de democracia a partir de teóricos centrales de Occidente, Robert Dahl (1992) mantiene una perspectiva del concepto que ayudará a forjar la visión más afín a lo que se desarrollará en los capítulos siguientes del marco teórico. En ese sentido, Dahl (1992) plantea que el proceso democrático es la forma más conveniente para promover el desarrollo humano a partir de libertades como la autodeterminación y autonomía moral para la protección de intereses, colectivos e individuales, así como para la promoción de los derechos humanos. No obstante, el autor mantiene la idea que tal proceso democrático siempre será perfectible.

Ante la designación de que los procesos democráticos siempre serán perfectibles, en términos teóricos se podrá afirmar que los autores anteriormente citados (Bobbio, Bovero y Dahl) mantienen sus teorizaciones en el ámbito de la democracia liberal. Mientras tanto los antagonismos de clase como las diferencias etnoculturales, serán borradas por la concepción liberal de una democracia justa y legítima con instituciones ideales elegidas por individuos racionales a través del diálogo y el consenso; restringiendo, así, la posibilidad de un disenso legítimo y universalizando el paradigma democrático/liberal donde “los individuos son descritos como seres racionales guiados por la maximización de sus intereses... y tratando de reemplazar la racionalidad instrumental por la racionalidad comunicativa” (Mouffe, 2011, p. 20).

Empero, la universalización de la democracia liberal supone la encarnación del mejor régimen democrático en una sociedad o nación, otorgándole misiones civilizadoras con “validez universal” (Habermas, 2014) y “alcance universal” (Rorty, 1996). En ese sentido, el desafío teórico significará un esfuerzo por dilucidar las pautas democráticas dentro de las sociedades que, aunque en mayoría conserva cultura y mecanismos occidentales, han mantenido constantes luchas seculares por el primigenio derecho a la vida de las minorías étnicas; tal es el caso de México y la América Latina que, en pleno siglo XXI, siguen conservando mecanismos democráticos no compatibles o aun excluyentes con los pueblos indígenas que lo componen. Para tal objetivo, el esfuerzo teórico se apoyará, en un primero momento, del concepto de “cultura política democrática” esbozado por Martínez Villarreal (2015) quien lo concibe como “el conjunto de creencias, valores, actitudes y normas que forman parte del acervo simbólico político internalizado por un individuo (o colectividad) que representa su estatus-rol del ciudadano; que se fundamente en patrones culturales que privilegian la libertad, igualdad, legalidad, pluralidad y participación” (Martínez, 2015, p. 55).

Para comenzar a concretar, el aspecto de participación será indispensable para dar con el objetivo teórico de la presente investigación. A partir del presente párrafo se propone un abordaje dual sobre la participación en términos políticos, esto es, y utilizando conceptos en la forma que desarrolló Heidegger (2014), el aspecto lo ontológico, es decir: la esencia,

lo sustantivo, de las acciones; y, por el otro lado, lo óntico: lo que determina la existencia misma de lo convencional e instrumental, la forma de operar. No obstante, la afirmación: “la esencia del ser-ahí está en su existencia” (Heidegger, 2014, p. 299) supone una bomba teórica para esclarecer que el Estado, en términos democráticos como los esbozados en los párrafos anteriores, es un ente que se interrelaciona con la esencia de sus componentes: los ciudadanos; en ese sentido, lo que comprende el aspecto constitutivo y constituyente del ente, del Estado, estará siempre supeditado a la voluntad de su población.

2.4 Democracia intercultural como incentivo de la participación política

Lo aportes teóricos, que después implicarán formas distintas de abordaje empírico, ayudan a establecer las pautas para la reflexión del fenómeno social de migración indígena en Monterrey y del estado del arte en América Latina en general. La aproximación que la cultura regiomontana realiza para con la cultura indígena migrante deberá alejarse del término vago y simplista de migración como sólo un espacio temporal del tiempo, pues esto supone: 1) que el migrante indígena necesariamente regresará a su lugar de origen, 2) que el destino del indígena es la pobreza y el atraso por razones históricas, o, 3) que el proceso de aculturación no ha sido lo suficientemente desarrollado para adaptarse al estilo de vida en la gran urbe que lleva por nombre Monterrey (García, 2013). El punto tanto de partida como de llegada ineluctablemente deberá asirse al abordaje axiológico del tema, pues la inclusión social deberá entenderse como el acceso sustantivo, a la política, relaciones sociales y económicas (de la Peña, 1999), donde el respeto al otro prime sobre el aspecto instrumental, siendo éste necesario más no suficiente.

En ese sentido, es momento de abordar el tema de la participación política indígena a partir de los conceptos desarrollados con anterioridad. Para tal empresa será necesario adecuaciones a la concepción del Estado, pues se propone entender a éste como plurinacional e implica:

El reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos o grupos sociales en situaciones en que los derechos individuales de las personas que los integran resultan ineficaces para garantizar el reconocimiento y la persistencia de su

identidad cultural o el fin de la discriminación social de que son víctimas...El reconocimiento de la plurinacionalidad lleva aparejadas las nociones de autogobierno y autodeterminación, pero no necesariamente a idea de independencia...[supone] un nuevo tipo de institucionalidad estatal, una nueva organización territorial, la democracia intercultural, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, políticas públicas de nuevo tipo, nuevos criterios de gestión pública, de participación ciudadana, de servicio y de servidores públicos...significa otro proyecto de país, otros fines de la acción estatal y otros tipo de relación entre el Estado y la sociedad. (Santos, 2010, p. 97).

Y la democracia en un sentido intercultural, esto es:

a) la coexistencia de diferentes formas de deliberación democrática [énfasis propio], del voto individual al consenso, de las elecciones a la rotación o al acto de mandar obedeciendo, de la lucha por asumir cargos a la obligación-responsabilidad de asumirlos; b) diferentes criterios de representación democrática [énfasis propio] (representación cuantitativa, de origen moderno, eurocéntrico, a lado de representación cualitativa, de origen ancestral, indocéntrico); c) reconocimiento de derechos colectivos [énfasis propio] de los pueblos como condición del efectivo ejercicio de los derechos individuales (ciudadanía cultural como condición de ciudadanía cívica); d) reconocimiento de nuevos derechos fundamentales: derecho al agua, tierra, biodiversidad, saberes tradicionales...; y, e) más allá de los derechos, educación orientada hacia formas de sociabilidad y de subjetividad asentadas en la reciprocidad cultural [énfasis propio]: un miembro de una cultura solamente está dispuesto a reconocer otra cultura si siente que su propia cultura es respetada, y esto se aplica tanto a las culturas indígenas como no indígenas. (Santos, 2010, pp. 118-119)

La participación política indígena conserva una serie de pugnas por la inclusión tanto democrática como de reconocimiento jurídico y respeto en la lógica del Estado. Empero el tema del poder ha sido imperativo en la confrontación de cosmovisiones diferentes –la

occidental y la indígena— desde la constitución del poder capitalista a partir de la colonización del territorio Americano (Dussel E. , 2007); de tal manera que se advierte que la participación política indígena se desarrollará a la par de la categoría de colonialidad, ésta fundada en “la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivos, de la existencia cotidiana y a escala social” (Quijano, 2014, p. 67).

Los esfuerzos exegéticos realizados hasta este momento responden a la confrontación de perspectivas en cuanto a la concepción del Estado, democracia y participación política; es claro que existe un resquicio interminable entre culturas que, aunque diferenciadas, no deberán de ser excluyentes. La exigencia epistemológica radica no sólo en el estudio de las otredades o minorías etnoculturales sino también “las diversas identidades y máscaras de los occidentales, que cubren su desnuda normalidad o representan a los superhéroes del establishment en la lucha contra el mal; es decir, analizar al indígena, pero también al sheriff y al militar” (Bartra, 2013, p. 25). No obstante, se deberá guardar distancia en la culminación de lo presentado, pues la simbiosis proteica entre Estados-nación y las corporaciones transnacionales garantes del estado de bienestar se “adentran inopinadamente en la modernidad entendida no sólo como incorporación al desarrollo de las fuerzas productivas sino como dirección de la sociedad y el Estado” (Orozco, 2004, p. 10).

Por último, el esfuerzo por teorizar la participación política indígenas en un contexto de migración se acentúa cuando se realiza en una ciudad como Monterrey donde, de acuerdo con Sánchez (2011), el perfil de la población es liberal-conservador, donde se mantiene una participación política reducida a lo electoral y donde prevalece la apatía y desconfianza hacia el gobierno, además del privilegio de lo privado ante lo público. La migración interna en México representa la imposibilidad de ubicar al indígena en sí en un espacio geográfico en particular y, por ende, el análisis sólo será posible en términos de heterogeneidad en cuanto lenguas, usos y costumbres y cosmovisiones; además que el contexto urbano, y más aún en ciudades industriales como Monterrey y su área Metropolitana, convierte el fenómeno de migración en uno de marginación, exclusión y discriminación en el día a día

(Mendoza, 2010). Esclarecer los lazos institucionales que el Estado otorga, y las pautas participativas de los indígenas fuera de una lógica comunitaria, ayudarán a determinar y ampliar la perspectiva sobre cómo enarbolar el trabajo empírico de la presente investigación.

En síntesis, el desafío teórico consiste en cómo esclarecer que la lucha de pueblos indígenas, desde la aparición del europeo en lo que hoy se conoce como América Latina, encuentra su metamorfosis dentro de las mismas categorías occidentales impuestas a partir de una estructura social, política y económica en el Estado. Para tal empresa el ejercicio teórico se decanta por la concepción de un uso contrahegemónico de instrumentos políticos hegemónicos, esto es, la apropiación creativa de instrumentos hegemónicos-occidentales como la democracia representativa, el derecho, los derechos humanos y el constitucionalismo por parte de las clases populares y las minorías étnicas para avanzar, políticamente, “más allá del marco político-económico del Estado liberal y de la economía capitalista” (Santos, 2010, p. 68).

La inclusión de las comunidades indígenas en un contexto de migración no sólo responderá a términos instrumentales en cuanto a los mecanismos de participación política, sino, más bien, irá a la par de realidades del aspecto vital que será determinado en distintas intensidades a través del aspecto cotidiano y dependiendo del espacio social donde se encuentren. Las transformaciones sociales que la inclusión de minorías étnicas implica no sólo ha tenido efecto en la forma en cómo se relacionan distintos actores, sino que también surgen efectos en las condiciones internas y de reproducción social e identidad de los mismos indígenas (Wilhelmi, 2007).

El reto, en la arena de la práctica política, estribará en cómo el reconocimiento de un pluralismo cultural concommita con la interculturalidad del Estado, pues es perentorio aclarar que tal desafío no consiste sólo en el “reconocimiento de la existencia de múltiples culturas (multiculturalidad), sino que los distintos poderes de dimensión pública queden obligados a garantizar unas condiciones equitativas de participación en el diálogo entre dichas culturas (interculturalidad)” (Wilhelmi, 2007, p. 270). Tal Estado intercultural interpelará

que los distintos poderes dentro de la sociedad operen de forma interrelacionada y que el espacio de convivencia asegure la vida, ante todas las cosas, de los integrantes de cualesquiera que sean las comunidades de procedencia (Harvey, 1977).

El proceso intercultural en términos de ciencia política, incluyendo las disciplinas adheridas a ésta, se ve enarbolado, también, en las nociones occidentales de la democracia. Dahl (1992) advierte que ningún arte ni ciencia es suficiente por sí misma, pues para la comprensión moral e instrumental de los problemas sociales es menester un equilibrio valorativo y técnico entre las disciplinas constituyentes de la política y lo político. La complejidad de la tarea, pues las diferencias sustantivas en cuanto a órdenes políticos precisan de una reflexión teórica-filosófica para que de lo abstracto –necesario para ser pensado– se aterrice en lo concreto –necesario para ser reconocido (Horkheimer M. , 2007)–, consiste en el respeto del Otro, de la otredad, y se configura en la permanencia digna y el respeto a la vida de todo ser humano inmerso en la sociedad sin importar idioma, raza, cultura, costumbres o nacionalidad.

Por lo tanto, ¿Cuál es la Voluntad de la población de un Estado que hace dable la partición? Para fines de la presente investigación, la respuesta a la pregunta se decantará por la concepción de Voluntad como una Voluntad de poder-vivir que se determina en su aspecto corporal (Nietzsche, 2014; Vasconcelos, 2014) y se sustenta por los conceptos de *potentia* –reconocido como “el ser oculto, el poder de la comunidad política misma” (Dussel, 2009, p. 59)– y *potestas* –entendida como “el fenómeno, el poder delegado por representación, ejercido por acciones políticas a través de instituciones” (Dussel, 2009, p. 59)– que se reflejan, en términos intersubjetivos, como una construcción de los medios para hacer dable la voluntad de vida en la sociedad.

Cabe destacar que es aquí cuando se ha de tomar distancia en cuanto a las concepciones de participación política como una expresión colectiva que se construye individualmente pues, y aun con el voto como la modalidad más utilizada para participar en la política en México (Somuano, 2005), el sujeto precisa de 1) ideología “como representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia” (Althusser,

2008, p. 49), de 2) identidad política “como un proceso completo e interactivo de reconstrucción de la misma” (Wright, 2011, p. 423) que va confluyendo con el reconocimiento de marcos cognitivos, entendidos éstos como “campos de identidad, organizados en protagonistas, antagonistas y público, que posibilitan, en última instancia, el dinamismo de la acción colectiva y le atribuyen un sentido” (Hunt, Benford, & Snow, 1994, pp. 230-249). Es decir, la construcción de la participación política difícilmente podrá construirse en términos solipsistas, dado que la subjetividad tiene una constitución intersubjetiva, pues el sujeto desde el principio de su vida se ve permeado de relaciones humanas (padre, madre, barrio, escuela etc.) que van reflejándose en la participación dentro de una comunidad con el objetivo de darse, para sí mismos, instituciones objetivas (el sistema de derecho, económico, administrativo, familiar, educativo) que a su vez “organizan y determinan histórica y empíricamente todos los momentos de la intersubjetividad” (Dussel E. , 2009, pág. 97) (Guerrero, 2010) y constituyen la subjetividad social de los miembros de la comunidad.

Cabe señalar que, como bien indica Merino (2012), la participación política deberá reunir valores como responsabilidad, tolerancia y solidaridad; sin embargo, éstos serán suficientes cuando se conciba a la participación política como una vertiente de la libertad que vaya más allá de la libertad de expresión y elección, es decir, una libertad de pensamiento que arremeta contra las amenazas de una lógica ya establecida, pues concebir “una libertad absoluta de decisión es tan ilusoria como siempre es la del yo absoluto del que el mundo emana” (Adorno, 2011, p. 56). Para lo anterior, Aguilera Portales (2011) advierte que “sin duda, la construcción de la democracia precisa necesariamente de ciudadanos autónomos, críticos y reflexivos, capaces de generar una mayor participación e integración en proyectos comunes” (p. 16).

La forma en que los sujetos/ciudadanos participan en la política se topa con una bifurcación en el contenido de la misma cuando decide cómo es que participa. Brussino et al. (2009) reconoce el tipo de participación convencional y la participación no-convencional, en la primera de ellas expresa que “tiene una función legitimadora del orden establecido, mientras que las acciones no convencionales tienden a movilizar el descontento y las

expectativas de cambio social” (p. 280). Algunos autores sugieren que la participación política podrá alimentarse de distintos factores que la expliquen e incentiven, por ejemplo: Muñiz (2012) sugiere que deberá haber un conocimiento político previo que comprenda el funcionamiento del ambiente político; Putnam (1995) sostiene que el capital social en cuanto al aspecto organizativo hará plausible la participación; Mazzoleni (2010) advierte que el factor de eficacia política será determinante para la participación; y Brussino et al (2009) adjudica al fenómeno de participación el interés que se tiene en la política.

En torno a las características empíricas que determinan la participación política en la sociedad aparece a relieve la noción de ciudadano, éste concepto está íntimamente ligado tanto a derechos y obligaciones individuales como a su vínculo con la comunidad. Es decir, la coalescencia de características liberales y comunitarias en el concepto de ciudadanía resulta indispensable dar cuenta que “la estabilidad de una democracia moderna no depende solamente de la justicia de su ‘estructura básica’ sino también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos” (Kymlicka & Norman, 1997, p. 6). Aunque también es cierto que en la participación política tanto el ingreso per cápita como la creciente industrialización, han permitido una considerable alfabetización que conlleva un aumento en la libertad de crítica, sufragio y el aumento de la democracia participativa (González Casanova, 2013; Lipset, 1959). Por lo tanto, la relevancia en el tópico de participación política conlleva la concepción de ésta como la ampliación de la perspectiva socio-política más allá del mero individualismo pues además del entorno personal y dar cuenta de los problemas que conciernen a lo público e interés general, la participación política supone una actividad imprescindible para que el aparato gubernamental proteja e incentive la participación en tanto actividad generadora de vínculos personales e intersubjetivos en la sociedad (Kymlicka & Norman, 1997).

Dado lo anterior, si bien los autores tienen como punto de sinergia el aspecto comunicativo y sus medios para incentivar la participación política, ésta se verá acompañada no sólo de contenidos informativos, sino de la confianza y cooperación entre los sujetos/ciudadanos (intersubjetividad) dentro de la comunidad que los incentivan a participar políticamente. Para precisiones teóricas se asume que la participación política, en su aspecto no-

convencional, se torna visible gracias al fenómeno de la acción colectiva, pues ésta “se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales” (Tarrow, 2012, p. 31), y que históricamente se encuentra en el centro del cambio política y social.

La teoría de participación política encuentra polisémicas definiciones, ora en forma convencional ora en su aspecto no-convencional, como se ha expresado con anterioridad, y todas ellas con basamento en la característica volitiva de los ciudadanos. Tomando como referencia que en los pueblos regidos por un monarca a los vasallos les sobraba con obedecer, en los Estados libres la ciudadanía deberá conocer el por qué se establecen determinadas formas de políticas y las ventajas que el acatamiento de éstas conlleva; mientras que al antiguo ciudadano la obediencia era un hábito y necesidad que generalmente se obtenía de manera coercitiva, para el nuevo ciudadano el convencimiento de que las acciones gubernamentales y las políticas adoptadas son los efectos de su propia participación, son el acicate para su politización (Gorostiza, 2006, pág. 53).

Destacando que primigeniamente la participación política deberá ser estimulada por el interés de cada cual, se menciona que 1) la participación política implica la inclusión de los propios ciudadanos en las decisiones políticas que permiten, estimulan y desarrollar su vida misma y en el marco de las propias construcciones individuales y/o colectivas que significa la Voluntad de vida; además, la bifurcación tradicional en la participación política se posa en la distinción entre lo reformista es decir 2) la participación política convencional y lo encauzado hacia otro orden posible esto es: 3) la participación política no-convencional. Para efectos de la presente investigación aparecerá la 4) participación política indígena, entendida como la participación de personas indígenas que decanta por la apertura de espacios democráticos en el aspecto político, económico y, sobre todo, cultural con carácter multiétnico, pluricultural y multilingües (Ruiz J. , 2003) que interfiere en la concepción del Estado y de la democracia misma.

2.5 Participación electoral como dimensión parcial y concreta de la participación política

Dentro de los esquemas del análisis político imperante en la teoría de la ciencia política, se destaca el aspecto electoral como un medio para legitimar y consolidar a la democracia moderna; mediante el pluralismo político que pugna por la elección de un determinado representante del abanico de opciones, y el ejercicio del soberano en la concurrencia al acto electoral (Dahl, 1992; Nohlen, La participación electoral como objeto de estudio, 2004), la celebración de elecciones vislumbra el medio para un cambio político asequible a corto plazo. De tal manera, la participación electoral ha sido considerada como la actividad democrática más utilizada en función del número o porcentaje de ciudadanos que concurren a votar, y su análisis se enmarca dentro de los estudios del comportamiento político (Pérez, 2006).

En ese sentido, se concibe a la participación electoral como un aspecto parcial de la participación política. Siendo ésta última un concepto amplio y complejo, e identificando a aquella como un elemento axial en la materialización de las voluntades políticas de los ciudadanos, pues el principio de igualdad y de vinculación/cercanía con los mandatarios deberá ser primordial para la consolidación democrática. La presente exégesis decantará por ofrecer las principales corrientes teoréticas en torno a la participación electoral.

Estudios como los de Dieter Nohlen (2004) estipulan que una dicotomía existente en la forma de concebir a la participación política conlleva distinciones sustanciales para reconocer qué motiva y bajo qué condiciones se da la participación política electoral. Tal dicotomía se concentra en las diferencias de la participación electoral intrínseca y la participación electoral extrínseca, siendo la primera un valor por sí misma, o es decir, un fin más que un medio y considerada como un hecho positivo en sí mismo, “cuyo efecto inmediato (mucho antes que sus implicaciones instrumentales mediatas) beneficia al Sistema Político” (Nohlen, La participación electoral como objeto de estudio, 2004, pág. 141); mientras que la participación electoral extrínseca prevé la complejidad de la democracia, las estructuras y sus procesos, así como la existencia de intereses que influye

en la articulación de estos para el funcionamiento del Sistema Político. En otras palabras, la participación electoral como un medio para un fin.

Al momento de asirse a la participación electoral como un medio para un fin, se pretende conocer cómo se da la relación entre el ciudadano y el Estado a partir del fenómeno electoral/voto y qué intereses individuales, así como los relacionados a la cognición y el entorno, motivan a los ciudadanos a elegir cada determinado tiempo a un representante. En la teoría clásica que estipula lo anterior, se pueden reconocer cuatro enfoques que hacen su aparición después del amplio desarrollo de encuestas y estudios de opinión pública en función de la adquisición de información de corte individualista, tales enfoques son: el 1) sociológico, 2) psicológico, 3) racional y el 4) institucional (Dalton & Wattenberg, 1993; Pérez, 2006).

En el enfoque Sociológico la premisa de la participación electoral versa en torno a la influencia de la 1) condición social, 2) nivel socioeconómico, 3) nivel educativo, 4) integración social y 5) politización en las redes sociales más próximas, pues el voto está condicionado por lo que cada cual es y por lo que cada cual cree que es (Dalton & Wattenberg, 1993). En ese sentido, la condición social, el nivel educativo y el nivel socioeconómico convergen en determinismos como la clase social, religión, etnia, ocupación, género, edad, etc. que se ven acompañados de condiciones materiales como el dinero, y condiciones inmateriales como el tiempo, y habilidades civiles necesarias para la participación política electoral (Leighley, 1990; Milbrath & Goel, 1977; Pasquino, Participación política, grupos y movimientos, 1988; Verba, Lehman, Brady, & Nie, 1993). Mientras que la integración social, según Miller (1992), estimula la participación electoral y la politización de las redes más próximas y la participación en asociaciones políticas y no-políticas provocan un interés en la política y una autoconfianza que terminará desencadenando el voto (Leighley, 1990; Peterson, 1992). Empero, cabe destacar que la politización y la participación en asociaciones no-políticas no siempre desembocan en el voto (Calhoun-Brown, 1998) y la integración social, en los países latinoamericanos con amplia diversidad cultural, aun encuentra escollos tanto teóricos como prácticos que lleven

a la materialización de las voluntades por medio de la participación electoral (Santos, 2010; Taylor, 2014).

En el enfoque psicológico se concibe al voto como una “expresión de opinión y sentimiento hacia el Sistema Político” (Conway, 1987, págs. 22-23) donde las creencias, valores, actitudes y sentimientos permiten un proceso de sociabilización y generalmente llevan a una identificación partidaria que aumentan el interés en la política y por ende un aumento en la concurrencia a las elecciones (Rose & Mishler, 1998; Pérez, 2006). Mientras que el enfoque económico o de elección racional parte del supuesto utilitarista en función del costo-beneficio que conlleva el votar, al momento en que se detecta de manera retrospectiva y prospectiva el hecho del fenómeno (voto) (Downs, 1957) y las percepciones individualistas/mercantilistas del fenómeno gubernamental y la pertenencia misma a la comunidad social que fundamenta al Estado. Destáquese la influencia capitalista, en su forma negativa, del solipsismo mercantil en la lógica y procesos democráticos.

En cuanto al enfoque Institucional, desde lo teorizado por el mexicano Eduardo Manuel de Gorostiza (2006) hace ya más de un siglo, y pasando por la escuela de Frankfurt con Fromm (1982), se puede dar cuenta que el conocimiento del porqué se requiere que el ciudadano obre en determinada forma y los elementos Institucionales/contextuales que podrán fungir como acicate o como obstáculo de la participación. Tales elementos contextuales, incluyendo la felicidad misma (Guerrero, 1996), estarán supeditados, por un lado, al conocimiento previo que se tiene y que propicia el convencimiento a participar, o a la imposición y el hábito de una obediencia por se estimulada por la lógica institucional, por el otro lado.

Es por ello que el aspecto institucional podrá ser considerado como la base de la participación, y el mejoramiento de aquél deberá ser parte fundamental del desarrollo democrático en los Estado modernos (Lijphart, 1997). En ese sentido, los factores institucionales principales decantan por 1) mejorar las condiciones del voto, pues entre menos complejo es el procedimiento mayor será la participación; 2) identificar el proceso electoral en función de a) tipo de elección (primer y segundo orden), b) campaña electoral:

podrá ser positiva o negativa, siendo ésta última una grave amenaza en la forma de cómo y bajo qué temas la población se interesa en la política y los efectos, pues el sometimiento de la política a la mera especulación y “estrategia” socava los fines del Estado y de la democracia misma y en el peor de los casos forja el desencantamiento político y desestimula la participación política en todas sus concepciones (Kahn & Kenney, 1999) y c) tipo de sistema electoral; y, por último, 3) la importancia del sistema de partidos, pues es éste la base del voto y en función de su actuación tiene las posibilidades de alentar o desalentar al electorado a participar (Crewe, 1981; Powell, 1986).

Resulta importante señalar que la identificación partidista significó durante décadas el modelo dominante en el estudio del comportamiento político (Pérez, 2006, pág. 89). Empero, el desencanto político y la baja credibilidad en lo que otrora se consideraba como el cuerpo de hombres que, de manera unificada, promovían el interés nacional por sobre algún interés particular en aras de alcanzar el poder (en términos positivos) contra deseos mezquinos e interesados por puestos y emolumentos (Sartori, 2005, pág. 36), han puesto a los partidos políticos en el epicentro de cuestionamientos y en tela de juicio la legitimidad y credibilidad de sus principales miembros.

En síntesis, a partir de los cuatro enfoques descritos en los párrafos anteriores, se puede vislumbrar que, de forma positiva, los principales incentivos a la participación electoral son: 1) integración en la sociedad; 2) interés en la política; 3) autoconfianza; y el 4) elemento Institucional. Y éstos pueden verse sustentados en la triada analítica en función de la proximidad al votante en cuanto a las variables que afectan su participación, a saber: a) variables lejanas: socioeconómicas, b) variables intermedias: Institucionales y c) variables más próximas: sistemas de partidos y resultados en las elecciones (Powell, 1982). Cabe señalar que en cuanto al aspecto económico, la carencia de recursos no siempre incentiva a la movilización política, pues el desencanto en la política genera un deslinde por completo de los procesos políticos tanto en sus medios convencionales como en los no-convencionales (Blais, 2006); y en cuanto a la competitividad de los candidatos (discurso y propuestas), ésta genera un mayor interés y, por consecuencia, una mayor concurrencia a al proceso electoral (Blais, 2000).

2.6 Participación política indígena

Durante siglos la ciencia política se ha visto impregnada de tensiones entre lo público y lo privado, Estado y Sociedad, política y economía, lo universal y lo particular, he inclusive entre la ciencia política y la filosofía política (Bodin, 1973; Rousseau, 1996; Hegel, 2007; Hobbes, 1994). Sin embargo, tales antinomias fueron esponsorizadas en un ambiente de divergencia en el paso de una sociedad feudal a una relacionada con el Estado moderno: regido por leyes, derechos políticos y de propiedad individual que se comprometían con el desarrollo económico de cada cual. Las consecuencias de lo anterior materializaron en el nacimiento de una burguesía que se libraba de antiguos enemigos al tiempo que fortalecía a otros de mayor alcance (Fromm, 1982); ello socavando tanto la noción genérica del hombre como la idea intersubjetiva de lo que otrora consistiría en el desarrollo de las comunidades, por un lado la independencia de las antiguas cadenas feudales provocaron el desarrollo y libertad individual, por otro lado la confianza ganada se perdía en los temores y aislamiento de un ciudadano que cada vez luchaba por asimilar las múltiples oportunidades en función de la grandeza evolucionista y positivista de la sociedad y el Estado (Spencer, 1985).

En el caso de América Latina, el “progreso” o “desarrollo” con una visión antinómica como las surgidas en Europa significaron un completo rechazo a las personas descendientes de los antiguos pueblos indígenas asentados en la región anteriores a la conquista. Durante la época poscolonial en México, que para efectos de la idea conductora del presente parágrafo también puede atribuírsele en menor o mayor medida al resto de la América Latina, el abyecto actuar de los colonizadores tanto españoles como criollos y mestizos no desapareció de la realidad americana una vez independizada (Revueltas, 1979; Yáñez, 2015), sino al contrario, agudizó en el comportamiento de la nueva burguesía política, económica y militar naciente del nuevo Estado-nación mexicano, que, entre otras cosas, se constituían en buena medida por mestizos y anglosajones.

El esclarecimiento de los factores que propician falta de participación política indígena en la región latinoamericana precisa de un amplio desarrollo de teórico y empírico para

descifrar sus causas y sus alcances; aunque se antoja al sentido común la evidencia de la escasa participación política indígena. Sin embargo, para la empresa de la que es partícipe el presente párrafo, se reconocerán 3 etapas del proceso de la participación indígena: 1) la irrupción del movimiento indígena; 2) La crisis de la hegemonía de los Estado-nación; y 3) el reforzamiento de la participación política indígena en la lógica del Estado y los procesos políticos.

La irrupción del movimiento indígena, da grima pensar que aun aparecen obstinaciones cognitivas que reducen la irrupción indígena como mero componente desestabilizador del sistema político de los Estado-nación homogéneos y con visión europeísta, se da a partir del marginalismo integral al que fue sometido la mayoría de la población Latinoamericana en general, pero que se acentuó en la población indígena en lo particular y que no correspondía a las promesas democráticas occidentales; pues si bien durante años se creyó que la alfabetización y el aumento en el ingreso individual procuraría mayor y mejor democracia dado que la pobreza incentivaba a las clases altas a tratar a los más pobres de manera inferior y como vulgares (Lipset, 1959, pág. 66), las actitudes hieráticas que fueron construyéndose con máscaras de súplica y cortesía por parte de las personas indígenas significaron la contrapartida del criollo y del mestizo (Ramos S. , 1997; Zea L. , 1978).

En ese sentido, durante décadas en América Latina, tanto en el marxismo como en el liberalismo, el aspecto económico fue centro del desarrollo ideológico y el tema indígena fue considerado un obstáculo para ambas ideologías (Lee Van Cott, 1994); con ello, se podrá asumir que las ideologías occidentales clásicas de izquierda-derecha procuraron poco el tema indígena. El colonialismo interno en México y América Latina, donde los indígenas carecían de derechos sobre todo el derecho a gobernarse, sirvió de crisol para el surgimiento de las luchas indígenas por la emancipación política. Así de dialéctico es el mundo.

No es de extrañar que las dos corrientes ideológicas imperantes en el sistema democrático occidental no procuraran el desenvolvimiento, tanto cultural como político, pues durante décadas la democracia sólo era entendida en su aspecto electoral y poca cabida se tenía de

los pueblos indígenas en tal dinámica; Ramón Pajuelo (2006) identifica bien lo anterior al señalar que la simple noción de indígena o indio, sirviéndose de ejemplo el caso de Perú, representaba una profusa estigmatización asociada a una condición social demarcada por la pobreza, ignorancia y aislamiento geográfico y que automáticamente remitía a un sentido denigratorio y polisémico de significado de lo indio o indígena. A lo anterior se le suma la carencia de datos estadísticos que identifiquen plenamente la adscripción de las personas hacia un pueblo indígena, pues si por un lado se ha estipulado que las bases campesinas de las mayorías latinoamericanas son quienes sostienen al sistema tanto político como electoral (González Casanova, 2013), y por el otro lado el criterio étnico para el involucramiento de personas indígenas al sistema político ha estado supeditado a una lógica de rentabilidad electoral, la elemental cuantificación de la población indígena para obtener su consecuente representación política no ha sido cristalizada en realidades sustantivas y, por ende, la consolidación democrática en los países latinoamericanos (Pajuelo, 2006; Santiago Benítez & Domínguez Cuevas, 2014).

La realidad de las sociedades se construye en función de la actividad del ser humano, y como éste está determinado por la historia, tanto el conocimiento como la realidad se convierten en un devenir que se transforma en tanto la historia sucede (Gramsci, 2009, pág. 44); es decir, la transformación política-social dependerá siempre de la participación y concientización de los individuos. En ese sentido, la hegemonía del Estado-nación, al tiempo que después de la guerra fría y la caída del muro de Berlín predisponía del elemento de “globalización” y “modernidad” y que dicho sea de paso eran provocados y auspiciados por aquél (Osorio, 2014), pronto fue viéndose socavada por los nuevos matices y nuevas dinámicas que salían fuera de sus límites y lógicas fundacionales; pues no era ya el aspecto puramente económico el que aparecía a relieve en las lógicas sociales, sino era el aspecto cultural el que irrumpía el escenario nacional y que provocaba un cambio paradigma que suponía el reconocimiento por parte del Estado y de la ciudadanía no-indígena en general (Santiago Benítez & Domínguez Cuevas, 2014).

De tal manera, que si el Estado-nación entraba en una crisis de hegemonía y de legitimidad, no es de extrañarse que los partidos políticos tradicionales encontraran su abismo al

momento de generarse su crisis hegemónica ora por autoritarismo e imposición ora por la imposibilidad de adaptarse a las nuevas tareas y vientos de cambio propugnados por la sociedad (Gramsci, 2009, págs. 140-143). Para el caso mexicano, los escollos con los que tropezaba la democracia en el tema electoral era que en las zonas tanto rurales, como de pueblos indígenas, los partidos políticos mexicanos suelen poner los intereses del partido, en su aspecto corporativista, para lograr la representación política sobre los intereses y demandas de los grupos sociales a quienes “representaban” (Hémond & Recondo, 2002); provocando con ello que en el tema de participación indígena electoral el abstencionismo incrementara por mor de la desconfianza, falta de interés credibilidad de las Instituciones del Estado, clientelismo y la manipulación electoral (Bonfil, 2010).

Las herramientas que echó a andar el Estado-nación mexicano, que incrementó su crisis de hegemonía nacional, estaban relacionadas con el cumplimiento de la promesa revolucionaria a través de la unidad nacional por medio de la educación, provocando, con ello, una bifurcación de corte racial; pues al imponer el español como lengua nacional y obligatoria, qué es sino promover una de las soluciones estratégicas mencionadas por Alison Brysk (1994) para contrarrestar la amenaza a las Repúblicas: 1) exterminio, 2) creación de reservas y/o 3) asimilación e integración, siendo ésta última la utilizada durante tantas décadas en México. Teniendo en cuenta que existen más de 1,000 pueblos indígenas en América Latina con lenguas distintas, así como variantes lingüísticas entre ellas, la posibilidad de concebir a la educación como un aparato ideológico del Estado que permite la dominación (Althusser, 2008) se torna cada vez más latente. Por mor de tal fenómeno, la pugna por espacios democráticos fue el baluarte de los pueblos indígenas en México en particular y en América Latina en general; a partir de los 80’s el resurgimiento de los pueblos indígenas como agentes políticos provocaron reformas constitucionales, el nacimiento de nuevas instituciones así como la redefinición del Estado mismo (Ruiz J. , 2003).

Acentuando el aspecto cultural, y provocando un cambio en la lógica de la filosofía y la ciencia política misma en la región latinoamericana, los pueblos indígenas ponían a relieve que para garantizar la paz, la estabilidad política y la democracia en la región era necesario el respeto de sus derechos humanos, el reconocimiento de la realidad multiétnica y el

incremento de las vías para participar políticamente sin obtener represiones de ningún tipo (Ruiz J. , 2003; Wright C. , 2013). Aunque las visiones del mundo indígena y el occidental no siempre concuerdan, para ello el aspecto lingüístico dilucida múltiples ejemplos que por un lado reflejan la persistencia de desigualdades, racismo y paternalismo, mientras que, por el otro lado, hacen ver que la lucha por la dignidad y autonomía persiste desde todas las trincheras posibles, inclusive desde la semántica del discurso y de las figuras lingüísticas (Villoro, 2017; Wilk-Racieska, 2012).

De acuerdo con Julio Ruiz Murrieta (2003), se pueden esbozar 7 factores que favorecen la participación política indígena en América Latina: 1) progresiva transformación de las Instituciones y políticas indigenistas, 2) creciente expansión territorial y demográfica indígena, 3) surgimiento y fortalecimiento de las formas de organización étnica, 4) desarrollo de estrategias de lucha que confieren las demandas a formas jurídicas y políticas con más y mejores matices, 5) inclusión de economías indígenas en mercados endógenos y exógenos, 6) transformación de las relaciones entre pueblos indígenas y el aparato estatal y 7) el surgimiento de herramientas jurídicas y políticas a nivel internacional.

La participación política indígena precisa del reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, una característica imprescindible es el reconocimiento de derechos tanto individuales como colectivos, pues mal se avanza cuando el derecho a la libre asociación y de asamblea se oprime y da como resultado que el actuar de la población indígena, y sobre todo en su forma de migrante, sea respetado como minoría pero se le impida el apoyo y sustento de las minorías como un colectivo que en teoría se cobija por los derechos humanos en su forma de colectivo y no tanto en los derechos individuales. Lo anterior se establece porque los derechos humanos individuales de las personas indígenas generalmente se materializan cuando son ejercidos en grupo (Henrard, 2005; Tomaselli, 2016).

A pesar de que autores afirman que la emergencia de la ciudadanía se da a raíz del desarrollo del individualismo (Santiago Benítez & Domínguez Cuevas, 2014, pág. 98), éste último puede contener distintos matices en función de la forma en que se quiera y pueda teorizar;

para efectos de la presente investigación, se asirá a la lógica que coadyuva a la participación política indígena y no indígena a la conformación de los sistemas posibles en el entramado social. Es decir, si bien el individualismo es imperante en las sociedades modernas, el sistema social se conforma de distintos sistemas como el político que, a su vez, compagina a otros y hacen posible la vida social; es decir, desde el punto de vista del análisis político, todos los posibles sistemas como el educativo, religioso, cultural, económico, jurídico etc... se encuentran interrelacionados y por consecuencia sus miembros también (Easton, 2012).

La importancia de lo anterior radica en que la participación política indígena, que tanto para efectos teóricos como metodológicos y empíricos, será considerada dentro de un sistema al cual se concibe como político que brindará la oportunidad de reconocer las pautas sistémicas y estructurales de la participación política indígena. De tal manera que la posibilidad de combinar distintas disciplinas, y la utilización a préstamo de otros campos de las ciencias sociales, justificará y enriquecerá las futuras conclusiones, la utilización del aparato conceptual de otras disciplinas y el sentido crítico que rige la investigación (Easton, 2012; Van Dijk, 2009); empresa que será dejada para las siguientes secciones.

Es preciso señalar que si bien es cierto que durante décadas la interacción dentro del sistema social fue dándose, en su aspecto político, en el reforzamiento de los estudios de una vida política que sucedía en los estudios del orden, poder, Estado, políticas públicas, elaboración de alternativas, toma de decisiones y en los motivos y causas del monopolio del uso de la fuerza legítima (Easton, 2012; Weber M. , 2007), éstos reproducían una cultura política, jurídica y democrática particular con significados diferentes y contrapuestos a los de la cultura y procesos jurídicos o consuetudinarios indígenas; donde, dicho sea de paso, la discriminación y violencia eran imperantes (Sabogal, 2012; Sierra, 2000). Obteniendo como resultado que el Derecho como tal no puede ser concebido como neutral, pues los sistemas jurídicos reproducen relaciones de orden y jerarquía y los sistemas políticos se reproducen a partir de un contrato social excluyente (Cadena, 2006; Santiago Benítez & Domínguez Cuevas, 2014, pág. 121).

De lo que precisa la población indígena en México y de la América Latina donde aún prevalecen los pueblos indígenas es 1) aumento en su participación política, ora por medios institucionales como la representación en las Instituciones públicas, en la arena legislativa o partidos políticos indígenas, ora por medio de acción colectiva y movimientos sociales en conjunto con Organismos Internacionales; 2) Apertura étnica para el fortalecimiento de la reivindicación cultural tanto en sus integrantes como en sus acciones colectivas; 3) Mejoramiento de la pluralidad jurídica en la jurisprudencia ejercida en sus sistemas constitucionales; y 4) El sustento estadístico que permita visibilizar a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos e individuales y no sólo como sujetos de atención por parte del Estado (Pajuelo, Participación política indígena en la sierra peruana. Una aproximación desde las dinámicas nacionales y locales., 2006; Santiago Benítez & Domínguez Cuevas, 2014).

Si la noción democrática moderna ha sido concebida como la cristalización de las voluntades individuales y colectivas (Bobbio N. , 1986; Dahl, 1992; Lipset, 1959; Rousseau, 1996), después de los 80's la ampliación de las fronteras democráticas también significó la ampliación de desigualdades, exclusión y conflicto en las regiones latinoamericanas con población indígena (Hardt & Negri, 2005; Osorio, 2014; Pajuelo, Participación política indígena en la sierra peruana. Una aproximación desde las dinámicas nacionales y locales., 2006). Por lo tanto, el papel que juega el Estado y el sistema político actual, conlleva múltiples obligaciones y esperanzas para la consolidación democrática en México y la región Latinoamericana.

La bifurcación existente dentro de la participación política indígena indica dos vertientes de suma importancia en el devenir histórico de las sociedades occidentales y de los pueblos indígenas en América Latina en general y México en lo particular, Alexandra Tomaselli (2016) identifica dos dimensiones de la participación política indígena: 1) la participación dentro del Estado para la injerencia en las decisiones gubernamentales y 2) la participación para alcanzar la autonomía o el autogobierno (pág. 191). Si bien tales dimensiones podrían no ser excluyentes, pues el gobierno teóricamente contiene un aspecto político y otro administrativo (Guerrero, Las Administración Pública a través de las Ciencias Sociales,

2010), las antinomias entre la participación política indígena convencional y no-convencional corren el peligro de imposibilitar a éstas últimas en pro de la estabilidad política, el orden y el progreso (Wright C. , 2013); empero, la gobernanza entendida como la participación de la sociedad en el gobierno conlleva imperativos categóricos con tendencias ética y morales de justicia social y progreso inclusivo (Gómez, 2015), el reto es reafirmar que lo no convencional y el autogobierno contiene los más primigenios principios de la ciencia política es decir: voluntad política y libertad de pensamiento.

Otra perspectiva en cuanto a la división de las plausibles formas de participación política indígena se encuentra en el estudio de Díaz Polanco (2005); en éste, el autor reconoció que los senderos que optan recorrer la participación política-electoral indígena en México, a partir de los años 90's, están cimentados en la forma tradicional: 1) el Voto, y en términos de una 2) reivindicación cultural. Es materia de profuso análisis, y, sobre todo, de prominente disuasión en el ambiente científico y político, tomar en cuenta que la reivindicación cultural de los pueblos indígenas en México estuvo siempre vinculada al rechazo de la secesión y actos separatistas; si bien es cierto que la autonomía es el baluarte teórico y práctico para la consolidación de la dignidad y libertades indígenas, la reivindicación cultural, de la mano del ejercicio de autonomía, en México se matizó en las visiones comunalistas (autonomía nivel comunidad) y comunitaristas (haciéndose sentir y saber como un cuarto nivel de Gobierno) (Díaz Polanco, 2005; Santiago Benítez & Domínguez Cuevas, 2014).

Las discusiones en torno al ejercicio de autonomía no sólo contiene tintes simbólicos, la brega por conquistar el derecho de ser tratados como sujetos de derechos y no sólo entidades de interés públicos, cuando si bien no sólo político-electoral, corresponde a una serie de transformaciones que optan por construir nuevos códigos de identificación colectiva, reinención de pertenencia nacional a partir del reconocimientos de las demandas y de la apertura de los mecanismos de participación política en la región Latinoamericana (Pajuelo, 2007). Paradójicamente, son los mismos efectos de la globalización y el neoliberalismo los que permiten tales cambios; todo, al grado de encontrar mociones que reafirman que en América Latina se está pasando del indigenismo

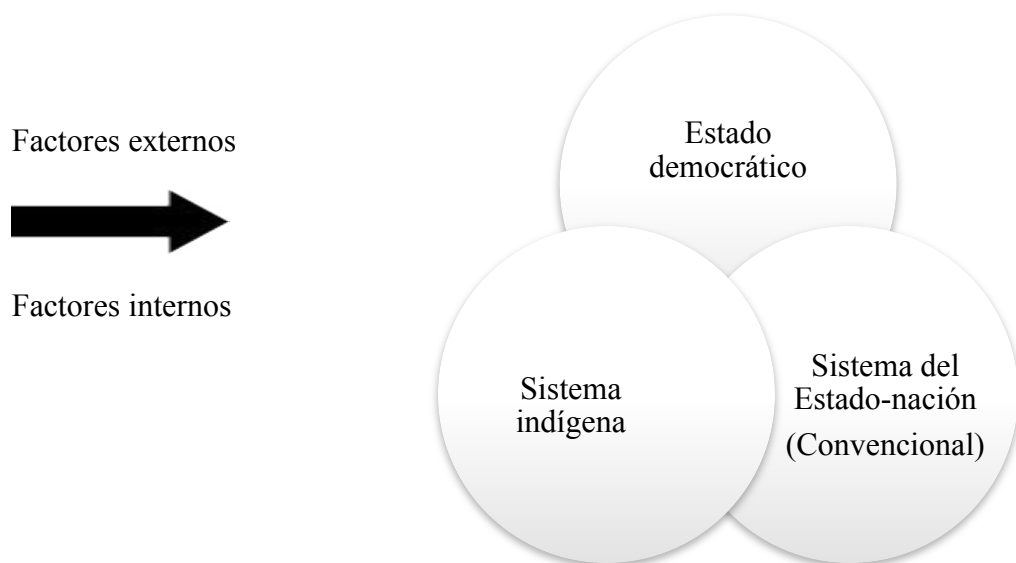
al indianismo, o es decir, el final de la etapa populista para enarbolar una etapa Latinoamericana de corte liberal (Favre, 1999).

En ese sentido, el tópico de la participación política indígena se encuentra entrelazada a los cambios que trajo consigo la globalización. No obstante, es preciso detener lo estipulado para reconocer hasta qué punto tales relaciones interactúan a favor o en contra de la participación política indígena. Por un lado, tenemos que la pertenencia étnica estimula la formación de identidades y que ésta, a su vez, provoca la formulación de demandas, reconocimiento de Estructuras de Oportunidades Políticas (Tarrow, 2012) para hacer saber tales demandas y, por consiguiente, la posibilidad de acción colectiva para introducir tales demandas a la esfera estatal; empero, por otro lado, las posibles virtudes de la etnogénesis por sí solas no encuentran el camino al reconocimiento de nociones como la “nacionalidad indígena” que permite articular las demandas a favor del reconocimiento estatal de las comunidades indígenas como sujetos de derechos y no como sujetos a meras políticas públicas (Pajuelo, 2007). Lo anterior se basa en que por Estado no puede sólo entenderse, y reducirse, como al mero aparato gubernamental, y a la nación como el representante de su poder (Gramsci, 2009; Hardt & Negri, 2005).

2.7 Participación política indígena como elemento axial del sistema político

Cuando se concibe a la nación en tanto “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 1993, pág. 23) que trabaja en favor de la homologación de símbolos, conciencias y visiones de progreso, las organizaciones indígenas, en el ir de los vientos de la globalización y en el venir de la dignificación de la humanidad, cuestionan la hegemonía de la construcción histórica del Estado, de la ciudadanía, la democracia, el derecho y de la nación misma (Osorio, 2014; Pajuelo, 2007). Todo ello desde *adentro* del Estado y del sistema político mismo. El quiebre se encuentra no tanto en la demarcación sustantiva de los procesos políticos, sino más bien en la instrumentalización de lo que otrora se podrá llamar *vida política*.

Figura 3. Influencia de la participación política indígena en la reconceptualización de los sistemas políticos



Fuente: Elaboración propia.

Como fue señalado con anterioridad, el aspecto que invade los vaivenes de la vida política como vector fundamental en las relaciones sociales en la delegación de poder, hace redescubrir que la participación política indígena, en tanto sistema político y en cuanto cuestionamiento legítimo de lo establecido, ofrece la oportunidad de emprender la exégesis teórica que ensanchen las fronteras del conocimiento y deslinde a éste del mero ejercicio ínfimo por hacer progresar la teoría sólo con el acumulamiento y codificación de lo que ya se conoce. En ese sentido, en este apartado se trabajará con la propuesta de construir un modelo teórico para dotar de potencia ínsita a la esquematización que ofrece la dinámica propia de la participación política indígena.

Como se puede observar en la Figura 1 (página 33), existe una relación entre los sistemas políticos dominantes en el tema del cual se construye la empresa del presente análisis (sistema indígena y sistema del Estado-nación secular), la consolidación del Estado y la democracia. Es conveniente traer a colación y clarificar lo que se entiende por vida política, para desarrollar y redescubrir el impacto de aquella en el mantenimiento y progreso del sistema político; para tales fines, David Easton (2012) describe a la vida política como un

“conjunto o sistema de interacciones definidas por el hecho de que están relacionadas en forma más o menos directa con las asignaciones autoritarias de valores en una sociedad” (pág. 111). De manera similar, pero no idéntica, pues se podrán encontrar diferencias tanto teóricas como empíricas, Enrique Dussel (2009) concibe a la vida política como un campo:

“donde los diversos niveles o ámbitos posibles de las acciones y las instituciones, en las que el sujeto opera como actor de una función, como participante de múltiples horizontes prácticos, dentro de los cuales se encuentran estructurados además numerosos *sistemas y subsistemas*”. (pág. 90)

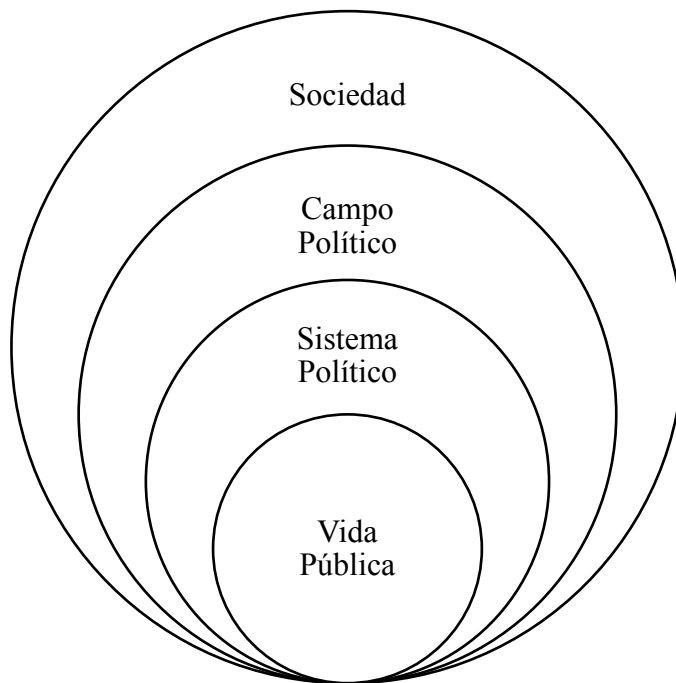
Dentro de la *vida política*, así como de los *campos políticos*, lo imperativo de las relaciones entre actores/sujetos e instituciones, confluye con la meta-categoría de *vida pública*, que a su vez enlaza ineluctablemente al *Sistema Político*. Aquí es preciso detenerse para argumentar, y justificar, las diferencias de *vida política*, *campo político*, *vida pública* y *sistema político*. El Mundo como categoría abstracta que reúne, a saber del tiempo y del espacio donde los sujetos interactúan y comparten experiencias, las diversas dimensiones de las acciones cotidianas del ser humano, está supeditado a efectos que podrán ser de corte fenomenológico o bien de corte existencial. En el primero, el fenomenológico, se recoge la premisa de que el conocimiento humano, a través de la absorción y comprensión de las cosas, podrá llegar al conocimiento Absoluto y el sujeto, por lo tanto, alcanzará su verdadera identidad en cuanto y en tanto a su identificación con la vida pública y con la sociedad política (Hegel, 2007; Taylor, 2014). En el segundo, el de corte existencial (Heidegger, 2014), la premisa que rige es que la esencia del individuo radica en la existencia, o es decir, el ser-ahí⁵ está dado en el mundo y en éste se da las posibilidades para su existencia. Aunque guardando distancia entre ambas concepciones, las posibilidades de cambio y la dialéctica histórica y de acción, están presente en ambas premisas.

En ese sentido, se podrá mantener que el Mundo, que en otra acepción abstracta podrá expresarse como Sociedad, está integrado por campos como lo es el de la vida política, y

⁵ En el sentido que le da Martin Heidegger en Ser y Tiempo

éste, a su vez, determinado por sistemas políticos que se desarrollan, sobre todo, en la vida pública:

Figura 4. Esquema para un análisis político general



Fuente: Elaboración propia.

El elemento principal de tales concepciones es el sujeto. El esquema proporcionado por David Easton (2012) ayuda en demasía para identificar las diversas fases del análisis político, por un lado demuestra que los *miembros del sistema político* tienen la capacidad de modificar el rumbo de la vida política y, por otro lado, distingue los *sistemas de miembros del sistema analítico* (pág. 65) y el *sistema político del sistema para-político*. Empero, aquí el quiebre de tales concepciones decanta por la introducción de sujetos/miembros de los sistemas políticos que han quedado relegados a lo largo de la historia. Por un lado se tiene que los sistemas de miembros son, al igual que el sistema para-político, aquellos sistemas que optan por analizar las relaciones dentro de determinados grupos, mientras que el sistema político, en tanto y en cuanto sistema analítico, opta por analizar de manera

abstracta las relaciones que se dan en el mundo/sociedad y que por antonomasia abarcan más que el análisis del sistema para-político⁶.

Por otro lado, el objetivo primigenio del análisis del sistema político, explicado en el párrafo anterior, se concentra en que es el carácter fenoménico el imperativo categórico que, mediante el reconocimiento de personas físicas, proximidades y estructuras comunes y compartidas, permiten tanto conocer la realidad como abarcar los fenómenos sociales en su totalidad, pero concibiendo a las relaciones sociales como unidades repetitivas, ubicuas y uniformes que mantienen patrones de conducta que se manifiestan, a su vez, en procesos e instituciones. Todo ello al grado de expresar que la autoregulación de las tensiones y problemas dentro de los sistemas sociales, y los cambios que derivan de ello, nunca serán el acicate para detener la continuidad, pues todo es componente de un círculo virtuoso que se asemeja a lo mercantil-utilitarista; pues existen los insumos y productos, a semejanza de la oferta y la demanda. Por desgracia, y en el calor de las teorizaciones, la propuesta de Easton (2012) aleja los sistemas que se consideran triviales y anacrónicos y los arroja al crisol de la desaparición; aunque de él se rescata la amplia diferenciación de categorías, la aceptación de que las posibilidades de cambio son asequibles y que la ética es quien deberá imperar en las decisiones (Easton, 2012, pág. 141).

Bajo la empresa del análisis analítico de los sistemas políticos y para-político –para seguir las definiciones de Easton (2012)–, los esquemas de las minorías y de los pueblos indígenas han quedado relegados al grado de destinarlos a tiempos, prácticas y visiones anacrónicas, pues durante la historia de los Estados nación, y la constitución de la ciudadanía en tanto portadores de derechos individuales, la homogeneidad étnica, cultural y social, ha imperado; y con ello las discriminaciones han progresado en la vida pública (Martínez Espinoza M. I., 2015; Stavenhagen, Los pueblos indígenas como nuevos ciudadanos del

⁶ La premisa de esta distinción se puede encontrar en la lógica Adorniana que estipula que las cosas deberán ser lo suficientemente abstractas para ser pensadas en tanto suficientemente específicas para ser reconocidas.

mundo, 2009). Por lo tanto, los esfuerzos que seguirán se esgrimen en confrontar tales visiones de homogeneidad y monoculturalidad en la sociedad moderna.

Se tiene en cuenta que el análisis analítico del sistema político es imprescindible, no obstante, de lo que sí se podrá prescindir es de las visiones de homogeneidad y monoculturismo; en ese sentido, el lector se podrá cuestionar cómo, y bajo qué argumentos teóricos, la dignificación, pluriculturalidad e interculturalidad podrá convertirse en ideas conductoras de la praxis en los sistemas políticos. A continuación, se darán las pautas teóricas para ello.

Por mor de las dicotomías que, durante décadas y siglos, existieron dentro de las sociedades Latinoamericanas, el esfuerzo teórico optará por la exégesis histórica primero y los componentes políticos, culturales y económicos después. Esto con la misión de forjar la panoplia teórica con la que se escudará la propuesta para el análisis sistémico de la participación política indígena.

A saber, tanto en el pensamiento como en las acciones destinadas a la ordenanza y gestión de la sociedad, las doctrinas occidentales han imperado en la región Latinoamericana; sin embargo, ¿es posible concebir a la historia de manera distinta en el siglo XXI? Y, de ser así, ¿cuáles son las referencias a las que se deberá asirse y quiénes son los teóricos más prolíferos para la reconstrucción de la historia? Es materia de las ciencias sociales, desde Hegel hasta Habermas, que el análisis filosófico, politológico y sociológico, comience por descifrar el devenir de la “historia” y, generalmente, ésta tiene su comienzo en lo que hoy se conoce como Medio Oriente y los países Indoeuropeos y culmina en la Europa Occidental. Es decir, el movimiento histórico fue de Este a Oeste, llegando a afirmar en múltiples ocasiones que aquel “Nuevo Mundo”⁷ no obtuvo, sino hasta su conquista, los elementos suficientes para “civilizarse” y “humanizarse”.

⁷ Haciendo referencia al continente Americano. En tanto sujetos históricos, y pertenecientes a la región Latinoamericana, en esta nota pie de página la narrativa la hacemos en primera persona para dilucidar que las consecuencias sociocognitivas, a saber: 1) conocimientos, 2) actitudes e 3) ideologías, versan en la conciencia histórica de un *Nosotros* latinoamericano.

Para la comprensión del ser humano, se requiere de la dilucidación de la Historia de las ideas que en él ejercen para la posterior praxis. Empero, saber a quién han pertenecido tales ideas o de quién son, demuestra tener mayor significancia que la pregunta en torno a conocer sobre qué son tales ideas (Gaos, 1973). Además, no menos importante es el control que se ejerce sobre el discurso, pues quien lo haga puede controlar directa o indirectamente la mente de los receptores; la importancia de ello radica en que las acciones de cada cual está subordinada a la mente –y es en ésta donde el conocimiento, la experiencia, actitudes, valores, normas, ideologías, tópicos, confluyen (Aristóteles, Tratados de lógica. Categorías y Tópicos sobre las refutaciones sofísticas, 2001; Wilk-Racieska, 2012)– y, por lo tanto, al momento de ejercer un control mental podrá implicar un control en las acciones (Van Dijk, 2009).

Inevitablemente se deberá asirse a la concepción del mundo, de la historia y de la política, como sistemas donde confluyen relaciones de poder. En ese contexto, el poder político es del que se hará uso, y contiene tres elementos imprescindibles para su ejercicio en nuestra empresa: 1) voluntad política como voluntad de vida; 2) aspecto material del poder político como voluntad de vida y la 3) factibilidad de la materialización de la voluntad de vida.

La voluntad política como voluntad de vida se encuentra desde uno de los principales códigos de leyes en la historia de la civilización en la Mesopotamia: el Código Hammurabi; en éste, la salvaguarda del pobre, la viuda y el huérfano ofrecía la exégesis de la existencia del Otro, así como el compromiso ético y moral que debería regir en las sociedades. De la misma manera, en la civilización egipcia, a través del “Libro de los Muertos”, la preocupación por el Otro se hacía notar cuando se versa “di vestidos al desnudo, pan al hambriento, agua al sediento, una barca al náufrago detenido en su viaje”. Con Aristóteles se reconoce que si la gente tiene hambre es imposible que exista una ciudad, y con Marx se descifra que las necesidades fundamentales del ser humano se inscriben en la posibilidad de comida, vestido, calefacción y vivienda⁸ (Dussel E. , 2007). Es entonces que la voluntad

⁸ Ver tomo I de Política de la Liberación (2007) de Enrique Dussel.

de vida, para el desarrollo del presente apartado teórico, adquiere su corporalización y contiene la fuerza misma del poder político (Schopenhauer, 2003).

El aspecto material de poder político como voluntad de vida, surge a partir del deseo de darse las instancias óptimas para la vida; en ese sentido, a partir de la comunidad, el consenso y la intersubjetividad, los miembros del sistema político han venido dándose las Instituciones necesarias que procuren la permanencia y el aumento de la vida misma. Con la razón discursiva por un lado, y con la razón estratégica por el otro, se hace del consenso una empresa de legitimidad para el funcionamiento material de las sociedades (Apel & Dussel, 2005; Habermas, 2014; Mouffe, 2011); siempre y cuando, claro es, que exista dentro de la lógica societal la comunión entre los aspectos culturales, económicos y ambientales con los elementos formales de legitimidad como lo son el Sistema de Derecho y con los distintos actores sociales como los partidos políticos, sociedad civil etc.

Y para finalizar, la factibilidad con la que debe contar la materialización de la voluntad de vida en el ámbito público, tiene mayor relevancia cuando la sistematización da cuenta que el sistema mismo en ocasiones no es justo del todo ni para todos. Desde Pablo Tarso (Martos, 2007) hasta Walter Benjamín (1991) y Emanuel Levinas (2012), se estipula que la ley no es el fundamento de la justicia, que el otro, el oprimido y las víctimas son la materialización de ello, y que si el sistema democrático se sustenta en el consenso y legitimidad para constituir un espacio abierto y participativo en la vida política y pública, la voluntad de vida y su consecuente corporalización sirve de base a los primeros.

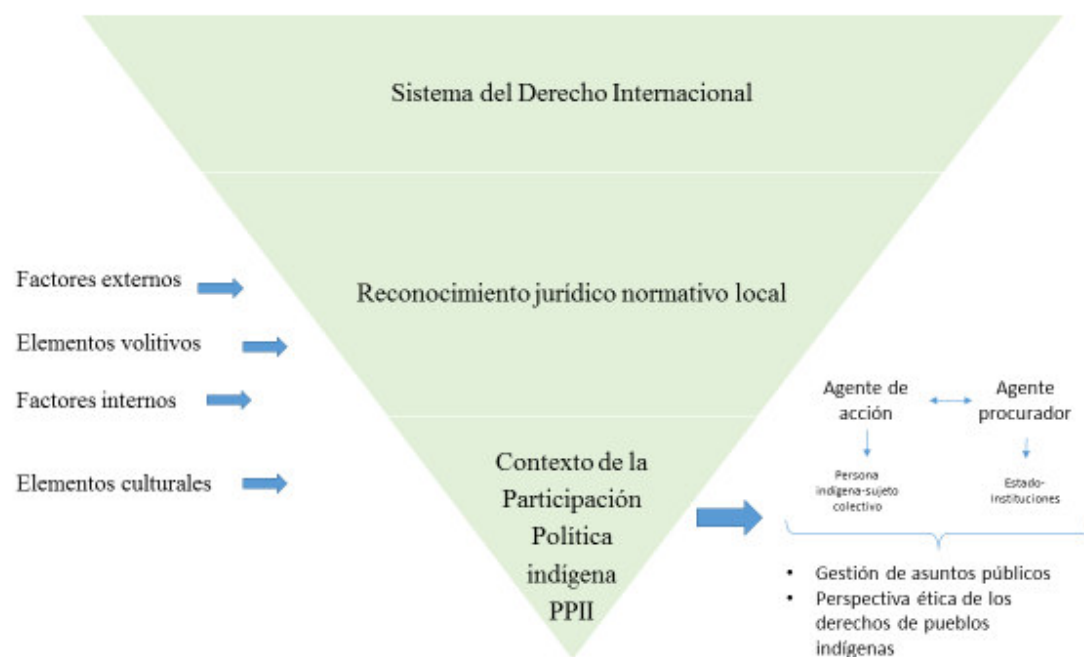
No obstante, la factibilidad de la que se echará mano en el tema de participación política indígena y la lucha constante por materializar su voluntad de vida, tiene sus cimientos en el reconocimiento formal del marco jurídico normativo internacional de derechos de los pueblos indígenas, aunque ello en la práctica aún no concommita con las políticas de los Estados como lo menciona M.I. Martínez Espinoza (2015, pág. 251).

Por lo tanto, *el poder político se entenderá como la voluntad de vida que, de manera consensual, puede ser posible, que tiene de base a la comunidad y encuentra su materialización en las instituciones.* Cabe destacar que si bien es cierto que la complejidad

misma de todo sistema conlleva cierta imperfección en los procesos, también es cierto que dentro de la lógica de las instituciones como las sedes de la delegación del poder, éstas podrán corromperse fácilmente, en detrimento de algunos y en favorecimientos de otros, y por medio de lo que Marx (1976) estipuló como la fetichización del poder; y que luego fue bien abordado por el mexicano Eduardo Manuel de Gorostiza (2006) al sentenciar que quien desea con ansias algo, desea con igual ardor los medios que se lo pueden procurar (pág. 80).

Dado lo anterior, la participación política indígena encuentra ya su basamento teórico con el cual se legitima y justifica toda acción que se llegase a emprender tanto en lo teórico como en lo práctico:

Figura 5. Principio de la participación política indígena



Fuente: Elaboración propia

La participación política indígena estará supeditada al respeto y reconocimiento de los *derechos individuales y colectivos* que estipule el *sistema de derecho internacional*, que, dicho sea de paso, se fundamenta en *elementos tanto culturales como volitivos* y deberán

dar cuenta de los factores internos y externos que influyen en una lógica societal determinada. De la misma forma, el *marco jurídico normativo local*, o es decir, el que concierne a cada Estado y su Gobierno (en los 3 órdenes en caso de los sistemas federales), deberá ser garante del cumplimiento de tales derechos, estimulante en la escalada en la publicación del poder político de los pueblos indígenas y trascendente del aspecto electoral, para posarse en la *gestión de los asuntos públicos* y adición de la *perspectiva ética en el ciclo de políticas públicas*.

La relación de codependencia y codeterminación entre el *agente de acción* (sujeto colectivo indígena) y el *agente procurador* (Estado-Instituciones) estará siempre influida de factores internos y externos⁹(Ver figura 3) que podrán promover la participación o, en el peor de los casos, bloquearla y así socavar el espíritu democrático.

⁹ Tales como los nacidos en las crisis de liderazgos tanto en los pueblos indígenas como en las esferas gubernamentales, y los provocados en la arena internacional y ejecutados en el aspecto local

CAPÍTULO III. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICO ELECTORAL INDÍGENA COMO BASE DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

La participación electoral indígena aparece a relieve a partir de la bifurcación entre las dimensiones internas y externas inscritas en el derecho a la participación de los pueblos indígenas, donde, a saber, la dimensión interna se relaciona con las formas de organización política, social y cultural dentro de la comunidad, mientras que la dimensión externa tiende a materializar la participación en procesos de decisión en torno a representantes, cuotas, partidos, procesos deliberativos, voto etc (Wright, en prensa). De tal manera que el desarrollo teórico en el presente apartado se destinará a dar a conocer las pautas de la participación electoral indígena.

3.1 Participación electoral indígena como problema procesal

Las discusiones en torno a la viabilidad y mantenimiento de los Estados-nación, en su forma clásica, sigue dando materia prima para la elaboración de antinomias y bifurcaciones conceptuales dentro de la teoría política. Por un lado la promesa liberal, junto con su consecuente teoría, establece que 1) la sociedad basada en los derechos de propiedad representa un orden justo y natural; que 2) el orden liberal es “normativamente justo” y “sistemáticamente posible”; y que 3) por ser, el orden liberal, justo y posible, será también el más eficiente (Habermas, 1998), además, en términos de participación electoral tal perspectiva es la más apegada a la visión del Derecho y el voto es sólo una decisión de participar o no en el proceso electoral. Por el otro lado, la teoría republicana mantiene una visión funcional donde el voto es un compromiso y deber, y mientras que para la teoría liberal el abstencionismo y el ausentismo es una forma de ejercer la libertad dentro de la democracia, para la teoría funcional y republicana el abstenerse a ejercer el voto es una de las dificultades más profundas de la democracia contemporánea y la manera de contrarrestarlo es a través del mejoramiento de la educación cívica y prácticas pedagógicas que consoliden de forma cualitativa el sistema democrático forjando a ciudadanos con virtudes republicanas (Nohlen, La participación electoral como objeto de estudio, 2004).

No obstante, en lo que concommita las dos visiones de la teoría política es que la participación electoral, por medio de su instrumentalización, o es decir: el voto, influencia al gobierno y a gobernantes con el propósito de proteger y maximizar derechos, intereses y otorgar legitimidad al régimen. Pues el proceso electoral, concebido como proceso político, tiene de basamento la formación, distribución y el ejercicio de poder por medio de la toma de decisiones ante una autoridad que define las reglas de participación y que se ve influenciada por élites que, a su vez, interfieren en la dirección de las políticas públicas y desemboca ora en el otorgamiento de legitimidad al Sistema político ora en la deslegitimación del Sistema político y de sus gobernantes/dirigentes/representantes (Lasswell & Kaplan, 1950, pág. 75).

En tal tenor, el problema de la participación electoral indígena aparece cuando las principales corrientes de la participación electoral giran sobre configuraciones estatales históricamente definidas y estructuradas de manera uninacional y coercitivamente impuestas a realidades multiétnicas en la región latinoamericana (Bartolomé, 2006, pág. 10). Por ello, y a manera de justificación, la atención académica hacia la participación electoral indígena deberá construirse en base al reconocimiento de que ha existido una prohibición histórica, una exclusión social y que los pueblos indígenas mantienen una singularidad cultural diferente a la mestiza.

Una manera de llevar la exégesis teórica al sendero de los cambios sociales propios de las democracias modernas, y compaginarla con las prácticas electorales de los votantes, se encuentra en la concepción de que 1) la Ciencia Política ha estado incrustada en el estadio de las hipótesis y no de las leyes y que 2) las Sociedades Políticas, por estar voluntariamente construidas, serán siempre susceptibles a ser repensadas y redefinidas (Bartolomé, 2006; Duverger, 2014). Por lo tanto, y a pesar de que la adopción del sufragio universal fue materia de múltiples luchas y de transformaciones de la estructura social del Estado, los factores que influyen en la vida política dependen de otros condicionantes además del sistema electoral y su régimen electoral para la consolidación democrática.

Por mor de la susceptibilidad de repensar y redefinir a las sociedades políticas, en éstas el sistema electoral deberá de ser modificado en tanto y en cuanto aparezcan a relieve nuevas

formas de organización, demandas, intereses y fuerzas endógenas y exógenas dentro de la sociedad. Empero lo que otrora se podría considerar como estatus culturalmente diferenciados/privilegiados (Comaroff, 1992) en los procesos internos de un Estado y más cuando de participación electoral indígena se trata, ésta contiene el primigenio objetivo de maximizar y salvaguardar derechos.

Y uno de esos derechos es el derecho de autonomía que, dicho sea de paso, comprende el derecho de existir como tal y que poco tiene que ver con los tintes separatistas y desestabilizadores que se les acuñó durante tiempo tanto intelectuales y como gobernantes, sino más bien el derecho de autonomía reposa en las bases de la exigencia de espacios y territorios de reproducción cultural y “representación política como grupos culturalmente diferenciados, no sólo la emulación del estatus de la sociedad dominante” (Bartolomé, 2006, pág. 183). Aunque es preciso señalar que dentro del entramado social y de los sistemas políticos y electorales, la correlación de fuerzas, así como los factores externos dentro de la arena pública, se ve impregnada de elementos sistémicos, organizacionales y procesales que ora permiten u ora obstaculizan el derechos de autonomía; es decir, si por un lado se pueden encontrar un abanico de oportunidades y restricciones para la acción colectiva de obtención de representación y participación política electoral indígena por parte de las Instituciones del Estado y el Sistema político mismo (Vann Cott, 2002, pág. 42), por el otro lado, los conflictos dentro de las organizaciones indígenas y pro-indígenas cuando se encuentran en relación con los campos políticos nacionales versan sobre la dicotomía entre el “carácter estratégico de las identidades indígenas” y las áreas de “influencia y exigencias hegemónicas” relacionadas con la pugna por recursos y poder (Schilling-Vacaflor, 2008).

La participación política electoral indígena encuentra su primera problemática cuando se definen los conceptos de 1) autonomía dentro de un Estado-uninacional y 2) de ciudadanía, pues es en ésta última donde la coalescencia de visiones del mundo y aspectos jurídicos y constitucionales tiene repercusiones culturales dentro de la lógica social. Todo ello porque las demandas de los pueblos indígenas generalmente van más allá de las concepciones jurídicas, legales y formales de la ciudadanía, y se decantan por concebir, y pugnar, a la

ciudadanía como resultado de conflictos sociales y luchas de poder producidos en coyunturas históricas específicas (Educativos, 2013).

En lo referente a la ciudadanía, se podrá hacer una distinción antinómica que cumple fines más sustantivos que instrumentales, empero resguarda pautas que después serán imprescindibles para el proceso electoral. A saber, la ciudadanía podrá concebirse como formal o pasiva y comprende una titularidad para recibir bienes y servicios garantizados por derechos constitucionales brindado por el Estado –a tal concepción se adscribe la noción de políticas de Gobierno–; mientras que la ciudadanía sociocultural o activa conlleva la dinámica de participación por parte de los ciudadanos en los asuntos políticos, y que en la participación electoral indígena responde a la triada en torno a los derechos de 1) participación, 2) protagonismo político y 3) de representación a favor del reconocimiento de la identidad cultural indígena (Angosto Ferrández, 2012; De la Peña, 1999; Leyva & Vázquez, 2008).

De tal manera que se podrá reconocer a la ciudadanía étnica –no tan alejada del concepto de ciudadanía de baja intensidad de O’Donnell (1993) – como una forma de reivindicación de la pluralidad cívica en el ámbito público y como un desafío democrático, pues las demandas de la ciudadanía étnica se esgrimen en la obtención de 1) visibilidad y de vida digna, 2) mantenimiento y aumento del derecho a tener expresiones culturales diferenciadas, 3) desarrollo sustentable conforme a principios, valores y normas de los pueblos indígenas, y 4) el derecho a darse sus autoridades y representación política diferenciada (De la Peña, 1999; Rosaldo, 2000); estos últimos nada alejados de la teoría de sistemas políticos convencionales u occidentales como lo estipulado por David Easton (2012) ni de las compatibilidades del Orden Político imperante o de la lógica de los partidos políticos como agencias para representar y expresar exigencias del pueblo como lo señalaba Giovanni Sartori (2005). El reconocimiento de la ciudadanía étnica se adscribe al desarrollo de políticas de Estado propiamente.

Por lo tanto, la irrupción de demandas electorales por parte de las personas indígenas se ven condicionadas por el derecho a participar en el ambiente público y político nacional, así

como el derecho a la representación en los niveles que la teoría federalista señala. Entonces, los procesos para el ejercicio electoral indígena están supeditados a los mismos procesos de la población no indígena, sin embargo, existen factores que van más allá de la estructura normativa del Estado y se posan en estrategias discursivas, en procesos acunados al conocimiento del régimen electoral y en el fantasma que ha recorrido la América Latina desde hace ya más de 500 años: el racismo y discriminación por parte de ciudadanos no-indígenas y de las Instituciones del Estado mismo.

3.2 Factores que obstaculizan la participación electoral indígena

A pesar de los esfuerzos por hacer valer la pluralidad y multiculturalidad dentro del Estado mexicano, las prácticas reales de y en las múltiples partes del proceso electoral distan de ser el ápice de la maquinaria que dilate la plena participación electoral indígena en México. No obstante, se pueden reconocer dentro de la teoría, que aunque de manera escasa pero sustanciosa representa el acicate para repensar las variables convencionales de la participación, puntales fenómenos obstaculizadores de la participación electoral indígena como son los siguientes (Aguilar, Trejo, & Pintado, 1999; Educativos, 2013; Tejera, 1994):

- o Ambigüedad legal en la determinación de los municipios que se rigen por usos y costumbres
- o Injerencia de partidos políticos en las elecciones por usos y costumbres en las comunidades indígenas
- o Poca posibilidad de postulación de candidatos (elegidos dentro del marco regido por usos y costumbres) indígenas más allá del ambiente municipal
- o Poca práctica de los partidos políticos en cuanto acciones afirmativas que favorezcan la participación indígena
- o Dificultad de registros de partidos de Base Étnica
- o Redistribución actual que no favorece del todo la participación indígena

- o Problemas de identificación
- o Poca participación indígena en la asamblea legislativa
- o Falta de información sobre la representación indígena en México
- o Falta de agenda compartida y propiamente indígena por parte de Diputados y Senadores de origen étnico

Tras lo anterior se podrá resumir que 1) el aspecto jurídico-normativo-procedimental, 2) las prácticas reales de los partidos políticos, 3) la complejidad del aspecto identitario y 4) una cierta falta de información, sistematización y, por consiguiente, de análisis de este, son los principales obstáculos de la participación política indígena. Por lo tanto, a continuación se especificará los matices de cada uno del fenómenos con anterioridad enumerados; y se optará por un desarrollo teórico-conceptual lo más alejado de las visiones racistas que conciben al indígena como ignorante y de poca inteligencia, y de las visiones progresistas que sólo acuñan el problema a la falta de acceso a la información sobre el aspecto electoral convencional, para llegar al común acuerdo teórico que conlleve el reconocimiento de lo étnico y cultural con el aspecto socioeconómico. Y que éstos últimos no sean los que determinen, al menos teóricamente, la participación política electoral indígena.

3.3 El Aspecto jurídico-normativo-procedimental de la participación electoral indígena

Cuando se pretende esquematizar las múltiples concepciones de los derechos indígenas en general, pero sobre todo de los derechos de participación electoral en lo particular, la exégesis se encuentra inundada de diversas corrientes ideológicas y de escuelas de pensamiento como de posibles interpretaciones. Por ello, y para efectos prácticos que desemboquen en una consecuente esquematización que ayudará en la arena empírica, se optará por reconocer, siguiendo una serie de trabajos de M.I Martínez Espinoza (2012), que entre el derecho y ciudadanía existe una delgada línea que bifurca el *ser* con el *deber-ser*; y aquella se recogen en los usos lingüísticos que se le lleguen a adjudicar al término

ciudadanía, a saber: el descriptivo y el prescriptivo¹⁰ (Martínez-Espinoza, 2012; Pérez-Luño, 2002).

Por lo tanto, el simple hecho de reconocer el aspecto analítico de la ciudadanía, y su relación con el Derecho en sus dos nociones como las presentadas en el párrafo anterior, obliga a reconocer 1) *quién* es el portador del estatus de ciudadanía, 2) *qué* significa y qué lo comprende, y 3) *cómo* se materializa y pone en práctica ese estatus de ciudadanía. Lo anterior aparece después de concebir a la ciudadanía como un

estatus que institucionaliza la relación de las personas con el Estado con el objetivo de avalar su condición de membresía a un politeia (comunidad política). Dicho estatus se expresa fundamentalmente en tres ámbitos: los derechos, las prácticas y la identidad. (Martínez-Espinoza, 2012, pág. 240)

Además, esta definición resulta ser una bomba teórica para las siguientes cavilaciones, pues se dota a un 1) sujeto político (el indígena) de 2) reconocimiento cultural e identitario a través de su 3) participación y representación institucional en un sistema político vigente. Se trata de la construcción de un sujeto colectivo más que tiene el derecho, la capacidad y los medios para desarrollarse como Pueblo, elegir a sus representantes y darse los elementos instrumentales para ello; más que un simple receptor de políticas del gobierno en turno que condicionen su estatus pleno de ciudadanía.

Pero siguiendo con lo que incumbe en este apartado, el aspecto jurídico-normativo-procedimental de la participación política electoral indígena en México está determinada en el Derecho interno, estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Derecho Internacional concretado en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (c169) y en la Declaración

¹⁰ En la descriptiva la ciudadanía sólo se describe a razón de lo que es, de lo estipulado en la constitución y leyes vigentes; mientras que en la prescriptiva la lógica estipula la manera de cómo deberá de ser la relación entre la concepción formal del ciudadano y la realidad social. Si bien es cierto que entre las dos concepciones existen una amplia relación práctica, pues a partir de la irrupción de “lo indígena” a partir de los 90’s las leyes y constituciones vigentes en la América Latina fueron modificándose en respuesta de las demandas indígenas, aún queda la pugna por hacer valer, en la práctica, los derechos y reformas ganadas

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNU DPI). Si el instrumento institucional que encuentra la democracia moderna para llegar a decisiones políticas, en función de las decisiones individuales dentro de una competencia entre varios candidatos, partidos y propuestas, es el voto, habrá que establecer quién es el sujeto que ejerce, o deberá ejercer el voto (Schumpeter, 1983).

Para el caso de las personas indígenas en México, la Constitución Política en su Art.2 advierte que la *Nación Mexicana* tiene una composición *pluricultural sustentada en los pueblos indígenas* y que el reconocimiento de ello serán *atribuciones*¹¹ de las *entidades federativas* en el marco del respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la *libre determinación* en torno al ejercicio de *autonomía* que garantice la unidad nacional. Del aspecto Nacional y pluricultural se hará caso más adelante. De lo que se hará cargo el presente apartado es en esquematizar lo que jurídica y normativamente establece la Constitución en cuanto al reconocimiento de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, a saber:

- a) *Derecho a decidir, internamente, las formas de organización social, económica, política y cultural*, respetando garantías individuales y derechos humanos.
- b) *Derecho a elegir autoridades y representantes* para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. Respetando el criterio de igualdad y el derecho de votar y de ser votado más allá de las prácticas comunitarias
- c) Derecho a preservar y enriquecer lengua, cultura e identidad
- d) Elegir, en los municipios con población indígena, *representantes ante los ayuntamientos*¹²
- e) Acceso pleno a la jurisdicción del Estado

¹¹ Se hace clara diferenciación semántica entre atribuciones y funciones, siendo las primeras las actividades del Estado y las últimas la forma en que el Estado hace determinadas actividades.

¹² Para nuestro trabajo de campo será imprescindible tener en cuenta el papel de los municipios, pues la Fracción VII, segundo párrafo, estipula que: Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de *fortalecer la participación y representación política* de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

Para todo lo anterior, el art. 2-fracción viii-párrafo segundo, determinan que son las constituciones y leyes de las entidades federativas las encargadas de establecer las características de libre determinación y autonomía conforme a la entidad, así como “el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de *interés público*”. Y es ahora que comienza la forma analítica de analizar el texto constitucional, pues si por un lado existe en claro reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, por el otro lado la autonomía de la práctica y ejercicio de sus derechos se encuentra obstaculizado por la misma constitución, pues aquella se encuentra en manos de congresos locales al ser considerados como entidades de interés público, es decir, sin atribuciones de personalidad jurídica y sin capacidad de hacer valer derechos y adquirir obligaciones como sujetos de derechos (Santiago Benítez & Domínguez Cuevas, 2014; Martínez-Espinoza, 2012). Inclusive la misma Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) lo advierte:

En el caso de pueblos y comunidades indígenas, su mención y definición en la Constitución Federal no basta para probar su existencia legal, se requiere la manifestación expresa del legislador para conformar entidades de derecho público que gocen de personalidad y capacidad jurídica plenas, con todas las consecuencias legales inherentes: no solo la capacidad de goce (como en el caso de las entidades de interés público) sino, más acabadamente, capacidad de ejercicio (elemento inmanente al sujeto de derecho público). Mientras esto no suceda su existencia no puede ser probada legalmente y por lo tanto no pueden contraer obligaciones ni ejercer sus derechos como entidad colectiva. (CDI, 2007)

Si existe una incapacidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía, pues las prácticas reales estarán supeditadas a las entidades federativas y sus congresos, así como a los municipios y sus instituciones, poco a poco se comienza a decantar cuál es el escollo, el problema de la participación política electoral indígena. Por eso la importancia de ir más allá de los formalismos jurídicos inscritos en las leyes, e inclusive en la Constitución misma.

Además, si constitucionalmente la participación electoral indígena será reconocida, respetada y salvaguardada a pesar de no estar homologada al sistema electoral “convencional”, es perentorio mostrar cuáles son los procedimientos de los cuales las personas indígenas echan mano para ejercer el voto. Por un lado las personas indígenas, por ser parte del Estado mexicano, pueden votar y ser votados en las elecciones a cargos populares regulados por la legislación electoral; mientras que por el otro lado, el voto se ejerce a en base a los *usos y costumbres* de determinada comunidad (González Oropeza & Martínez, 2002).

Es ahora donde la posición de análisis se encuentra dentro de la óptica de la participación electoral y el voto indígena en función de los Usos y Costumbres; es decir, el aspecto procedimental propiamente dicho. Una de las formas más reconocidas por el Estado mexicano son los Sistemas de Cargos donde las designaciones de las autoridades se realizan sin la injerencia directa de los partidos políticos, y se llevan a cabo en asambleas y el voto lo ejerce ya sea quienes bajo los preceptos normativos no-escritos, es decir los dirigidos por los Usos y costumbres, obtengan el derecho a votar (Recondo, 2007; Zolla & Zolla, 2004). Empero, existe una cierta homologación de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a las características del derecho indígena: a) Fuente principal es la costumbre; b) es un derecho generalmente oral; y c) está basado en visiones del mundo particulares de cada grupo o persona; de tal manera que el derecho indígena es el resultado de la cultura en aras de la protección de valores y existencia de la sociedad.

Dado lo anterior, en la literatura se reconoce un dilema que es propio de análisis de las ciencias políticas, y este es: el voto familiar. Mientras que en el sistema electoral convencional o no-indígena la lógica radica en una persona es igual a un voto, en el sistema de cargos o consuetudinario, que dicho sea de paso es tradición política indígena ser participativa con carácter colectivo y comunal (Melgar, 1991), el delegar el voto al jefe de familia o al padre podrá significar un voto de igual manera, pero dentro de la propia familia. En tal caso, el análisis se encuentra en la delgada línea de concebir esa práctica como el socavamiento de un derecho humano en los términos de pro-persona y no cumple con los principios occidentales/liberales del voto (TEPJF), o en concebir que el voto no siempre será

ni universal, ni secreto, ni personal pero aun así se apegan a la lógica de lo que Rodolfo Stavenhagen (2000) le daba a los derechos colectivos como un puente para la realización de los individuales. Sin duda es tema de profundas cavilaciones y se deberá tomar en cuenta que en ocasiones las particularidades, pues no existe homologación de costumbres y tradiciones, versan más sobre la coalescencia específica de normas y prácticas que de una diferencia cultural ontológicamente arraigada; pues no se deberá olvidar que es el voto el que une a la democracia occidental con los usos y costumbres (Recondo, 2007).

Por último, se reconoce, también, la bifurcación dentro de la misma participación electoral indígena. De acuerdo con el TEPJF ésta se da en un ámbito externo, donde se vota de manera convencional a través del sistema de partidos en las elecciones federales (presidente, diputados federales y senadores) al igual que las elecciones locales (Gobernador, diputados locales y Jefes de Gobierno), y en el ámbito interno, donde existe la “opción” legal de votar en las elecciones municipales a través de las normas de los Usos y costumbres o por medio del sistema de partidos convencional. El escollo que aparece acá es que 1) la libertad y autonomía, aunque supeditada a los congresos locales, sólo aparece en las elecciones municipales –el progreso que deberá de existir para la consolidación democrática es que en México, como en otros países del continente como bien lo indica Mathias Rull (2005), el derecho a participar electoralmente sea como sujetos de derechos y trascendente a la arena municipal–, y 2) la injerencia de los partidos políticos en las elecciones internas regidas por Usos y Costumbres, así como en las prácticas inmorales y en contra de la democracia como lo son el asistencialismo, la compra de votos y la escases de acciones afirmativas dentro de los partidos políticos mexicanos (Angosto Ferrández, 2012; Hémond & Recondo, 2002; Martí S. , Las razones de presencia y éxito de los partidos étnicos en América Latina: los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú (1990-2005), 2008; Van Cott D. , 2003).

Como la participación electoral indígena responde a múltiples factores de orden 1) cultural, 2) sociopolítico, 3) histórico, 4) organizativo y 5) geográfico (Lartigue & Morales, 2008) , son en estos dos últimos que Aguilar, Pintado y Trejo (1999) hacen hincapié para el debido proceso electoral y recomiendan:

- Realización de campañas de educación cívica para socializar a los ciudadanos en igualdad y autogobierno democrático
- Asignación de recursos para capacitación y empadronamiento de funcionarios de casillas
- Lugares de capacitación más cerca de los hogares
- Tiempos formales de organización deberán ser diferenciados
- Especial atención al número y ubicación de casillas extraordinarias
- Aumento del número de casillas para la reducción del costo de votación
- Programas en conjunto de registro civil para la expedición de actas de nacimiento y la consecuente obtención de credencial para votar
- Trabajo en conjunto entre dependencias federales, locales y organismos descentralizados

Ahora, es perentorio seguir de cerca cómo es el funcionamiento de los partidos políticos en México para el incremento de la participación electoral indígena y la cristalización de la representación de éstos dentro del sistema político vigente. Por ello, se dedicará la siguiente sección a lo que otrora se conciben como instrumentos para alcanzar los beneficios colectivos distintos a los fines meramente privados de los combatientes, esto es: los partidos políticos (Sartori, Partidos y Sistemas de Partidos, 2005, pág. 61).

3.4 Las prácticas reales de los partidos políticos

Para comprender la composición de la participación electoral en un sistema político vigente, es preciso desmenuzar cuáles son las vías y los factores, tanto internos como externos a la manera de David Easton (2012) y de la teoría de las EOP de Sidney Tarrow (2012), que estimulan la participación el marco de las elecciones. Los partidos políticos, en ese sentido, cumplen la primigenia función de compaginar, y vincular, las voluntades de los ciudadanos basándose no sólo en intereses o afectos, sino que en principios comunes que promueven la acción (Burke) y combaten, si se conciben con su uso positivo y necesario, el mundo monocromático por medio del pluralismo partidista (Sartori, Partidos y Sistemas de Partidos, 2005).

Como la teoría clásica de sistemas políticos y sistemas de partidos argumentan, los partidos políticos son un aparte del todo, es decir, una abstracción del todo; en este caso, la abstracción de la conducta total de una persona se analiza en función de una interacción dentro de la arena electoral, o sistema político propiamente, por medio de los partidos políticos. Cabe destacar que ello no es otra cosa más que la reinterpretación de la sentencia hegeliana, en su Filosofía del Derecho, que mantiene que el Estado es la realidad efectiva de la realidad concreta; es decir, que la individualidad y los intereses de cada cual deberán versar tanto en el desarrollo y reconocimiento del propio derecho particular como en el desarrollo del Todo. Que en cada acción del ciudadano, ya apropiándose de términos modernos, se reconozca que la sustancia del Todo, del Estado, es para cada cual su propio telos; y, además, que por sobre todas las cosas el Todo no se imponga sobre las particularidades, ni que los intereses individuales trabajen sólo para el aspecto privado de la vida.

De tal suerte, la actividad formal de los partidos políticos, como abstracción de un todo, deberán recoger el pluralismo de formas de vida que caracterizan a las democracias modernas. Éstas, a su vez, recogen lo Atenea Domínguez C. y Gisela Santiago B. detectaban en los análisis de la participación electoral de los pueblos indígenas en México: “procesos reivindicatorios para exigir, al sistema electoral, la designación de sus propias autoridades” (pág. 99). Si desde tiempos Aristotélicos se presentaba a la polis como una forma de vida que vinculaba a todo y a todos y a donde el ethos del hombre debía de dirigirse, y la constitución de los Estados-nación eran ciertamente uninacionales, en tiempos recientes ya no existe un ejemplo a seguir. La evaluación de la pluralidad y la calidad de la democracia se fijan en función de la autenticidad, en el derecho que tiene cada cual de ser él mismo de manera distinta a los demás al tiempo que cada cual averigua quién es y quién quiere ser. Tales temas son abordados por el intelectual Jürgen Habermas en 1995, sin embargo los intelectuales mexicanos desde principios del siglo XX comienzan a preguntarse por el sentido de la mexicanidad; siendo Samuel Ramos el más representativos de aquellos.

La importancia de la autenticidad para el INEGI resultó ser imprescindible al momento de contabilizar a las personas indígenas en México, y resultó ser mucho más relevante en

estados como Nuevo León debido al aumento de migración indígena a la región, siendo Monterrey y su Área Metropolitana la zona con más crecimiento de habitantes indígena. No obstante, el cataclismo con el que la autenticidad irrumpe el escenario político electoral es de gran ahínco para los investigadores sociales, pues si se entiende que “lo consciente nunca puede comportar tanta ruina y fatalidad como lo inconsciente, lo seminconsciente o lo preconscious” (ADORNO) será importante revelar cómo se vuelve presente la autenticidad indígena en arenas políticas donde hasta recientes años eran invisibles. Tal idea se desarrollará en acápites posteriores al trabajo de campo.

La cultura política, fundada en libertades político-individuales-colectivas, deberá verse acompañada de procedimientos jurídicos, pues:

Los reproches morales que en el espacio público se hacen ad personam tienen que quedar referidos al establecimiento de relaciones políticamente justas; pues ni tienen por meta el auto entendimiento existencial del particular, ni tampoco pueden ser un sucedáneo de sentencias de los tribunales, las cuales sólo pueden ser el resultado de un procedimiento que discurra confirme a las disposiciones. (Habermas, 1998, pág. 55)

Y es precisamente aquí que se deberá comenzar una exégesis puntual de las funciones de los partidos políticos, pues si para Antonio Gramsci (2009) un partido político 1) nunca está 100% desarrollado, 2) se origina en el momento histórico de un determinado grupo social, provocando todo ello 3) una crisis en la correlación de fuerzas¹³ que antojan la separación de los partidos políticos tradicionales dando paso a “potencias oscuras”¹⁴ según el autor; para Sartori los partidos políticos son sobre todo conductos de expresión, empero, y a pesar de su visión pluralista (cultural, social y política), el aspecto cultural el autor lo reduce a compresiones filosóficas, por ende, inmateriales.

¹³ A saber, correlación de fuerzas de producción, políticas y militares para el autor

¹⁴ El autor las entiende como las fuerzas recaídas en hombres providenciales o carismáticos caracterizadas en los regímenes autoritarios del siglo XX en Europa

Entonces, si existe ya el reconocimiento jurídico de la presencia de personas indígenas en el Estado de Nuevo León y el sustento cuantificado de aquellas a partir de la autenticidad, *cuáles son las prácticas reales de los partidos políticos locales para el mantenimiento de los derechos de participación y representación política indígena*. La respuesta se torna compleja con el hecho de que en Nuevo León el tema indígena es reciente, a pesar de que existen los instrumentos jurídicos a nivel internacional, nacional y local, para hacer vales tales derechos; sin embargo, se esbozarán los principales ejemplos de participación y representación política electoral indígena en México para poder pensar cómo se podrá materializar el reconocimiento jurídico de las personas indígenas en Nuevo León y, sobre todo, en Monterrey y su Área Metropolitana.

Sin encono alguno a la tradicional teoría y sistemas de partidos, donde a pesar de que someramente se acepta la visible crisis de representación pero dándole diversos matices, y que aún resulte imprescindible el sistema de partidos que determine la lógica del sistema político vigente –aunque se antoje a que sea más para su legitimación que para el propio ejercicio democrático– al grado de afirmar que sin partidos no hay democracia (Freidenberg, 2016), de aquella se rescata la ventaja de concebir a la democracia como un proceso que supone 3 elementos: 1) Institucionalización del régimen político, 2) intermediación entre las demandas sociales y el poder, y 3) profesionalización de la política (Alcántara & Freidenberg, Los partidos políticos en América Latina, 2001, pág. 18) y que, en parte¹⁵, el trabajo de los partidos políticos es concommitar todos ellos para el progreso democrático. En ese sentido, el pluralismo dentro de los partidos, para el cumplimiento, al menos, de la institucionalización del régimen político y, sobre todo, de la intermediación entre las demandas sociales y el poder, deberá ser preciso para la obtención de la representación, por medio de la participación, de las personas indígenas en

¹⁵ Dado que los actuales defensores del sistema de partidos en América Latina reconocen la necesidad de incrementar la visión del sistema político más allá de la perspectiva de la oferta partidista y del sistema de partidos, otorgando el reconocimiento, ya sea explícito o implícito, de los múltiples factores reales que influyen en lo que Bobbio llama juego democrático.

la arena política. ¿Cómo se da la participación indígena en los partidos tradicionales en México y cuáles son los ejemplos más prósperos?

De entrada se tiene que la participación política indígena en México ha sido establecida como una franquicia, con carencia de orientaciones ideológicas y con la grave dificultad de articular las distintas formas de participación y representación política existentes a nivel nacional (Hémond & Recondo, 2002). Además, el descrédito de los partidos políticos como vías de expresión creíble, entendiendo la credibilidad en función de la capacidad real en la obtención de bienes públicos e influencia en el proceso político de los ciudadanos por medio de la participación electoral en la oferta partidista, supone tomar en cuenta el corporativismo de aquéllos, pues si el contexto hace la diferencia (Nohlen, 1999) no se podrá echar al traste el corporativismo en la política mexicana.

Dicho lo anterior, los esfuerzos de participación indígena dentro de los partidos políticos mexicanos tradicionales han sido, en su mayoría, sólo en los estatutos de aquellos:

Tabla 1. Principios planes de acción de los partidos políticos nacionales más representativos en México

Partido	Principios
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI)	<ul style="list-style-type: none"> Defensa de los Derechos Humanos A favor de una ciudadanía plena Exigencia de aplicación de acciones afirmativas y políticas públicas que eviten la desigualdad, injusticia o discriminación <p>181. Promover una mayor representación política de los pueblos y comunidades indígenas tanto en los órganos de dirección nacional, estatal y municipal del partido, como en las candidaturas a cargos de elección popular de mayoría relativa y representación proporcional que presente el PRI en las contiendas federales, estatales y municipales. 182. Pugnar por la defensa, promoción y plena vigencia de sus derechos colectivos, así como promover el reconocimiento y regulación de acciones afirmativas en aquellos supuestos donde la exclusión social y la marginación así lo justifiquen¹⁶</p>
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)	<p>En el documento “Proyección de Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 2012” se dicta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rechazo de toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por etnia

¹⁶ Véase <http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/ProgramadeAccion2013.pdf>

	5. donde se considera a México con carácter pluriétnico y multicultural ¹⁷
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)	En la Declaración de Principios 2011 y Programa de Acción 2011: 22. “Derechos de pueblos y naciones indias”. Derecho de autonomía de los pueblos indígenas en el marco del derecho nacional e internacional y considerando los sistemas normativos, formas de organización y participación política propias de cada pueblo indígena. Indígenas como sujetos de derecho público Derecho a representación en poderes legislativos a nivel federal, estatal y municipal Propone una remunicipalización garante de la autonomía y derechos políticos de los pueblos indígenas ¹⁸

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el Cuadro 1 las reivindicaciones dentro del partido, hasta al grado de estipular, como en el caso del PRD, la categoría de sujetos de derecho público, contrario a lo establecido por la CPEUM¹⁹, derechos de “naciones indias” y representación legislativa, hace de aquellos (PRI, PAN y PRD) entes que van a la vanguardia en cuanto y en tanto al pluralismo interno de los partidos democráticos. Sin embargo, en las prácticas reales de los partidos sobresalen más las acciones negativas que las positivas.

Por lo tanto, la siguiente argumentación versará sobre los procesos identitarios y culturales que priman en la participación electoral indígena. De tal modo se podrán ir estableciendo las categorías que permitan “etnitar” las ya reconocidas variables de participación electoral “clásicas” como el 1) voto, 2) conocimiento político, 3) confianza en las instituciones, 4) interés en la política o 5) militancia en un partido político.

¹⁷ Véase <http://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Estatutos-XVI-Asamblea-Nacional.pdf>

¹⁸ Véase http://www.prd.org.mx/portal/documentos/declaracion_principios2011.pdf y <http://www.prd.org.mx/portal/documentos/programa2011.pdf>

¹⁹ En el artículo 2 de la Constitución Mexicana se establece que los pueblos indígenas son “entidades de interés público”.

3.5 Procesos identitarios y culturales para la participación electoral indígena en México

El distanciamiento entre las principales concepciones de ciudadanía, que en el decurso de las Sociedades ha servido de basamento para la adquisición de derechos, y las diferencias etno-culturales de los distintos pueblos habitantes en un mismo territorio o Estado-nación, ha socavado, durante décadas –sino es que siglos–, el principio de equidad dentro del prisma procesal otrora llamado democracia (Gutmann, 2003; Kymlicka W. , 1995). Por ello, el proceso de participación electoral indígena en los comicios nacionales, locales, municipales y legislativos se encuentra inserto en las modificaciones jurídico-normativas que a nivel Internacional (Convenio 169) se han ido considerando como un derecho político; esponsorizados por la “centralidad que ha adquirido el tema en el campo político e intelectual latinoamericano y han sido objeto de la construcción de diversos andamiajes normativos” (Zegada Claire, 2012).

¿Qué papel juegan los procesos identitarios y culturales en el gran proceso democrático-electoral? Para dar respuesta a lo anterior es perentorio que se reconozca que la tradición política indígena es 1) participativa, 2) de carácter colectivo y comunal y que 3) los principios de honestidad y solidaridad en los cargos representativos priman, en principio, por sobre los intereses individuales (Melgar, 1991). Hasta este punto las bases teoréticas de la participación política indígena coinciden con las estipuladas en las bases de la democracia “occidental” (Almond & Verba, La cultura política, 2014).

La principal muestra de la importancia identitaria y cultural en los procesos de elección dentro de la lógica de los pueblos indígenas, es el sistema de *Usos y Costumbres*. Si bien es cierto que para especificar a éste sistema será necesario una amplia exégesis –sobretudo antropológica²⁰ - de la información existente, para el presente trabajo bastará con esquematizar las principales características. Lo anterior, con la finalidad de que el lector y el propio investigador tenga conciencia de las diferentes formas procesales de elección y delegación de poder, así como para esclarecer las categorías que en la antropología política

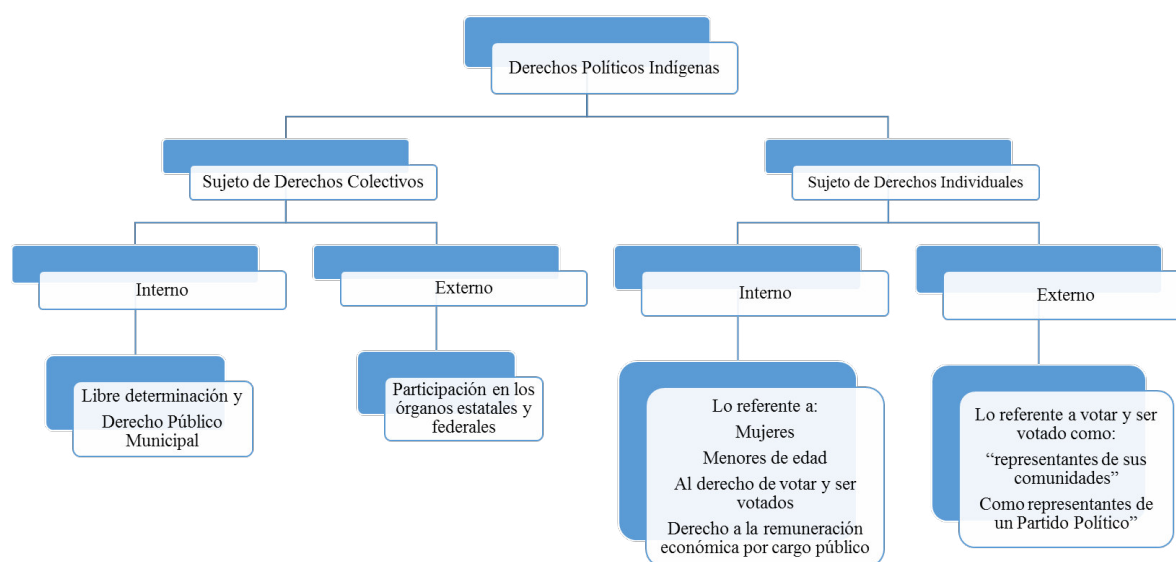
²⁰ Ya sea del derecho, social o política

se han utilizado a partir de lo teorizado por Miguel Alberto Bartolomé (2006): *transfiguración étnica y adaptabilidad estratégica*.

3.5.1 Usos y costumbres

La tradición cultural dentro de los pueblos indígenas ha sido reconocida como Usos y Costumbres para ser identificada y diferenciada de la normativa “nacional tradicional”. En México está vigente el pluralismo jurídico formal, lo que significa el respeto, reconocimiento y validez de sistemas jurídicos indígenas, autoridades y resoluciones, independientemente que sean contrarias a las resoluciones del sistema jurídico “oficial” y/o “tradicional” (Correas, Derecho indígena Mexicano I, 2007). En ese sentido, se podrá cavilar en función de la forma y en cómo esa pluralidad jurídica va más allá de sí misma y se posa en torno a la pluralidad de derechos políticos; para tal empresa, se distingue la dualidad de los derechos políticos en materia indígena, a saber:

Figura 6. Principios de los derechos políticos indígenas en México



Fuente: Elaboración propia a partir de Jorge Alberto González Galván (2013).

Como *Sujeto de Derecho Colectivo* implica el ejercicio de gobernar en la dualidad interna y externa de las comunidades indígenas: 1) al interior de la comunidad como el derecho al ejercicio de la libre determinación en su territorio con autonomía constitucional, es decir: el ejercicio del Derecho público municipal con las ventajas que ello contrae, es decir, el acceso a los recursos presupuestarios para la satisfacción de las necesidades de la comunidad; y 2) al exterior de la comunidad como el derecho al ejercicio de participación en los órganos estatales y municipales, incentivando la actualización del mapa electoral a nivel estatal y federal, consolidación del derecho indígena al autogobierno y provocando la integración, de manera activa, a los órganos de gobiernos estatales y municipales (González Galván J. , Hechos y Derechos, 2013).

Como *Sujeto de Derecho Individual* implica, a su vez y de la misma manera que el anterior, el ejercicio de participación al interior y al exterior de la comunidad: 1) al interior el respeto e incremento del derecho de participación plena a las mujeres, evitar la responsabilidad política a menores de edad y, alcanzada la mayoría de edad, respetar el derecho de votar y ser votado, además del derecho a la remuneración económica cuando se ejerce un cargo público; y 2) al exterior de la comunidad se promueve el derecho a votar y ser votados en las elecciones del congreso local y nacional como “representantes de sus comunidades” por un lado, mientras por el otro lado asegurar, también, el derecho de votar y ser votado como “representante de un Partido Político” (González Galván J. , Hechos y Derechos, 2013). Llegar a conocer cómo se da ésta última forma, la del *Sujeto de Derecho Individual* al exterior de la comunidad, es la empresa de la presente investigación.

Entonces, existe un pluralismo jurídico sustentado en la dualidad del derecho individual y colectivo que da pie al sistema de *Usos y Costumbres*. Siendo éste, al tiempo de la coalescencia con los principios de sistemas federales que apuntan a la descentralización y posibilidad de múltiples sistemas electorales, un Sistema de Gobierno caracterizado por:

1. Normas
2. Instituciones
3. Procedimientos

Y que permiten establecer una estructura integral sustentada por elementos sociopolíticos de comisiones y servicios comunitarios. A pesar de que las reglas electorales son las mismas para otros espacios comunitarios, existen factores externos que permiten la flexibilidad y adaptabilidad estratégica para hacer funcionar el Sistema de Gobierno. Es perentorio señalar que el sistema de gobierno por comisión tiene su basamento histórico en las amalgamas de tradiciones indígenas, del derecho romano y las creencias cristianas que fueron permeando con el decurso de los años a la región. Aunado a ello, el Sistema de Gobierno por Usos y Costumbres transfigura, en parte y conservando matices, los elementos básicos del proceso electoral, pues cuenta con un Padrón Electoral, un Cuerpo Electoral (Asamblea General) y la Jornada Electoral propiamente (Flores Cruz, Características, regulación y perspectivas del istema electoral por Usos y Costumbres, 2003, págs. 36-40):

Tabla 2. Sistema de Usos y Costumbres

Sistemas de usos y	costumbres
Padrón electoral	<ol style="list-style-type: none"> 1) Comunitario o de activos 2) Universal o restrictivo 3) Credencial de elector
Cuerpo electoral (asamblea general)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Reunión para efectuar el voto 2) Como espacio para interacción lingüística, de argumentación, de recursos políticos, liderazgo, identidades y donde se forja el consenso
Jornada electoral	<ol style="list-style-type: none"> 1) Actas previas 2) Instalación de la asamblea de elección 3) Votación y escrutinio 4) Cierre de votación 5) Documentación y conteo de material electoral

Fuente: Elaboración propia a partir de Cipriano Flores Cruz (2003)

Como se notó con párrafos anteriores, existe una amplia gama de recursos legales y de reconocimientos jurídicos que incentivan la participación política de personas indígenas en el país, así como la procuración, mantenimiento y ampliación de derechos humanos de

corte indígena; además, las alternativas de participación política indígena dentro de las instituciones que por excelencia generan vías de participación democrática en los sistemas electorales occidentales, a saber, los partidos políticos, generan un espacio favorable para la convivencia democrática dentro de la Sociedad mexicana. Empero, siguen existiendo ora lagunas legales provocadas por los textos constitucionales (Bartra R. , 1998; Carbonell, La reforma constitucional en materia indígena. Un primer acercamiento, 2003), ora problemáticas por mor de las relaciones de poder insertas en una comunidad política²¹.

Por todo lo anterior, se habrán de mencionar las categorías que sirvan de bisagra para unir aquellos dos fenómenos, a saber: el relacionado con el *aspecto jurídico* y al propio de las ciencias políticas: el de las *relaciones de poder*, para de esa manera dilucidar, con esfuerzos metodológicos, teóricos y empíricos, una realidad propia de la región: la *participación política electoral de los indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana en un contexto migratorio*.

Cabe señalar que la redistribución electoral indígena, en el marco de la reforma electoral de 2005, fue impulsada por los Partidos Políticos y que en éstos la representatividad indígena es prácticamente poca; además de no haber sido consultados para la redistribución, la lógica de ésta giró en torno a la cuestión demográfica (CDI, 2005). Al final se dieron 28 distritos uninominales de carácter indígena, y éstos fueron dados por criterios como 1) mayoría indígena, 2) continuidad geográfica, 3) vías de comunicación y 4) servicios públicos con base al censo poblacional y no al padrón electoral. La importancia de hacer mención de esto último radica en que el padrón electoral, por ser actualizado constantemente, difiere un tanto del censo poblacional que resulta ser más estático (González Galván J. , 2010, pág. 407).

Además, los 28 distritos indígenas representan sólo el 53% de la población indígena y considerando que en todos ellos los candidatos indígenas fuesen los electos, serían

²¹ Será menester reconocer que los conflictos dentro de la comunidad política, ya sea por intereses personales o de grupos, no es exclusivo de los pueblos indígenas, pues múltiples autores apuntan a estas relaciones de poder como bastión de acción que genera los matices propios de cada región, país o conjunto de naciones

representados a redor de 47 % de indígenas en el país. La prosecución de la baja representatividad indígena en los distritos electorales del país se debe, en parte, a que sólo 11 estados de la República cuentan con distritos indígenas: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán; dejando de lado estados como Nuevo León, en donde se puede destacar que los índices de migración indígena a la región iba en incremento de manera significativa desde 1990 (INEGI, Migración interna a partir del Censo de Población y Vivienda 2010, 2010).

A guisa de recapitulación, la bibliografía consultada remarca que la lógica de distritación careció de consulta indígena y que, además, fue echada a andar por entes que aún mantienen la desconfianza para el sector indígena. De acuerdo con González Galván (2010), y en el marco de la entrevista realizada al diputado indígena Marcelo Tecolapa Tixteco, los problemas normativos y prácticos de los partidos políticos, la conformación y los mecanismo de los grupos de poder político y los costos de campaña, influyen de manera considerable en el ejercicio pleno de representación política indígena en los Partidos (González Galván J. , 2010, pág. 448) por ello cada vez se torna real lo esbozado por varios autores: la remuneración para los partidos políticos es mayor con las cuotas de género y jóvenes (Domínguez Cuevas & Santiago Benítez, 2014; González Galván J. , 2010) y surge la pregunta de si ¿la participación electoral indígena encuentra senderos más propicios a raíz de la creación de distritos electorales? (Gallardo, 2007)

Por todo lo anterior, el dilema de la participación electoral encuentra una tríada para hacer posible la representación indígena: 1) seguir con partidos tradicionales; 2) emerger como actores políticos organizados o partidos políticos de carácter indígena; o 3) ampliar el Sistema de Usos y Costumbres para obtener representación política; cuando no el desinterés conlleva a la nula participación electoral. En un contexto migratorio el cataclismo de tal empresa podrá encontrar factores como incomprensión de la clase política y sociedad, entre otras tantas, que harán periclitarse los múltiples esfuerzos realizados desde distintas trincheras. No obstante, el siguiente paso de la presente investigación es demostrar, conocer, analizar y comprender el estado del arte en el que se encuentra la

participación político-electoral de migrantes indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana.

CAPÍTULO IV. EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. ¿GARANTÍA, PROMOCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS INDÍGENAS?

La constitución del Estado mexicano precisó de múltiples características en el devenir de lo que otrora se podrá concebir como Estado Moderno Latinoamericano. Tales pautas, por un lado, reflejaban los remanentes de lo que la dictadura porfirista forjó en tres décadas: 1) en el aspecto económico la intervención del gobierno para asegurar contratos de capitalistas nacionales y extranjeros; 2) en el aspecto económico social, el vínculo entre Gobierno y monopolios avalaron la dominación del hacendado sobre el campesino, las pérdidas de tierras de éstos últimos en manos de los primeros y la subordinación del obrero al patrón bajo tropas que mantenían una aquiescente y ordenada fuerza laboral; y 3) en el aspecto político-social, generales, burócratas, intelectuales y políticos se veían beneficiados de su poder en el gobierno para aumentar riquezas personales mediante sobornos y, sobre todo, obtener un estatus social dentro de una clase privilegiada. Todo bajo la retórica de un liberalismo político y económico que hacia doble la concentración de riqueza de una minoría, y el consecuente empobrecimiento de una mayoría en México (Beals, 1932; Saragoza, 2008; Villegas, 1972).

Pero ¿qué pasaba con Monterrey? Cómo se dio la dinámica política, social y cultural en la capital industrial mexicana por excelencia en el ya entrado siglo XXI. Qué pasa cuando una región, económicamente hablando, tiene más simpatía y cercanía con E.U.A y, culturalmente, una marcada diferenciación de la Cultura del centro y sur de México. Y más aún, cuando en un espacio económicos, social, político y espacial se encuentran y entrelazan socialmente personas indígenas con una región que, por antonomasia, carece de pueblos indígenas y costumbres prehispánicas.

4.1 El boom industrial en Monterrey. Momentos histórico-políticos del pasado, dinámicas del presente

Con la llegada de la revolución en México en 1910, la sinecura de la administración porfiriana se tornó insostenible dado la crisis financiera en 1907 en Estados Unidos —es necesario subrayar que la dependencia mexicana a factores externos minó la capacidad del gobierno para mantener la llamada “paz” y “estabilidad” social, pues ésta dependía en el ensanchamiento de un aparato burocrático con la clase media (Saragoza, 2008, págs. 135-137)— y las cada vez más conspicuas inequidades sociales como salarios bajos, malas condiciones laborales, voracidad de hacendados hacia tierras de campesinos, etc. (Ruiz R. , 1980). Lo anterior trayendo como resultado el resentimiento de la clase trabajadora hacia una élite que concentraba la riqueza, y la materialización de la frustración en voluntad de contrarrestar tales males por medio de las armas (Bazant, 1977; Hasen, 1971).

El positivismo que caracterizó el régimen porfirista cristalizó en pautas conductuales que si bien no conservaron su lógica, sí que permearon la esencia de la noción de superioridad de la clase social más favorecida tanto económica, política y socialmente sobre aquellas que colaboraban directa e indirectamente en el enriquecimiento y progreso de las primeras (Villegas, 1972). Las particularidades que lo anterior conllevó, sugieren la visión condescendiente en algunos momentos y de compasión en otros (Saragoza, 2008; Zea L. , 1968) por parte del sector privilegiado hacia los conciudadanos menos favorecidos.

No obstante, y es ahora que la dinámica sociopolítica mexicana reverbera sus matices, la formación del poder estatal precisó de los trabajadores, tanto urbanos como rurales, es decir, de los menos favorecidos, para consolidar tanto su institucionalidad como legitimación (Córdova, 1974) y así amainar la formación de un frente crítico al gobierno (pues la formación de las confederaciones campesinas y obrera propugnaban por una visión paternalista). Lo anterior, al tiempo que la morulación de una élite empresarial iba concentrando cohortes sociales que la esperanzada clase baja y media soñaba con alcanzar, y que representaría una transformación social cambiante conforme transcurrían los años.

Monterrey representa, por antonomasia, el ejemplo claro de la lógica sociopolítica descrita en los párrafos anteriores; como bien lo describe Alex Saragoza (2008), los mitos que se han ido forjando sobre Monterrey, sobre sus negocios, familias e industrias, prohíben ver lo que está detrás, aquella madeja de relaciones sociales que nacen a partir de lógicas capitalistas y liberales, por un lado, y paternalistas-nacionalistas por el otro. La compleja relación entre el Estado y el capital encontró en Monterrey una peculiar forma de desarrollarse; Lorenzo Meyer (1977) distingue que la consolidación del Estado Mexicano, durante la primera mitad del siglo XX, concommita con la consolidación de la élite regiomontana. Empero, ¿cómo fue eso posible?; ¿cómo es que la consolidación de una élite conservadora se consolida a la par del nacimiento de un Estado en vísperas de una revolución que, por semántica, representa el cambio, la transformación?

Históricamente, la formación de Monterrey, como capital comercial primero e industrial después, inició después del acicate económico provocado por la guerra civil norteamericana en la segunda mitad del siglo XIX, y como respuesta a los años independientes de México de la corona española, lucrando con el contrabando y tránsito de mercancías hacia Estados Unidos y los estados vecinos (Cosío Villegas, 1955; Tyler, 1968). Todo ello con el aval del entonces gobernador Santiago Vidaurri que ofrecía a la naciente élite comercial regiomontana “estabilidad política, bajos impuestos y el exterminio del contrabando y del comercio que no controlaban los regiomontanos” (Saragoza, 2008, pág. 35). Cabe destacar que debido a la pululación de capital por mor del comercio y contrabando, Monterrey pasó de tener a mediados del siglo XVIII alrededor de 3,000 habitantes a 12,000 habitantes a comienzos del siglo XIX (Vizcaya, 2006); ello da cuenta de la relevancia del fenómeno migratorio en la región en la formación de la ciudad que décadas después respondería el nombre de capital industrial de México.

Es preciso destacar que con la gubernatura del general Bernardo Reyes, uno de los gobernantes más asediados por la élite comercial en monterrey, la élite regiomontana alcanzó álgidos puntos de desarrollo económico y social. Mediante la relación con el dictador Porfirio Díaz, B. Reyes materializó la triada progresista “modernidad, industria y orden” (Saragoza, 2008, pág. 99) en la dinámica social del Grupo Monterrey; los esfuerzos

de este último grupo por agradar al dictador, responden a la efervescencia ideológica que aquellos sentían al saberse ellos mismos portadores del progreso de México y la emulación misma del bienestar nacional (Saldaña, 1970).

Empero, ¿cuál fue la lógica o dinámica social imperante en Monterrey fuera de la élite regiomontana? Algunos autores mencionan que las actitudes de la élite regiomontana, al comienzo, fueron más encaminadas a descifrar las actitudes políticas, más que para obtener el poder político, para ejercer influencia en el gobierno, más que para ser actores gubernamentales; es decir, oportunismo político (Saragoza, 2008, pág. 80). Por lo tanto, las crisis económicas, así como la inestabilidad laboral que recorrían por México, forjaban una clase media acrítica hacia los factores que determinaban su situación; el onírico esfuerzo por ser parte de una clase social alta sesgaba las estructuras de producción y reproducción de un insipiente boom industrial: “el mexicano de clase media era más apto para buscarse la ocasión de rozarse con los ricos, copiar sus vestidos, vivir en la casa más lujosa que su ingreso le permitiera, y emular la vida de los opulentos” (Ruiz R. , 1980, pág. 45).

Pareciese que la esperanza por obtener una mejor calidad de vida en México en los años pre-revolucionarios, al menos para la clase media, consistía en encontrar un nicho de oportunidad que permitiese escalar en la estructura social. Sin embargo, a partir de 1903, y en una breve revisión histórica y en vísperas de la revolución mexicana, un periódico mexicano dilucidaba lo que acontecía en la esfera social de entonces:

“¿Acaso los bancos, las fundiciones, las fábricas tienen alguna utilidad para la clase trabajadora? No...los trabajadores, al menos los trabajadores mexicanos, no escapan de la pobreza y la miseria en la que siempre se han encontrado. Por el contrario, su trabajo es cada vez más difícil. ¿Y a quién se debe culpar? Al Gobierno, que en un esfuerzo por obtener el apoyo de los poderosos capitalistas, se olvida de que es a la clase trabajadora a quien esos capitalistas deben su riqueza. El gobierno, que no escucha las quejas de los trabajadores; el gobierno, que da concesiones a los poderosos y sin exigir algunos beneficios para los trabajadores”. (Redención, 1903)

Bajo tales pensamientos e ideologías, el 3 de abril de 1903 Monterrey vio nacer una marcha bajo el auspicio de las celebraciones del aniversario de la victoria del entonces presidente de Porfirio Díaz contra la invasión francesa en Puebla en 1987; la marcha se manchó de sangre cuando la policía del gobernador Bernardo Reyes disparó a los manifestantes. De acuerdo con Stanley Ross (1955) y Ernest Gruening (1928), los hechos sucedidos en Monterrey en 1903 sirvieron de acicate para que Francisco I. Madero se interesara en la política, paradójicamente un miembro del linaje Madero, prominentes comerciantes y banqueros que disfrutaron los usufructos del Gobierno de Santiago Vidaurri.

Una vez terminada la revolución, los nuevos retos que enfrentaba el país era el restablecimiento de la paz, de la economía y de la política; la constitución del nuevo Estado ya no concommitaba con los ideales porfiristas ni con las prácticas de la clase empresarial de Monterrey en su relación con los gobernantes, nuevos vientos ensalzaban la dinámica política social en la región (Córdova, 1974, págs. 31-37). No obstante, el sentimiento de superioridad del positivismo darwiniano siguió permeando en la lógica social en Monterrey pero ya no en términos raciales sino, más bien, en términos de una retórica que uniera la visión del patrón con la del empleado en pro de la nación; mientras por un lado el desempleo se adjudicaba a la pereza de los trabajadores y a la falta de interés por parte de éste último para superarse, pues éstos precisaban siempre de un empresario/capitalista emprendedor versus un mexicano pobre a quien la debilidad lo caracterizaba, por otro lado el trabajador, ante enemigos tan poderosos como la elite regiomontana, continuó sin voz y sin confianza tratando de adaptarse en las costumbres de los ricos y la onírica escala en la estructura social:

“La movilidad, como en el pasado, reflejaba los vínculos con los negocios de los ricos. El aparente desorden y la corrupción del Gobierno local magnificaron la buena imagen de la élite y desacreditaron a sus críticos, mientras las ideas de los empresarios hallaban reivindicación en su riqueza, sofisticación y estilo de vida. Así, pese a las modificaciones en su composición, la élite regiomontana fácilmente restableció su posición hegemónica sobre la ciudad en el periodo posrevolucionario” (Saragoza, 2008, pág. 186)

Mediante el sentimiento paternalista, y acciones laborales en pro de la estabilidad social en Monterrey, el reparto de utilidades, servicio médico, servicio educativo y facilidades de obtener vivienda, se convirtieron en el distintivo lógico social-empresarial en Monterrey. Una vez más lo que distinguiría a la región y a su clase empresarial sería el progreso, orden social, disciplina y moral. Ante un mix social entre envidia, admiración y esperanza, la clase media en Monterrey se vio polarizada por un cada vez más estrecho espacio entre un poderoso grupo empresarial y una cada vez mayor clase trabajadora (Montemayor, 1971; Salinas Rocha, 1978; Saragoza, 2008).

Por último, ante la gran demanda de mano de obra en Monterrey, la migración a la ciudad significó un incremento de matices culturales que permitieron dar cuenta de la individualización del regiomontano promedio. El incremento de personas indígenas a la ciudad representa un reto no sólo para el aparato gubernamental, sino también para la esfera sociocultural de la región y, por lo tanto, para la democracia misma. Los esfuerzos siguientes por enarbolar teóricamente el concepto de la democracia, se apegarán ineluctablemente a la idea que identifica a las actitudes personales, y a las instituciones mismas, como agentes axiales del sentido negativo de la democracia; y no aquella concepción retrógrada que invadía las mentes de los ciudadanos, instituciones y naciones enteras que adjudicaba a los extranjeros, migrantes, al Otro, al diferente la amenaza más seria a la promesa democrática (Fromm, 1982; Dewey, 1946). Pensamiento que recorrió la mayor parte del mundo desde tiempos decimonónicos y que tan en boga se ha vuelto a experimentar en el ya entrado siglo XXI.

4.2 Cómo es el Monterrey del siglo XXI

De acuerdo con la consultoría neoyorkina Mercer (2017), Monterrey tiene la mejor calidad de vida en México. Empero, ¿qué parámetros fueron utilizados y en qué orden de aparición jerárquica fueron utilizados? Josué Padilla Villamour (2017) menciona, a partir de pesquisas y esfuerzos exegéticos tanto documentales como presenciales en la ciudad, que “los rubros son concretos pero conflictivos a la hora de atenderlos en orden de prioridades” (pág. 14) y comparte la secuencia de las variables que la firma Mercer utiliza:

- a. Entorno político y social (Estado de Derecho)
- b. Entorno económico (regulaciones del tipo de cambio)
- c. Entorno sociocultural (disponibilidad de medios de comunicación y censura)
- d. Entorno de salud (condiciones médicas)
- e. Entorno educativo (escuelas)
- f. Servicios públicos y de transportes
- g. Entretenimiento (entorno cultural)
- h. Disposición de bienes de consumo, vivienda y medio ambiente

Se puede observar que las variables de menor prioridad son las que mayor daño en términos cuantitativos y cualitativos hacen a la ciudad y a la población, pues en 2016 Monterrey fue considerada la ciudad más contaminada de México (OMS, 2016), mantiene un déficit de árboles, aumento de parque vehicular, exceso de pedreras, mal transporte urbano y, más aún, Monterrey y su área metropolitana ha sido considerada como la zona/ciudad que más discrimina en México (CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2011). Entonces, ¿por qué a pesar del mal clima, contaminación, discriminación, etc... la población sigue migrando hacia Monterrey? ¿qué hace atractiva a la ciudad para concentrar migración y, sobre todo, migración indígena, siendo estos de los más discriminados en la ciudad?

Monterrey se ubica territorialmente al noreste del México y espacialmente conforma el bloque económico-industrial por excelencia del país. Aunque de manera homologada se hace referencia a Monterrey, la realidad es que cuando se hace mención se homologan los municipios conurbanos, a saber: San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Juárez, Santa Catarina, García, Cadereyta, Salinas Victoria, Santiago y San Pedro Garza García. Siendo Monterrey, Escobedo, Juárez y San Pedro Garza García, los municipios con mayor presencia indígena, en cualesquiera de sus tres tipos de migración identificados en la literatura antropológica en la ciudad; a saber, migración dispersa, aislada y congregada (Durin S. , 2008).

Lo que en la presente entrega preocupa, y a la vez determina, es el hecho de la migración indígena, el constante socavamiento de los derechos humanos a la población indígena y la peligrosa discriminación tanto social como institucional a la que son expuestos estos grupos (cabe destacar que ya en 2018 no toda la población indígena en Monterrey se considera migrante, pues se reconocen habitantes regiomontanos de 2da y 3ra generación pero que se autoadscriben como indígenas). Para dar cuenta de cuál es el peso del estereotipo y de las prácticas excluyentes basta echar mano de la historia; y para ello, se recurrirá a la mejor fuente historiográfica sobre Monterrey, la carta fundacional de Diego de Montemayor elaborada por el escribano Diego Díaz de Berlanga:

En el nombre de Dios Todopoderoso y de la gloriosa y bienaventurada Santa María Virgen y Madre de Dios y señora nuestra. Sepan cuantos este público instrumento, carta de fundación (vieren), cómo yo, Diego de Montemayor, tesorero de la real hacienda de este Nuevo Reino de León, teniente de gobernador, atento a las causas y razones expresadas sobre la venida a este valle de Extremadura y reino, para su población y pacificación de los naturales de él, con intento que el santo evangelio se propague, y los reynos (sic) y señoríos de su majestad y su real patrimonio sea acrecentado. (Nuncio A. , Visión de Monterrey, 1997, págs. 31-32)

Tal pacificación de la población natural de la región no era más que la horda “civilizatoria” por medio de las armas y de la religión. Ejemplo claro de la dominación a partir del despojo de tierras y de identidades, además de la acumulación de contradicción y estereotipos de progreso que a 422 años se siguen reproduciendo. Como bien lo señala Padilla Villamour (2017), la materialización de la *Teoría de las dos espadas* de Tomás de Aquino fue Monterrey y la hipótesis de que entre más productiva sea una sociedad, mejor relación tendrá con Dios se ejemplifica con la migración hacia la región, acrecentando su poder pero replicando aquella racionalidad fundacional que tomaba de basamento “la condición de marginalidad y derrota para la población natural...y el proyecto por y para unos pocos, un proyecto elitista de dimensiones metaregionales” (Padilla Villamour, 2017, pág. 19) siempre sustentado en mano de obra de migrantes, muchos de ellos indígenas.

A guisa de complementar los apartados anteriores –en lo relativo a los aspectos jurídicos-normativos de los derechos de las personas indígenas–, es acuciante resaltar y especificar cuál es el sustento jurídico que permite, y vuelve asequible, la participación y representación política de las personas indígenas en el estado de Nuevo León y, por consiguiente, en Monterrey y su Área Metropolitana. Para ello, se habrá de asir al análisis político en función y en relación con el estudio de las Instituciones políticas; para que, de tal manera, se retome el papel de las Instituciones en la vida política, sistema político y sistema de gobierno, y complemente los ya conocidos enfoques de elección racional y conductistas imperantes en la Ciencia Política clásica.

En tal tenor, se abordará la contextualización jurídica-normativa de los derechos de las personas indígenas en Nuevo León, de la mano con dos corrientes del nuevo institucionalismo, a saber: 1) el institucionalismo normativo y 2) el institucionalismo empírico. Con estos dos últimos enfoques se pretende realizar una aproximación exploratoria y descriptiva que permita la revisión exhaustiva del fenómeno más allá de lo escrito y conocer el uso real de los derechos de las personas indígenas estipulados en las leyes; lo que otrora se denominaría: *realpolitik*.

4.3 ¿Qué estipula la Ley de Derechos indígenas en el Estado de Nuevo León?

Publicada en junio de 2012, la Ley de Derechos Indígenas advierte que por sí misma es de orden público y es reglamentaria del artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. Además, pretende hacer valer la garantía, observancia, promoción y protección de los derechos y la cultura indígena, y cuyos agentes procuradores son el Estado y los municipios de Nuevo León.

Lo anterior se vio esquematizado en la Figura 3 (página 49), donde se observa que la participación política indígena en general, y para efectos del presente trabajo será la electoral, conlleva elementos normativos que regulan los factores internos y externos de un fenómeno social (la migración indígena al Estado de Nuevo León) y se materializan en las leyes. Para dar cuenta de ello de manera esquemática, sírvase de ejemplo los principales

artículos a considerar²² para la salvaguarda y promoción de los Derechos Indígenas en el Estado:

Tabla 3. Aspectos instrumentales y sustantivos de la Ley de Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León

Aspecto Instrumental	Aspecto Sustantivo
Art. 1.- Estipula que la aplicación de lo establecido por la Ley corresponde al Estado de Nuevo León y a los Municipios de éste.	Art. 8.- Garantiza libre determinación, autonomía y representación indígena para decidir formas de organización política, elegir a sus representantes de acuerdo con normas, procedimientos o prácticas tradicionales y acceder a las políticas públicas del Estado
Art. 5.- Estipula que las personas indígenas en Nuevo León tienen el derecho a practicar y revitalizar sus Usos y Costumbres .	Art. 9.- Derecho a elegir representante ante el Ayuntamiento respectivo y obliga a los Ayuntamientos de los Municipios con asentamientos indígena a crear órganos o comisiones encargadas de atender sus asuntos y en función al respeto de Usos y Costumbres
Art. 7.- Reconoce los Sistemas Normativos Internos de las personas indígenas en sus relaciones familiares, sociales y en general para la prevención, progreso y solución de conflictos	Art. 28.- El Estado y los Municipios podrán consultar a los indígenas en lo referente al Plan Estatal y Planes Municipales de Desarrollo , mediante procedimientos apropiados, de buena fe y a través de organizaciones representativas
	Art. 35.- El Estado , por medio de la SEDESOL , implementará y operará el Sistema de Información Indígena , en coordinación con dependencias Federales y Locales competentes, para identificar particularidades sociales, económicas, culturales, políticas y de identidad, para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas . Con ello podrá garantizarse , en todo momento, la participación y representación indígena .

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León.

Como se puede observar en la tabla anterior (Tabla 3), los entes encargados de garantizar la aplicación de lo establecido en la Ley de Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León es el Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y los Municipios en donde radique población indígena. La ley es clara y específica en ello. Además, el

²² Cabe destacar que cada resumen de las leyes se realiza a manera de facilitar el análisis y de ninguna manera para minimizar el aspecto sustantivo e instrumental de los artículos o aspectos explícitos en las leyes y que no se mencionan

reconocimiento y promoción que deberá de realizarse en cuanto y en tanto a la práctica de los Sistemas Normativos Internos y los Usos y Costumbres de las personas indígenas como se establece en los artículos 5 y 7 dará paso a la cristalización y materialización de lo que establecen los artículos 8 y 9, a saber, la libre determinación y autonomía para decidir su organización política, elegir sus representantes dentro del ayuntamiento y acceder a las políticas públicas del Estado.

Todo lo anterior podrá ejercerse mediante procedimientos apropiados, de buena fe y a través de organizaciones representativas como lo estipulado en el artículo 28 en torno a la consulta que en principio deberá ser previa, libre e informada. Por último, la atribución que tiene la SEDESOL en cuanto a la implementación y operación del Sistema de Información Indígena en sinergia con dependencias federales y locales en la materia, esponsorizará en demasía el diseño, implementación y promoción de las políticas públicas; dando todo lo anterior, como resultado, la garantía de participación y representación indígena en el Sistema político vigente y ampliando el sendero para la consolidación democrática en Monterrey y su Área Metropolitana.

4.4 ¿Bajo qué enfoque se podrá explorar y describir la participación electoral indígena en Monterrey?

Como se mencionó con anterioridad, las corrientes de análisis de las que se echarán mano son las relacionadas con el *nuevo institucionalismo*. El punto de partida gira en torno a conocer si ¿las instituciones aún son imprescindibles, aún importan? Y aproximarse a vislumbrar ¿cuáles son los componentes que socavan el funcionamiento de las Instituciones en la región de Monterrey y su Área Metropolitana?

Durante los años posteriores a la revolución, intelectuales como Daniel Cosío Villegas (1972) argumentaban que era la propia deshonestidad de los, en aquellos años, recientes políticos revolucionarios lo que detenía y ahogaba en el olvido e inoperatividad las promesas revolucionarias. Los años del boom institucional en México apareció después de la crisis de gobernabilidad acontecida por los movimientos sociales de los 50's, 60's y principios de los 70's para verse materializada en un sinfín de Instituciones del Estado mexicano que hacía

ver al país como un puntero en el desarrollo político, social y económico a costas del democrático.

Sin embargo, con el advenimiento de la apertura comercial y los cambios provocados por la globalización, y con el antecedente de la crisis financiera mexicana y mundial, la confianza en las Instituciones y el respeto hacia ellas, y sobre todo a sus integrantes, se fue desvaneciendo en el país. Una serie de privatizaciones y el esfuerzo por adelgazar la burocracia estatal fue lo que incentivo el análisis político de entonces. Nada lejano a lo que Dewey (1946) calificaba como la “amenaza más seria a la democracia”, cuando sentenciaba que las actitudes personales dentro de las Instituciones públicas eran las que socavaban el desarrollo político. Se entiende como amenaza a la democracia cuando incluso se ve a ésta como un sistema que permite y crea condiciones políticas, culturales, económicas y sociales para el desarrollo pleno y digno de cada cual, es decir: concebida en tanto medio y en cuanto a fin.

La premisa teórica, entonces, se dirige a establecer claramente las diferencias entre dos perspectivas que, si bien es cierto jamás serán excluyentes la una de la otra, han permeado el análisis político durante varios años: la visión del Derecho y la perspectiva desde la Ciencia Política. Para dar cuenta de ello, se diferencia la capacidad *jurídico-normativa* de las categorías del derecho formal que trabajan en la posibilidad de forjar un ordenamiento jurídico-político desde una apuesta normativa como mecanismo racional herencia europea de concebir a la sociedad como una comunidad supeditada e integrada gracias a las normas jurídicas, de la capacidad de la *ciencia política* de quitarse la pretensión de validez universal, concebirse a sí misma como un subsistema, y excluyendo del análisis científico las cuestiones jurídico-normativas de alcance universal para posarse en el abordaje de cada caso en *términos descriptivos* (Habermas, 2008; Habermas, 2014).

Es decir, *el sistema jurídico-normativo* que influye en las categorías del derecho formal proviene principalmente de la filosofía que, en principio, pretendía explicar el mundo más allá de las divinidades y del cosmos que comprende sociedad y naturaleza, es decir, la exégesis del mundo a partir de la *Razón*. A partir de la encarnación de la razón en el

conocimiento, el habla y las acciones, es que el pensamiento filosófico retrocede más allá de sí mismo y da cuenta que un saber totalizador que pretenda la explicación del mundo en su conjunto encauza, en ocasiones y a saber de la Historia, en barbaries que ponen el peligro y en alarma los derechos humanos. Tal y como Adorno y Horkheimer (2007) denominaban “razón instrumental”²³.

Mientras que el *sistema político*, en su devenir como Ciencia Política y en su afán por hacer notar los límites de la propia razón, reconoce que la Razón puede entenderse ya en términos procedimentales que se desarrollará por medio de los argumentos, aunque esto signifique ir contra sí misma. El supuesto kantiano de que la crítica de la razón es obra de la razón misma, adquiere relevancia total cuando la autocrítica de la razón advierte la superación de sus propias irracionalidades y el entendimiento, por medio del argumento, es la manera más viable de evitar las coerciones físicas y el respeto por lo “otro”.

En ese sentido, la ciencia política optará por el interés en 1) las condiciones formales de la racionalidad del conocimiento, 2) el entendimiento lingüístico y 3) el entendimiento de la acción en el plano de la vida cotidiana, experiencias organizadas metódicamente o en discursos organizados sistemáticamente del *sujeto empírico* y no *genérico*. Es por ello que en la fases de análisis de la presente investigación se utilizará la teoría de la argumentación, pues ésta permitirá dilucidar e interpretar las condiciones pragmático-formales del comportamiento explícitamente racional (Apel & Dussel, 2005; Habermas, 2014; Van Dijk, 2009).

4.5 El análisis Institucional como mecanismo interpretativo

Como se comentó en los párrafos anteriores, la presente investigación, hasta ahora, se encuentra en la bifurcación de lo normativo y lo empírico, de lo referente al Derecho por un lado y lo referente a la ciencia política por el otro. Para efectos ilustrativos, y de análisis

²³ Las amplias teorizaciones de la Primera Escuela de Frankfurt en torno a la “razón instrumental” escapan del simplismo teórico de reconocer solamente que la actividad intelectual de tipo objetivante estaba equiparándose con la razón, sino que los autores van más allá y reclaman que un entendimiento, levantado a la totalidad, estaba usurpando el lugar de la Razón.

interpretativo, se utilizarán las corrientes del Institucionalismo para conocer cómo se da la relación entre las personas indígenas y las Instituciones por medio del diálogo y argumentación entre los representantes de éstas y las necesidades de aquellas. Y para cumplir con ello se utilizarán, como se mencionó al comienzo del presente apartado, las corrientes del *Institucionalismo normativo* y el *Institucionalismo empírico*.

4.5.1 La Ciencia Política y las Instituciones: ¿Qué son las Instituciones y qué cambios han tenido éstas en el decurso de los años?

A primera vista, la respuesta a la pregunta de qué son las Instituciones antoja una larga revisión histórica desde los comienzos de la era moderna hasta ya entrado el siglo XXI. Empero, y por efectos de la presente investigación, sólo se hará mención de los cambios lingüístico-pragmático que ha tenido el concepto Instituciones y su corriente analítica, el Institucionalismo, para llegar a lo que otrora se conoce como Nuevo Institucionalismo. Para ello, la *Historiografía* será puesta en práctica para la comprensión de la *Historia* entendida como realidades y/o hechos (Gaos, 1973); de tal forma que la tarea primigenia para entender y comprender lo anterior versa sobre preguntarse primero a *quién* han pertenecido el concepto del Institucionalismo, antes que preguntarse el *qué* significa. En otras palabras es la literatura o ciencia de la historia, de los hechos²⁴.

Una categoría que ha estado viajando de la mano del Institucionalismo desde comienzos de la Historia occidental es la del *Estado*. En los escritos de Aristóteles (2014) en el siglo IV a. de C. se puede distinguir que la *política* es la mayor y suprema de las ciencias, pues pone su mayor esfuerzo en alcanzar el *bien*, la *justicia* y la *felicidad* a partir de la virtud de los mismos ciudadanos –aunque cabe destacar que la ciencia política desde entonces fue acompañada, hasta la actualidad, de saberes como el derecho, la filosofía, antropología, sociología, economía, etc.–; nada lejano a la idea de Enrique Von Justi (1996) sobre el Estado Cameral en el absolutismo del siglo XVIII, que actualmente se podrá entender como Estado Administrativo, cuando destacaba que las actividades de la policía, entendida como la

²⁴ Para una revisión exhaustiva de las diferencias y alcances entre la Historia y la Historiografía revisas la obra de José Gaos, principalmente el libro: La Historia de nuestra idea de mundo.

instrumentación del poder estatal, era lograr la felicidad de los súbditos. De igual forma el Príncipe de Maquiavelo (2013), en la primera mitad del siglo XVI, atestiguaba que es a través del Estado como el ejercicio de poder y dominación primaba por sobre reflexiones en función de la mejor forma de gobierno para la comunidad política o las premisas de bien, justicia y felicidad de los antiguos regímenes políticos.

De tal suerte que la panoplia que recubre el análisis político desde entonces tiene por objetivo promover, desde todas las trincheras y en especial la académica, al objeto de estudio por excelencia donde reside el poder y las actividades consecuentes de éste: *el Estado* (De Artaza, 2015). Como se puede observar, tales ideas, y sus consecuencias históricas, fueron pensadas e implementadas en Europa y exportadas a través del colonialismo al continente Americano; siendo la academia Estadounidense la mayor protectora y promotora de esa corriente de pensamiento y de investigación (Pasquino, 1994).

Entonces, una vez visualizado el objeto de estudio de la Ciencia Política desde sus primeros años, se encuentra la presente revisión en una bifurcación en cuanto al tipo de análisis, esto es, están los unos que decantan el análisis del Estado y las organizaciones que lo articulan como lo es el gobierno, parlamento, burocracia, y los otros que se interesan, desde perspectivas de las ciencias sociales y jurídicas, en la lucha del poder y los dirigentes de las organizaciones: la clase política (De Artaza, 2015, pág. 49). De tal manera que Estado, Gobierno, Instituciones, Organizaciones fueron consideradas, durante mucho tiempo como sinónimos.

Ahora, la falta de precisión para designar la definición de Institución trae consigo una serie de problemas para efectuar una recogida de datos que puedan homologar y utilizar al Institucionalismo como herramienta de análisis. No obstante, lo que sí que se concuerda en la academia es en que las Instituciones son concebidas como *marcos normativos* (March & Olsen, 1993; North, 1995; Scott, 1987), son las reglas del juego que coleccionan normas y prácticas perdurables materializadas en estructuras de significados y de recursos que perduran a pesar de la renovación de los integrantes de las organizaciones que en última

instancia serían quienes juegan dentro de esas reglas del juego. De acuerdo con Scott (1995), las Instituciones mantienen 3 pilares: el 1) Regulatorio; el 2) Normativo; y 3) el Cognitivo, pues las Instituciones son “estructuras y actividades cognitivas, normativas y regulativas que proporcionan estabilidad y sentido a la conducta social...y operan en múltiples niveles de jurisdicción” (Scott, 1995, pág. 33).

Lo anterior es parte de lo que se denomina Nuevo Institucionalismo, fruto de la contraparte del Viejo Institucionalismo representado por la corriente conductista y de elección racional de mediados del siglo XX que en su afán por predecir comportamientos sin tomar en cuenta el peso de la Institución, y dejando al funcionamiento de las Organizaciones Gubernamentales al mero cumulo de acciones personales, poniendo por encima la cuantificación estadística del comportamiento individual (promovida por la academia estadounidense a través de la teoría de la acción racional propia de la economía) del proceso real y diario que incentivan la producción de determinados comportamientos (Torres Espinosa, 2015). Si al comienzo se pasó de las revisiones históricas del comportamiento y de las relaciones de poder, con el advenimiento de las guerras mundiales las Instituciones dejaron de importar dado la incapacidad de predecir a aquellas; al tiempo que ello dio paso a un modelo de elección racional que pretendía predecir comportamientos pero que carecía de nexo entre teoría y práctica reales. Tal y como Giovanni Sartori lo critica en lo siguiente:

i) La política es una interacción entre el comportamiento y las instituciones (estructuras) y, por lo tanto, ese conductismo ha matado una mosca con una escopeta y, en consecuencia, exageró; ii) que el cuantitativismo, de hecho, nos está llevando a un sendero de falsa precisión o de irrelevancia precisa, y iii) que al no lograr confrontar la relación entre teoría y práctica hemos creado una ciencia inútil. (Sartori, 2004, pág. 351)

Se puede observar que el Nuevo Institucionalismo busca “restaurar la relación entre la realidad y los supuestos teóricos que intentan explicarla” (Hay, 2002, pág. 14). Para tal empresa, la propuesta de Peters (2003) sobre el Institucionalismo Normativo y el

Institucionalismo Empírico abonará el análisis para la presente investigación. A continuación se detallará de qué manera se dará ello.

Como un último estadio de la cuestión cabe destacar, y por respeto a la precisión teórica, que la línea que diferencia a las Instituciones de las Organizaciones se puede encontrar de manera clara en la siguiente afirmación de Guillermo O'Donnell (2009):

Las instituciones son patrones de interacción regulados, que son conocidos, seguidos y comúnmente aceptados –aunque no necesariamente aprobados mediante normas– por los agentes sociales que esperan continuar interactuando bajo las reglas y normas formal o informalmente plasmadas en esos patrones. En ocasiones, aunque no necesariamente, las instituciones se convierten en organizaciones formales; se materializan en edificios, sellos, rituales y personas que desempeñan roles que las autorizan a “hablar por” la organización. (O'Donnell, 2009, pág. 8)

La ventaja de concebir de manera separada a las instituciones como reglas y a las organizaciones como actores, es que el comportamiento de cada uno de ellos, de manera separada, podrá ser fácilmente reconocida, pues la mayor de las veces las reglas formales están en posibilidad de polisémicas interpretaciones y las organizaciones de manera nominal dependen, en gran medida, de las ideas de las personas que las integran. De tal suerte que la cultura y las tradiciones de cada cual, así como las características de sus instituciones importan y trascienden en ocasiones más allá de los individuos y las organizaciones mismas (De Artaza, 2015).

4.5.2 Institucionalismo normativo e Institucionalismo empírico

Antoja a la antonomasia interpretativa designar a la Institución el término de Norma, pues como anteriormente se mencionó, son aquellas las reglas que norman el comportamiento de determinados actores; sin embargo, y para efectos de esclarecimiento teórico-conceptual, hasta aquí se hace la diferenciación de dos tipos de Institucionalismo que

servirán como perspectiva de análisis para designar lo que otrora busca el análisis institucionalista: la relación entre la realidad y los supuestos teóricos.

En tal tenor se entenderá al Institucionalismo normativo cuando el análisis verse en función del papel que se le asigna a las normas, valores y reglas inscritas en las organizaciones y que pretenden explicar el comportamiento de sí mismas; mientras que el Institucionalismo empírico pone énfasis en que la institución también sobre pasa su aspecto normativo-formal y se posa en lo relacionado con las rutinas, esto es, el significado que se le da a las formas, procedimientos, papeles o estrategias en el marco de la construcción de la actividad política. Por lo que la cultura, tradiciones creencias, códigos, conocimientos y paradigmas podrán apoyar o contradecir tales normas-formales y rutinas. Cabe destacar que, en ocasiones, las rutinas son independientes de los individuos que las ejecutan, por lo que es común que aquellas puedan estar vigente más allá del cambio de individuos (March & Olsen, 1997, pág. 68; Peters G. , 1999).

Lo anterior permite reconocer una cierta triada de sujetos de análisis: Las organizaciones y su normativismo, las rutinas dentro de las organizaciones que dan forma a la actividad política, y la cultura y tradiciones de los individuos que pertenecen a una determinada organización. Con el institucionalismo normativo y empírico se pretende cerrar la brecha que abrió la economía con los institucionalistas racionalistas y abrir el surco epistémico, de análisis e interpretativo donde se trabaje en torno a las características distintivas de sociedades donde confluyen diferentes culturas, tradiciones y visiones del mundo a través del abordaje a problemas políticos y sociales fruto de la asimetría de poderes encarnadas por las instituciones mismas (Béland, 2005; Hall & Taylor, 1999; Lewis & Steinmo, 2012).

En síntesis, lo que se pretende es conocer y entender las dinámicas, lógicas y fuerzas que dan forma al mundo que conocemos más que predecir comportamientos. Por lo anterior, la aproximación que se hará en el trabajo empírico es de manera inductiva con métodos cualitativos y efectuando el análisis lingüístico del discurso para dar cuenta de cómo se dan las relaciones entre los integrantes de las organizaciones, el conflicto cultural impregnado

en éstas cuando son en dinámicas indígenas y no indígenas, y las distintas normas institucionales su praxis inherentes en la sociedad.

CAPÍTULO V. APROXIMACIÓN CUALITATIVA A TRAVÉS DE DOS MÉTODOS: ENTREVISTAS SEMI-ESTANDARIZADAS Y GRUPOS DE ENFOQUE

La presente investigación se asirá a un modelo de corte cualitativo. En un primer momento del trabajo empírico se realizó una aproximación a las dependencias gubernamentales encargada de la promoción de los derechos indígenas en la ciudad de Monterrey y su Área metropolitana (SEDESOL-CDI) para explorar la forma de relación entre las personas indígenas y las instituciones. Mientras que como un segundo momento del trabajo de campo, se realizaron entrevistas semi-estandarizadas a informantes clave de instituciones gubernamentales, academia, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Y como un tercer momento se realizaron grupos de enfoque con población indígena.

Con el método cualitativo se orienta la investigación al análisis del fenómeno de participación política de indígenas en Monterrey en su particularidad temporal y local. A partir de las acciones, interacciones, experiencias y estructuras culturales explícitas, se dilucida el proceso de construcción de la realidad y del fenómeno en toda su complejidad; es decir, las relaciones entre los participantes en el estudio y su contexto ayudan a la articulación de teoría que, a su vez, esboza una versión del mundo susceptible a reformularse (Flick, 2007; Goodman, 1990).

Debido a la naturaleza de corte cualitativo en la investigación, ésta se funda en primigenios principios de la investigación cualitativa para las ciencias sociales donde a través del 1) interaccionismo simbólico entendido como el significado e interpretaciones que les dan los sujetos a las cosas para así realizar sus acciones y/o actividades estribándose en la teoría subjetiva; de la 2) etnometodología como enfoque destinado a comprender el cómo es el proceso de las acciones e interacciones intersubjetivas a partir del contexto; y, de la 3) vertiente estructuralista del modelo cualitativo como la comprensión del sistema cultural

que enmarca las percepciones y realidades de forma implícita en cuanto a la realidad subjetiva y social de los sujetos (Flick, 2007, pp. 41-42) que determinan tanto su discurso como sus actividades, se podrá triangular la información recaudada, alcanzar la validez metodológica y profundizar en la comprensión del fenómeno.

Lo anterior a partir de la reconstrucción de puntos de vista y la interpretación del contexto mismo, al tiempo que enriquece el modelo circular del proceso de investigación apoyándose en la Teoría Fundamentada entendida como el enfoque de estructuración teórica sólo una vez obtenida la estructuración del problema mismo por los participantes en el trabajo de campo (Flick, 2007, p. 55). Cabe destacar que ello no supone la elaboración de preguntas de investigación a través de un conjunto de hipótesis, pues éstas últimas se eliminan desde antes dado que ellas son la construcción de una teoría *a priori* y hallazgos de otras investigaciones previamente identificadas (Hoffmann-Riem, 1980), mientras que la pregunta general de investigación de la presente entrega es descriptiva y exploratoria.

5.1 Aproximación cualitativa. El enfoque cualitativo como pauta interpretativa del problema de investigación

La investigación está desarrollada a partir de especificidades sistemáticas rigurosas que constan de cuatro etapas:

- i) preparatoria: durante esta etapa se formula el problema de investigación y se plantean las preguntas de investigación; ii) trabajo de campo: en esta fase se acerca al objeto de estudio y se recopilan los diferentes textos y narrativas; iii) análisis: en este momento se analizan los textos recopilados, y iv) informe final: se redactan los resultados y las conclusiones principales del análisis. (Rodríguez, Gil, & García, 1996, p. 3)

Con la pretensión de acercarse al mundo de “ahí fuera y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales ‘desde el interior’ de varias maneras” (Flick, 2014, p. 12) como lo son analizando experiencias, interacciones y documentos, se podrá conocer cómo es que las personas indígenas llevan a cabo la participación electoral en Monterrey y su Área

Metropolitana y cómo eso les permite reconfigurar su identidad cultural²⁵. Además, se pretende comprender los procesos previos a la interacción con el aparato gubernamental, en términos colaborativos o de conflicto, que enriquezcan el análisis descriptivo-interpretativo del fenómeno y conocer cómo la participación electoral influye en las decisiones gubernamentales, si es que lo hace.

5.2 ¿Cómo se abordará el objeto de estudio?

A partir de la revisión de la literatura clásica de la participación electoral, así como de la literatura propia de los fenómenos de participación política y participación político-electoral indígena, se estipulan, para el abordaje empírico del problema de estudio, las siguientes variables/categorías:

- Variables/Categorías clásicas de la participación electoral:
 - Voto
 - Proximidad a partidos políticos
 - Afección/desafección política
 - Confianza en la política
 - Conocimiento político indígena
- Variables/Categorías etnitizadas
 - Conocimiento de derechos indígenas
 - Proximidad a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) indígenas y pro-indígenas
 - Sistema de Usos y Costumbres

Mediante Grupos de Enfoque a personas indígenas, así como Entrevistas semi-estandarizadas a representantes de ONG's de corte indígena o pro-indígena y funcionarios de instituciones encargadas de la promoción y garantía de los derechos indígenas, el trabajo de campo decantará por la articulación científica entre teoría y praxis y se ceñirá a una de

²⁵ Esto permitirá conocer cómo se materializa la transfiguración étnica y adaptabilidad estratégica propuesta por el antropólogo M.A. Bartolomé (2006).

las premisas de la investigación cualitativa, en cuanto y en tanto concebida como “un modelo emergente, ya que emerge sobre la marcha” (Wright & Hinojosa, 2014, p. 460): la Teoría Fundamentada. Por ello, las categorías se irán desarrollando y mejorando durante el proceso de la investigación misma, así como también quedará abierta la opción de la emergencia de categorías.

Para los grupos de enfoque se tomará como característica de control las siguientes:

- 1) Mayoría de edad –pues la variable dependiente responde a la del Voto
- 2) Proveniente de alguna comunidad indígena –ya sea de origen o de lazo consanguíneo– y
- 3) Hablante de lengua indígena²⁶ para darle fiabilidad a los datos obtenidos.

Mientras que para las entrevistas semiestandarizadas se tomó en cuenta a los representantes de las principales instituciones y comisiones políticas encargadas de la promoción, salvaguarda y materialización de los derechos políticos de las personas indígenas en la entidad.

Además, el Institucionalismo Empírico permitirá reconocer los puntos de inflexión entre la norma escrita y la práctica real mediante un análisis descriptivo que dé respuesta a la relevancia que aún tienen las instituciones allende las fronteras del normativismo jurídico (Habermas, 1998; Peters B. G., 2003), pues existe lo que otros han llamado la “brecha de implementación” (Martínez Espinoza M. I., 2015; Stavenhagen, 2000) en el caso del cumplimiento de los derechos indígenas, y que para efectos del estudio abonará en la definiciones sobre cómo y qué importancia tiene en la actualidad las Instituciones, cómo interactúan éstas con las personas indígenas y qué efectos tienen en las políticas públicas, políticas de estado, políticas de gobierno y, sobre todo, en la participación electoral.

²⁶ Sobre todo se procurará la variante lingüística por motivo de la categoría del Sistema de Usos y Costumbres, pues éstos podrían cambiar en función del pueblo indígena y de variante lingüística

5.3 Aproximación a las dos Instituciones clave en materia indígena en el Estado de Nuevo León

El primer contacto que se tuvo con las Instituciones clave para la atención de las problemáticas en las que se encuentran las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana, a saber: la oficina de enlace –que depende de la Delegación del Estado de San Luis Potosí– de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a cargo del Antropólogo José Cerda, y la oficina de Coordinación de Intervención Intercultural –dependiente de la Dirección de Desarrollo de Proyectos de la Subsecretaría de Vinculación y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a cargo de Humberto Salinas y Sotero Ávila–, fue mediante el proceso de bola de nieve que comenzó en el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (EC005) en la Interpretación oral de la lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y por el Tribunal de Justicia Superior del Estado de Nuevo León.

La certificación mencionada con anterioridad representó el primer contacto con una parte de la población indígena de Monterrey y su Área Metropolitana. Cabe señalar que la mayoría de los participantes en la población mantenían relación con el Departamento de Educación Indígena (DGEI)²⁷ de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León y una organización de la sociedad civil de mujeres indígenas: Zihuakali, casa de las mujeres indígenas²⁸. Relación que demuestra en un primer momento la dinámica en la que la integración indígena se da en Monterrey: por medio de Instituciones del Estado y de forma convencional.

²⁷ Los estudios de la formación del Departamento de Educación Indígena datan desde 1998, donde fueron los primeros acercamientos al tema por parte del Gobierno del Estado y la Academia; para mayor profundidad el caso revisar: Séverine, D. (2007). ¿Una educación indígena intercultural para la ciudad? El departamento de Educación Indígena en Nuevo León. Frontera Norte vol.19 no.38.

²⁸ La Casa de la Mujer Indígena (CAMI) son creadas por la CDI como herramienta para el acceso a los derechos de las mujeres indígenas en México.

Aunado a lo anterior, la aproximación a la Certificación permitió establecer vínculo con demás actores/informantes clave, así como con miembros de la comunidad indígena en Nuevo León. Además, el acercamiento de primera mano con los principales problemas de la población indígena provocó un cambio de paradigma en el enfoque cualitativo, pues se tomó en cuenta que para que los cambios de perspectiva por parte de la población indígena con respecto a su relación con las Instituciones Políticas se viesen reflejados en la realidad, aquellos hacían énfasis en la información que venga no solamente de las instancias gubernamentales, sino también de la academia. Por lo que gracias a ello se adhirió a la sección de informantes clave el papel de los académicos en la presente entrega.

Una vez concluida la Certificación, se tuvo contacto con las reuniones por parte de la SEDESOL con el ayuntamiento de San Pedro Garza García²⁹. Tales reuniones giraron en torno a la apertura de una oficina de atención a personas indígenas, y en función al reconocimiento, promoción, garantía y respeto de los derechos de las personas indígenas en el Estado –y estipulados en la Ley de Derechos de las Personas Indígenas del Estado de Nuevo León–, atendiendo a la obligatoriedad de la Ley antes mencionada. Cabe destacar que hasta 2018, el municipio de San Pedro ha sido el único que ha materializado lo que la Ley dicta, en cuanto a la creación de oficinas municipales de atención a personas indígenas.

El acercamiento a la SEDESOL sirvió para reconocer, mediante esa aproximación etnográfica, las voluntades políticas que deberán movilizarse sobre los diferentes miembros con poder de decisión dentro de la estructura gubernamental municipal, sobre todo las que responden a los regidores, alcalde, secretario de ayuntamiento y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Capital Humano. Por ello, tal acercamiento permitió establecer que las personas pertenecientes a los Partidos Políticos serán actores/informantes axiales en la situación de las personas indígenas, pues la operación gubernamental en México está ligada a las voluntades partidistas.

²⁹ Municipio situado al sur-poniente del área metropolitana de Monterrey y que representa el municipio con más ingresos per cápita en el país y en donde la población indígena suele cumplir los roles laborales del trabajo doméstico, para las mujeres, y trabajadores en la construcción, por parte de los varones.

Así, una vez recaudada las notas de campo sobre la relación entre la población indígena y las Instituciones –CDI y SEDESOL–, además del primer acercamiento a un municipio –San Pedro–, la sensibilización hacia el problema de investigación pudo realizarse y la perspectiva para la realización del instrumento respondió a las necesidades reales reconocidas en la interacción con personas indígenas y estructuras institucionales.

5.4 Método primero. Entrevistas semiestandarizadas a informantes clave en tema indígena en Nuevo León y el área metropolitana de Monterrey

La entrevista semiestandarizada permite reconstruir la teoría subjetiva adherida al entrevistado en cuanto a sus conocimientos explícitos del tema, articular preguntas basadas/guidadas en la teoría para hacer explícito lo implícito o rechazar los tópicos en función del bagaje cognitivo del entrevistado, y finalizar con preguntas de confrontación que estén en oposición a las nociones previamente incrustadas por el entrevistado para explorar la posibilidad de que tales nociones sean adheridas a la teoría subjetiva de éste (Flick, 2007, p. 96). A continuación se hace del conocimiento para la presente entrega la forma en cómo se obtuvieron las entrevistas y la relación entre categorías y preguntas del instrumento aplicado:

Tabla 4. Instituciones y actores-informantes clave

Instituciones gubernamentales	Academia	Partidos Políticos	Organizaciones Civiles
1) SEDESOL 2) CDI 3) Monterrey 4) San Pedro Garza García 5) CEE 6) CEDH 7) INE	8) CIESAS 9) UANL 10) UERRE	11) PT 12) MORENA 13) MC	14) IDECU-UANL 15) Zihuakali 16) Zihuame 17) N.L. Árbol de Todas las Raíces 18) Activista Independiente

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada el primer acercamiento al problema de estudio mediante el proceso de Certificación de intérpretes traductores ya explicitado en apartados previos, se continuó

con las entrevistas semiestandarizadas. A raíz de ese proceso se pudo obtener las primeras entrevistas: SEDESOL y CDI.

5.4.1 Selección de participantes. Entrevistas a funcionarios de las Instituciones Gubernamentales

Mediante el efecto bola de nieve iniciado en el proceso de Certificación –cabe destacar que la invitación al proceso fue por parte del Antropólogo José Cerda a la profesora-investigadora Claire Wright que a su vez extendió la invitación al autor de la presente entrega– el primer contacto previo a la entrevista con la CDI fue con Humberto Salinas y Sotero Ávila de la oficina de Coordinación de Intervención Intercultural dependiente de la Dirección de Desarrollo de Proyectos de la Subsecretaría de Vinculación y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social. Quienes a su vez recomendó la entrevista a funcionaria del programa Aliados Contigo, programa encargado de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad en Nuevo León y que depende de la Secretaría de Desarrollo Social.

Paso posterior, se concretó la entrevista con José Cerda de la CDI. Siendo éste uno de los principales actores en el progreso de la población indígena en el Estado se pudo obtener información valiosa en cuanto a los programas implementados pero, sobre todo, a los escollos institucionales con los que se topa una oficina que opera en Nuevo León, pero depende de la delegación en San Luis Potosí y además rinde cuentas en CdMX. Así de centralizado el proceso institucional.

Mediante invitación por parte de Humberto Salinas de la SEDESOL a una junta interna previo a la sesión de cabildo del municipio de San Pedro en donde se discutirían los procesos para llevar a cabo la apertura de una oficina de atención indígena como lo dicta la Ley, se tuvo contacto con la Regidora Karina Moreno, presidente de la comisión de derechos humanos del municipio y actor principal en la movilización de voluntades políticas dentro del cabildo para la aprobación de la oficina y modificación del Reglamento municipal. Gestión distinta fue para el Municipio de Moterrey, quien mediante llamadas telefónicas a la regidora

presidente de la comisión de derechos humanos se tuvo contacto con Luis Nevares, director de cultura del municipio.

En lo que respecta a la CEE, CEDH y el INE, el proceso de contacto fue mediante amistades y conocidos quienes facilitaron el acercamiento. Cabe destacar que el instrumento de la presente entrega sirvió para la elaboración del diagnóstico y seguimiento de la Oficina de Atención a Personas Indígenas y Migrantes del municipio de San Pedro. De tal manera que la contribución académica del autor de la entrega ha sido reflejada en esa acción institucional.

5.4.2 Selección de participantes. Entrevistas a Académicos

Las entrevistas a Académicos que trabajan o han trabajado el tema en materia indígena en Nuevo León constituyen un sector clave para saber cómo ha sido el proceso de migración de la población indígena al estado. Desde los comienzos de la aparición de manera significativa de la población indígena en el área metropolitana de Monterrey en los años 90's, la profesora antropóloga Severiné Durin ha sido autora clave de cómo ha sido la migración de la población indígena en la ciudad. Para su contacto, también se echó mano de las relaciones establecidas al comienzo del trabajo empírico: la Certificación de intérpretes traductores elaborado por la CDI-INALI-PGJNL. En este proceso el CIESAS fue sede de una sensibilización en la materia, fue ahí en donde se estableció el contacto con el Dr. Shinji Hirai –director del CIESAS– quien a su vez estableció el contacto con la profesora Severiné.

Posterior a ello, el siguiente contacto fue con el profesor Juan Doncel, académico y director del Centro de Estudios Interculturales del Noreste (CEIN) de la UERRE. Quién mediante los estudios antropológicos y sociales establece pautas interpretativas que ayudarán a conocer la realidad en la que viven, sobre todo, los estudiantes indígenas de educación media superior y superior.

Por último, la entrevista realizada a Carlos Piña Loredó de la facultad de Derecho y Criminología de la UANL quien, además de su posición como investigador, mantiene

estrecha relación con las formas de participación electoral en el Estado, pues es Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Sin embargo, fue de los propulsores, como académico, de la creación de la Ley de Derechos de las personas Indígenas en Nuevo León en 2011-2012. Su figura como informante clave radica en que brinda la perspectiva desde dos ópticas distintas y de pronto antagónicas: la académica y la político-institucional.

5.4.3 Selección de participantes. Entrevistas a Dirigentes Estatal de Partidos Políticos en Nuevo León

La sección de entrevistas a los dirigentes de los partidos políticos fue, quizá, el sector de más difícil acceso. A pesar de las múltiples llamadas a las asistentes de los dirigentes de los dos principales partidos políticos en el Estado: PRI y PAN, no se obtuvo una respuesta favorable. El desconocimiento y falta de interés en el tema fueron, quizá, el mayor motivo para la negación de la entrevista.

No obstante, la entrevista a Asael Sepúlveda, dirigente estatal del Partido del Trabajo se dio gracias a la comunicación y acceso por parte del profesor de teoría política contemporánea, el Dr. Alejandro Treviño. A partir de aquel contacto, la entrevista dio lugar en un evento realizado a las mujeres del partido en el lobby de un salón de eventos. Cabe destacar que fue el partido que mayor cercanía tenía con la población indígena.

La segunda entrevista fue a Samuel García, de Movimiento Ciudadano, también obtenida gracias al profesor Treviño. La entrevista fue realizada en las oficinas estatales del Partido y con una duración corta, pero sustantiva en cuanto pautas interpretativas de cómo el partido visualiza a la población indígena. Y por último, la entrevista a Grecia Benavides fue la de más difícil acceso, pues la espera en la oficinas de MORENA fue larga. Empero, la información recabada por los 3 dirigentes estatales fue de suma importancia para el análisis de los datos

5.4.4 Selección de participantes. Entrevistas a Asociaciones Civiles indígenas y pro indígenas y activistas indígenas

Las entrevistas a las distintas personas miembros y presidentes de las Asociaciones Civiles dieron como resultado la posibilidad de contraste y triangulación interna dentro del mismo método. La entrevista realizada a Julieta Martínez, presidenta de Zihuakali Casa de las Mujeres Indígenas, fue producto de la primera aproximación en la Certificación de Intérpretes, pues ella fue una de las personas que se certificó. Fue realizada en las instalaciones de Zihuakali y estuvo llena de buenas intenciones y proyectos que terminaron en una serie de eventos de sensibilización en materia indígena entre Julieta y el autor de la presente entrega en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL y en la Universidad del Valle de México (UVM) campus cumbres.

La segunda entrevista a Asociación Indígena fue la realizada a Galileo Hernández, presidente de la Asociación Nuevo León Árbol de Todas las Raíces. El contacto fue gracias. Humberto Salinas de la SEDESOL quien proporcionó el contacto y se puede establecer la entrevista en las instalaciones de la Asociación Civil. Cabe destacar que la entrevista a Galileo brindó valiosa información esquematizada de cómo la población indígena tiene relación con el Gobierno del Estado.

Después, las entrevistas a Asociaciones pro-indígenas tuvieron lugar. Para tener acceso a Zihuame Mochilla, una de las asociaciones civiles pro indígenas con mayor trayectoria en el Estado, fue necesario entablar el contacto por medio de Humberto Salinas de la SEDESOL. La entrevista fue realizada en las instalaciones de la Asociación Civil y estuvo repleta de historias concretas y específicas de cómo ha sido la situación de las personas indígenas desde el 2000 hasta la fecha. Mientras que la entrevista a la Federación de Estudiantes Indígenas Universitarios, IDECU, presidida por el estudiante de FIME Raúl Pineda, obtenida mediante el profesor investigador de la UANL Víctor Aguirre, otorgó al trabajo de campo una visión amplia en torno al pensar del estudiante indígena universitario y la importancia de la educación en general para la población indígena.

Para finalizar, la entrevista al activista indígena, David Cayetano, surgió después de un evento cultural en la Plaza Fátima del municipio de San Pedro en donde se proyectó el cortometraje Ni Xantolo. En tal evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano por medio de la Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social del municipio. En tal evento, el contacto surgió gracias a Sofía Alanís, Jefa de Proyectos de la dirección, y Jocabet Hernández, en aquel momento voluntaria en la dirección.

En suma, el trabajo realizado para la obtención de las entrevistas, así como las entrevistas mismas, ampliaron la perspectiva del autor de la presente entrega, al tiempo que el compromiso para la posible solución de algunos de los problemas y la sensibilización hacia el problema de investigación aumentó. Por mor del diálogo entre el entrevistado y el entrevistador, los distintos tipos de preguntas permitirán revelar el conocimiento implícito existente para aumentar la validez en la interpretación posterior. Encauzado el conocimiento implícito en forma de respuesta explícita, ayudará en la recogida de datos, pues ya no sólo será dada la interpretación por parte del investigador sino más bien se forjará una estructura metodológica que propicie la reconstrucción de la teoría subjetiva del entrevistado.

5.5 Método segundo. Grupos de enfoque con personas indígenas

Utilizando la herramienta procedimental de los grupos de enfoque se podrá efectuar la interpretación de los datos obtenidos, pues aquellos, los grupos de enfoque, “constituyen una técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa, que reúne a un número limitado de personas desconocidas entre sí y con características homogéneas en relación al tema investigado, para mantener una discusión guiada en un clima permisivo, no directivo” (Kueger, 1991, p. 201).

Advirtiéndolo el ahínco con el que se realizarán los grupos de enfoque, pues además del ahorro de tiempo y dinero que conlleva la realización de éstos, la validez de los datos obtenidos supera en demasía el valor de las muestras representativas dado que los posibles sesgos existentes en la esfera personal de cada cual se verán constantemente confrontados en un ambiente de interacción real y particular; aumentando con ello el alcance que otorga

la interactividad versus los “estudios relacionados con las actitudes, opiniones y prácticas en aislamiento artificial de los contextos en los que se producen” (Flick U. , 2007, pág. 128). De tal manera que los grupos de enfoque contienen por sí mismos un tipo de validez interna, pues como corresponden a una manera de interacción, expresión y producción de opiniones y formas de pensar en la vida cotidiana, rechaza o valida las afirmaciones y opiniones que sean socialmente aceptables y adecuadas a la realidad o las que sean extremistas y alejadas a la realidad según sea el caso.

La negociación resultante en la recogida de datos por el método de grupos focales, otorgará elementos axiales para la construcción de realidad en torno al tema de investigación. De tal forma, el enfoque teórico construccionista será tomado en cuenta a la hora de realizar la interpretación de los datos. A través del programa de tipo CAQDAS (por sus siglas en inglés “Computer-assisted Qualitative Data Analysis Software) –análisis asistido por computadora– como lo es NVIVO10 podremos “comprender, evaluar e interpretar los fenómenos sociales desde la óptica descriptiva e interpretativa apoyándose en la lógica de la teoría fundamentada” (Wright & Hinojosa, 2014, p. 463).

5.5.1 Grupos de enfoque con personas indígenas y los problemas de accesibilidad a la comunidad

Los grupos de enfoque con personas indígenas representaron el mayor escollo en el trabajo empírico de la presente entrega. El mayor problema existente entre la Academia con la población ajena a las Universidades se vio reflejado al momento de contactar a las personas indígenas, pues no es de extrañar la desconfianza y falta de interés con los académicos de las principales Universidades del Estado, dado que desde los 90`s el trabajo de campo, sobre todo los antropológicos, han sido constantes y poco se han reflejado en la solución de los problemas más próximos de la población indígena en la ciudad.

Aunado a ello, la accesibilidad a la población indígena ajena a la Sociedad Civil Organizada, Partidos Políticos y dependencias Gubernamentales, es realmente difícil por cuestiones de 1) trabajo –pues la mayor parte de la población indígena trabaja ya sea como empleadas

domésticas o ya sea en los trabajos de construcción, restaurantes y car wash— y 2) de confianza.

Para contrarrestar lo anterior, se echo mano de los contactos establecidos en la primera aproximación empírica con el sujeto de estudio: la Certificación. Sin embargo, la relación que existía de las personas que fueron a la Certificación con la Organización Civil de Zihuakali era tan estrecha que de un tiempo a acá la mayoría de los que participaron en la Certificación trabajan o eran miembros de Zihuakali; por lo que las personas no cumplían con el principal perfil, además de autoidentificarse como indígenas, para participar en los grupo de enfoque: ser ajenos a Organizaciones Civiles, Partidos y/o Gobierno.

De manera tal que como un segundo intento se recurrió a los Centros Comunitarios considerados Interculturales de la SEDESOL. En éstos, en principio, deberían mantener un mayor y mejor contacto con la población indígena, pues en un radio de 3 km la presencia indígena es considerable. Por ello, en un primero momento se intentó realizar los grupos de enfoque en 4 centros interculturales: 1) San Bernabé, 2) Fernando Amilpa, 3) Arboledas de los Naranjos y 4) Héctor Caballero.

Para establecer contacto con los centros interculturales se hizo el primer acercamiento con Humberto Salinas de la SEDESOL. A pesar de la buena voluntad, disposición y sensibilidad hacia el tema de investigación, la presente tesis y el trabajo de campo derivado de ésta, la propia estructura operativa interna de la SEDESOL impedía que desde la Coordinación de Intervención Intercultural se efectuara el contacto con los centros comunitarios, pues éstos dependen de la Dirección de Centros Comunitarios y la Coordinación de Intervención Intercultural de la Dirección de Desarrollo de Proyectos.

Además, la poca confianza de la población indígena en las instituciones gubernamentales se refleja en demasía con las instancias de la SEDESOL. La problemática funcional de los Centros Comunitarios se vio en la aproximación para la realización de los grupos de enfoque, debido a la falta de interés, conocimiento y voluntad política y operativa por parte de los funcionarios de los Centros Comunitarios. El resultado de esto fue la imposibilidad de hacer los grupos de enfoque por medio de estos centros interculturales por 1) falta de

accesibilidad real y 2) para evitar el sesgo en la información recabada de los posibles participantes.

Una vez agotada la estrategia para el acceso a la población indígena y la realización del trabajo empírico, como un tercero y último intento se dio a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Capital Social. En ésta Dirección, y gracias a la ayuda de las funcionarias: Sofía Alanis Villarreal y Jocabet Hernández, se pudo realizar la aproximación a la población indígena en Monterrey y su Área metropolitana a partir del efecto bola de nieve. Cabe destacar que la población indígena que participó en los grupos de enfoque cumplió con el perfil de estar totalmente ajena a instituciones gubernamentales, partidos políticos, asociaciones civiles, ser mayor de edad y autoidentificarse como persona indígena.

5.6 Diseño de los grupos de enfoque

El primer grupo de enfoque se realizó en la Colonia Canteras que comprende a los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García y contó con la participación de 8 personas: 6 mujeres y 2 hombres. La ubicación fue en la casa de una de las participantes y todas las personas tenían más de 6 años viviendo en la ciudad.

El segundo grupo de enfoque fue realizado en la colonia San Pedro 400. En ésta colonia la concentración de población indígena es considerable; sin embargo, la localización de las casas de la población indígena resulta toda una odisea, pues debido a los problemas de localización y de discriminación, no existe un registro en torno a los lugares en dónde específicamente se encuentra la población indígena. De todas maneras, y gracias a los enlaces del municipio de San Pedro Garza García, se pudo contactar a 6 personas que de igual manera cumplían con el perfil y se llevó a cabo en un centro comunitario del municipio.

El tercer grupo de enfoque se realizó en la Escuela Primaria Cuauhtémoc del municipio de SPGG. Contrario a lo que pudiera parecer, las personas que participaron no son habitantes del municipio, sino, más bien, empleadas domésticas en residencias del municipio y que conservan su domicilio en el municipio de Juárez Nuevo León, principalmente. Empero, y

debido a su condición laboral, tienen a sus hijos estudiando en la única escuela primaria pública cerca de una exclusiva zona residencial y de plazas comerciales del municipio. La participación fue de 8 personas y todas cumplían con el perfil para poder participar en el grupo de enfoque.

Tabla 5. Características de los grupos de enfoque

Grupo de enfoque	Lugar	Participantes
1er	Colonia Canteras	8 personas: 6 mujeres y 2 hombres
2do	Colonia San Pedro 400	6 personas: todas mujeres
3er	Escuela Primaria Cuautémoc (sede en municipio de San Pedro, pero participantes con residencia en el municipio de Juárez)	8 personas: 7 mujeres y 1 hombre

Fuente. Elaboración propia

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DEL VOTO INDÍGENA EN MONTERREY Y SU ÁREA METROPOLITANA

6.1 El Voto como variable dependiente: revisión histórica como pauta interpretativa del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana

Para la revisión de la variable dependiente, en torno al trabajo de campo realizado y la consecuente codificación de los datos recabados, resulta imprescindible establecer que la participación política indígena desde la época colonial estuvo impregnada de ataques e imposiciones sobre la forma en cómo se deberían de organizar política, social y económicamente las personas de los pueblos indígenas establecidos antes de la conquista. Pese a ello, las personas indígenas conservaron los preceptos nodales de organización, así como el cumplimiento de derechos en el régimen colonial (Lee Van Cott, 1994) y, principalmente, a través de rebeliones auspiciadas por líderes indígenas se dio paso al reconocimiento de actores clave en el movimiento indígena en América³⁰ (Ruiz Murrieta, 2003).

Sin embargo, el deterioro de la situación económica y social continuó siendo una constante para las personas indígenas. Llegada la Independencia en la mayor parte de las regiones latinoamericanas, fueron los criollos y los españoles mismos quienes una vez alejados del yugo de la corona española concatenaron una de las mayores empresas que la acumulación originaria pudo perpetuar a partir de los preceptos tomistas de la doble espada: Estado e Iglesia para el enriquecimiento de unos –criollos, blancos, hispanohablantes y europeizados– y el empobrecimiento de otros – indígenas, morenos, cultura y lengua prehispánica–.

³⁰ Los más representativos de la época colonial se pueden revisar en el libro “Historia de las Indias” de Bartolomé de las Casas para los casos del centro y sur de México. Mientras que los líderes Tupac Amaru y Tupac Katari, para los casos de Perú y Bolivia, respectivamente. Y para el imaginario popular mexicano y de muchas regiones latinoamericanas, Emiliano Zapata se considera un líder político cabeza de la Revolución Mexicana al sur del país quien establecía la tierra y la libertad para todas aquellas personas que han sido subyugadas a la represión y esclavitud en México, y que principalmente recaían en la población indígena.

En México el establecimiento de la República significó también la construcción de Instituciones y de Leyes que ayudaban al acaparamiento de poder y riqueza para la clase privilegiada. Mientras se creaban Instituciones como los Ministerios de Agricultura y Tierras que provocaban la ganancia de tierras para los criollos y la pérdida de aquellas para el indígena, al mismo tiempo las leyes se creaban para mantener a los indígenas como una suerte de “sub-ciudadanos con muchas obligaciones y ningún derecho principalmente el derecho a gobernar” (Ruiz Murrieta, 2003, pág. 9).

Además, la Educación se convirtió en un baluarte con amplios márgenes eurocentristas; considerada como un privilegio que solamente era dado para los hispanohablantes, blancos, no-indios, católicos-cristianos y para todos aquellos que se identificaran con los valores morales e intelectuales europeos de la época, la Educación ha sido desde entonces el tópico que disemina a una gran parte de la sociedad mexicana como se verá más adelante. Resultado de lo anterior fue la concentración de poder, privilegios y tierras mediante la identificación de una lengua, de un prototipo de ciudadano y auspiciándose de una visión liberal mexicana que dejaba a tiempos anacrónicos e irracionales a quienes no eran como ellos, a los indígenas.

De tal suerte que para adentrarse en la manera en cómo participa electoralmente la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana resulta acuciante destacar que la cultura política del México republicano, después de la Independencia, sigue marcando la forma de participación de la sociedad en general en cuanto al desconocimiento y falta de información de la población para inmiscuirse en los asuntos políticos nacionales. Mientras que desde entonces la población indígena significó una amenaza para la homogeneidad nacional, al grado de que en México se establecieron los principios de asimilación/integración de la población indígena, provocando invisibilización cultural de una considerable parte de la población (Brysk, *Acting globally: Indian rights and international politics in Latin América*, 1994).

Una vez considerado lo anterior, es preciso señalar que la Educación, las Instituciones y las Leyes siguen siendo elementos axiales para la participación política indígena en Monterrey.

Y que en torno a esos elementos es que la interpretación siguiente sobre el voto indígena en Monterrey se llevará a cabo.

Animados por la racionalidad iluminista, los liberales mexicanos, incluidos los propios indígenas que llegaron a ocupar posiciones directivas en el sistema Educativo indígena en México como lo fue el Rector de origen indígena, Juan de Dios Rodríguez Puebla, del Colegio de San Gregorio, optaban por una visión homogénea de la población indígena. Aquello significó que para el funcionario mexicano sólo existía un tipo de ciudadano: el mexicano, promoviendo con ello –quizá facilitando durante un tiempo– un actuar institucional e incluso legislativo que fue desarrollándose sin distinciones culturales, de lengua, políticas y organizacionales.

Semejante empresa tuvo como principal escollo la irrupción desde la década de los 90's del movimiento indígena zapatista que reanudaba el debate público de la autonomía y el reconocimiento de derechos de la población indígena en México. Sabiéndose mexicanos, pero también reivindicando los derechos colectivos, sobre todo los encaminados a la autonomía en sus formas de gobierno que les fueron arrebatados desde la conquista, la población indígena en México por primera vez en la historia del país encuentra cabida en la Constitución mexicana a partir de los principios del pluralismo jurídico.³¹

Aparecen a relieve, como se mencionó con anterioridad, cuatro elementos que permitirán la interpretación de los datos obtenidos en el trabajo de campo:

- 1) El papel de la educación
- 2) El papel de las Instituciones
- 3) La operatividad de la Leyes

³¹ Cabe destacar que la reforma constitucional del artículo 2 en el año 2000 se considera el punto de partida para que el pluralismo jurídico pueda ejercerse en México. No obstante, es preciso señalar que la población indígena, al tiempo en que le fueron brindados los derechos de autonomía y el reconocimiento de los Usos y Costumbres como una forma de gobierno, se les consideró entidades de interés público y no sujetos de derechos. No es objeto de la presente entrega realizar cavilaciones sobre aquello, pero sirve de clave interpretativa en cómo las leyes en México, y la interpretación de ésta, comprenden y entienden la dinámica político-social indígena en el país.

4) Aspecto de homogeneidad

Ante tales elementos, el análisis interpretativo de las entrevistas y grupos de enfoque harán su curso. Para que la lectura se torne esquemática, el presente apartado se dividirá en cuatro secciones –una para cada elemento antes señalado– y al final se presentará una sección que sintetice los principales hallazgos, así como el punto de partida para la interpretación de las variables independientes.

6.2 El voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana: la Educación, las Instituciones, las Leyes y la Homogeneidad como elementos axiales del voto indígena.

A través de los modelos sociológicos de decisión del voto (Berelson, Lazarsfeld, & Macphree, 1954; Lipset & Rokkan, Party systems and voter alignments: cross national perspectives, 1967; Butler & Stokes, 1971; Verba & Nie, Participation in America: Political democracy and social equality, 1972), y sobre todo la escuela de Columbia (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 1944), se estipuló que los individuos tenían diferencias que les hacían contener recursos tan específicos que provocarían ya sea la participación o ya sea la abstención en los asuntos políticos y en la política de cada región. De tales recursos se pueden reconocer los que responden a los niveles socioeconómicos del tipo: edad, género, ocupación, clase social, ingresos, educación, entre otros; al tiempo que aparecen variables del tipo estructurales-contextuales que hacen que las personas voten.

Entre estos últimos se pueden encontrar las orientaciones de corte cognitivo en donde el bagaje de conocimiento político, principalmente, se encuentra relacionado con el nivel de educación y las estructuras de socialización política que principalmente son brindadas por las escuelas en donde la información y redes de comunicación se amplían en torno a la participación política, en este caso por medio del voto indígena.

De tal manera que el voto indígena en Monterrey se encuentra espoleado por cuatro actores principalmente: 1) Partidos Políticos, 2) Instituciones Gubernamentales, 3) OSC y 4) Academia. Tales actores responden a las grandes teorías del voto: Teoría racional, la identificación partidista apegada al modelo psicologista del voto y los Modelos sociológicos

del voto. Por lo tanto, la interpretación del voto queda supeditada a los actores mencionados, así como en apego a las teorías y modelos señalados.

6.2.1 La falta de información en torno al voto indígena en Monterrey y el desconocimiento del registro para votar

En México el principal requisito operativo para sufragar recae en la portación de la Credencial de Elector, otorgada por el Instituto Nacional Electoral (INE) antes Instituto Federal Electoral (IFE), el día de las elecciones. En tal credencial, que sirve como identificación oficial como ciudadano mexicano, está estipulada información como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de residencia y distrito electoral. Lo anterior significa que la persona solamente puede ejercer su derecho al voto en el lugar en donde está su residencia/domicilio, a excepción de cuando las personas se encuentran en tránsito al interior del país pueden ejercer el voto en “casillas especiales” que instala el INE; sin embargo, estas casillas son pocas, el número de boletas son reducidas y solamente pueden establecerse para las elecciones presidenciales.

La falta de información sobre la participación electoral indígena en Nuevo León se encuentra promovida por la situación, o creencia, de que las personas indígenas van a Nuevo León – a Monterrey y su Área Metropolitana principalmente– solamente a trabajar. Es decir, que no se asientan en la ciudad y que no construyen tejido social que incentive la participación electoral. Esto se puede reconocer por parte de los actores institucionales representados en los partidos políticos e instancias de gobierno, principalmente:

“No tengo el dato de las personas indígenas que hayan votado en las anteriores elecciones, pero te digo muchas personas vienen de fuera solamente a trabajar en el municipio pero pues ellos votan en su municipio...no tengo el dato así exacto de personas indígenas que hayan participado en procesos electorales”. (Entrevista realizada a informante clave del gobierno municipal)

Lo anterior contrasta con la realidad jurídica de la población indígena en Nuevo León, pues desde 2012 se promulga la Ley de Derechos de Personas Indígenas en Nuevo León y con

ello sienta el precedente de que en el Estado hay personas de segunda y tercera generación, hijos de migrantes indígenas, pero que ya nacidas en el Estado y autoidentificadas como indígenas. Esto supone una bomba teórica y empírica sobre cómo abordar el fenómeno electoral indígena en Monterrey, pues con ello la visión de cómo interpretar el fenómeno de participación política se torna amplia, como bien lo menciona otro informante clave entrevistado de la SEDESOL:

“puedes o no atender a la población indígena, pero la población va a seguir viniendo, y ya empiezan otros contextos”. (Entrevista realizada a informante clave de la SEDESOL)

Y con esto pareciera que la falta de información no solamente se encuentra de lado de la población indígena, pues los Partidos Políticos en Nuevo León –obsérvese que en las democracias electorales los partidos han sido durante mucho tiempo la única vía para delegar el poder a representantes por medio del voto a un candidato auspiciado por un partido político– aún no asimilan esos cambios y esos nuevos contextos en donde las variables explicativas del comportamiento electoral se encuentran en las bases sociales de los partidos que están conformadas por los ciudadanos/electores (Sáez Lozano, 2002) y los Clivajes Políticos de corte centro-periferia, indígena/no-indígena, entre otros, parecieran no existir al momento de diferenciar las variables explicativas del comportamiento electoral de los grupos sociales a quien por antonomasia deberán de representar tanto en los ayuntamientos como en la cámara legislativa local:

“hay mucha gente que todavía tiene la credencial de elector del Estado de donde viene y así pueden pasar diez años, quince años y no la cambian o no la renuevan y eso es algo muy importante porque al final de cuentas tenemos datos incorrectos de la gente que vive aquí y de la gente que está en el padrón, de la gente que necesita ciertos servicios, entonces creo que eso es algo muy importante para quien quiera tener un proyecto de gobierno, quien quiera ofrecer un proyecto de gobierno en el Estado de Nuevo León”. (Entrevista a informante clave de Partido Político MORENA)

“hay muy marcados polígonos de pobreza de cinturones donde están llegando de otros estados muchos este migrantes o con descendencia indígena, y quizá a la práctica deberías de darles a alguno de ellos la candidatura porque hay mucha población de esa pero registrados no hay nada o mínima entonces pues bueno es un avance pero va a estar muy complejo, sobre todo que aquí a nivel local la comisión electoral o a nivel nacional el INE pueda detectar que efectivamente se cumplieron esas cuotas”. (Entrevista a informante clave de Partido Político MC)

Si bien es cierto que la participación política en México es baja, el marginalismo integral en el que se encuentra la situación de las personas indígenas en Monterrey se acentúa, pues como lo indica el informante de la SEDESOL, “si para el grueso de la población es complicada la participación, en las comunidades indígenas se acentúa por el desconocimiento de la ley, de los términos de lenguaje, de los tiempos de la organización se complica”. (Entrevista a informante clave de la SEDESOL)

Y es precisamente en ese desconocimiento de la ley, de los derechos individuales y colectivos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo segundo y en la Ley de Derechos de Personas Indígenas del Estado de Nuevo León, que no existe una sinergia entre los Estados de la República. Pues por un lado se tiene a los Estados en donde se encuentran las comunidades indígenas de origen y mantienen el derecho sobre todo de las tierras comunales, y por otro lado se tienen a los Estados que reciben o recibieron en algún momento migración indígena y la figura de tierra comunal no existe. Es decir, esto torna compleja la participación electoral indígena en Monterrey, pues si recapitulamos que el principal requisito operativo del voto es el registro en el padrón electoral que se realiza en función de la residencia, se da cuenta que el derecho a la tierra comunal se ejerce en función de ese mismo principio, lugar de residencia:

“Entrevistador: Eso que mencionas de la credencial de elector que la persona de una comunidad indígena que radica en otro Estado le da derecho de pertenencia a la tierra

Entrevistado: Si, mantiene sus derechos parte de la tierra, porque es un en las comunidades es una propiedad comunal, si tu te vas de tu casa y no avisas o sea esa tierra se devuelve al grueso de la población, no hay propiedad privada”. (Entrevista a informante clave de OSC, Nuevo León Árbol de Todas las Raíces)

Con lo anterior se tiene por sentado que, si la población indígena no mantiene su credencial de elector actualizada en función de su estado de residencia, en gran parte radica en el hecho de que la propiedad comunal de su lugar de origen se encuentra amenazada por la pérdida de derechos comunales. Además, se antoja sencillo observar que si la propiedad comunal pierde no habría mayor problema, pues su lugar de residencia ya no se encuentra en la comunidad; sin embargo, resulta todo lo contrario, pues las concepciones de pertenencia a la tierra, de la familia y del lugar en donde las personas se establecen después de la vida terrenal, se encuentran sumamente arraigadas en la población indígena como se muestra a continuación:

“todos tenemos familia allá y algún día vamos a ir allá a vivir; aquí no tenemos casa, estamos rentando”. (Grupo de enfoque realizado con personas indígenas)

“y como nosotros estamos aquí, pero pues aquí tenemos la casa donde vamos a vivir vivos. Por ejemplo, dice mi hijo que ya no se quiere ir, le pregunto que por qué, le digo “pues entonces si ya no te quieres ir, compra donde te quedes para toda la vida porque aquí nada mas tenemos esta casa, pero es porque estamos vivos”. (Grupo de enfoque realizado con personas indígenas)

Es decir, la Cultura, en tanto variable socioestructural que explica el voto de acuerdo con la el modelo sociológico del voto (Lipset & Rokkan, Party systems and voter alignments: cross national perspectives, 1967; Lagroye, 1994), tiene un arraigo visible en la operabilidad del derecho al sufragio indígena en Monterrey. Ya no se trata simplemente del hecho instrumental del cambio de domicilio para registrarse en el padrón electoral de Nuevo León, sino que aspectos tan arraigados de la cultura indígena se tornan imprescindibles para poder hacerlo:

“Ya me acorde de una propuesta que hizo una compañera, que a esa sí le encontré mucho sentido y lógica... Dijo que haya cementerios para que nuestras comunidades o personas de comunidades indígenas puedan sepultar a sus muertos, al principio yo la sentí fuera de lugar, no se como lo tomaría las autoridades y la sociedad indígena un cementerio para la población indígena, después cuando lo trabajamos en el Convenio con la fundación de apoyo funerarios analicé más el tema y me di cuenta que no es porque antes no lo haya leído o escuchado, pero sé que el arraigo de las familias y de las comunidades se construye y la identidad también, se construye a partir de la relación con la tierra y los ancestros todo lo que hay en la tierra, abajo del territorio, los cerros los manantiales, los lugares sagrado, el medio ambiente, los espíritus o los seres sobrenaturales que piensan ellos que habitan en esos paisajes y los fenómenos natural asociados a la subsistencia del grupo y cuando los seres queridos son sepultados en la tierra es a donde se vive y donde hay todo esos elementos asociados al territorio cosmogónico o histórico en donde se ha vivido entonces se crea un vínculo o permanece un vínculo fuerte”. (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, CDI)

Si observamos que para los partidos políticos y para las instancias gubernamentales uno de los principales escollos a que se enfrenta el voto indígena en las elecciones municipales, de diputados locales y a gobernador es la actualización de la credencial de elector, pareciera que jamás se ha tomado en cuenta el arraigo cultural que está detrás de ello. Si por un lado se tiene un artículo constitucional que reconoce los Usos y Costumbres de la población indígena y una ley estatal que recoge esos principios, por otro lado, ese derecho choca con la normativa instrumental de la ley. Desde 2012 que fue promulgada la ley de derechos de las personas indígenas en Nuevo León, hasta el año en que se realiza el presente análisis, 2018, ninguna instancia ha revirado hacia cómo compaginar esas diferencias instrumentales para garantizar el voto indígena en el estado.

La ausencia de un padrón que identifique a la población indígena en el Estado ha servido de excusa para la postulación de candidatos o el cumplimiento de cuotas por parte de los partidos políticos. Es decir, una vez más la operatividad de la Ley se queda rezagada por

las diversas particularidades en las que vive la sociedad mexicana, y en especial la población indígena en un contexto tan adverso como lo es Nuevo León y, específicamente, Monterrey y su Área Metropolitana:

“se ha visto reflejado en leyes electorales de hecho ya en esta legislación en esta elección 2018 va a haber unas cuotas mínimas para acomodar en algunos distritos federales y locales a pues ciudadanos con raíces indígenas; sin embargo, ya en la práctica hay una gran complejidad porque esas cuotas son con base en quienes están registrados en el estado”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, MC)

Empero, también está la otra cara de la moneda en torno al requisito de la portación actualizada de la credencial de elector. Como bien se pudo recaudar en los datos obtenidos de los grupos de enfoque, en Monterrey y su Área Metropolitana habitan personas indígenas que ya tienen actualizada su credencial de elector. Sin embargo, el sufragio en la entidad difícilmente es dado y se pudieron reconocer dos motivos principales: 1) falta de información y 2) los tiempos de organización de las elecciones.

“Entrevistado 8: no yo nunca he votado

Entrevistador: ¿por qué?

Entrevistado 8: porque no se donde hay casillas, nunca me entero. Siempre estoy trabajando y mi salida es sábado y domingo, ¿cuándo me voy a enterar? Y regrésate el domingo porque el lunes hay que levantarse temprano, no me entero de nada

Entrevistador: ¿pero tiene la credencial de elector?

Entrevistado 8: sí, sí la tengo

Entrevistador: ¿de aquí de nuevo león?

Entrevistado 8: no tengo seguro, no tengo nada

Entrevistador: ¿y partidos políticos no se han acercado?

Entrevistado 8: nada nada”. (Grupo de enfoque realizado a personas indígenas)

Lo anterior responde a la falta de información. Y como se puede observar, también la incertidumbre que se tiene con respecto al trabajo; aunque más adelante se mencionará y se analizará con mayor claridad, la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana mantienen trabajos que socaban sus derechos laborales y ello hace que las prioridades sean otras muy diferentes a las de la participación en las elecciones, tal y como lo menciona el informante clave de la SEDESOL:

“Su prioridad es primero comer, después su familia, y después preservar su identidad y, en un ultimo paso bueno. Cómo me comprometo con la comunidad”.
(Entrevista a informante de la SEDESOL)

El segundo motivo, como se señaló antes, consiste en la poca compaginación de los tiempos electorales con los tiempos de las personas indígenas que aún siguen manteniendo un vínculo fuerte con su comunidad. Por ejemplo, las fiestas tradicionales y la temporada vacacional de la escuela coinciden con las fechas de elecciones. Esto hace que, a pesar de mantener la credencial de elector actualizada, las personas indígenas no se encuentran en la ciudad el día de la elección:

“tenemos de la credencial de aquí de Nuevo León, como hace poco fuimos en las votaciones

Entrevistador: ¿se fueron a Tamazunchale?

Entrevistado 7: sí, fuimos a votar pero nada mas al de México” (Grupo de enfoque con personas indígenas)

Lo anterior se puede notar de manera muy superficial en algunos trabajos antropológicos realizados en torno a la migración indígena a Monterrey en los 90's y la creación del Departamento de Educación Indígena³² (Durin S. , 2007), pues el regreso de las familias a su

³² Se agradecen las aportaciones mediante pláticas sobre el proceso, las ideas seminales y hasta el esbozo del proyecto de educación indígena para después consolidarlo a departamento por parte de Arturo Alemán y José Mendoza.

lugar de origen en ocasiones no empataba con los ciclos escolares. Sin embargo, esto no es exclusivo de Monterrey, pues Aguilar, Pintado y Trejo (1999) en sus recomendaciones al entonces IFE destacaban que la organización de las elecciones, para el caso del sufragio y participación indígena desde el proceso electoral hasta la culminación en el voto, deberían tener tiempos formales diferenciados, pues las diferencias materiales y culturales influían en la participación electoral indígena en México.

6.2.2 El clientelismo electoral en Monterrey y su Área Metropolitana. La compra de voto como generador de desconfianza y falta de interés en la participación electoral indígena

La compra de voto y el clientelismo electoral en México ha sido abordado desde múltiples aristas que van desde las que sitúan a las prácticas clientelares por motivos contextuales de dominación, hasta las que son “mantenidas por cooperativamente entre patrones y clientes a pesar de las asimetrías” (Trotta, 2003, pág. 24) y se basan en un intercambio entre el apoyo ciudadano por bienes y servicios por parte de la esfera política-institucional y se ejecuta principalmente a través de la maquinaria territorial de los Partidos Políticos (Kitschelt & Wilkinson, 2007). Así, el clientelismo en México puede ser abordado desde trabajos que identifican los factores que favorecen el intercambio entre patrones y clientes como los de Aparicio (2002), Aparicio y Corrachano (Aparicio & Corrochano, El perfil del votante clientelar en México durante las elecciones de 2000, 2005) o Vilalta (2007) (2007), hasta los rasgos y la magnitud que conlleva los resultados para los ciudadanos que aceptan el intercambio clientelar como los trabajos de Tapia y Gatica (2016), o los que se centran en el lazo afectivo y de solidaridad recíproca de los mediadores delegados por el patrón y el cliente como el trabajo de Auyero (1997).

Sin embargo, para la presente entrega –que no tiene como finalidad explicar el clientelismo en Monterrey y su Área Metropolitana– se entenderá por clientelismo a “la captación de soporte político ciudadano (el voto o bien un espectro más amplio) por medio de la entrega de bienes (tangibles e intangibles) con criterios de selectividad orientados por intereses políticos” (Tapia y Gatica, 2016, pág. 508) y se reconocerán los 3 principales actores del clientelismo en México: patrón, mediador y cliente, así como el vínculo que hay entre el

clientelismo con los grupos de presión relevantes y la clase económicamente fuerte (Hernández E. , 2006, pág. 136).

Teniendo en cuenta lo anterior, el clientelismo indígena en México se encuentra vinculado a 1) la dispersión y marginación de la población indígena, 2) carencia de contrapesos formativos en torno al voto, y 3) conflictos en la organización y puesta en marcha de las jornadas electorales que hacen de la coerción por parte de líderes y partidos políticos una constante en las comunidades indígenas (Educativos, Proyecto de sistematización de la información existente sobre la participación electoral de los pueblos indígenas, 2013, pág. 79). Con todo, se dispone ahora el curso del presente apartado dilucidar cómo se ha desarrollado el voto indígena tomando en cuenta los procesos clientelares de la compra del voto y cuáles son sus principales actores.

Para ello, es preciso señalar que son los partidos en Nuevo León quienes de manera expresa dan a conocer su poco interés y la falta de información en cómo es el voto indígena; además de vislumbrar que no tienen una agenda política indígena en el Estado y que los estatutos del partido a nivel local, en cuanto acciones afirmativas en materia indígena, no se cumplen. Lo anterior se puede reflejar en las siguientes citas textuales del trabajo de campo realizado a los dirigentes estatales de los tres partidos a los que se tuvo acceso:

“En cuanto a participación electoral no hay una participación organizada como grupos indígenas”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, PT)

“La gente lo sabe, que, que hay compra de voto, que hay compra de voluntades... estos partidos utilizan estos delitos electorales para tener votos y trafican con la pobreza... aquí en Nuevo León hay zonas muy clientelares de voto duro... pero eso no solamente corresponde a un partido sino también al gobierno, a los tribunales como tal, como a los órganos electorales y creo que también la responsabilidad ciudadana de las personas de que si vemos algún delito pues lo tenemos que denunciar”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, MORENA)

“tenemos grupos muy importantes de grupos indígenas en el norte de Monterrey, el Escobedo y el García que no eran tomados en cuenta, porque desgraciadamente los partidos tradicionales, llámese PRI, PAN, todo lo ven en relación con el voto, cuando llegaban a estas zonas y veían que esta gente ni credencial tiene y no iban a votar eran totalmente desairadas”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, MC)

Se puede observar que para los tres partidos políticos entrevistados el voto indígena 1) no existe y no importa por mor de la falta de credencial de elector y 2) si se da el voto indígena el partido no es consciente de ello, pues la movilización del voto se da en función de las zonas marginales en los cinturones de pobreza de Monterrey y su área metropolitana, como lo menciona la Organización de la Sociedad Civil Nuevo León Árbol de Todas las Raíces:

“así como muchos sectores vulnerables siempre, el grueso de la población indígena ha servido como botín electoral únicamente a pesar de tener uno de los elementos muy importantes de la organización indígena”. (Entrevista a informante clave de OSC)

Y de igual forma en Monterrey y su área metropolitana se tiene identificado a un partido político en específico que por su cercanía territorial a una zona donde existe asentamiento indígena otomí desde hace ya varias décadas, según comenta el informante clave de la CDI:

“Como todo en la sociedad cuando hay procesos electorales participan de una manera más o menos importante no tan articulada, es decir no son organismos u organizaciones que busquen acomodarse en algún movimiento político salvo en algunos casos de asentamientos que están vinculados más a determinado partido político”. (Entrevista a informante clave de la CDI)

Sin embargo, es tanta la tradición del clientelismo en México por parte de los partidos políticos que las personas participantes en los grupos focales hacían referencia a las distintas formas en cómo es que los partidos se acercan para tratar de convencer y movilizar el voto:

“Entrevistador: ¿y partidos políticos se han acercado?

Entrevistado 8: nada nada. Nada mas cuando quieren los votos y ya, nos prometen en campaña y nomas no

Entrevistado 2: me los topé y ya me dieron besos, y “bueno pues tú quien eres” y “¿no me conoces?” y le digo “no” y me dice “te regalo esta playera”

Entrevistador: ¿y ubicas de que partido era?

Entrevistado 2: no

Entrevistador: pero solamente para pedir el voto

Entrevistado 2: pero o sea viene con cariño, hasta me da besos y ni lo conozco, luego dijo que votara por él pero ni supe quién

Entrevistado 1: andaban dando mochila

Entrevistado 2: mochilas y playeras”. (Participante en grupo de enfoque)

Además, una vez que reconocieron las diversas formas en que se pretende persuadir para obtener el voto por parte de los partidos políticos en Nuevo León, las mismas personas participantes en el grupo de enfoque dieron cuenta de que la larga tradición del clientelismo –tanto en sus comunidades de origen como en Monterrey y su área metropolitana– está ejercida por intermediarios y/o mediadores y que son éstos los que generalmente conservan los mayores beneficios en ese intercambio de voluntades y bienes tangibles e intangibles, como se mencionó con anterioridad:

“eso pasa allá en el rancho, “vas a votar por tal persona y si gana pues te traigo algo”, o sea si gana pues con él gana “no pues yo ando con tal persona, vota por él”, tú no ganas nada y la persona que anda con él es el que va a ganar

Entrevistador: ¿son de partidos políticos?

Entrevistado 5: sí, igual aquí, la persona que te convence a votar por ese partido es el que le va bien

Entrevistador: ¿y ustedes que opinan de eso?

Entrevistado 1: está mal porque pues es la persona que va a elegir, pues es secreto”
(Participantes en grupo de enfoque)

Por lo tanto, se puede entrever que la participación electoral indígena se encuentra totalmente desapercibida en la esfera político-partidista en Monterrey y su área metropolitana. Además, es urgente señalar que existen dos actores clave más que deberían estar promoviendo el que es considerado uno de los mayores derechos políticos de todo habitante en el país: el voto; son escasos los trabajos en la materia y en el siguiente apartado se dará cuenta de ello. Y si a lo anterior se le añade que por motivo de la promulgación de la ley de derechos indígenas en el Estado de Nuevo León las personas indígenas tienen el derecho sustantivo de 1) darse a sus representantes dentro del municipio en donde habitan y 2) participar en los planes municipales y estatales de desarrollo, y todo ello de acuerdo con normas, procedimientos o prácticas tradicionales, la participación electoral indígena en monterrey y su área metropolitana deberá de ser abordada desde diversas trincheras y a través de múltiples actores clave en el respeto, garantí, promoción y salvaguarda de los derechos políticos indígenas.

6.2.3 Los líderes indígenas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil y su relación con el voto indígena en Monterrey. Una aproximación desde los actores clave

Como se señaló con anterioridad, para la presente entrega se tienen considerados cuatro actores clave en la participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana: partidos políticos, academia, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y líderes indígenas, e instituciones gubernamentales. Por ello, es que la aproximación a través de estos actores en torno al voto indígena se vuelve imprescindible para conocer cómo se da el voto indígena.

Para comenzar se prescindirá de los partidos políticos, pues ya se observó en el apartado anterior la poca relevancia que hay en éstos para el ejercicio del voto indígena y las instancias gubernamentales se dejarán para un último apartado. Lo que ahora toca analizar es cómo los líderes indígenas, OSC y la academia interactúan con la problemática del voto indígena y promueven el cumplimiento de un derecho primigenio para todo mexicano.

Y bien, para comenzar se tomará como punto de partida que a pesar de que existen liderazgos indígenas en la ciudad, son pocas las acciones que incentiven el voto indígena. Por ejemplo, los académicos cercanos al fenómeno indígena en Nuevo León, y pioneros en la promulgación de la Ley, establecen que la participación política indígena está muy marcada por la falta de interés y cierto corporativismo por parte de los líderes indígenas; la problemática comienza cuando se reconocen que existen personas indígenas que se autoidentifican como líderes pero que el resto de la población indígena no los reconoce como tal. Para ello, basta dar cuenta de las siguientes aproximaciones al tema por parte de un académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL):

“la participación política, también como suele suceder y no solo es exclusivo a la población indígena sino también a la población mestiza... también esta tejida desde elites, es decir, no necesariamente es de que todos los indígenas participen en la búsqueda de una mejora social, una mejora económica, una mejora en función de sus derechos sino que necesariamente muchas de esas organizaciones actúan a través de liderazgo, a través de ciertas elites o incluso, no necesariamente este grupo de población reconociendo a estos liderazgos , simplemente son, como en la sociedad mexicana, actúan a partir de cierto corporativismo como mucha de la sociedad mexicana”. (Entrevista a informante clave de la academia, UANL)

Por lo tanto, se puede reconocer que existen liderazgos que ora motivan ora desalientan el voto en la población indígena en Monterrey y su área metropolitana. Como toda comunidad política, en la población indígena no es ajena al surgimiento de líderes que en ocasiones pueden convertirse en los mediadores de los que se comentó en el apartado anterior. El problema de aquello radica en que, como antoja el trabajo de campo dilucidar, los líderes

indígenas ya están bien identificados, así como su falso liderazgo para concatenar las demandas de la población, así como la generación de una agenda política indígena a otras esferas más institucionales de la política en Nuevo León:

“más bien no tienen ubicados a buenos líderes, que están en pro de la comunidad, sino más bien líderes que han aprendido de la política que han visto de los entonces las, esos espacios que abre el Estado generalmente van con los, estos líderes que dices que en ocasiones no representan los intereses de la comunidad verdad, que son líderes indígenas sí, pero que no, no representan a la población indígena”.
(Entrevista realizada a informante clave de OSC, Zihuatli)

Entonces, el papel del líder resultará imprescindible para entender el voto indígena. También, los esfuerzos incluso por las OSC han sido escasos sino es que nulos en materia de participación electoral, pues a pesar de que reconocen que el voto indígena en el Estado está supeditado a una red clientelar y de compra de votos como se puede observar en la siguiente cita:

“El tema de compra de votos es un tema que también digamos, con el apoyo de alianza cívica hemos hecho algunas observaciones electorales con apoyo económico en procesos electorales previos, principalmente se da a través de la coacción el programa social”. (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Es decir, la mayoría de los actores están conscientes de que existe un clientelismo, pero son pocas las acciones que se tienen para contrastar aquello. Además, aparece a relieves una variable que puede aproximar el análisis al por qué de la escasa participación o la falta de información sobre el voto indígena: una agenda política indígena en Monterrey y su área metropolitana. Será tema del siguiente apartado, sin embargo cabe destacar que las variables aquí establecidas en torno a cómo se da el voto indígena serán abordadas de manera más específica en la sección de variables independientes de la presente entrega.

6.3.4 La homogeneidad y la agenda política indígena como pauta interpretativa del voto indígena en Monterrey y su área metropolitana

Una de las principales pautas interpretativas en torno al voto indígena en Monterrey y su área metropolitana es cómo es que la homogeneidad desde tiempos anacrónicos ha ido avanzando de la mano con la forma en que las Instituciones reconocen los derechos indígenas. Es decir, la forma en cómo se da el voto indígena en Monterrey y su área metropolitana está supeditada a la concepción de que la población indígena y sus formas de participación no encuentran diferencias a la forma y el derecho de participar de la población no indígena. Siendo esto un prominente error, pues desde 2001 a nivel nacional, y 2012 a nivel local, se ha reiterado que las diferencias culturales provocarán diferencias políticas y la atención institucional deberá enfocarse y operar en función de esto.

La homogeneidad, como se mencionó con anterioridad al comienzo del presente capítulo, ha sido el resultado de procesos que intentaron asimilar la cultura indígena con la no-indígena en México. Para el caso de Monterrey y su área metropolitana esto es sumamente relevante, pues el fenómeno de participación y representación política diferenciada –al menos por la ley– ha tenido como acicate el reconocimiento jurídico de la población indígena en Nuevo León apenas en 2012.

Tal homogeneidad se puede reconocer en el discurso de los dirigentes estatales de los tres partidos políticos a los que se tuvo acceso. Por ejemplo:

“también otra cosa muy importante, mira nuestras comunidades indígenas pues ya no se distinguen por un vestuario especial o porque estén agrupadas de cierta manera, tienden a mezclarse con, con las zonas mestizas entonces comparten problemáticas urbanas de inseguridad, o de desempleo o de falta de acceso a la educación, entonces no hay una problemática de que sea que afecte a los indígenas y nada más a los indígenas, sino que afecta a comunidades enteras”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, PT)

“te digo es que MORENA es un partido que, que integra todos los sectores ¿no? nosotros promovemos la participación de TODA la ciudadanía ¿no? aunque tenemos

una secretaría específica que atiende estos temas, , si nosotros no tenemos distinción a la hora de estar trabajando en la comunidad”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, MORENA)

“el tema electoral va a estar complicado... ya hay muy marcados polígonos de pobreza de cinturones donde están llegando de otros estados muchos este migrantes o con descendencia indígena, y quizá a la práctica deberías de darles a alguno de ellos la candidatura porque hay mucha población de esa pero registrados no hay nada o mínima entonces pues bueno es un avance pero va a estar muy complejo”. (Entrevista a informante clave de Partido Político, MC)

De lo anterior se puede recalcar que gran parte de la falta de información sobre cómo es el voto indígena en Monterrey y su área metropolitana se debe a que no existe una diferenciación por parte de los Partidos Políticos en el Estado en cuanto a una agenda política indígena propiamente por parte de aquellos. Es decir, se torna difícil empresa el reconocer cómo se da la participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana, pues la principal vía de participación electoral se encuentra en los Partidos Políticos; y si éstos carecen de trabajo territorial diferenciado, así como de una agenda política indígena, a ello se le sumará la homogeneidad, tanto conceptual como operativa, de la institución encargada de organizar las elecciones: la Comisión Estatal Electoral (CEE):

“por el lado de la Comisión Estatal Electoral, en este tiempo no ha tenido una política pública específica para población indígena sin embargo si tiene una política pública, por ejemplo para los centros comunitarios para, para ofrecer programas ahí principalmente de formación de conocimientos...hay centros comunitarios que tenemos identificado donde hay población indígena eso no significa que haya un tratamiento especial... independientemente del grupo social nosotros ofrecemos los cursos con la intención de que la población pueda reconocer derechos, pueda reconocer obligaciones ¿no?”. (Entrevista a informante clave de la CEE)

La participación electoral indígena en Monterrey, resumida solamente al ejercicio del voto³³, encuentra múltiples escollos institucionales, operativos, de reglamentación, de información, de interés, confianza, entre otros. No es motivo del presente capítulo escruidiñar las variables explicativas y descriptivas de la baja participación electoral indígena; sin embargo, la exploración sobre cómo se da el voto indígena trajo consigo la aparición de variables emergentes y la posibilidad de aproximación al fenómeno del voto a través de las variables independientes previamente estipuladas. Esto, será materia de interpretación más adelante.

6.3 A manera de conclusión. Esbozos del voto indígena en Monterrey y su área metropolitana

La participación electoral indígena en Monterrey está permeada de múltiples factores que obstaculizan el ejercicio pleno del derecho a votar. Las adversidades en la que se encuentran las personas indígenas en Monterrey para ejercer el voto, van desde la falta del empadronamiento hasta la carencia de una agenda política indígena por parte de los principales actores institucionales, pasando por la falta de interés, desconfianza y la compra de voto y/o clientelismo electoral por parte de algunos líderes indígenas.

Para contestar la pregunta general de investigación, que versa sobre ¿cómo se ha desarrollado la participación electoral de las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana?, resulta esclarecedor que en esta primera aproximación un tanto exploratoria en torno a cómo se da el voto indígena, aparezca a relieve que el voto indígena, en caso de que se de, se encuentra con múltiples problemas y una serie de actores clave e institucionales que poco interés presentan en la diferenciación cultural y en las particularidades de la democracia en México.

Por ello, esbozaremos de manera puntual las conclusiones a las que se llegó:

³³ No se pretendió indagar en torno a la participación en el proceso electoral en cuanto a la organización. Sin embargo, el trabajo decampo realizado a los actores institucionales y a la población indígena en Monterrey reflejan poca participación en el tanto al voto y un desconocimiento tanto institucional como de personas indígenas sobre la inclusión de personas indígenas en los procesos electorales más allá del voto.

- Cuando el voto se ejerce, la población indígena lo hace con desconocimiento de causa debido a la falta de información
- No existe una agenda indígena por parte de los Partidos Políticos ni de las Instituciones encargadas de promover el voto
- Existen problemas de clientelismo político por parte de los Partidos Políticos y líderes indígenas con la población indígena en Monterrey
- La homogeneidad por parte de las Instituciones políticas en lugar de incentivar el voto provocan mayor desconocimiento político
- La academia se encuentra ajena al fenómeno de participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana
- En materia electoral no existe armonización entre los Usos y Costumbres, como el derecho comunal de la tierra en el lugar de origen, y los requerimientos instrumentales para el voto como lo es la credencial de elector
- La falta de un empadronamiento indígena en Monterrey obstaculiza la participación electoral, pues en términos cuantitativos invisibiliza la urgencia de una agenda indígena y lo urgente de la diferenciación para la salvaguarda de derechos políticos indígenas en Monterrey y su área metropolitana
- La falta de circunscripciones electorales indígenas provoca el rezago en materia electoral de la población indígena en Monterrey, pues no habiendo acciones afirmativas ni cuotas para elección de candidatos dentro de los partidos, la falta de delimitación electoral con carácter indígena supone un problema más para la participación electoral indígena

En suma, la baja participación indígena en Monterrey y su Área Metropolitana tendrá que explicarse de manera transversal. Los múltiples actores involucrados, así como la interpretación de la Ley, tornan del fenómeno electoral indígena un tema que precisa de nuevas formas de abordar el tema. Atrás quedó el abordaje propiamente antropológico de la población indígena, y la folclorización por parte de las Instituciones gubernamentales, para comenzar el viraje hacia tintes de corte político-convencional: el voto. Para ello, el

apartado interpretativo de las variables independientes permitirá una mejor dilucidación del fenómeno.

CAPÍTULO VII. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DEL VOTO INDÍGENA EN MONTERREY Y SU ÁREA METROPOLITANA

7.1 Las variables independientes como variables interpretativas y explicativas del voto indígena. Una aproximación cualitativa al análisis político de la participación electoral indígena en Monterrey

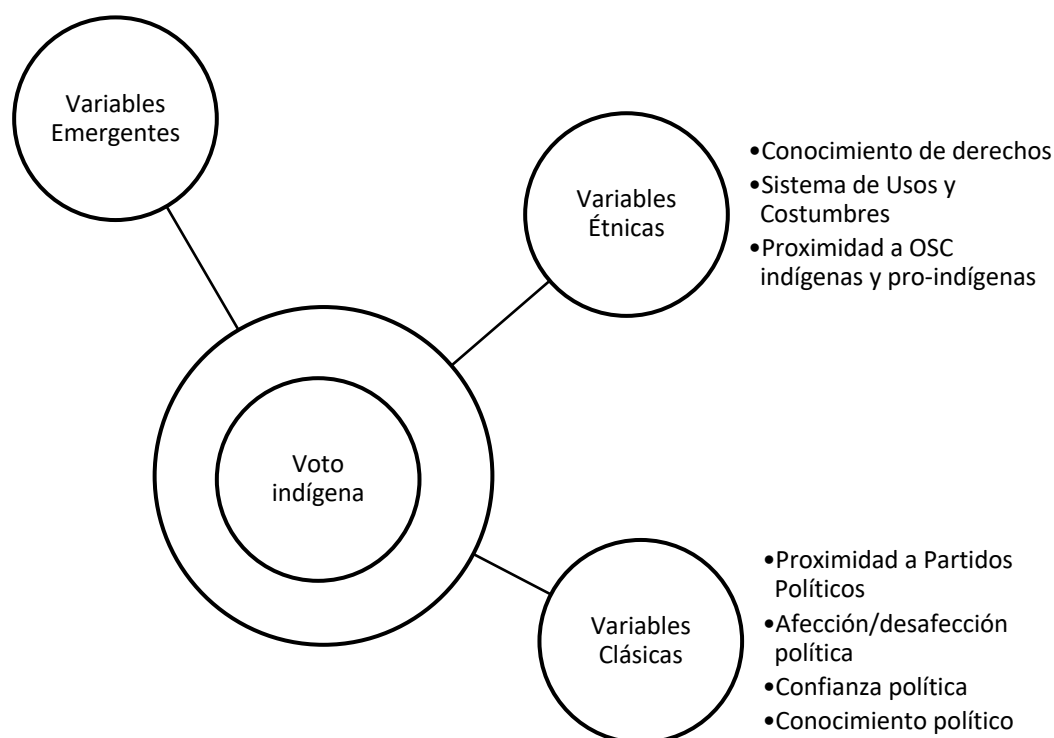
La interpretación de la manera en cómo se efectúa la participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana, ineluctablemente debe establecerse a partir de sus variables explicativas clásicas. Es decir, los estudios del voto en todas las regiones del mundo, y en especial de América Latina, son de sumo extensas y abarcadoras de un sinfín de particularidades que son precisas tomar como punto de partida para conocer cómo se da el voto indígena.

En tal tenor, el análisis de la participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana versa sobre las variables clásicas explicativas del voto que parten de los modelos psicologistas y sociológicos del voto, así como de las teorías racionales que componen la teoría espacial, direccional y economista del voto. Así como de las teorías estructurales que incentivan a interpretar los valores culturales, por motivo del enfoque cualitativo de la presente entrega, desde la orientación cognitiva, afectiva y evaluativa del voto.

Aunque también es preciso señalar que si bien es cierto que la participación indígena en la región latinoamericana ha sido promovida por las irrupciones de movimiento sociales de corte cultural en la esfera política nacional y local, en Monterrey la situación se torna compleja, pues lo propuesto por Sydnwy Tarrow (2012) y retomado por Martí i Puig (2010) en cuanto a las Estructuras de Oportunidades Políticas (EOP) hacen que el carácter sistémico, temporal-espacial y relacional –que generalmente está relacionado con actores de las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional– se encuentren confrontados con los procesos constitucionales, autonómicos y de partición política indígena por la vía electoral (Brysk; Lee Van Cott; Martí i Puig, 2010).

No obstante, el análisis del presente apartado estará organizado de la siguiente manera: el primer subapartado tiene relación con las variables clásicas del voto como lo son 1) proximidad a partidos políticos, 2) afección/desafección política, 3) confianza política y el 4) conocimiento político. Para después establecer un segundo subapartado que versa la discusión en torno a las variables independientes que en la presente entrega denomina como étnicas: 1) conocimiento de derechos, 2) usos y costumbres y 3) proximidad a OSC indígenas y pro-indígenas. Y, por último, un tercer subapartado que da a conocer las variables emergentes del trabajo de campo y de la codificación de los datos.

Figura 7. Variables que influyen en el voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana



Fuente: Elaboración propia.

7.2 Las variables clásicas del voto como claves interpretativas del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana

7.2.1 La proximidad a los Partidos Políticos. ¿El camino correcto para la participación electoral indígena?

En la Ciencia Política de mediados del siglo XX se ha estipulado que la cercanía a los partidos políticos, como variable independiente, explica la participación electoral (Nie, Verba, & Petrocik, 1976); sin embargo, el enfoque en las cualidades del candidato en ocasiones está por encima de la afiliación al partido político, al tiempo en que la socialización en etapas tempranas y la formación familiar estimulan la identificación partidista (Beck, 1986; Campbell, 1960; Jennings & Niemi, 1974). Además, existe la posibilidad de que cuando el votante se aleja del partido también se alejen las ganas de participar (Clarke, 1998) y el anclaje electoral de la identificación partidista por razón de fuerzas ideológicas a largo plazo se ven mermadas cuando se producen cambios generacionales (Nie, Verba, & Petrocik, 1976; Sáez Lozano, 2002).

Ante aquello, la participación electoral indígena irrumpe el escenario para demostrar la otra cara de la partición electoral por medio de los partidos políticos. A pesar de que autores como Alcántara y Freidenberg han estipulado que sin partidos no hay democracia, la dinámica electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana parece demostrar lo contrario; y antoja la utilización de las premisas de Moisei Ostrogorsky (2008) en torno a lo que él definió como la paradoja democrática —es decir, a que la democracia está ausente en uno de sus principales representantes: los partidos políticos— y que señale a los Partidos Políticos como los que tarde o temprano resultan antidemocráticos.

De tal manera que la proximidad de los Partidos Políticos a la población indígena, y viceversa, se podrá interpretar, en un primer momento, a partir del trabajo de campo realizado a los dirigentes estatales de los tres partidos políticos estatales a los que se tuvo acceso: PT, MC y MORENA.

Para lo anterior será acuciente comenzar por establecer de qué manera está proximidad a partidos políticos se da. Es decir, cómo es que la visión de los estatutos del partido se

materializan, pues cabe recordar que la mayoría de los partidos en México establecen sus estatutos las más grandilocuentes consignas sobre la democracia, los derechos humanos y el desarrollo político de la sociedad mexicana; lo que toca ahora ver es si esto es una realidad para la población indígena en Monterrey.

De entrada, se puede establecer que la proximidad del partido político a la población indígena difícilmente se da. Por ejemplo, el Partido del trabajo (PT) es el partido en Monterrey que históricamente, en términos territoriales, tiene mayor cercanía con la población indígena, los otomís principalmente; sin embargo, esto no representa la construcción de una agenda política en común, pues como se puede observar en lo siguiente:

“Sobre todo los otomís porque ellos han tendido a agruparse en las zonas donde históricamente surgió el Partido del Trabajo... la agenda de ellos son las necesidades de los grupos indígenas más que una agenda de partido político” (Entrevista a dirigente estatal de Partido Político, PT)

Además, la visión del PT se ve encaminada a estipular que en términos generales es la población indígena la que no se acerca al partido y que la organización electoral entre ellos, las indígenas, tampoco se da:

“hemos percibido que fuera de los grupos otomíes que están muy cerca de las zonas donde el Partido del Trabajo tiene más presencia, en general los grupos indígenas prefieren mantener una política de prudencia en relación con los partidos políticos... En cuanto a participación electoral no hay una participación organizada como grupos indígenas” (Entrevista a dirigente estatal de Partido Político, PT)

Aunado a esa distancia, es preciso señalar que esa ausente proximidad a partidos políticos desde la visión de los mismos partidos es el resultado de brechas de 1) identificación de problemáticas propiamente indígenas, 2) dificultades de gestión y 3) reconocimiento de quién y en dónde está la población indígena:

“el problema es identificar como te señalaba cosas que sean específicamente indígena, más bien identificamos que son necesidades geográficas en donde conviven indígenas y mestizos...los principales obstáculos tienen que ver con la capacidad de gestión... entonces en la medida en que eres un partido de oposición pues la capacidad de gestión se ve limitada porque el gobierno no quiere hacer cosas que hagan lucir a un partido político...son comunidades que tienden a crecer, que no se hace eco, un censo adecuado a ellas”. (Entrevista a dirigente estatal de Partido Político, PT)

Lo anterior da cuenta que está tan arraigado ese marginalismo integral del que hablaban los antropólogos mexicanos del siglo XX que iniciado el segundo cuarto del siglo XXI aún es visible que las necesidades de la población indígena se ven entremezcladas con las necesidades de la población marginada en las ciudades, aquella que vive en la pobreza y a quien las oportunidades de desarrollo económico siguen estando detenidas por una desigualdad estructural. Sin embargo, de entrada se deberá de distinguir a la población indígena de la población no indígena, pues por Ley aquellos tienen el derecho de un representante dentro del ayuntamiento, situación que no sucede en la realidad.

Por lo anterior, la representatividad en la que por antonomasia significa la primera institución democrática con la que tiene contacto el ciudadano, el municipio, se ve mermada:

“no se les ha dado suficiente voz o suficiente presencia en los temas comunitarios y sobre todo que se atienda en los planes municipales de desarrollo ese mandato de que las comunidades indígenas sean atendidas específicamente en los planes que hacen los gobiernos”. (Entrevista a dirigente estatal de Partido Político, PT)

De todas formas, esto representa una paradoja para el mismo partido político, pues mientras en éstos no exista un agenda política, difícilmente la proximidad de la población indígena a los partidos políticos explicará el voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana.

También habrá que prestar singular atención a la retórica de los partidos políticos en cuanto al tema indígena. Por ejemplo, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en su dirigencia estatal, maneja una retórica de lucha y de movilización social —es importante destacar este elemento, pues en términos históricos la irrupción indígena en la arena política convencional fue a través de movimientos sociales y de luchas sociales— pero no hace distinción de las particularidades de la población indígena en Monterrey. Es decir, establece que como una de sus bases es las demandas de la población indígena y hasta recapitula los Acuerdos de San Andrés, pero no logra establecer en términos reales, y territoriales, un trabajo integral, diferenciado y emancipador de la población indígena en el Estado:

“Nuestro partido es un partido que no es de gestión sino es un partido de lucha... se acaba de presentar que es el proyecto de nación de 2018- 2024 en el cual bueno se plantean distintas soluciones para ir acabando con esa desigualdad...como movimiento siempre habíamos propuesto que se fueran a llevar a cabo y fueran ley los acuerdos de San Andrés”. (Entrevista realizada a dirigente estatal de Partido Político, MORENA)

“MORENA es un partido que integra todos los sectores ¿no? nosotros promovemos la participación de TODA la ciudadanía ¿no? aunque tenemos una secretaría específica que atiende estos temas, nosotros no tenemos distinción a la hora de estar trabajando en la comunidad”. (Entrevista realizada a dirigente estatal de Partido Político, MORENA)

Queda claro que la proximidad difícilmente puede materializarse cuando no se hace una diferenciación de demandas, derechos y de representación política a un sector de la población tan importante en número como en términos simbólicos. Y resulta más alarmante cuando el eje central de la irrupción indígena en la arena política convencional, que es la cultura, se pasa a segundo término:

“creo que la ciudad o el área metropolitana de Monterrey si les da para adaptarse completamente y llevar, este, una vida como cualquier otra gente ¿no?” (Entrevista realizada a dirigente estatal de Partido Político, MORENA)

Asimismo, resulta alarmante que la proximidad a partidos políticos, interpretada a partir de una aproximación cualitativa y desde la visión de un dirigente estatal de partido, en términos formales y nacionales sea materializada pero en términos sustantivos no, o al menos no permeable hacia las demás entidades federativas. Como muestra de ello:

“Nuestro partido en San Lázaro es el único que tiene a una campesina indígena de diputada federal ¿no? o sea es Blandina de Puebla, y esto habla de que nosotros, nosotras, damos igual oportunidad a todos las personas que son militantes para llegar a esos puestos”. (Entrevista realizada a dirigente estatal de Partido Político, MORENA)

Aunque lo anterior no signifique la promoción de una agenda política indígena, ni un trabajo territorial adecuado a las necesidades de los diversos sectores y diferencias culturales entre la población de Nuevo León:

“nuestro partido trata de ir construyendo sin hacer distinciones nosotros estamos en contra de cualquier forma de opresión...nosotras en el trabajo territorial en MORENA no hacemos distinción” (Entrevista realizada a dirigente estatal de Partido Político, MORENA)

Es decir, que el trabajo del partido político MORENA, para generar el vínculo con la población indígena, es principalmente la atención territorial pero sin poner énfasis en las diferencias culturales, derechos diferenciados y en la posibilidad siquiera de tener representantes al menos en los órganos ejecutivos y legislativos locales.

Mientras que por parte del Partido Movimiento Ciudadano (MC), desde la dirigencia estatal, la retórica es aún mayor:

“somos la plataforma más incluyente de todo el país y en ese sentido claro que le damos mucho peso e inclusión a la descendencia indígena o nativos porque consideramos que son gran parte de la diversidad de este país, entonces con o sin ley, con o sin estatutos, tengan plena certeza que por ejemplo en esta elección 2018 movimiento ciudadano va a incorporar a descendientes indígenas” (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, MC)

Además de esa retórica impulsada por el afán de posicionarse en la arena política, MC mantiene una visión propia del Siglo XX en cuanto a la homogeneidad de la población mexicana:

“no es tanto el tema de que seas indígena, es el tema de que eres mexicano y si no partes de que todo el mundo independientemente de su género, sexo, origen, si no partimos de la idea o de la premisa de que todos merecen la misma dignidad este país no va a cambiar entonces bajo esa lógica movimiento ciudadano hemos ido avanzado en ese tema” (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, MC)

Lo anterior es objeto de múltiples interpretaciones, que van desde la simple relación entre la noción de un solo tipo de ciudadano mexicano promovida por la ignorancia, hasta las más susceptibles interpretaciones que se acercan más al señalamiento de esa homogeneidad a pensamientos anacrónicos y retrógradas. Sin embargo, la presente entrega no pretende sacar conclusiones interpretativas del por qué se tiene una determinada visión, simplemente se pretende explorar e interpretar cómo las variables clásicas explicativas del voto se dan con la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana.

La proximidad a partido político como variable explicativa del voto, en este caso del voto indígena, se ve influida por diversas clases de retóricas que dependen de la situación del Partido. El desconocimiento del tema cultural, como se vio con los demás partidos políticos, resulta ser una constante para el trabajo territorial. Y en ese tenor, MC no es la excepción:

“soy diputado local y por lo mismo que aquí ya la mayoría del Estado esta urbanizada y la mayoría de los ciudadanos no vienen de descendencia indígena no se le ha dado

la debida importancia”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, MC)

Tener en mente a la urbanización como algo ajeno a lo indígena, y estipular que por motivos de que la mayoría de la población en Nuevo León no mantiene una cultura indígena, no necesariamente deberá significar la invisibilización del tema. Y mucho menos en términos electorales, pues la presente interpretación antoja concluir que la proximidad a partido político como variable explicativa del voto no es dada en Monterrey y su Área Metropolitana, al menos no en términos positivos.

Con lo anterior ya se vio cómo es la relación entre el partido y la población indígena que incentive el voto en Monterrey y su Área Metropolitana desde una visión del partido. Sin embargo, ¿cómo se percibe esta cercanía por los demás actores? A simple vista el trabajo de campo realizado no resulta positiva la proximidad/cercanía a los partidos para la participación electoral indígena en Monterrey.

Esa cercanía se puede observar meramente clientelar, sobre todo desde una aproximación por parte de la Academia:

“el PRI es un partido que tiene muchos años actuando su forma de organización, es una organización corporativa, la CNC, los campesinos, los obreros, la CTM, la CNOP, las organizaciones populares. Y necesariamente por ahí, seguramente, hay formas en que se vincula, no quisiera decir organizaciones indígenas pero si quizá población indígena que actúa y que participa obviamente a través del corporativismo priista en este caso” (Entrevista a informante clave de la Academia, UANL)

“yo lo único que sé, así de lo que escucho por ... hay comentarios, es que los partidos siguen con esa idea clientelar de pues vamos a engañar al indio” (Entrevista a informante clave de la Academia, UERRE)

Aunque lo anterior se antoja visualizarlo como uno de los problemas estructurales en cuanto a la movilización del voto en México y América Latina, los estragos que ha dejado en Monterrey para la población indígena van más allá de meros problemas estructurales del

sistema político-electoral y sistema de partidos. Tales estragos están socavando el sentido de comunidad dentro de la población indígena en Monterrey. Basta con interpretar y reflexionar con lo siguiente:

“yo he visto un impacto muy fuerte en ellos de división de separación y de subgrupos dentro de la comunidad, peleas por cuestiones políticas, entonces y también apoyos asistenciales, investigación, ahí por esa parte también este, cuando hacen alguna intervención directo en comunidad, ellos primero ven con quien vas, si no te cierran la puerta, no te permiten tu entrada precisamente por los antecedentes que han dejado ahí...es triste ver esa división, justamente también hace poco nos decían bueno hagan un focus group con los lideres comunitarios, no los puedes juntar porque están peleados, si porque no que el recibió más y yo no, y el le abrieron un espacio en tal lugar y no nos dijeron y entonces se ha perdido el sentido de comunidad, en la comunidad no es así”. (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Es importante la reflexión de lo anterior, pues si se está decantando que la proximidad a los partidos políticos con la población indígena es a través del clientelismo, de las prebendas en épocas electorales, son estas aproximaciones las que están provocando división dentro de la población indígena, sobre todo con lo relacionado a los líderes o autonostrados líderes indígenas. Y para mayor entendimiento de lo negativo de la cercanía de los partidos en términos clientelares:

“Me acuerdo mucho un evento de una chica que quiso hacer su, como que algo padre para la comunidad y empezó a gestionar, a pedir apoyo de que para alimento, para el sonido para los payasos, era una posada, en una comunidad entonces recibió donaciones de juguetes de, así distintos tipos de juguetes, están así mas grandes mas pequeños y entonces convoca a la comunidad a pasar un-un rato agradable con los niños y demás y se hizo un caos, una pelea campal de que yo quería el mejor regalo para mi hijo y entonces te empujo, te piso y de la misma comunidad, salieron peleadas las vecinas, mismas, las mismas personas de ahí y entonces si fue algo que

me sorprendió porque buscas la unión, buscas la colectividad y esto ha sido resultado de las intervenciones que se han hecho” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Además, la importancia de la agenda indígena por parte de los partidos políticos es primordial para incentivar la proximidad a los partidos. A diferencia de lo que por muchos es divulgado, sobre la ignorancia de la población indígena, sí es notable que la movilización electoral de las personas indígenas en Monterrey “siempre han servido como apoyo nada más, nunca han fungido hasta ahorita que sepamos y que una persona de origen indígena promueva realmente una agenda indígena, incluso en un municipio, en un distrito electoral, local, federal o en el gobierno estatal” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces).

Para contrarrestar lo anterior, aparece a relieve la posibilidad de las Candidaturas Independientes como vía alterna a la militancia en partidos políticos, “Y a través de una plataforma que nació recientemente creo que nos brinda esa posibilidad sin comprometerse en la afiliación de un partido político, poder contener a un puesto de elección popular con el apoyo de una plataforma política” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces). Sin embargo, esa plataforma política a la que se refiere en informante clave está supeditada al Consejo Estatal de Pueblos Indígenas que la componen asociaciones civiles.

Es decir, mediante ese consejo, que pretende operar como un órgano de representación y participación de asuntos indígenas en Nuevo León, se pretende postular un candidato que represente las demandas de la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana pero bajo el manto de algún Partido Político, sobre todo en términos de presupuesto, debido a que el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, por estar constituida por asociaciones civiles, está solamente reconocido dentro de la Ley de Participación Ciudadana y no en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León:

“ese consejo estatal de pueblos indígenas tenemos representación en 18 municipios, hemos bajado un poco, como el trabajo en algunas zonas pero si

nos queremos concentrar para como poder ser parte de este proceso de toma de decisiones a través de estos procesos electorales donde se designan a personas que ocupan cargos de elección popular digamos centrar nuestras fuerzas en lugares como el poniente de la zona de Monterrey, en la zona metropolitana digamos García, Escobedo, El Carmen que es principalmente donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos donde hay número muy significativo de la población indígena y que es en donde vemos que si podemos participar” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

“Es una plataforma idónea porque no te compromete a es el PRI, del PAN, de Morena, del PRD, por el momento creo que vamos a ocupar esa plataforma, a través de ahora poder buscar una plataforma de un partido político que nos brinde plena autonomía en la toma de decisiones para poder contener a un puesto de decisión popular”. (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Como se puede observar, en tal propuesta de participación político-electoral, si bien es claro que la cercanía a los partidos no se da por la falta de sensibilización de los actores principales dentro del partido o por la constante clientelar, aún sigue siendo un Partido Político la única vía para la postulación de candidatos indígenas sobre todo por motivos de presupuesto, pues como lo menciona el Informante Clave

“Dentro de partidos políticos, porque el esquema de participación ciudadana como se analizó en el consejo inductivo, el consejo estatal de pueblos indígenas es muy complejo, entonces hay que invertir como mínimo 30 mil pesos que no tienen, los tiempos son muy, o sea son muy rápidos y no permiten que las organizaciones que tenemos pudieran ser parte de ese proceso, tiene que ser una organización que nazca a partir de la convocatoria, si quedamos como candidato que bien, te dan tu prerrogativa pero muere ya cuando toca posición”. (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

A todo lo anterior, la misma población indígena que participó validan la información antes presentada de los actores clave en torno a la aproximación a partidos políticos como vía democrática para la participación electoral en Monterrey y su Área Metropolitana:

“¿hay presencia de los partidos políticos aquí?

Entrevistado 4: pues nada más con la gente que los conoce

Entrevistador: ¿por ejemplo ustedes que se hayan acercado con un partido, con un político?

Entrevistado 5: nada mas anduvieron sobre los votos

Entrevistado 1: entonces si hasta saludo de beso, de veras; yo lo que le digo, ese día vino uno, que andaba haciendo también y yo no salí, ni quiero que me salude de beso, digo ¿para qué?”. (Participantes en Grupo de Enfoque)

Es tan distante la proximidad a los partidos políticos por parte de la población indígena que de lo único que sí saben es que cada cierto tiempo sí se les busca:

“Entrevistador: entonces como que la relación en un partido político es solamente en campaña, haz de cuenta ahorita no se viene nadie

Entrevistado 1: no, ahorita nadie sube

Entrevistado 5: se olvidan por tres años”. (Participantes en Grupo de Enfoque)

Empresa compleja la forma en cómo la variable independiente clásica del voto, la proximidad a partidos políticos se materializa en la población indígena en un contexto adverso de migración y de falta de información por parte de los dos actores principales – partidos políticos y elector indígena– en Monterrey. Por ello, se prosigue para efectos analíticos de la presente entrega la interpretación de las demás variables independientes clásicas.

7.2.2 La afección y desafección política como variable explicativa clásica del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana

Como se ha explicitado en la presente entrega, uno de los valores culturales inscritos en la participación electoral responde a la orientación afectiva que trata sobre los “sentimientos acerca del sistema político, sus funciones, personal y logros” (Almond & Verba, La Cultura Política, 2001, pág. 180). Tal orientación afectiva, por ser de carácter sentimental, está previamente establecida por la distribución de valores en etapas tempranas y de carácter histórico en el individuo. Sin embargo, lo que se pretende establecer en el presente apartado gira en torno a la manera en que la afección o desafección política influye en el voto indígena.

La afección/desafección política de la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana está íntimamente ligada a la integración de la población indígena al sistema político y a las formas en cómo se da determinada integración. En el apartado anterior se dio cuenta de que la manera de integración por parte de los partidos políticos es sumamente laxa, cuando no clientelar, y eso provoca un claro distanciamiento de la población indígena con los partidos políticos locales.

Ahora bien, de ¿qué manera es que influye la afección/desafección política de la población indígena? Para llegar a responder tal pregunta, es preciso señalar las formas institucionales que provocan determinado sentimiento/orientación afectiva. Por ejemplo, resulta esclarecedor el papel que juega el folclor en el fenómeno de participación indígena en Monterrey y su Área Metropolitana:

“Yo creo que debería haber mayor apertura que verdaderamente influya y que deje de verse únicamente como un tema folclórico, llamativo o de resaltarlo nada mas en las fechas que están destacables para la población de origen indígena”. (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Cuando de inclusión política se trata, la población indígena está envuelta en un tema de folclorización. Que si bien es cierto puede llevar a contender elementos culturales muy importantes para la exaltación de la mexicanidad, la otra lucha a la que se enfrentan es el

desprendimiento del estereotipo. Debido a que una gran parte de la población indígena que habita Monterrey y su Área Metropolitana no utiliza la vestimenta típica con lo que se ha folclorizado durante años a la población indígena en México.

También, la afección/desafección política indígena está influida por la relación institucional, sobre todo aquella institución que, en principio, debería de estar trabajando por la socialización de derechos políticos –diferenciados, por supuesto– de la población indígena. Sin embargo, la lejanía de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) no tiene ningún programa oficial sobre la promoción de participación electoral indígena, así como tampoco registro del acercamiento de la población indígena a la CEE³⁴.

Otro elemento institucional que gira sobre la problemática de partición electoral indígena, y sobre todo con la promoción y salvaguarda de derechos, está vinculado al sentido asistencialista de varias Instituciones Gubernamentales. Ejemplo de eso se puede encontrar en la declaración del informante clave de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH):

“tenemos que cambiar, y que se entienda que son parte integrante porque si no, vamos a seguir retardando y vamos a seguir viéndolo como grupo en situación de vulnerabilidad y vemos esto todavía como el sistema existencialista ¿no? ¿Qué necesita el indígena? A que le lleves cobijas, no eso no es reconocimiento de derechos, con todo respeto entonces, eso no es el reconocimiento de derechos que le permita sus usos, tradiciones, costumbres, que seas intercultural, que se aplique la ley con esta visión intercultural y ahí vamos todos, me incluyo porque también la Comisión de los Derechos Humanos tenemos varios pendientes de, de actualizar protocolos de, de atención y actuación para los derechos indígenas, seguimos fallando en esa materia”. (Entrevista a informante clave institucional, CEDH)

Otro de los reflejos y motivos que hay para la existencia de una desafección política indígena en Monterrey, responde a la falta de materialización de la Ley de 2012. En ésta, la población

³⁴ Lo anterior fue recabado de una entrevista realizada a informantes clave de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Lo particular de esta entrevista es que no fue grabada, pues las condiciones no eran las óptimas.

indígena en Nuevo León tiene el derecho de tener un representante dentro de los municipios que tengan presencia indígena y de acuerdo con el informante clave del PT:

“los ordenamientos que disponen que por ejemplo en los planes municipales de desarrollo se atienda con particular atención a las comunidades indígenas no ha ocurrido esto” (Entrevista a informante clave de Partido Político, PT)

En síntesis, la desafección política existente en Monterrey y su Área Metropolitana está vinculada con la falta de interés por parte de los partidos políticos y porque en términos reales, del día a día de la población indígena, aún persisten las más primigenias demandas dentro de la población indígena: la estabilidad económica y laboral que les brinde mayores oportunidades. Mientras esto no sea una realidad, el interés y afección por la política, así como la proximidad a los partidos políticos, se torna algo inalcanzable a corto o mediano plazo:

“pues nomas van y que firmes para el candidato no sé quién, pero hasta allí, es como yo les decía que iba el candidato hasta arriba que iba a hacer no sé qué cosa, “oye allí hay mujeres, los que trabajan vayan y díganle que el presidente que imparte una nueva ley o ya existe la ley donde defiendan sus leyes” y sin embargo no lo ponen , por decir en el caso de mi hermana que ella trabaja así días festivos, va a trabajar pero no le pagan doble y la sacan bien tarde, le digo “defiende tus derechos, habla con la señora, dile que no te pague pero que no vas,” mi hermana entra a las ocho y la sacan hasta las siete, dice mi esposo “trabaja más que uno ahora” los de ahora salen temprano, a las siete y media ya están afuera y tienen una hora de comida y pues ella no, es corrido trabajar en casa”. (Grupo de enfoque con personas indígenas”

7.2.3 La confianza en la política como componente mental y operativo de los principales actores en la participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana

Cuando se estipula que la confianza en la política toma como principio teórico la orientación evaluativa de los trabajos realizados por los actores políticos principales en determinado

sistema político vigente (Verba & Nie, Participation in America: Political democracy and social equality, 1972), sale a la luz el componente mental como vía por la cual en diferentes etapas de la vida pública el poder que dicta las formas en las que la mente humana se moldea, puesto que la manera en como una persona piensa determina la forma en la que actúa en términos individuales y colectivos (Castells, 2009), y provoca ya sea comportamientos racionales y apegados al respeto y promoción de los derechos humanos o ya sea los comportamientos más irracionales, racista y retrógradas posibles.

Para entender la manera en cómo la confianza política indígena en Monterrey y su Área Metropolitana se materializa, es preciso que se tenga en cuenta que

“la relación de confianza entre políticos y electores, necesaria en toda democracia por cuanto que actúa como catalizador para un funcionamiento eficiente de la sociedad más eficiente, se desvanece por completo por el cinismo gestado en las grandes masas como por la doble moral de los políticos”. (Alcántara, El Oficio del Político , 2013, págs. 59-60)

Es decir, se puede establecer una bifurcación en cuanto a la confianza política indígena. Por un lado, la confianza política de la población indígena en Monterrey; y, por el otro lado, la confianza política de las instituciones políticas que realizan trabajos de cerca con la población indígena. Aunque también es preciso señalar que por motivos de que en un grupo de enfoque realizado con personas indígenas en su mayoría eran empleadas domésticas y trabajadores de la construcción, salió a la luz un actor clave en el desarrollo político de las mujeres indígenas principalmente: las empleadoras domésticas,

“o sea si hemos tratado de contactar algunos grupos indígenas aquí del municipio para empezar a invitarlos y generar un plan de trabajo más real que realmente cubra sus necesidades...lo que he escuchado de cuando se hizo el diagnóstico de mujeres migrantes indígenas, si tenían como que, medio, este, desconfianza las personas que se acercaban porque no sabían pues por qué les preguntaban eso, y los mismos jefes de ellas pues también no estaban como que muy de acuerdo en que se entrevistaran a, a sus empleadas”. (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SPGG)

Se puede observar que el único municipio del área metropolitana de Monterrey que ha comenzado los trabajos reales en función del cumplimiento con la Ley y que ha realizado aproximaciones claras a la población indígena en el municipio de San Pedro Garza García. Lo anterior se valida debido a que por el trabajo de campo realizado el municipio de Monterrey carece de una oficina de atención y de personal tanto administrativo como de regidores y síndicos que pudieran hablar con claridad del tema; mientras que el municipio de Escobedo y Juárez no se tuvo acceso formal para la realización de las entrevistas.

Sin embargo, es importante destacar que la desconfianza por parte de las empleadoras domésticas. En apartados previos se señaló que uno de los tipos de migración de la población indígena se centra en las mujeres indígenas, jóvenes en su mayoría, que viven en el lugar de trabajo; en ese tenor, resulta una bomba empírica dar cuenta que el peso gubernamental del municipio resulta en ocasiones débil frente al peso económico, político y social de las empleadoras domésticas. Más adelante, en una sección separada, se abordará el tema con mayor claridad, pues con ello se puede agregar un actor más que ayudará a la interpretación de la confianza política indígena en Monterrey desde sus múltiples actores involucrados.

Otra clave interpretativa que fue recaudada en el trabajo de campo realizado con las Instituciones electorales versa sobre la falta de trabajo diferenciado por parte de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL). Tal comisión establece que no hay ningún programa oficial para la distribución de valores políticos y democráticos en la población indígena, y es relevante que ellos mismos recalcan que, por otra parte, la población indígena tampoco ha realizado una aproximación.

Fenómeno nada distinto a lo que sucede con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Cabe señalar que la confianza de la población indígena en las instituciones es muy débil, a pesar de que Monterrey es la ciudad que más discrimina en México (CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010) y que dentro de los sectores a quien más se discrimina en Monterrey es a la población indígena –aunado a esto la discriminación indígena en monterrey es la más normalizada, pues 90% vive en

condiciones de pobreza, pero es una situación que no llama la atención, ni alarma “La gente está acostumbrada a aceptarlos así” (Bucio Mújica, 2014)— no hay información por parte de la CEDH que haga visible esto:

“2016 escasamente fueron 3 personas que se auto adscribieron y 2017 ya hubo un poquito más de confianza creo yo, y pues aumentó el numero, a 8 o 9, 10, 10 personas solicitantes que se auto adscribieron fuera de parecer discriminator o de más percibimos que son más pero no se auto adscriben y eso también lo vemos nosotros como un área de oportunidad, ¿por qué alguien no se auto adscribiría?”.
(Entrevista realizada a informante clave institucional, CEDH)

La respuesta a esa pregunta, la del ¿Por qué alguien no se autoadscribiría? Antoja a responderla que por motivos de discriminación y falta de confianza en las instituciones en Nuevo León.

Es urgente resaltar, a estas alturas del análisis interpretativo de los datos, que la falta de confianza política de la población indígena no es exclusiva en un contexto como lo es Monterrey y su área metropolitana. Para esto, basta analizar a detalle lo estipulado por un activista indígena en Nuevo León:

“las personas las comunidades como vienen han emigrado acá realmente cuando te ven en la política muchos ya desconfían porque son desconfiados con los políticos, con la persona que se mete en la política, porque siempre dicen no pues todos buscan un interés y no es como para el bien de las comunidades es como un interés más personal”. (Entrevista realizada a informante clave de OSC, Activista Independiente indígena)

La desconfianza en la política y en los políticos es evidente. Sin embargo, ¿qué pasa con la otra posibilidad de que la confianza en la política se restablezca? Es decir, ¿cuáles son las Estructuras Oportunidades Políticas, para seguir la línea de Tarrow (2012), que la población indígena tiene para contrarrestar lo que en principio es un valor democrático? A simple vista

se antoja responder que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) o los líderes indígenas pueden ser la respuesta. Empero, el trabajo de campo pareciera decir lo contrario:

“más bien no tienen ubicados a buenos líderes, que están en pro de la comunidad, sino más bien líderes que han aprendido de la política que han visto de los entonces las, esos espacios que abre el Estado generalmente van con los, estos líderes que dices que en ocasiones no representan los intereses de la comunidad verdad, que son líderes indígenas sí, pero que no, no representan a la población indígena”.
(Entrevista realizada a informante clave de OSC, Zihuakali)

Es decir, los líderes indígenas tampoco han sido actores clave para generar la confianza en la política de la población indígena en Monterrey y su área metropolitana. Un apartado más adelante será materia de análisis a detalle el papel de los líderes indígenas en Monterrey.

Pero volviendo a la confianza política indígena en Monterrey, se puede resumir que tal confianza no se da, los diversos actores clave entrevistados dan cuenta de ello. Y se puede destacar que gran parte de la desconfianza es porque 1) las instituciones clave no realizan trabajos diferenciados para promover la confianza política indígena, 2) falta de buena voluntad por parte de actores clave indígenas y pro-indígenas y 3) falta de voluntad política por parte de los municipios, entendidos éstos como la primera institución democrática al que el ciudadano tiene contacto:

“El indígena que se organiza realmente de mercado artesanal debe llegar y decir “Sr. Alcalde denos permiso y no nos cobre piso, déjenos instalar aquí en la plaza nosotros traemos el toldo, la mesa, vamos a limpiar y a mantener la vigilancia”, pero falta voluntad”. (Entrevista a informante clave institucional, Congreso del Estado de Nuevo León)

Como muestra la cita, la mayoría de los actores institucionales esperan a que la población indígena llegue y exija; sin embargo, cómo se materializará aquello si no se toman en cuenta diferencias culturales, de lenguaje, de discriminación por motivos étnicos y una clara

desconfianza en los actores institucionales y gubernamentales que, durante años, sino es que Siglos, han socavado la voluntad de vida de la población indígena en México:

“nada mas cuando quieren los votos y ya, nos prometen en campaña y nomas no”
(Grupo de enfoque realizado a población indígena)

6.2.4 El conocimiento político indígena. Una reinterpretación de los cánones clásicos

El conocimiento político generalmente está atribuido a la orientación cognitiva que se refiere a “conocimientos y creencias acerca del sistema político, de sus papeles y de los incumbentes de dichos papeles en sus aspectos políticos (inputs) y administrativos (outputs)” (Almond & Verba, La Cultura Política, 2001, pág. 180). Aunque es cierto que el sistema político que se interpreta en las definiciones clásicas del conocimiento político está estipulado como el sistema político vigente, en México dentro de este sistema también están incluidos los conocimientos políticos de las personas pertenecientes a pueblos indígenas (González Galván J. A., 2010).

La variable de conocimiento político indígena ya sea por parte de las propias personas indígenas o ya sea por parte de los demás actores institucionales que se vinculan con la participación política en lo general y en la participación electoral en lo particular de la población indígena, presenta serios problemas de acuerdo con la información obtenida.

Por ejemplo, la variable de conocimiento político deberá de desprenderse del halo folclórico que acompaña a la población indígena en Monterrey y área metropolitana, tal y como lo comenta el informante clave de la SEDESOL, “Yo creo que debería haber mayor apertura que verdaderamente influya y que deje de verse únicamente como un tema folclórico, llamativo o de resaltarlo nada mas en las fechas que están destacables para la población de origen indígena” (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SEDESOL).

Así como también se trata de que para que exista un conocimiento político pleno que incentive a la participación político electoral desde su concepción clásica, es preciso que tanto las autoridades, como la población en general, reconozcan que existe una Ley para personas indígenas y que los derechos y acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley es

obligación de la sociedad en general. Para esto es esclarecedor los comentarios del informante clave del municipio de San Pedro:

“o sea que el mismo ciudadano no reconoce a las personas y por más que el municipio lleve acciones para que los conozcan el principal obstáculo o sea que la gente entienda la política que está haciendo el municipio que es para el bienestar de los indígenas que realmente convivimos con ellos en el hogar o en la calle o como vecinos... creo que es el principal obstáculo o sea que la apatía de la gente”.

(Entrevista a informante clave gubernamental, SPGG)

Lo anterior significa que para que exista un conocimiento político pleno por parte de la población indígena y por parte de las instituciones vinculadas al tema indígena en Monterrey será preciso la aceptación de la población no-indígena de una realidad que, por lo dilucidado en las encuestas, carece de importancia y significado.

Otro de los factores clave en el desarrollo del conocimiento político viene por parte de los Partidos Políticos. De acuerdo con Dalton y Wattenberg (2000), dentro de las funciones de los partidos políticos salen a la luz la 1) función de formación de opinión, 2) función de selección, 3) función de integración y articulación, 4) función de socialización y participación, 5) función de dominio y 6) función de legitimación; que, para fines de la presente entrega, el análisis interpretativo se asirá a la función de formación de opinión y a la función de socialización y participación, siendo ésta última la que cobija al conocimiento político. De manera tal que si entendemos a la socialización como los intentos del partido para la conexión entre la ciudadanía y el sistema político, en el caso de la población indígena en Monterrey a los partidos políticos pareciere interesarles poco 1) la socialización política tomando en cuenta la variable cultural y 2) el aproximarse a conocer cuál es el conocimiento político que la población indígena puede aportar para una mayor pluralidad democrática y el desarrollo de los derechos políticos indígenas:

“Finalmente son gente que proviene de las comunidades rurales ya sea ellos mismos o una o dos generaciones atrás entonces conservan muchas costumbres que podríamos llamar tal vez patriarcales pero que finalmente no se distinguen entre

indígenas y no indígenas”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, PT)

En lo anterior el mensaje es claro, la falta de interés siquiera por conocer las costumbres, que para el PT se reduce a prácticas patriarcales, y que el único interés por que la gente conozca al partido y no el partido conocer las diferenciaciones culturales, y hasta obviando que en Monterrey y su área metropolitana sólo existe un solo tipo de ciudadano, por parte de MORENA, hace que el conocimiento político por razones obvia sea incipiente en la población indígena en Monterrey pero también es incipiente por parte de los partidos políticos al intentar homologar las particularidades de la población y al no cumplir con las funciones que dicta la teoría de partidos previamente señalada.

También se reconoce que la capacidad de interculturalidad, en donde puede establecerse otro tipo de conocimiento político por parte de la población indígena, se encuentra descartado. Los intentos en balde para la socialización política y de trabajo en función del conocimiento político queda estipulado en lo siguiente:

“vienen migrantes que son de comunidades indígenas... creo que la ciudad o el área metropolitana de Monterrey si les da para adaptarse completamente y llevar una vida como cualquier otra gente ¿no?”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, MORENA)

Se puede observar que el intento de homologar culturas, y que esto suponga un proceso de aculturación, no es algo nuevo ni en México ni en Monterrey. En otro apartados de hablo de ello, 1) el proceso de aculturación fue el pilar del boom industrial regiomontano y 2) y para el funcionario promedio en México siempre ha sido más cómodo eliminar todo tipo de diferencias, pues lo que en el pasado fue promulgar por la unidad nacional, ahora, en el presente, eso representa desconocimiento e invisibilización de la población indígena que quiere ir más allá del folclor:

“no es tato el tema de que seas indígena, es el tema de que eres mexicano y si no partes de que todo el mundo independientemente de su género, sexo, origen, si no

partimos de la idea o de la premisa de que todos merecen la misma dignidad este país no va a cambiar entonces bajo esa lógica movimiento ciudadano hemos ido avanzado en ese tema”. (Entrevista realizada a informante clave de Partido Político, MC)

Ahora bien, el desarrollo del conocimiento político indígena en Monterrey resulta toda una aventura institucional. A pesar de la promulgación y de que a nivel Estatal existan cuatro centros interculturales operados por la SEDESOL, las acciones que la SEDESOL realiza se ven mermadas por la falta de presupuesto.

Por ejemplo, en entrevista con el informante clave de la SEDESOL se señaló que la visión de los centros interculturales era de promover primero el conocimiento político vigente, o imperante en Monterrey y su área metropolitana, y después promover la participación política organizada y con pleno conocimiento de derechos, obligaciones y procesos político:

“Entonces todo ese conocimiento de que ahora ustedes sepan hacer un oficio, sepan hacer una petición, sepan como se conforma un cabildo, sepan las funciones del cabildo, sepan las funciones de la administración, para que lo que busquemos si sea el empoderamiento de los grupos por lo menos como basado en el capital social o dar herramientas para el fortalecimiento del capital social, para una autogestión de incidencia en políticas sociales o políticas comunitarias”. (Entrevista con informante clave de la SEDESOL)

Sin embargo, tales visiones encuentran su mayor escollo cuando otros actores relevantes, como la Cámara de Diputados, no trabajan en función de la operacionalidad de la Ley:

“Pero también hace falta que los diputados, quienes deciden por los presupuestos digan bueno, para que una ley se opere con los fines que esta tiene se necesita la donación de recursos, entonces yo te voy a decir, de los cuatro grupos de atención comunitaria, el de atención a indígenas es al único al que no se le ha destinado presupuesto”. (Entrevista a informante clave de la SEDESOL)

O en el caso de los municipio:

“también es necesario que los municipios empiecen a normar, es decir, que pasen por cabildos, protocolos de atención a indígenas, sino existe eso va a pasar lo que fuera en el 2012 que todos dijeron: “si tenemos áreas de atención a indígena”, pero que duraron un cambio de administración y ya nadie sabía, ni había el entendimiento, ni la prioridad de atender a los indígenas”. (Entrevista a informante clave de la SEDESOL)

De tal manera que el conocimiento político está ampliamente relacionado con la designación de presupuesto. Los diversos actores están inmiscuidos en esta problemática y todo indica que el conocimiento político aún no es claro para algunos de los principales actores.

Si se tiene como base analítica que el conocimiento político está relacionado con el reconocimiento de los principales actores y sus papeles en términos políticos y administrativos, la población indígena en Monterrey y su área metropolitana reflejan un amplio conocimiento de ello; sin embargo, no es un conocimiento sobre el sistema político imperante en Nuevo León.

Como se mencionó con anterioridad, el Sistema de Usos y Costumbres de las comunidades indígenas son reconocidos como un sistema de gobierno en donde los principios democráticos de conocimiento, participación e interés son en verdad de primer orden. Muestra de ello es lo comentado en los grupos de enfoque; en éstos, la selección de la población participante, por su carácter aleatorio y con un perfil ajeno a partidos políticos, OSC e instancias gubernamentales, demuestran y validan que el conocimiento político es en verdad alto y el reconocimiento de actores, así como funciones, es completamente claro.

Antes de demostrar lo que se afirmó en el párrafo anterior, es preciso señalar que el sentido de comunidad hace que el arraigo en la población indígena y su vínculo con las autoridades sea muy estrecho. Por ejemplo, el conocimiento político pareciera estar ligado con el sentido de comunidad, pues los acontecimientos en la comunidad, de acuerdo con los participantes, incumben a todos los habitantes:

“del pueblo, esta unido todo, que por ejemplo, que es una velación y toda la gente coopera unida que dé para la comida, para los danzantes, hay una autoridad que se organiza todo eso

Entrevistador: ¿existe una autoridad que organiza?

Entrevistado 1: es el delegado, el comisariado, tiene todos sus nombramientos; desde el delegado tiene la autoridad allá en la comunidad”. (Grupo de enfoque con población indígena)

Ese sentimiento de comunidad mantiene particularidades cuando de una velación se trata. Y en temas de educación también es una constante que la comunidad mantenga una estrecha relación entre sus miembros y sus autoridades:

“sí, tenemos agente municipal, por ejemplo en... tenemos un presidente, entonces el presidente tiene sus delegados, en cada comunidad tiene su delegado...en Santa cruz, en mi rancho, en mi pueblo está el delegado, entonces el delegado “ya van a entrar los niños a la escuela, organicen toda una faena, vamos a limpiar la escuela”, o sea toda la comunidad van limpian la escuela y todo, ya los maestros son los que dan la educación pero pues la comunidad esta apoyando también... por ejemplo que van a levantar una barda, la escuela no la puede levantar y ya nos ponemos a cooperar de que de diez, veinte, cincuenta o cien pesos y la ayuda”. (Grupo de enfoque con población indígena)

De tal suerte que cuando se llevo la discusión hacia el conocimiento político que se tiene dentro de la comunidad para darse a sus autoridades, la mayoría tenía claro quiénes y cuáles son las funciones de sus autoridades:

“por ejemplo los de comisariado se dedican a las tierras, y el juez que si hay problemas familiares que se pelea con este y con el otro, no pues una multa para que se les quite; entonces como a la autoridad te echa la mano si hay perdón o no hay perdón pero pues ya duro veinte u ocho horas en la cárcel, tienes que pagar la

multa que por difamación, o esto o lo otro y ya”. (Grupo de enfoque con población indígena)

Y cuando de la forma de elección y los tiempos de duración en el cargo también existe claridad:

“se hace en todo el pueblo, el pueblo se tiene que hacer como una reunión, pero todos, todos lo que pertenecen al mismo pueblo y allí ya escogen al que va a atender en todo el año o tres años, el delegado dura creo que un año y el comisariado ya ni sé

Entrevistado 1: tres años, le ayuda el secretario, le ayuda el tesorero y tiene su gente; o sea el comisariado cuida las tierras

Entrevistado 2: o sea también tiene que cuidar su propia gente, el delegado igual, que es por decir el tesorero o así todo eso el que maneja todo...por decir escogen a una persona y allí levantan la mano todos y si todos están de acuerdo que sea, pero primero hacen una reunión antes de toda la gente que ya fue delegado, pasaron y ya “oye como ven, vamos a poner a tal persona, como que si trae perfil de que el nos gobierne, o sea de que el sea el delegado” porque al delegado también le dan su nombramiento el presidente y él le da su nombramiento, no nada mas así, o sea también tiene su autoridad” (Grupo de enfoque con población indígena)

Además, el conocimiento que se tiene de las funciones también significa tener claro del presupuesto y las formas de darse los recursos:

“no, ellos están trabajando por hacerle un favor al pueblo...no, no tienen sueldos, de repente que hacen sus reuniones y por decir “vamos a apoyar con cinco pesos porque vamos para todo el años” entonces toda la comunidad se coopera de cinco pesos”. (Grupo enfoque con población indígena)

También en otro grupo de enfoque la población indígena tenía claro las funciones y los actores principales:

“nosotros sí vivimos en un rancho; tenemos delegados, juez, representantes de la comunidad... en la misma comunidad tenemos representantes que hacen para que la gente trabaje en el rancho, en el pueblo.

Entrevistador: ¿y cómo se eligen a esas autoridades?

Entrevistado 7: por voto también, hacen reuniones

Entrevistador: ¿pero se organizan entre la comunidad nada mas?

Entrevistado 7: sí, hacen reuniones todos los vecinos y ya ven ahí cual es la persona, si sale mayoría de votos pues es el que queda

Entrevistador: ¿es por voto?

Entrevistado 7: sí, por decir si son cien personas y votaron nada más diez o quince pues no, tiene que ser la mayoría, por decir de sesenta o setenta”. (Grupo de enfoque con población indígena)

En la cita anterior se puede observar que el principio de mayoría se tiene claro al momento de participar, así como la temporalidad de las votaciones:

“¿Cuándo son esas votaciones?

Entrevistados: cada año

Entrevistador: ¿es una vez por año?

Entrevistado 7: sí van cambiando una vez por año, eligen una persona, o sea al año y ya las van cambiando”. (Grupo de enfoque con población indígena)

Así como también se puede observar que las funciones son claras:

“¿y cuales son las funciones que hacen ellos?

Entrevistado 7: pues se organizan para trabajar, así a limpiar el camino o cooperaciones para solicitar algo”. (Grupo de enfoque con población indígena)

En síntesis, el conocimiento político, como variable independiente que influye en el voto, muestra grandes problemas cuando del sistema político clásico se trata, como lo es en Monterrey y su área metropolitana. Empero, se destaca que el conocimiento político de la población indígena sobre la forma en 1) cómo se dan a sus autoridades, 2) las responsabilidades del cargo, 3) la forma de elección y 4) los tiempos en el cargo en las comunidades, es amplio en la población indígena que vive en Monterrey y su área metropolitana.

Por todo lo anterior, es preciso distinguir que los cánones clásicos de la forma en cómo se concibe al conocimiento político en las democracias modernas deberá adaptarse y tomar lo mejor del conocimiento político y democrático de las comunidades indígenas. De eso es lo que otrora se ha determinado como la interculturalidad y el pluralismo jurídico como el manto que lo protege. Así como dejar atrás lo que en el clásico estudio de Gabriel Almond y Sidney Verba (2001) sobre la cultura política –en donde dicho sea de paso se tomó a México como estudio de caso comparativo– se establece:

México es el menos «moderno» de nuestros cinco países: es decir, existe todavía una población campesina relativamente grande con orientación tradicional y un elevado índice de analfabetismo. Tal vez el caso de México pueda ofrecer datos útiles sobre las características de la cultura política en países no occidentales, que pasan por experiencias semejantes en la modernización y democratización. (Almond & Verba, *La Cultura Política*, 2001, pág. 201)

Es claro que anterior a tal afirmación se estipuló que la corrupción, falta de libertad de organización política y una burocracia cínica es lo que también merma a la democracia y cultura política en México; sin embargo, esas eran características de múltiples países tanto latinoamericanos como europeos. Lo que ahora toca dejar atrás cuando de cultura política en general se trata, y sobre el conocimiento político en particular, es que la “orientación tradicional” supone un rezago democrático, pues es claro que los autores de entonces no contemplaban las múltiples culturas organizativas y democráticas en México, así como también estipular que el no hablar el castellano significaba una falta de modernización.

Ahora las lenguas indígenas son reconocidas por la constitución y su utilización y promoción deberá de ser una obligación propia de la Cultura Política en México.

7.3 Las variables étnicas del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana. Una interpretación dual

La dualidad de la interpretación en torno al voto indígena en Monterrey y su área metropolitana radica en que el sistema normativo en Nuevo León y el conocimiento político indígena por parte de los actores involucrados en la participación electoral de las personas indígenas representa uno de los mayores retos tanto en la conceptualización como en el desarrollo empírico del fenómeno. Es por eso por lo que siempre se deberá identificar el punto de inflexión en donde los dos sistemas de conocimientos y de participación puedan entrelazarse.

En tal tenor, las variables éticas encuentran su manto protector, y justificante, en lo que el pluralismo jurídico dicta (Correas, Derecho indígena mexicano, 2007; Flores Cruz, Características, regulación y perspectivas del sistema electoral por Usos y Costumbres, 2003; González Galván J. , Hechos y Derechos, 2013) y que deberá de ser acatado y materializado en Nuevo León. Sobre todo, porque desde 2012 la Ley de Derechos de Personas Indígenas en el Estado de Nuevo León y, como se ha visto en los apartados previos, ha estado inoperante al menos en cuanto a la participación electoral desde una visión de las variables clásicas del voto.

El presente apartado estará desarrollado a través de las variables clásicas identificadas en la literatura y que fueron rectoras en el trabajo de campo: 1) Conocimiento de Derechos, 2) Proximidad a OSC y 3) Sistema de Usos y Costumbres.

7.3.1 El conocimiento de derechos indígenas. El baluarte instrumental para la participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana

A finales del siglo XX, Robert Dahl (1992), en su libro *La democracia y sus críticos*, estipulaba que los basamentos de la democracia moderna eran: la igualdad intrínseca y la comprensión esclarecida. Bajo esos principios, pareciera que en todas las democracia modernas esos

supuestos ya estaban dados; sin embargo, en México sucedía lo contrario con la población indígena, pues no fue sino hasta el 2001 que la igualdad intrínseca de la que Dahl hablaba se reconoció por las vías constitucionales y la comprensión esclarecida de la población indígena era apenas otorgada para el comienzo de una nueva era de derechos sociales, políticos, culturales, económicos y de gobierno nunca antes estipulada en México (Carbonell, La reforma constitucional en materia indígena. Un primer acercamiento, 2003).

Ahora bien, el trabajo de campo puede dilucidar que el conocimiento de derechos, que en principio deberá ser promovido por las instituciones encargadas del seguimiento de la Ley de Derechos de Personas Indígenas en Nuevo León, es algo que no ha sido bien diferenciado por las Instituciones y ellas mismas lo reconocen:

“Si hay una atención que, a mi gusto o a mi ver, es muy generalizada, sigue sin atenderse esa particularidad que es de origen indígena... Yo creo que debería haber mayor apertura que verdaderamente influya y que deje de verse únicamente como un tema folclórico”. (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Además de que el conocimiento de derechos es precario por motivo de la falta de diferenciación de estos cuando de la población indígena en Monterrey se trata, el conocimiento de derechos indígenas pareciera que no es sino tomado en cuenta hasta que el funcionario está en relación con el fenómeno indígena. Es decir, aún es poco el conocimiento por parte de los municipios, por ejemplo, de los derechos indígenas:

“hasta ahora que empiezo a tomar la presidencia de la comisión de derechos humanos es donde me doy cuenta que existe esa ley y lo que hemos hecho hasta ahorita es modificar el nombre de la comisión de derechos humanos y agregarle y asuntos indígenas y también se agregó una nueva atribución de proponer acciones, programas, normas y políticas en materia de grupos étnicos con el propósito de debatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas así como el mejoramiento de sus condiciones de vida”. (Entrevista a informante clave municipal, SPGG)

Sin embargo, se ha de destacar que el municipio de San Pedro Garza García ha sido el primero municipio en abrir y hacer operante la oficina de atención a personas indígenas, tal y como lo marca la ley.

Por parte de la Institución Electoral en Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral (CEE), los esfuerzos han sido pocos en materia de difusión de derechos indígenas y, sobre todo, de la capacidad de ejercer la promoción de este conocimiento de derechos. Lo anterior, se resume en que la CEE solamente tiene planeado el programa Aprópiate de tus Derechos y tienen una línea estratégica sobre la población indígena; sin embargo, ha quedado sólo en planeaciones, pues no se ha implementado (Información de entrevista realizada a informante clave institucional, CEE).

Por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el principal problema en la difusión de derechos indígenas es la falta de aproximación por parte de la población indígena a la Institución. Además del incipiente trabajo por distinguir a la población indígena en Monterrey y su área metropolitana. Sin embargo, la visión de promoción de derechos se sabe urgente como lo demuestra lo siguiente:

“La Comisión tiene mucho que hacer al momento de difundir, porque es una de nuestras obligaciones de Ley, la difusión de los Derechos Humanos, la promoción de los mismos, verlo como algo necesario para el ejercicio de los derechos, reconocerlos como nuevoleonenses porque nuevoleonés no es solamente el nacido aquí... a fin de cuentas, ya tiene seis meses residiendo aquí pueden considerarlo como residente en Nuevo León, al fin de cuentas sus decisiones también importan es lo que tenemos que cambiar”. (Entrevista a informante clave institucional, CEDH)

Mientras que para los Partidos Políticos la lógica en la promoción de derechos indígenas no es parte de su agenda ni discursiva ni territorial. Empero, la crítica hacia el gobierno es amplia por parte de los partidos, pues determinan que el principal culpable de la falta de promoción de derechos indígenas es el Gobierno Estatal:

“en Nuevo León no hay una promoción de los derechos ni hay campañas que, informativas para las personas, para que sepan cuáles son sus derechos y como ejercerlos y pues esto todavía vulnera más le, las comunidades que son migrantes”. (Entrevista a informante clave de Partido Político, MORENA)

Sin embargo, pareciera que los partidos políticos en Nuevo León olvidan su papel de actores vinculantes entre la ciudadanía y el sistema político. Y es más cuando existe el problema de registro, pues quizá ese sea uno de los principales motivos por lo que los partidos políticos no amplían su labor, pues no existe un registro claro de cuánta población indígena hay en Nuevo León ni la ubicación para el trabajo territorial:

“pero pues también ellos tendrían que poner de su parte y el gobierno tendría que lanzar campañas de comunicación para decirles los beneficios de que estén realmente eh registrados”. (Entrevista a informante clave de Partido Político, MC)

De tal manera que se puede señalar que gran parte del problema de la difusión de derechos indígenas en Nuevo León, al menos en su carácter Institucional, es por la falta de un registro, pues no se sabe en dónde están, cuántos son y difícilmente sin esa información se podrá generar un agenda pública que materialice lo que la Ley dicta. Sin embargo, y a pesar de que la Ley estipula un Sistema de Información Indígena, los actores clave de la Academia advierten de ese problema y el presente análisis da cuenta de los diversos conflictos ya sea de interés o ya sea de protagonismo que ha inundado el tema indígena en Nuevo León desde cuando las mesas de análisis para la promulgación de la Ley de Derechos de Personas Indígenas en Nuevo León:

“se hizo ese ejercicio de derecho comparado y sobre esto y, y la realidad es que no es por ser soberbia pero yo era la experta en indígenas, los demás eran expertos en derechos, y pues muchos se basó en experiencia, no usamos en ningún momento la consulta, para que sepan, entonces todo se basó en darnos a entender en qué es lo que convenía hacer de acuerdo en tratar de retomar todo lo que venia en el artículo 2 constitucional nacional y los derechos que están previstos”. (Entrevista a informante clave de la Academia)

Es decir, de acuerdo con la palabras de la persona entrevistada, la promulgación de la Ley de Derechos de personas indígenas en Nuevo León estuvo envuelta en problemas en torno a la consulta a la población indígena. Y, por motivos de armonización con el artículo 2 constitucional, en Nuevo León resultó preciso estipular el Sistema de Información Indígena que en otros estados, como en San Luis Potosí, se ha materializado en un Padrón de Personas Indígenas pero que en Nuevo León ha provocado diversos problemas:

“Si, siempre, nos vienen con sus padrones de San Luis Potosí

Entrevistador: Si, pero dijeron, ellos dijeron algo

Entrevistada: Es un padrón de comunidades indígenas y aquí estamos personas indígenas

Entrevistador: Si, pero...

Entrevistada: Son dos sujetos distintos de derechos, derecho colectivo, derecho

Entrevistador: Individual, si

Entrevistada: Y aquí no son, el sujeto de derecho es, son personas indígenas, no son comunidades, es muy distinto, empadronar comunidades para cuidar el derecho colectivo, empadronar personas es una violencia muy grande”. (Entrevista a informante clave de la Academia, CIESAS)

De manera tal que en términos de derechos indígenas existe un gran vacío en la interpretación por parte de los legisladores y de los académicos. Además de que la discusión sobre el tema del Sistema de Información o Empadronamiento Indígena –que de acuerdo con el trabajo de campo realizado resultan sinónimos, al menos operativamente– pareciera que se encuentra politizado:

“Entonces eso sí es una discusión que va muy fuerte, ¿no? Y como por parte de las, bueno de (Se omite el nombre de la persona mencionada) no porque no puedo decir que las organizaciones indígenas o sea porque (se omite el nombre de la persona

mencionada) era alguien muy importante y la CDI estaba convencidísima que se tiene que tener un padrón ¿por qué? Porque son los primeros interesados en poder decir, tengo tantos sujetos de derecho que este, que justifica mi trabajo y que hace que justifica mi presencia aquí, o sea hay un interés instrumental, yo personalmente he militado duramente contra el padrón de población indígena en San Pedro y el padrón de trabajadoras domésticas”. (Entrevista a informante clave de la Academia, CIESAS)

En cuanto a las Instituciones gubernamentales, sobre todo las estatales, el conocimiento de derechos parece quedar más claro y, por ende, la planeación más aterrizada. Empero, siguen existiendo muchos problemas para materializar lo planeado. A pesar de esto, la visión que dirigen las acciones de la SEDESOL responde a la realidad de la población indígena. Y en primera instancia existe el problema de la identificación; es decir, para la SEDESOL queda claro que la baja participación electoral indígena se debe al poco conocimiento de derechos, aunque no es una carencia exclusiva de la población indígena en conocer los derechos y los beneficios de participar políticamente en el sistema político vigente; pero sí se hace hincapié en la necesidad de que la autogestión comunitaria, apoyada por los centros comunitarios catalogados como interculturales, sea mayor:

“Existe mucho esta creencia de que el gobierno me solucionará todo, entonces lo que nosotros queremos es buscar cómo empezamos a hablar de autogestión en estos grupos y decirles ok, tienen que, de entrada, ustedes reconocerse como miembros de la comunidad, porque hay personas que dicen: yo ya no me considero indígena, ese es otro tema, yo no estoy trabajando o no tengo tiempo. Primero es como ok, vamos a reconocernos como miembros de la comunidad, vamos a reconocer la problemática común, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué está en las manos de la administración pública? Vas construyendo este caminito”. (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Se menciona que la SEDESOL pareciera que es de las pocas instituciones gubernamentales que tiene una visión clara en materia indígena por lo siguiente: 1) reconocen las

problemáticas de todos los actores involucrados y 2) mantienen acciones claras, aunque sin presupuesto. Parte de esas acciones se pueden reconocer en tres fases, de acuerdo con la entrevista realizada en función de conocer qué es lo que SEDESOL hace para cumplir con la Ley en materia de Derechos indígenas:

“Lo primero que se está haciendo es un proceso en tres fases: la primera fase es abrir el sistema que existe para grupos vulnerables, es decir “yo me acerco a la Secretaría de Desarrollo social” digo “yo necesito apoyo” ok, se te hace una encuesta, lo que se busca es que en esa encuesta aparezca dentro de las preguntas usted es de origen indígena, o sea ese ejercicio tan simple no existía, entonces es el primer paso. Se vean seis preguntas, usted es de origen indígena, los usos y costumbres que aun preserva, qué lengua habla, de qué comunidad es originaria y la última es sobre si su familia o su descendencia conserva esas tradiciones o se está perdiendo en la descendencia ¿no? entonces esas preguntas se agregan a esta plataforma. Con eso no se soluciona el problema es cierto, pero es el primer paso”. (Entrevista con informante clave gubernamental, SEDESOL)

Es decir, por primera vez en Nuevo León se pretende hacer un registro de la población indígena en la entidad. Aunque para otros actores resulta una odisea conformar un registro, para SEDESOL se convierte en una necesidad, pues el margen de maniobra y la oportunidad del acceso a recursos para operar las visiones y acciones en materia indígena en el Estado aumenta si se tiene identificada a la población que habrá que atender, brindar los beneficios y promover los derechos indígenas. El segundo paso, como se verá, está pensado en la operación territorial por parte de los Centros Comunitarios de la SEDESOL:

“El segundo paso es abrir esta misma plataforma a los centros comunitarios para que los centros comunitarios, cuando cualquier persona, el proceso es cuando tu te acercas a cualquier centro comunitario y dices: “yo quiero tomar el taller de cocina” a bueno, se te hace una serie de preguntas, que en esa serie de preguntas se vuelvan a incluir esas seis preguntas”. (Entrevista con informante clave gubernamental, SEDESOL)

Así, la estructuración va desde la planeación de un sistema o plataforma en que pueda existir un registro de la población indígena en Nuevo León en donde el conocimiento de Usos y Costumbres, la lengua y el sentimiento de identidad sean las preguntas rectoras y que puedan ser implementadas aprovechando la estructura institucional ya establecida de los Centros Comunitarios. Y, además de eso, promover las actividades de los centros comunitarios.

Como una tercer fase de las acciones planeadas para el cumplimiento de la Ley Indígena, la SEDESOL lo tiene estipulado como un esfuerzo de sinergia institucional:

“Y en un tercer paso es, que en las demás dependencias de la administración pública, aunque vayas a salud y una parte, así como te pregunta tu curp, usted es o se auto escribe como una persona indígena, qué comunidad, qué lengua, de dónde viene, ese es el proceso en el que se busca seguir”. (Entrevista con informante clave gubernamental, SEDESOL)

Tal empresa se torna compleja cuando el factor de voluntad política y conocimiento de derechos indígenas por parte de las demás dependencias se trata. Además de los recursos financieros y de capital humano que son extremadamente bajos, pues el equipo que conforma el área de atención a la población indígena en Nuevo León consta de solamente 2 personas. Dos funcionarios del gobierno estatal difícilmente podrán echar a andar tan ambicioso y necesario plan de acción sin que los demás actores involucrados hagan su parte. Cabe destacar que el informante clave de la SEDESOL reitera que eso no es un ejercicio censal, sino simplemente son visiones que pueden comenzar a sanar las inoperabilidades legales en las que el tema indígena se encuentra desde 2012:

“No tanto crear como un ejercicio muestra de una encuesta estatal no, no está planteado en ese sentido, por lo menos ahorita no, ahorita lo que se busca es empezar a capturar dentro de los beneficiados o dentro de la gente que pide ayuda en las distintas áreas, cuáles son indígenas y cuáles no o cuáles no se auto escriben como indígenas”. (Entrevista con informante clave gubernamental, SEDESOL)

La visión en cuanto al conocimiento de derechos indígenas por parte de la SEDESOL mantiene un carácter de integral, pues al tiempo que señalan los problemas que enfrenta la población indígena también lo hacen para las problemáticas de la misma OSC:

“Su prioridad es primero comer, después su familia, y después preservar su identidad y, en un ultimo paso bueno cómo me comprometo con la comunidad...sensibilizar a la sociedad en general, a quienes toman la decisión, sensibilizar a las OSC, no digo que no estén sensibilizadas creo que son las que mas fibra tienen y mas le echan la gana, pero si ser conscientes de que si pulverizamos la ayuda, es decir, yo me quedo con “yo estoy apoyando a estos cinco, y a estos cinco voy a seguir apoyando”, esta bien, nada mas que ser conscientes de que el espectro necesita de todos los actores y que podamos hallarles , y habrá veces en las que no se coincida, y habrá veces en las que si tengamos que sumarnos como una sola voz”.
(Entrevista con informante clave gubernamental, SEDESOL)

El papel de las necesidades económicas que subsanan las necesidades más básicas de un ser humano se encuentra de manera constante cuando de derechos indígenas y participación política indígena se trata, así como el papel de las OSC. Para éstas últimas, más adelante se especificará con mayor profundidad el análisis.

Ahora bien, ya se señaló el papel que tiene el conocimiento de derechos indígenas para los Partidos Políticos, para la SEDESOL y el controvertido tema de indentificación y empadronamiento o registro de la población indígena en Nuevo León desde una visión Académica. Se puede establecer que no hay concomitancia entre las visiones instrumentales y la esencia del trabajo en cuanto a la promoción de derechos indígenas en la entidad.

Empero, ¿qué pasa con la promoción de derechos de un actor sumamente importante, de acuerdo con la literatura de movilización y participación política indígena en la región andina, que recae en las acciones de los estudiantes –jóvenes, sobre todo– indígenas en Monterrey y su área metropolitana? Cuando se habló de conocimiento de derechos en el trabajo de campo realizado, inevitablemente salió a la luz la situación de los estudiantes

indígenas. Lo anterior es de importancia nodal para la nueva forma de analizar la situación indígena en la entidad, pues resulta claro que la población indígena en Monterrey poco a poco está comenzando a salir de aquel halo fantasmal que recorría su estereotipo; es decir, mucha población indígena en Monterrey ha dejado o está dejando de ser parte del trabajo doméstico o de la construcción y encuentran en la Educación un motivo reparados de esos males coloniales:

“nos hemos dado cuenta de que entre los estudiantes universitarios indígenas hay un activismo político muy fuerte”. (Entrevista con informante clave Academia, UERRE)

El activismo político, que fomente la promoción de derechos indígenas, y sobre todo de los derechos políticos, deberá ir en incremento en Monterrey. Y todo lo anterior se puede ver en que la mayoría de las principales OSC las presiden jóvenes indígenas que han estudiado alguna carrera universitaria en diversas instituciones educativas en Nuevo León y la cultura es su principal estandarte:

“hay un compromiso hay una idea de, de promover la propia cultura, hay una serie de asociaciones que, que defienden los derechos de los, por los indígenas aquí en Monterrey, pero que también dan esas luchas políticas como órganos de gobierno”. (Entrevista con informante clave Academia, UERRE)

Y el pragmatismo político de mucho de ellos puede ser identificado por investigadores en materia antropológica:

“de este grupo de estudiantes jóvenes universitarios tampoco viven fuera del mundo ¿no? Saben perfectamente pues todas las redes casi, como funcionan como entonces digamos que, pues como en todo activista supongo que hay un poco de, de idealismo y otro poco de pragmatismo”. (Entrevista con informante clave Academia, UERRE)

Se puede apreciar como poco a poco la adaptabilidad estratégica de la que hablaba M.A Bartolomé (2006) se va materializando en Monterrey y su área metropolitana, pues esos

procesos interculturales que reconoce la antropología política y que el autor resume en que es preciso que por términos de estrategia política y, por supuesto, de pragmatismo político, se compagine la cultura con la acción política que a su vez determine mejoras para la población indígena. Y todo pareciera ir caminando por senderos prometedores cuando de estudiantes universitarios indígenas se trata, pero se pudo reconocer en el trabajo de campo realizado un nicho de oportunidad para el sector de profesores bilingües del Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Nuevo León:

“Se que los maestros bilingües andan malviviendo con cuatro pesos les siguen dando una limosnita”. (Entrevista con informante clave Academia, UERRE)

Termina siendo desalentador para el desarrollo integral de la población indígena en Nuevo León que una de las primeras acciones institucionales y posteriormente departamento gubernamental como lo es el Departamento de Educación Indígena (DEI) no encuentre respaldo por parte de la Secretaría de Educación del Estado. Siendo que tal departamento fue iniciado alrededor de 14 años antes de que la Ley de Derechos de Personas Indígenas fuera promulgada. Y una vez más, el tema presupuestal sigue siendo tema a considerar, pues contrario a lo que la lógica dicta, el DEI no ha visto aumento de personal y de recurso destinado para su eficiente operatividad:

“como si hablas de la importancia del respeto a sus derechos como colectiva etc. todo lo que diga el artículo, si no pones los medios para qué, de qué sirve”. (Entrevista con informante clave Academia, UERRE)

Pero siguiendo con la línea argumentativa en torno al conocimiento de derechos indígenas, la informante clave de una OSC fue clara con ello:

“desconocen igualmente sus derechos, carecen de redes o vínculos de apoyo, desconocen las instancias que ofrecen distintos tipos de servicios, muy pocos o casi nada tienen acceso la cuestión educativa, precisamente porque no tienen vivienda, no tienen este.. su ingreso es para manutención y muchas veces no nada más manutención de ellos sino más bien manutención también de la comunidad de

origen, de la familia que dejan, entonces se vuelve mucho más compleja la situación que viven las personas que migran de forma dispersa a las personas que están ya como... asentados”. (Entrevista con informante clave de OSC, Zihualakali)

Es destacable que el desconocimiento de derechos está relacionado con el desconocimiento de la estructura gubernamental. Además de que la igualdad de condiciones entre las personas indígenas ya asentadas en Monterrey y su área metropolitana y las que recién llegan a la ciudad, son es demasía diversas. Y es claro que ni los Partidos, ni la Acadmia, ni Instituciones gubernamentales, y en menor medida las OSC, han atacado de forma eficiente e integral ese problema.

Aparece a relieve un caso muy particular en la forma de cómo se materializan los derechos indígenas en Nuevo León. Y aunque nuevamente el tema presupuestal fue una constante, la voluntad para materializar derechos indígenas también sale a la luz. Para contextualizar un poco, en otro apartado previo al análisis se especifico que la primera aproximación que se tuvo en 2016 con la población indígena fue un proceso de Certificación de Intérpretes Traductores en Lengua Indígena para Juicios Orales en el marco del cumplimiento con la Ley que otorga el derecho del acceso a la justifica en lengua indígena. En esta certificación, que dicho sea de paso estuvo conformada y formalizada por diversas instituciones tanto federales como estatales: CDI, INALI a nivel deferal y la PGJ y la SCJ del Estado de Nuevo León en lo local, principalmente, las esperanzas de que se materializaran de manera integral el derecho resultó solo como eso, una esperanza; y en el marco del trabajo de campo realizado para esta entrega –en el año 2018–, a dos años de la Certificación, una de las participantes que se certificó y que preside una Asociación Civil indígena en Nuevo León, da cuenta de la realidad regiomontana cuando de operacionalizar derechos indígenas se trata:

“no hay una coordinación no hay un seguimiento, hablaban por ejemplo también por derecho de contar con honorarios y demás para los interpretes porque un juicio te lleva, te puede llevar un día, unos días o te puede llevar unas horas y puede ser en Cadereyta, puede ser en, no se en este en García o en algún aquí mismo, puede estar cercano o puede ser hasta allá en Guadalupe y esos o sea no hay forma, no

hay, de tu bolsa lo tienes que sacar para trasladarte y estar ahí porque lo que hemos encontrado que después e esa certificación empezaron a hablar y hablar y hablar para solicitar interpretes”. (Entrevista con informante clave de OSC, Zihuakali)

Se puede percibir de manera clara que el interés por parte de las Instituciones de impartición de justicia resultaron interesados cuando la Certificación. Empero, el interés se vio mermado cuando de honorarios se trataba:

“a hacer cargo de

Entrevistador: de los honorarios y así

Entrevistada: nos quedábamos así súper, y luego nos decían no pues cóbrale al señor ahí esta, enfrente de el

Entrevistador: ¿al imputado?

Entrevistada: al señor que le íbamos a asistir, al imputado, ahí está cóbrale ¿de donde te lo va a dar?”. (Entrevista con informante clave de OSC, Zihuakali)

El cinismo y desconocimiento tanto de la Ley como de los preprocesos judiciales pareciera ser constante por parte de algunas instancias gubernamentales como se puede evidenciar. ¿Será problema de falta de voluntad o acaso falta interés por parte de quienes están al frente de Instituciones? Pareciera que ambas y, más aún, se percibe un grave problema cuando las instituciones gubernamentales rechazan pagar por trabajos certificados y de derechos indígenas:

“ahora luego después cuando empezaron a llamar y les dijimos verdad nada mas a ver díganme quien se va a hacer cargo de mis honorarios y viáticos y así, ah no sabía que cobraban y le digo pues si es un trabajo... y entonces y nos decían ah bueno déjame checar con mi jefe inmediato y ya no hablaban”. (Entrevista con informante clave de OSC, Zihuakali)

También la falta de sensibilidad afecta el conocimiento de derechos indígenas por parte de las instituciones y de la población indígena. Aunque más adelante se brindará un apartado exclusivo para conocer cómo es que la discriminación institucional afecta y disminuye la participación política indígena en general, y la participación electoral indígena en lo particular, es preciso señalar en este momento que muchas instituciones, o mejor dicho: personal y/o funcionarios públicos de las instituciones gubernamentales, no reconocen aún que existe un gran número de población indígena en Monterrey y su área metropolitana y mucho menos mantienen grado alguno de sensibilidad en la materia:

“otros derechos que estipula esa reforma también, una gran carencia una mujer violentada va a poner su denuncia acompañada de Zihuakali y le dicen no pero pues que le hizo a su esposo para que la pusiera así, le va a ir peor si no se regresa allá a su casa a atenderlo entonces esos comentarios, esa insensibilidad sobre el tema que le, que vaya al medico y que le diga no primero váyase a bañar y ya luego la atendemos cuando la persona se esta muriendo entonces cómo”. (Entrevista con informante clave de OSC, Zihuakali)

Para la cita anterior resulta aberrante la forma en cómo en pleno Siglo XXI exista en México formas tan irracionales de pensar por parte de profesionistas y funcionarios. Y peor aún, cuando las instituciones gubernamentales, y se podría decir que alcanza a los Partidos Políticos también, se escuden en que la población indígena no se acerca a ellos, pues cómo se acercarán a instituciones que tiene a personal que discrimina y que es el resultado de una discriminación que ha ido recorriendo México durante más de 500 años:

“Ese día que nos sentamos a trabajar, era de que y ¿cuántas? hay poquitas personas indígenas, no por eso ni van a las instituciones porque en mi dependencia no ha ido ninguna indígena, en todo lo que va del año yo creo una nada más. Si entonces le digo ¿porque no va? por el trato que le están dando y entonces si, es una híjole es un tope que te das con el sistema como asociación también, nos sorprendemos el trato que encontramos, aquí en la casa llaman y piden muchachas para trabajo para empleadas domesticas, hablan aquí incluso las mismas dependencias de gobierno

hablan para pedir alguna muchacha para su casa, entonces ahí nos sorprende mucho de como nos están viendo como asociación civil que es dirigida por mujeres indígenas, mujeres y hombres indígenas”. (Entrevista con informante clave de OSC, Zihuakali)

Lo anterior demuestra la falta de sensibilidad, el rechazo por parte de la población indígena en Monterrey hacia las instituciones gubernamentales y lo arraigado de un estereotipo de la persona indígena en Nuevo León que está vinculado al empleo doméstico. Con claridad se puede establecer que en Monterrey y su Área Metropolitana se materializa la “paradoja nodal” de Manuel Martínez Espinoza (2012) en donde este autor advierte que existe una contradicción en cuanto al ejercicio y derechos de ciudadanía indígena en México, pues ahora mismo son las mismas instituciones que durante años socavaron el desarrollo de la población indígena en el país quienes deben de cumplir y hacer valer sus derechos. Nuevo León y sus instituciones locales son una muestra del problema que eso conlleva, como se mostró en las citas anteriores.

Ante todo lo mostrado, cabe resaltar que a pesar de la poca cristalización de la Ley en políticas públicas, participación política y acceso a derechos, es ganancia que esté la Ley ya promulgada. Lo que es preciso reconocer es que la Ley no se convierta en letra muerta y que además del conocimiento de derechos se pugne por ejercerlos y exigirlos, así como lo demuestra un informante clave de OSC:

“no nada más un conocimiento de derechos sino mas allá a exigirlos, a ejercerlos, a y emergen liderazgos muy fuertes y muy interesantes de analizar ¿verdad?”. (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Y son esos liderazgos los que se analizarán mas adelante, pero que sí se puede adelantar que en muchas ocasiones por ese liderazgo emergente y protagonismos –que se encuentran en muchos de los actores involucrados– que rozan lo ilógico, es que el tema indígena sigue estancado más allá de que esté todo estipulado en la Ley. Y, sobre todo, el problema principal que algunas OSC identifican es que el conocimiento de derechos,

emanados de la Ley de 2012, se vuelve inoperante a causa del discurso de muchos funcionarios que no avanzan y no dejan avanzar en el tema:

“Aunque siguen diciendo que son una minoría mas minoritaria de lo que lo son ,digo si estoy de acuerdo que son una minoría pero son una minoría con derechos ... pero no logran estar en la agenda pública posicionados como tú dices pues habrá quien te ponga cara de what?, habrá quien saque una muletilla para no mostrar su ignorancia en el tema pero si le rascas tantito no creo que nadie sepa”. (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Y se pudo constatar que esa ignorancia por parte de los funcionarios recae en una premisa que fue difundida durante mucho tiempo en México:

“fíjate que las cuestiones que más, que más marcan todos los niveles, somos mexicanos como esta este discurso que en realidad debiera de estar ya superado...pero que fue un discurso que integro en los años 50 en donde fue esta gran masificación de lo indígena y de castellanizar como unificación nacional, sin reconocer las diferencias culturales y lo que esto implica. Estoy de acuerdo tiene que haber una igualdad en cuanto a las oportunidades brindadas pero es un grupo a quienes nos debemos por los mas de 500 años de rezagos, marginaciones, este expropiaciones, todos los adjetivos que te diga, creo que me quedo corta”. (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Lo anterior refleja la contradicción misma en cuanto a la situación gubernamental en Nuevo León. Mientras que Monterrey es considerada una de las urbes más importantes de México, así como la capital industrial por excelencia en el país, también es considerada la ciudad que más discrimina; también, Nuevo León esta considerado como la entidad federativa en donde ha existido un mayor crecimiento poblacional de población indígena –sobre todo en Monterrey y su área metropolitana– pero pareciera que es la entidad en donde subsisten las más enconadas prácticas discriminatorias por parte de los funcionarios; así como ser la entidad que mantiene una Ley totalmente progresista en materia de Derechos Indígenas,

en sintonía con la Constitución y Tratados Internacionales, pero la entidad con visiones municipales que no entienden y no trabajan en lo que la Ley les exige:

“la parte mas importante es que se obtuvo el resultado, la ley en Nuevo León es progresista incluso, sé hay reconocimientos que no lo tienen a nivel internacional, aquí la ley de Nuevo León reconoce a personas indígenas a nivel nacional están reconocidos no están reconocidos los derechos como personas únicamente como comunidades en fin creo que se lograron muchos detalles, y se logró, se pasó para adelante esa ley...como te digo el gran reto es que esta ley la conozcan desde los ayuntamientos para que haya, no te nombren un encargado de asuntos indígenas al regidor de cultura digo no tengo nada en contra de los regidores de cultura”
(Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Como se puede constatar de nueva cuenta, una vez más el tema indígena en Monterrey y su área metropolitana es considerado desde su vertiente folclórica y no como ciudadanos que mantienen derechos diferenciados y que van más allá del folclor. Con anterioridad las entrevistas a Partidos Políticos lo señalaron, los municipios no integran en sus planes municipales de desarrollo a la población indígena ni ofrecen espacios de representación dentro del municipio, como lo dicta la Ley. Y más aun, tal empresa se complica cuando los ayuntamientos designan a las direcciones de cultura para trabajar en materia indígena, con eso estereotipando a las personas indígenas y evidenciando sobrada ignorancia³⁵.

Más allá de la ineficiencia gubernamental, esclerosis gubernamental le llaman autores como Manuel Alcántara (1995), el conocimiento de derechos indígenas, sustentados en la Ley, es de suma importancia por su contenido:

“bueno la ley de derechos indígenas entonces en si es como una agenda de acciones que se podrían seguir que tienen su fundamento ahí en los temas que te mencioné salud, educación, cultura, vivienda todos esos tienen cabida porque tienen su

³⁵ El único caso de éxito en el cumplimiento con la Ley de Personas Indígenas en Nuevo León es el municipio de San Pedro Garza García en 2018.

fundamento en la ley constitucional del estado de Nuevo León”. (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Como más adelante se verá, el tema de educación, salud y vivienda son aspectos fundamentales que la población indígena en Monterrey y su área metropolitana exigen.

En cuanto al tema de organización, actores claves de las OSC mencionan que el conocimiento de derechos indígenas es beneficioso hasta para la forma en cómo organizarse en Nuevo León. Por ejemplo, la forma en cómo se organizan las comunidades indígenas puede resultar esclarecedor para resolver muchos problemas que afectan en Monterrey, como el tema de seguridad o de organización social:

“es muy complicado y a veces un poco incomodo estar como estar diciendo a ver los pueblos indígenas son así, han revolucionado también viven aquí en la ciudad tienen otra forma de conocer la ciudad que es otra cosa que hay que entender, conocer sus formas e organización a lo mejor son complejos diferentes pero esos mismos si los tenemos como incluso si los apropiamos a la sociedad nuevoleonense a la sociedad indígena yo creo que podrían ser mecanismos de para encontrar soluciones a problemas comunitarios que hay de organización”. (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Lo anterior representa una dualidad operativa. Como se mencionó antes, el conocimiento político si bien es cierto que es bajo por parte de la población en general, y más aún en la población indígena en la entidad, no es así cuando de conocimiento político en temas organizacional y de designación de autoridades se trata. Y lo mismo pasa en el tema de derechos y leyes, la población indígena que radica en Monterrey y su área metropolitana está inmersa en una dualidad en cuanto a leyes, normas y formas de ver el mundo:

“Es muy interesante sobretodo porque están sujetos a las leyes y normas de dos espacios diferentes, a las de allá si es quieren mantener sus derechos comunitarios entre ellos si tienen una casa allá pues tendrán que cumplir las obligaciones y pagar las contribuciones allá y eso implica cumplir cargos, aportar a las fiestas, a las cuotas

y aquí pues si es que viven en una colonia donde hay predominancia de ese grupo pues también hay la posibilidad de que contribuyan a la festividad de esa comunidad si es que se da y se da la misma dinámica tanto aquí como allá si esta familia, esta persona no contribuye a esta festividad o a esa dinámica colectiva pues empieza a ser relegada y son decisiones colectivas que normalmente nacen de las asambleas o de las reuniones de ciertos grupo o familias que están estructuradas o reestructuras a modo de comunidad”. (Entrevista a informante clave gubernamental, CDI)

Con esto se demuestra algo que es muy pocas veces hablado en la arena política en Monterrey y que representa una realidad de suma importancia para la población indígena; pues se habrá de recordar que el sentido de identidad y pertenencia cultural de las personas indígenas van mucho más allá del sentimiento de identidad y prtenencia cultura de las personas no -indígenas, y la tierra y compromiso con la comunidad en ocasiones es tan grande que la población indíegna en Monterrey tiene que lidiar con dos visiones del mundo en ocasiones contrarias y sumándose a ello el desconocimiento y poca proximidad gubernamental y de instituciones a la atención de esas dualidades.

Y debido a esa dualidad, existe un abuso por el desconocimiento de derechos por parte de los empleadores y/o empleadoras hacia los empleados y/o empleadas. En el trabajo de campo realizado con la población indígena, el momento de indagar sobre el conocimiento de derechos indígenas, aparecieron a relieven graves problemas de discriminación y de incumplimiento de derechos:

“cuando renuncias no te dan allí nada, liquidación

Entrevistador: ¿y seguro no tienen?, por ejemplo médico

Entrevistado 1: y luego ni dan de comer, ni ofrecen un vaso de agua, hay veces que... como hace rato fui con una hermana de mi esposo dice “yo me iba a cambiar de mi trabajo porque allá no me gusta, porque es de nueve a siete, no comí todo el día, ni siquiera un vaso de agua me ofrecieron, en todo el día no comí, llegué a la casa casi borracha, llegué rapidito y comí”, así tratan las señoras

Entrevistador: ¿y por qué creen que pase eso?

Entrevistado 1: ellas sí quieren que uno les sirva, pero para ellos.

Entrevistado 2: a lo mejor también piensan que nosotros venimos así del rancho, que no sabemos nada de aquí

Entrevistado 4: que somos ignorantes”. (Grupo de enfoque con población indígena)

Es preciso resaltar que para el tema del trabajo doméstico pareciera que el abuso y socavamiento de derechos se acentúa por el simple hecho de que las trabajadoras, principalmente, sean de alguna comunidad indígena. En otro apartado se profundizará más el análisis, pero es urgente señalar lo siguiente:

“Entrevistado 2: de hecho, piden que sean de rancho, “no, que sea de rancho porque son mas trabajadoras”

Entrevistado 1: ellas ya saben el trato que les van a dar, por eso quieren de rancho

Entrevistado 7: para hacerlos trabajar de más

Entrevistado 1: pues sí, como un burro

Entrevistado 4: por eso queremos luchar para la educación de nuestros hijos, para que no pasen lo mismo que nosotros, yo no quisiera que mi hija trabaje igual que yo”. (Grupo de enfoque con población indígena)

Queda plasmado con la cita anterior que la discriminación y falta de respeto a los derechos de personas indígenas en Monterrey, sobre todo los laborales, son una constante.

Ante tales discriminaciones institucionales, sociales, falta de voluntad política por instituciones gubernamentales y de partidos, falta de pragmatismo académico y un amplio desconocimiento de los derechos, la población indígena en Monterrey y su área metropolitana, sin ánimos de generalizar, padece lo que el éxodo provoca: nostalgia del lugar de origen y desinterés y poca confianza en las arenas políticas. Y lo peor de todo, ese

éxodo y situación precaria en el lugar de llegada sucede en un mismo país, y lleva más de 500 años perpetuándose:

“no, pues nadie quiere; le digo a mi mamá “piensan ustedes allá en el rancho que esta bonito”, pero no, no es bonito estar fuera de nuestro... Entrevistado 7: yo veo que en el rancho la pasan mas mejor que aquí, cuando voy ya ni me quiero venir”. (Grupo de enfoque con población indígena)

7.3.2 La proximidad a las OSC indígenas y pro-indígenas, ¿incentiva a la participación político-electoral en Monterrey y su Área Metropolitana?

Como anteriormente se mencionó, existe una amplia gama de trabajos que estipulan que la irrupción de los pueblos indígenas en América Latina estuvieron de la mano las OSC y de las redes transnacionales forjadas en el seno de la sociedad civil y que fungieron de aliados en lo que teóricamente se ha designado como Estructuras de Oportunidades Políticas (EOP) por parte de los estudiosos de la acción colectiva y movimientos sociales (Martí i Puig, 2010; Tarrow S. , 2012). De manera tal que las OSC han estado ampliamente vinculadas con la participación política indígena en la región latinoamericana y, en la arena nacional, la mexicana, el impacto se puede analizar desde la vertiente constitucional, de territorio y autonomía, y desde partidos políticos indígenas (Carbonell, La reforma constitucional en materia indígena. Un primer acercamiento, 2003; Correas, Derecho indígena mexicano, 2007; González Galván J. A., 2010; Lee Van Cott, Indigenous Peoples and Democracy in Latin America, 1995).

La dinámica política en Monterrey y su área metropolitana en materia indígena es distinta. Por mor de que la región no conserva comunidades indígenas de origen, las variables de territorio y autonomía y de partidos políticos indígenas no se han materializado; siendo la variable constitucional la única, que desde 2012, ha luchado por encontrar cabida en la vida diaria y en beneficio de ésta de la población indígena. Sin embargo, existen diversas OSC clave en el tema, estas organizaciones pueden diferenciarse porque unas son de carácter indígena –su presidente y miembros son personas indígenas– y otras son pro-indígenas –

aquellas organizaciones compuestas por personas no indígenas pero que trabajan en beneficio de la población indígena– que se consideran para la presente entrega como variables independientes que deberán influir en el voto indígena en Monterrey.

Ahora bien, la cuestión radica en conocer si en verdad las OSC provocan el interés, confianza y consecuente participación político electoral indígena. Es decir, las OSC, para la presente entrega, serán consideradas como el vínculo y el mecanismo que la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana tienen para con el sistema político vigente. Podrán considerarse como un símil, aunque guardando la debida distancia, de los Partidos Políticos.

De entrada, las OSC se entienden como esa forma de organización que brinda las atenciones que el gobierno ya sea por falta de interés o incapacidad operativa no brinda o que ejerce el papel de identificador de problemáticas y diagnósticos en materia indígena en este caso:

“con organizaciones de la sociedad civil...de acuerdo con alguna necesidad, alguna carencia que se detecte se busca a la organización ideal que pueda ofrecer el brazo extensivo del cual el gobierno no puede abarcar determinado servicio o solución para que ellos se encarguen” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Ante lo anterior, la SEDESOL puede identificar un primer espacio problemático en torno a la vinculación de la población indígena con el gobierno por medio de las OSC:

“Existe mucho esta creencia de que el gobierno me solucionará todo, entonces lo que nosotros queremos es buscar cómo empezamos a hablar de autogestión en estos grupos y decirles ok, tienen que, de entrada ustedes reconocerse como miembros de la comunidad, porque hay personas que dicen: yo ya no me considero indígena, ese es otro tema, yo no estoy trabajando o no tengo tiempo. Primero es como ok, vamos a reconocernos como miembros de la comunidad, vamos a reconocer la problemática común, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué está en las manos de la administración pública? Vas construyendo este caminito” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Y como una acción que implementa la SEDESOL para contrarrestar ese mal consiste en la vinculación y/o acompañamiento de Asociaciones Civiles. Hasta el momento del trabajo de campo en 2018 se tenía un trabajo de vinculación con 6 asociaciones civiles por medio del área de vinculación de la SEDESOL. Aunque también tienen claro que esa vinculación deberá comenzar con la capacitación y/o asesoramiento para establecer una OSC:

“De entrada con los programas que se tiene, como el programa de asociaciones civiles, ¿qué es lo que tienes que hacer? Constituirte como organización civil, ¿qué necesitas? Esto, las capacitaciones, los asesoramientos nosotros se los damos a ellos, el acompañamiento para que presenten el proyecto, ese es el primer paso”
(Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Como se puede observar, el interés por empoderar a las OSC es amplio. Por ello, es necesario que se analice cómo es que las OSC indígenas y pro-indígenas perciben ese apoyo gubernamental antes mencionado y trabajan en una realidad que en ocasiones es adversa.

Las principales actividades que realizan las OSC indígenas están dentro del marco de prevención de la violencia contra la mujer y violencia familiar:

“aquí en la asociación lo que estamos trabajando principalmente es el tema de atención y prevención de la violencia de género y la violencia familiar en mujeres indígenas” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

El que aparezca como de los principales trabajos por parte de las OSC indígenas la prevención de violencia, y que ésta sea principalmente la violencia contra la mujer y familiar, representa una clave interpretativa. Y continuando con la dinámica de la entrevista semiestandarizada, se reconoció que esos trabajos de prevención van de la mano con la elaboración de un diagnóstico sobre violencia que contemple las diversas formas de violencia que padecen las mujeres indígenas:

“este año estamos haciendo o tratando de sacar un diagnóstico sobre los tipos de violencia que viven las mujeres indígenas aquí en un contexto urbano pero contemplando en este tipo de violencias los usos y costumbres, la violencia

institucional, la violencia de género y violencia familiar y la idea que.. y, o el objetivo que tiene este proyecto es que el siguiente año sean acciones más focalizadas hacia el tema para... Prevención” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Entonces la proximidad por parte de la OSC con la población indígena va en función de lo antes mencionado. Y además se mencionó que la población indígena más vulnerable en torno a la violencia familiar y de género recae en las empleadas domésticas que solamente pueden salir los domingos de su lugar de trabajo, que dicho sea de paso es donde viven, y que toman a la Alameda Mariano Escobedo en Monterrey como el lugar de esparcimiento. Sin embargo, todas las dependencias gubernamentales y de partido están cerradas.

Pero, ¿cómo es la relación con las instancias gubernamentales? Para ello persona entrevistada señala lo siguiente:

“Entrevistador: existen espacios de participación y representación indígena eh en el estado, ¿que el Estado abra espacios de participar y de representación indígena?
Entrevistada: de representación no, de espacios si pero a veces ya traen trazados sus planes de trabajo, hemos asistido o nos han convocado para como asociación y lo que se ha visto también en las leyes de consulta o en mesas de trabajo para propuestas políticas, hemos visto algunas otras asociaciones y compañeros que están en el en el activismo, algunos lideres comunitarios pero son los mismos”
(Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Es importante la manera en que se destaca que los espacios de participación en conjunto con el Gobierno se dan en el marco de planes de trabajo previamente trazados por éste último. En eso se coincide con la información recabada cuando la entrevista con la SEDESOL; sin embargo, el señalamiento en que al menos a la OSC entrevistada no se le incluye cuando la planeación de las actividades desarrolladas por el Gobierno y se señala la aparición siempre de actores específicos, muestra un foco rojo en cuanto a la relación de las OSC con el gobierno.

Y es cuando el papel de los líderes indígenas aparece a relieve. No obstante, en otro apartado de se realizará el análisis de esto. Pero se puede advertir lo siguiente:

“más bien no tienen ubicados a buenos líderes, que están en pro de la comunidad, sino más bien líderes que han aprendido de la política que han visto de los entonces las, esos espacios que abre el Estado generalmente van con los, estos líderes que dices que en ocasiones no representan los intereses de la comunidad verdad, que son líderes indígenas sí, pero que no, no representan a la población indígena” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Y son esos mismo líderes los que son reconocidos como el vínculo del Gobierno con la comunidad pero que, de acuerdo con la persona entrevistada, carecen de reconocimiento dentro de la comunidad. Además, se señala que esos líderes que tienen mayor contacto con el Gobierno tienen la particularidad de pertenecer a una OSC determinada y que, en su mayoría, son varones:

“y otras personas que, son puros varones entonces, ellos andan súper, súper politizados, mucho en la política, mucho, mucho, les gusta mucho y bueno andan en todo y ellos sí, mueven a la gente cuando tienen que recabar alguna firma o así con ellos...hace poco los invitaron, pero, este fue el gobierno del Estado...si me urgieron que fuéramos tres personas, pero como que de relleno nada más, como para que vean que ahí están que hay participación indígena. No es real” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Lo anterior lo único que ha generado es un malestar, desinterés y desconfianza por parte de las mismas OSC indígenas. Quizá por aquí es que se debe de comenzar la interpretación sobre la confianza en la política, pues si las mismas asociaciones civiles indígenas desconfían y mencionan sus causas, con mucho más razón la población indígena que está ajena a toda arena política local:

“no nos hemos atrevido a participar porque no conocemos tanto de esos temas y tenemos miedo a que nos vayan a utilizar, a que ellos hagan algo y ... porque ya lo

han hecho...que nos utilicen... sí, sí, como asociación civil también

Entrevistador: pero ¿también como asociación civil?

Entrevistada: con mucha reserva este, con mucha reserva cuando nos hacen alguna invitación porque tienen esa doble intención” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Y cuando las asociaciones como la entrevistada son invitadas a reuniones que tienen que ver con el Estado, se menciona que no tienen ni voz ni voto en las reuniones, así que está en tela de juicio el para qué de su incipiente integración. Lo anterior es de vital importancia para la correcta atención, pues se menciona que la cantidad de trabajo y del alcance de éste es complicado cuando otras instancias no se ven obligadas a la atención en función de derechos indígenas o simplemente ignoran la Ley:

“y no nos damos abasto para trabajar las dos partes porque tenemos recursos o financiación para trabajar la comunidad pero no tenemos recursos para trabajar la sociedad en general, la sensibilización...yo creo que lo mas importante es que eh obviamente seguir impulsando que los temas indígenas estén en la agenda política también, que el tema para cuestión educativa que si esta opero no se aplica que se haga, justamente ahorita veníamos de hablar de eso, yo no sabía que no era obligatorio que las instancias se tuvieran que capacitar sobre estos temas para garantizar los derechos se tienen que aplicar, pero no sabía y ahorita nos enteramos que no están obligados a capacitarse, pues entonces que sea obligatorio para ellos” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

La proximidad a las OSC en materia indígena ha sido una constante cuando se estudia, analiza y profundiza en las realidades primigenias del tema indígena en Monterrey y su área metropolitana. Para dar cuenta de ello, una asociación pro-indígena, sino es que de las más antiguas en trabajar con la población indígena, deja en claro que las adversidades en las que se encuentra la población indígena en pleno Siglo XXI son las mismas en las que se encontraron cuando se dio el choque cultural que ella relata:

“ Porque reubican junto con colonias como era la reforma manantiales, sabinitas, el ranchito, santa cruz y ter puedo seguir mencionando una cantidad de colonias que vivían en las márgenes del río la silla, Santa Catrina que tenían problemáticas súper diferentes, que venían de lugares muy distintos... pero no eran comunidades indígenas entonces no compartían cultura, entonces hubo esta cuestión de burlas, humillaciones muy fuertes para ellas” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Es decir, desde el comienzo las necesidades de la población indígena en Monterrey eran muy diferentes a las de la población que ya estaba establecida en la ciudad y que no eran indígenas. Resulta alarmante cuando se analizó el papel de los partidos políticos en la atención e inclusión de la población indígena, pues resulta alarmante que los partidos políticos en la entidad no reconozcan que la diferencia cultural conlleva a problemáticas totalmente distintas. Además de que la lógica de Monterrey y su área metropolitana trastoca por completo la vida comunitaria de la población indígena que se asentó por primera vez en Nuevo León en el lecho del río Santa Catarina por la década de los 80`s

“así momento de la reubicación por una parte y por la otra decía, y cito textual a una de mis compañeras que decía “de qué nos sirve tener casa elegante y estos 24 metros cuadrados que es ligeramente más grande que este espacio donde estamos ahorita”, para ellas era ya una casa elegante a pesar de que no tenía recubrimiento en paredes y no tenía, bueno tenía piso firme pero no recubrimiento, eso era una casa elegante “si a cambio nuestros hijos conocieron lo que no conocían”, tenían hijos adolescentes la gran mayoría había una población entre 10 y 14 años muy fuerte y entonces viene una círculo de violencia un círculo de consumo de diferentes enervantes y esto trastoca completamente la vida de la comunidad” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Desafortunadamente la sinergia entre las mismas OSC en Monterrey y su área metropolitana ha sido escasa, provoca otros problemas de protagonismo y al mismo tiempo

socava la participación política indígena en general y la participación electoral indígena en lo particular:

“El tema de las organizaciones siento pues todos tienen intereses no, realmente a veces pues siento que el tema en vez en de que se trabaje en sinergia entre todos, es que todos están condicionados, unos que están condicionados con la CDI, no sé o con otra institución gubernamental o partidista y pues eso ya al final de cuenta la motivación o el objetivo l principal se pierde” (Entrevista con Activista Indígena)

Y el tema de recursos nuevamente vuelve a aparecer. Al presupuesto, por motivo de que ha sido una constante en el trabajo de campo, se le dedicará un apartado especial cuando se analicen las variables emergentes; empero, ahora se señalará que es determinante para la continuación de los trabajos de las OSC:

“el tema de la sostenibilidad del espacio, también, hemos visto que a la par de nosotros o en el momento que nos hemos pasado los años han nacido, han caído varias organizaciones que llegan, y vamos a hacer un trabajo así como que en conjunto, nos vamos a llevar bien, pero es complicado, o sea somos de las organizaciones en las que de forma conjunta, yo creo, nos hemos mantenido mas, han salido, podemos contar bastantes intentos y es complicado, es complicado por el tema de tener recursos propios individuales para aportar a la casa, creer en ese proyecto ciudadano, consolidarlo, o sea no tenemos ningún financiamiento constante de publico y eso lo hace muy complejo” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

En síntesis, la proximidad a OSC indígenas y pro-indígenas es de vital importancia para la participación político-electoral para la población indígena en Monterrey y su área metropolitana. Sin embargo, han sido poco los resultados en ello, pues principalmente hay una serie de desigualdades y de problemáticas que son de corte laboral, económicos, de violencia de género y de conocimiento de derechos indígenas que priman por sobre la participación electoral. Los problemas de protagonismo es una constante cuando se habla de liderazgos y el presupuesto resulta determinante para el correcto funcionamiento de las

asociaciones civiles. El trabajo por parte de las OSC en Monterrey y su área metropolitana se muestra aún incipiente y su consolidación se verá reflejado cuando los espacios de participación y representación indígena sean mayores como lo menciona el informante clave de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI):

“Hay algunas organizaciones que tienen que ver con el acceso a los derechos o el acceso a la educación, o el desarrollo económico pero no identifiqué a una organización o a un grupo de líderes que promueven espacios de participación”
(Informante clave gubernamental, CDI)

7.3.3 Usos y Costumbres como variable que influye en el voto de la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana. Análisis de sus alcances y problemáticas

Para finalizar el análisis de las variables étnicas que influyen en la participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana, se ha tomado para tal empresa la variable de Usos y Costumbres. Como se mencionó en el capítulo III, los Usos y Costumbres son considerados sistemas de gobierno que rigen dentro de las comunidades indígenas y que son diferente a la normativa nacional y tienen por base 1) normas, 2) instituciones y 3) procedimientos; además del reconocimiento por parte del Estado mexicano, al cobijo del pluralismo jurídico, la población indígena son Sujetos de Derechos Individuales y Sujetos de Derechos Colectivos que les permiten el goce, disfrute y promoción de sus Usos y Costumbres (Armenta Ramírez, 2006; Correas, Derecho indígena mexicano, 2007; González Galván J. , Hechos y Derechos, 2013).

Al ser una variable completamente cultural y de visión del mundo en cuanto a la forma de organizarse y darse a sus autoridades, los Usos y Costumbres están fuertemente arraigados en las personas indígenas y esto no desaparece cuando la población indígena migra hacia ciudades como Monterrey y su área metropolitana, tal y como se demostró con anterioridad cuando de conocimiento político indígena se trata. Sin embargo, los Usos y Costumbres por ser un Sistema de Gobierno se encuentra con múltiples alcances y problemáticas en Monterrey. Tales alcances van desde posibilidades de réplica de formas de organización para contrarrestar los males de la ciudad y las problemáticas giran en torno

a cómo compaginar las visiones de autoridad y cercanía comunitaria en una ciudad como Monterrey en donde predomina la ignorancia en el tema, y todo esto se analiza a la luz de cómo es que influye, si de manera positiva o negativa, en el voto indígena.

Por lo anterior, la interpretación de la variable de Usos y Costumbres tiene que comenzar señalando que las particularidades culturales de la población indígena en Monterrey y su área metropolitana ha sido ocultada por la misma población indígena que ha provocado el ímpetu de homogeneidad imperante en instituciones gubernamentales y de partidos políticos:

“por cuestiones culturales o de las propias costumbres el proceso de adaptación, preferían pasar desapercibidos y yo creo que poco a poco si se ha reforzado un tanto el que quiera ser visibles y procurar sus propios derechos, la atención a los servicios que tienen... sí hay una atención que, a mi gusto o a mi ver, es muy generalizada, sigue sin atenderse esa particularidad que es de origen indígena” (Entrevista a informante clave de la SEDESOL)

Se puede establecer que la identificación cultural de las persona indígenas en Monterrey y su área metropolitana en un comienzo ha sido un proceso de aculturación, nada lejano a lo que Abraham Nuncio (1982; Nuncio A. , Visión de Monterrey, 1997) expone en sus obras de cuando la consolidación de Monterrey como una ciudad industrial, y que representa una problemática tanto para la 1) identificación de la población indígena que conlleva una 2) falta de visibilización para la Academia y Gobierno y 3) provoca una falta de conocimiento para el trabajo en conjunto entre dos culturas que en ocasiones se oponen, así como para el aumento de la discriminación indígena que, todo mezclado, sirve de acicate para una baja participación electoral en la entidad. Tales procesos de aculturación se pueden observar en la siguiente cita:

“yo te hablo de los que son parte de nuestro universo de estudio que son los indígenas con estudios, en el ámbito escolar la primera estrategia que tienen para, para evitar discriminaciones es negar la identidad...uno de los problemas más serios que tuvimos para trabajar con población indígena a nivel

de preparatoria es que nadie quiere decir que es indígena, tu vas y preguntas directamente ¿eres indígena? Para empezar, va a haber quien se ofenda porque se lo diga” (Entrevista con informante clave de la Academia, UERRE)

Se puede observar que, si los Usos y Costumbres están sustentados en términos identitarios, no será casualidad que en Monterrey los Usos y Costumbres en la población joven vayan disminuyendo.

“Indígena es una palabra ofensiva para muchos de ellos, porque llevan desde la primaria tratando de evitar esa realidad y imagínate que lleva desde los 6 años aprendiendo a esconderlo y que te lo tiren a la cara a un desconocido” (Entrevista con informante clave de la Academia, UERRE)

Lo anterior es interesante analizarlo a la luz de que este trabajo de campo tiene su enfoque meramente cualitativo; es decir, la aproximación cuantitativa y con miras en las generalizaciones se concentran solamente en eso, en resaltar estadísticas superficiales que no comprenden ni resaltan las fibras sensibles en el tema. Que una aproximación empírica hacia el sujeto de estudio tenga como principal problema el mero señalamiento/concepto definitorio de la población objetivo, provoca que las primeras aproximaciones en términos políticos con la población indígena en Monterrey y su área metropolitana sea de manera sensible, cualitativa.

Continuando con el análisis sobre los Usos y Costumbres y el tema de la identidad, el mismo actor clave a quien se entrevistó menciona cómo en determinado momento eso puede cambiar:

“hay algo interesante y es que esto hasta prepa llega, el ocultamiento de identidad, de la identidad o del origen más que de la identidad, el origen étnico, pero en universidad lo que estamos encontrando es que sucede lo contrario y es que esa vergüenza se convierte en orgullo como que da, parece que el estudiante universitario indígena des- idealiza al mestizo finalmente y a al propio indígena lo des- idealiza también, y se da cuenta de no tiene nada

que pedirle al otro, entonces como que todos sus complejos se le quitan y empiezan, pues a eso, a dar el paso al activismo político algunos de ellos”
(Entrevista con informante clave de la Academia, UERRE)

Entonces, la población de jóvenes indígenas, cuando llegan a una etapa universitaria – situación muy difícil de reconocer porque las Universidades tampoco tienen un registro de los estudiantes indígenas que concentran–, se encuentran en un momento en que pueden sentirse orgullosos de sus orígenes, como lo menciona el actor clave entrevistado, y eso provoca el interés en la solución de sus problemas particulares como indígenas en Monterrey. Pero ¿qué pasa con el resto de la población indígena en Monterrey y su área metropolitana?

“Su prioridad es primero comer, después su familia, y después preservar su identidad y, en un ultimo paso bueno. Cómo me comprometo con la comunidad”
(Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

La cita anterior, como respuesta a la pregunta del párrafo previo, supone una clave interpretativa tan real y tan próxima en un país de más de 50 millones de personas en situación de pobreza (CONEVAL, 2016). Todo indica que los temas en cuanto a darse una forma de gobierno, ya sea la imperante en Monterrey o ya sea por Usos y Costumbres, pasa a segundo plano cuando las necesidades básicas aún no se encuentran satisfechas.

Los esfuerzos, no obstante, por establecer una suerte de principios comunitarios propios de los Usos y Costumbres han sido reconocidos por los actores clave entrevistados. Generalmente desde las voces de la academia a excepción de la Institución Antropológica por excelencia en México, el CIESAS:

“¿cree que influya el uso y costumbres en algún tipo de organización política aquí en el estado?

Entrevistada: que yo sepa no” (Entrevista a informante clave de la academia, CIESAS)

Mientras que para otros informantes clave académicos como la UANL y la UERRE la visión es distinta:

“el papel de usos y costumbres, ahí siento yo que para ciertos grupos étnicos los usos y costumbres son importantes, se identifican a partir de sus usos y costumbres y principalmente me refiero a unos cuantos grupos indígenas que traen toda esta carga histórica, social, de reconocimiento a su lengua, a sus costumbres, a su forma de organizarse que están presentes” (Entrevista a informante clave de la academia, UANL)

“Lo que yo creo es que si traen una idea tratan de, de, de transmitir eso que traen de la comunidad y adaptarlo al sistema político, como que les gustaría que la forma de hacer política de ellos de alguna forma se contagie, he estado en reuniones de ellos y siento que hay un esfuerzo por hacer entender los propios valores, el colectivismo” (Entrevista a informante clave de la academia, UERRE)

De tal manera que sí existen indicios de que los Usos y Costumbres influyen en la forma, sobre todo en cuanto a valores y en términos de organización, de hacer política por parte de las personas indígenas en Monterrey. Pero adaptándolo a una nueva realidad, un tipo de transfiguración étnica y adaptabilidad estratégica (Bartolomé, Procesos interculturales. Antropología política del pluralismo cultural en América Latina, 2006) reconocido por el informante clave de la Academia: “La forma de hacer política en sus comunidades sí, si lo traen y si tratan de reproducirlo adaptándolo a la nueva realidad” (Entrevista a informante clave de la academia, UERRE).

Sin embargo, aquello supone nuevos retos tanto para los actores internos del Sistema de Usos y Costumbres así como para la sociedad receptora y sus instituciones. Por ejemplo, se mencionó con anterioridad que son los jóvenes universitarios los que se adaptan a nuevas realidades en la forma de hacer política, y en una suerte de pragmatismo para poder virar entre una forma de gobierno y otra, encuentran ante problemáticas de corte comunitario:

“hay un problema y es que ya tampoco pueden volver a la comunidad eso es un poco la encrucijada en la que se encuentran que si ya se enorgullecen del origen pero quieren seguir la línea del progreso y han estudiado la carrera no para volver a recoger frijoles a la comunidad” (Entrevista a informante clave de la academia, UERRE)

Se puede observar que lo que el informante clave llama encrucijada es lo que mayor problemática encuentran los estudiantes indígenas a la hora de tratar de situarse entre sistemas normativos comunitarios y los tradicionales en Monterrey:

“nos hemos encontrado qué muchos de los que llegan a estos niveles educativos son solteros la inmersa mayoría son solteros, tu llegas a tu comunidad o se casan muy tarde o demora mucho lo de formar familia pues porque trabajan y estudian, digo, digamos es una cosa o la otra y vienen un poco huyendo de modelos en lo que se casan muy temprano y en los que la mujer inmediatamente al ámbito y es que va muy muy tradicional, pero tu imagínate a la mujer que llega con su licenciatura regresa a la comunidad pero llega sola, pues la comunidad no entiende ni el valor de una maestría” (Entrevista a informante clave de la academia, UERRE)

Es ahí en donde se pueden identificar uno de los más primigenios problemas entre una cultura y otra, la visión del mundo y las tradiciones en ocasiones se oponen como se puede observar. Es decir, se reconoce todo un proceso interno para la población de jóvenes indígenas universitarios para lidiar con dos visiones del mundo distintas y opuestas.

Y dentro de esa diferenciación entre los que siguen patrones propios de la comunidad y los que han salido y se enrolan en dinámicas educativas universitarias, el informante clave entrevistado ayuda a distinguir la finura de esas diferencias:

“entre la población indígena de Nuevo León yo creo que hay dos formas de hacer política...los que hacen política internamente para arreglar sus asuntos... y están los

grupos indígenas que son los mas jóvenes estudiantes no vinculados a una comunidad en específico” (Entrevista a informante clave de la academia, UERRE)

Esas dos formas de hacer política que reconoce el informante entrevistado ayuda en demasía a comprender las problemáticas esenciales de la participación política en general, y el voto en lo particular, tomando como variable interpretativa los Usos y Costumbres. Si por un lado se tiene 1) a la forma interna de hacer política en donde se reconocen a sus líderes locales que tienen sus representantes y que son los que toman las decisiones, por el otro lado se tienen a 2) los jóvenes indígenas universitarios que mantienen una idea más global de la situación de la población indígena en la sociedad regiomontana y establecen vínculos operativos en torno a las Asociaciones Civiles y en ocasiones para una articulación más con el gobierno; en estos se puede distinguir una segunda problemática que puede ser nombrada como los falsos líderes:

“bajan recursos del gobierno muchos se aprovechan para entrar en el gobierno, digamos que tiene un contacto con el sistema político mucho mas cercano y de alguna forma son absorbidos en muchas ocasiones por el sistema, mientras hay otros que no” (Entrevista a informante clave de la academia, UERRE)

Por lo tanto, si la primera problemática fue la identitaria, es decir, por temas de indentidad mucha población no se sabe indígena y por lo tanto afecta de manera directa en la partición electoral convencional y la que se da en torno a la réplica de los Usos y Costumbres en Monterrey y su área metropolitana, la segunda versa sobre el mal uso que se le puede estar dando a la forma organizacional, propia de los Usos y Costumbres, y que influye en la participación electoral.

Y ahora se da cuenta de una tercer problemática relacionada con los Usos y Costumbres y su influencia en el voto indígena en Monterrey: la violencia y minusvaloración de la mujer en las comunidades indígenas.

Si bien es cierto que la minusvaloración de la mujer no se da solo en las comunidades indígenas y tampoco es un fenómeno exclusivo de México ni de América Latina, por motivos

de la presente entrega se pondrá la mira solamente en lo relacionado con las mujeres indígenas y el Sistema de Usos y Costumbres. En ese tenor, se puede identificar que la ciudad para muchas mujeres, dependiendo del pueblo indígena al que se pertenezca, representa la posibilidad de participación en la esfera de lo público:

“me da la impresión de que la situación en la ciudad, favorece que haya cierta sinergia y que entorno ya sea a la CDI o asociaciones civiles que si las mujeres se empiecen a organizar y empiecen a actuar ¿no? Y a hacer a reclamar una serie de espacios y una serie de derechos... pero si partiendo de una situación de inferioridad estructural muy marcada” (Entrevista a informante clave de la academia, UERRE)

El trabajo en materia de prevención de violencia contra la mujer en las comunidades indígenas está relacionado con el Sistema de Usos y Costumbres de acuerdo con la que es quizá la única Asociación Civil indígena que trabaja en la materia, Zihuakali Casa de las Mujeres Indígenas. Cuando se entrevistó a la presidente de tal asociación civil, las respuestas en torno a la relación de los Usos y Costumbres con la violencia en contra de la mujer y la influencia de ese fenómeno en la participación política en general y en la participación electoral en lo particular, fue esclarecedora:

“este año estamos haciendo o tratando de sacar un diagnostico sobre los tipos de violencia que viven las mujeres indígenas aquí en un contexto urbano pero contemplando en este tipo de violencias los usos y costumbres, la violencia institucional, la violencia de género y violencia familiar” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Primero, se reconoce que la violencia en contra de la mujer, incentivada por los Usos y Costumbres es una realidad en Monterrey y su área metropolitana. Si bien es cierto que difícilmente podrá identificarse a profundidad las consecuencias de manera directa en el voto de las mujeres indígenas, sí que se puede aseverar las formas en cómo se da esa violencia dentro de los Usos y Costumbres e indagar cómo esas formas afectan en las variables que influyen en el voto:

“hay mujeres que no se atreven a salir de sus domicilios que por cuestiones de usos y costumbres no se animan a hablar o siguen calladas viviendo una situación de violencia entonces esto está limitado” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Segundo, una vez que se reconoce esa violencia se puede, como se mencionó con anterioridad, distinguir las formas en cómo se da esa violencia auspiciada por los Usos y Costumbres:

“varía mucho en de comunidad a comunidad, hay comunidades súper machistas donde las mujeres no pueden ni opinar, a veces y de hecho lo vimos ahora en la intervención que íbamos, algunas se salieron eh a escondidas para poder acudir a un taller” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Aquí se puede distinguir que la participación en actividades propias de las Asociación Civil está siendo mermada por el control que ejerce el hombre dentro de la tradición en cuanto a estar con una mujer. Cabe señalar que así como la violencia en contra de las mujeres no es exclusivo de las tradiciones indígenas y muhco menos de la América Latina, se observa también que varia de una comunidad y/o pueblo indígena en México a otra:

“el control que tienen tan marcado los hombres hacia ellas entonces eh, si es complicada, algunas comunidades son mas abiertas y permiten o las mujeres tienen esta libertad de estar por ejemplo activas en el activismo, en alguna asociación colaborando o el ir a talleres comunitarios al menos, algunas no, en algunas comunidades no es restringida” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Las comunidades que se pudieron diferenciar en el trabajo de campo fueron las siguientes: como comunidades abiertas a que la mujer participe de manera activa en la ciudad son las que pertenecen a la comunidad Tének y Nahuatl, mientras que las que más restringen la participación de las mujeres y establecen grados de dominación hombre sobre mujer mucho más marcados son las comunidades Mixtecas y Mazahuas.

También es visible que de acuerdo a la comunidad a la que pertenece la mujer indígena dependerá su participación. El miedo es una constante y todo en conjunto socava el desarrollo político de las mujeres indígenas en Monterrey y su área metropolitana:

“en los talleres que dábamos a veces iban pasando algunas mujeres y les gustaba y se venían a los talleres y si les gustó mucho los talleres, pero si esta como ese miedo de, de decir o de hablar o que la vieran que sus parejas la vieran ahí

Entrevistador: entonces podemos decir que la participación política, de las mujeres aquí en el estado ¿va a depender de que comunidad vengan?

Entrevistada: Así es

Entrevistador: de acuerdo con sus sistemas de usos y costumbres” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Se pudo distinguir un relato en cuanto a las acciones que realiza la OSC Zihuakali en donde las actividades de información y empoderamiento de las mujeres, en el sentido de conocer sus derechos y de participar activamente en lo relacionado con su comunidad, con la ciudad y con un enfoque cultural, resultó problemático debido al machismo imperante dentro de la cuestión de Usos y Costumbres:

“si pero al grado de que, es que si me había tocado pero estuvo muy fuerte porque si me lo, porque así como estoy platicando con Anahí esta el esposo y le avienta un vaso desde adentro y le dice si porque está platicando conmigo o sea que porque es su mujer y no le debo de hablar, pero el señor muy violento que hasta quería salirme a golpear y decir que las que salen son ... empezó a decir muchas cosas y yo si me quede dije ¡ay! O sea yo estoy viviendo aquí o sea si es cierto si hay mucho que trabajar” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Y como un tercer punto en la minusvaloración de la mujer debido al Sistema de Usos y Costumbres y su relación con la participación político-electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana, se tiene a que una vez identificado el problema y sabiendo las formas

en cómo se desarrolla, aparece lo que quizá represente un gran retroceso en la emancipación de las mujeres indígenas y consecuente desarrollo comunitario en la ciudad: la afectación de los Usos y Costumbres en las mujeres indígenas con estudios universitarios:

“Sí, incluso mujeres preparadas, la verdad es que a mi me sorprende y bueno espero al en un rato más poder focalizarme en eso, hay mujeres indígenas aquí en Nuevo León que estaban ya en el doctorado pero el peso del sentido de comunidad es tan fuerte que, y que estaba en el activismo intensa en temas también políticos o sea a todo lo que da y de la noche a la mañana desaparece y todas nos quedamos inquietas de porque ya no esta y era porque ya se había casado y tenia que cumplir el rol que marcaba su comunidad de ser esposa de alguien” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Es decir, casos como el señalado suponen una alerta en cuanto a la relación de la población indígena con la educación, el Sistema de Usos y Costumbres y su influencia en la participación política y participación política electoral. Con anterioridad se señaló que uno de los grandes motivos que tienen las familias pertenecientes a una comunidad indígena de continuar en Monterrey, muy a pesar de los múltiples inconvenientes de toda índole, es la posibilidad y el acceso a la educación, dar cuenta de un relato así resulta difícil de decifrar y/o ahondar en lo que individualmente lo provoca.

La única respuesta que se tiene para saber los motivos está articulada alrededor de el apego a las costumbres de la comunidad a la que pertenece y el sentido de pertenencia cultural hacia determinado pueblo indígena

“entonces encerrada dejo todos los estudios, ella súper capacitada en temas de derechos y demás, en derechos de las mujeres indígenas y si nos sorprende como el peso de la comunidad es tan fuerte en algunos grupos étnicos limitan o impiden que sigan en esta labor” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Se ha de notar que el sentido de pertenencia hacia una cultura determinada en donde rigen valores diferenciados a la cultura imperante en Monterrey y su área metropolitana es más

fuerte que el conocimiento de derechos. Lo anterior se puede comprobar en el siguiente relato:

“paso otra chica también que pareciera que esa costumbre ya no existe pero el intercambiarla o el buscarle pareja aunque a ella no le guste...¿casarla a la fuerza y el famoso dote no?, entonces también ahora la chica igual con sueños de crecimiento profesional, personal y de la noche a la mañana, ni tenía novio, alguien llegó a su casa, la pidió y desaparece también, estas cuestiones de activismo, si son cosas súper fuertes, pero híjole es algo como una persona que ya va con un nivel de información súper alto, súper preparada este...

Entrevistador: ¿pero por el sentimiento de comunidad no?, el apego a la comunidad

Entrevistada: sí la pertenencia” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

De tal manera que por cuestiones culturales, el juicio de valor y los problemas internos a los que se enfrenta la población indígena en Monterrey cuando contrastan culturas tan diferentes y con aspectos tan arraigados no hacen sino complejizar la forma en cómo abordar y analizar la cuestión de participación electoral indígena en Monterrey de manera empírica. Y esto se puede encontrar en la siguiente cita que, dicho sea de paso, es realizada por una mujer indígena que ha vivido de cerca los relatos previamente mencionados:

“el tener un lugar porque también esa es otra de las cuestiones de los usos y costumbres, tu rompes una regla o dejas de seguir una, un camino que te marcan y eres expulsada de la comunidad” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Y para cerrar el tema de la minusvaloración de la mujer indígena por motivo de los Usos y Costumbres que se pueden resumir en las siguientes tres etapas del análisis:

- a) Identificación de la violencia en contra de la mujer indígena incentivada por los Usos y Costumbres,
- b) Demostración de las formas en cómo se ejerce esa violencia, y
- c) Afectación directa de la violencia en un sector específico de la población de mujeres indígenas

Es preciso señalar la forma en cómo se está trabajando para la erradicación de tales males que no hacen sino socavar la participación política y electoral de las mujeres indígenas en Monterrey y su área metropolitana:

“es impresionante el machismo y por eso la importancia de la asociación o sea que sea liderada por mujeres indígenas eso le da más confianza a las mujeres y que sean atendidas en su lengua materna, ninguna institución aunque están estas instituciones liderados también por indígenas pero son hombres y generalmente tienen estas, esta educación machista culturalmente y bueno obviamente no se acercan las mujeres violentadas ahí, de ninguna manera y hay otra asociación arriba Zihuame Mochilla pero son operadas por mujeres mestizas, no tienen esta, este enfoque intercultural que damos nosotras de dar la atención en la lengua materna entonces, eso es lo que hace diferente la asociación de otras que están trabajando en pro de la mujer” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

De tal suerte que se puede distinguir una paradoja importante: la identidad indígena y el sentido de pertenencia a una comunidad en ocasiones, como se ha venido demostrando en lo que va del presente apartado, representa el detrimento de derechos políticos y sociales, al mismo tiempo es esa identidad indígena, cuando se resalta los valores más universales como el sentido de saberse indígenas y, más aún, mujeres indígenas con problemas similares y coincidencias de lengua, la que permite contrarrestar esos males propios de los Usos y Costumbres, como se puede observar en la cita anterior.

Ya se especificó el aspecto negativo de los Usos y Costumbres y su influencia en la participación político-electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana. Ahora se dará paso a indagar sobre los aspectos positivos que lo Usos y Costumbres traen consigo.

Como punto de partida se toma que las comunidades a las que pertenecen las personas indígenas no son homogéneas en cuanto a Usos y Costumbres; es decir, habrá tantas formas de organización como cantidad de pueblos indígenas existentes en el país. Sin embargo, en cuanto a la organización comunitaria y solidaridad entre las personas indígenas que viven

en Monterrey y su área metropolitana, se puede distinguir un tejido social fuerte y que se replica en la ciudad:

“en términos de usos y costumbres en las comunidades hay participación comunitaria muy intensa, porque tienen el tejido como costumbre el tejido como una forma de llevar a cabo, este, las mejoras comunitarias de manera conjunta” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Ese tejido social que se puede identificar en la población indígena desde que se encuentra en la comunidad de origen, cuando es el caso, se replica en la ciudad. Aunque si bien es cierto el matiz puede cambiar, pues las necesidades en la ciudad y el contexto se torna distinto que en la comunidad, el sentimiento de solidaridad y comunidad se conserva:

“otras comunidades en donde sus redes de apoyo en la ciudad entre las mismas personas entre la misma comunidad es muy fuerte a pesar de la dispersión ¿si?, en los motivos de las reuniones que en general son fiestas, bodas y funerales, para eso se reúnen, se apoyan y se colaboran de manera intensiva, cuando alguien tiene un problema inmediatamente se mueven y de verdad ahorita la gente ya trae celulares pero cuando no había una que era la encargada de ir a avisar al cerro y había otra que era la encargada de ir a avisar a no se donde pero se movían como pan en automático” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Y es precisamente en ese sentido de comunidad y solidaridad que los Usos y Costumbres indígenas pueden considerarse como fortalecedores del tejido social en Monterrey. Cosa que propiciará un interés en la participación política y que por lo tanto desembocará en la participación político-electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana:

“De problemas públicos como basura y esas cosas, creo que problemas de espacios públicos, creo que se pueden resolver con el esquema de las organizaciones del digamos del conocimiento organizativo que tienen las comunidades indígenas porque es un conocimiento pues tan natural, que a veces en la ciudad es difícil

organizarte con tu vecino, a lo mejor es difícil conocer incluso quien tira la basura”
(Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Mientras más arraigado sea la pertenencia de los espacios públicos por parte de la ciudadanía, mayor será la participación en los asuntos públicos. Como se puede observar, el conocimiento organizacional de las comunidades indígenas pueden provocar una mayor sintonía y solidaridad en la ciudad que provoque el fortalecimiento del tejido social partiendo de la comunidad y de lo público; otro aspecto que se puede destacar es lo relacionado con las personas de la tercera edad y su relación solidaria en cuando a la visión de Usos y Costumbres:

“un elemento que apoye a los problemas sociales que enfrenta el tejido del estado, por ejemplo en la comunidades indígenas una persona de la tercera edad no es vista como una persona que ya no sirve socialmente hablando, si no al contrario son los que tienen un respaldo comunitario en conjunto aunque no tengan ningún familiar hijo que sirve a la comunidad por todos sus conocimiento acumulados”

Los principios de respeto hacia la gente de la tercera edad puede considerarse hasta puntos que rozan en lo sagrado. La experiencia y la acumulación de conocimiento para los Usos y Costumbres de muchos pueblos indígenas significan sabiduría y estabilidad.

Otro aspecto a tratar, en cuando a la organización solidaria y comunitaria que rigen a los Usos y Costumbres y que pueden ser replicados en Monterrey para generar mayor sentido de pertenencia e interés en aspectos públicos, políticos y electorales, son los relacionados con la seguridad desde una visión humanística. Por ejemplo, si se toma en cuenta que en México la seguridad y servicios más proximos al ciudadano son brindados por los Municipios, y qué estos tienen la libertad de autonomía de acuerdo con el artículo 115 constitucional y que además la Ley de Derechos de Personas Indígenas del Estado de Nuevo León los obliga a consultar a la población indígena para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y a crear espacios de participación y representación indígena, en el Sistema organizacional de los Usos y Costumbres indígenas pueden encontrar respuestas a formas de atender los problemas propios del municipio:

“por ejemplo, pues por lo regular no ha vagabundos, no hay si hay problemas de drogadicción porque pues han sido penetrados por varias cosas pero para entrar al control de esos sistemas, el propio tejido de las organizaciones de la vida comunitaria permite detectar quien está consumiendo drogas y permite poner un alto como mas amplio” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Aunque es claro que en un contexto urbano, por la densidad poblacional puede ser complejo, en esquemas organizativos territoriales más pequeños como son las colonias, por ejemplo, puede existir un nicho de oportunidad para la promoción de lo principios de solidaridad comunitaria:

“y en el caso de Nuevo León pues es mas complicado, porque la densidad de la población pues es mas grande y esto pero o sea ahora como hay esquemas organizativos mas territoriales mas pequeños creo que pueden ser buenas oportunidades conocer como las comunidades indígenas, no? como elemento de exportación de esas comunidades indígenas a todos los problemas que existen en la sociedad, no?” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Y como una última interpretación de los Usos y Costumbres como forma de organización solidaria y comunitaria que contrarrestan los males propios de la ciudad, se puede reconocer un aspecto que es de suma importancia para la población indígena y que será preciso de un entendimiento abierto por parte de las autoridades en Nuevo León y de la sociedad en general. Esto es, el significado y la reconfiguración de la muerte.

La muerte, a pesar de estar más apegada para los estudios sociológicos, antropológicos o históricos más que a los de Ciencia Política, resulta importante porque es una visión del mundo que provocan determinadas exigencias que le competen a la política y a la administración pública atender y que si no se toman en cuenta de manera correcta serán abordadas desde la más pura ignorancia gubernamental. Se dará una pincelada breve de la importancia de esto:

“una propuesta que hizo una compañera, que a esa si le encontré mucho sentido y lógica... Dijo que haya cementerios para que nuestras comunidades o personas de comunidades indígenas puedan sepultar a sus muertos, al principio yo la sentí fuera de lugar, no se como lo tomaría las autoridades y la sociedad indígena un cementerio para la población indígena, después cuando lo trabajamos en el Convenio con la fundación de apoyo funerarios analice mas el tema y me di cuenta que no es porque antes no lo haya leído o escuchado, pero se que el arraigo de las familias y de las comunidades se construye y la identidad también, se construye a partir de la relación con la tierra y los ancestros todo lo que hay en la tierra, abajo del territorio, los cerros los manantiales, los lugares sagrado, el medio ambiente, los espíritus o los seres sobrenaturales que piensan ellos que habitan en esos paisajes y los fenómenos natural asociados a la subsistencia del grupo y cuando los seres queridos son sepultados en la tierra es a donde se vive y donde hay todo esos elementos asociados al territorio cosmogónico o histórico en donde se ha vivido entonces se crea un vínculo o permanece un vínculo fuerte” (Entrevista a informante clave gubernamental, CDI)

El aspecto relativo a la muerte, la tierra y el arraigado sentido de identidad y pertenencia que provocan los Usos y Costumbres, es un factor determinante para la inclusión, el ejercicio de tradiciones y la repercusión positiva de la cultura política en la población indígena que provoca a su vez participación político-electoral en Monterrey. Cuando se tome en cuenta que el aspecto cultural, a partir de los Usos y Costumbres, provoca que nuevas formas organizativas en Monterrey sean posibles, la participación político-electoral indígena en la entidad podrá convertirse en una constante y en una nueva realidad que sume y consolide a la democracia.

En síntesis, los aspectos positivos de los Usos y Costumbres en Monterrey y su área metropolitana pueden quedar establecidos en lo siguiente:

- a) Usos y Costumbres como tejido comunitario
- b) Usos y Costumbres como fortalecedores del tejido social en Monterrey

- a. Hacia personas de la tercera edad
- b. Hacia una seguridad con miras humanísticas
- c. Reconfigurando la muerte

Para ir cerrando el presente apartado, se tomará ahora como base de análisis los aspectos político-comunitarios del Sistema de Usos y Costumbres de la población indígena en Monterrey y su área metropolitana.

Es una realidad que la dinámica de una ciudad como lo es Monterrey y su área metropolitana resulta compleja de adaptar a un Sistema normativo y de gobierno como los Usos y Costumbres. Sin embargo, y como se especifico con anterioridad, hay aspectos que se pueden rescatar sobre todo en términos comunitarios y de solidaridad y que se refuerza con el aspecto organizacional en términos políticos y de elección de autoridades.

Ante tales aspectos es necesario tomar distancia de las visiones de los tres partidos políticos entrevistados para en el trabajo de campo, pues tales entrevistas demuestran la falta de conocimiento en el tema, lo cerrado de la perspectiva partidista en cuanto a sistemas de Usos y Costumbres y poca sensibilidad en la materia. Basta dar cuenta de ello en las siguientes citas:

“o sea si uno se va a las comunidades los usos y costumbres de los indígenas no se diferencian mucho de los usos y las costumbres de quienes podríamos identificar como mestizos... y en todo caso los indígenas pues no, no conservan en estricto sentido, los usos y costumbres de sus comunidades” (Entrevista a informante clave de Partido Político, PT)

“vienen migrantes que son, este, de comunidades indígenas de otros Estados que pueden ser que ellos tengan, este, algunas otras tradiciones u otros usos y costumbres creo que la ciudad o el área metropolitana de Monterrey si les da para adaptarse completamente y llevar, este, una vida como cualquier otra gente ¿no?” (Entrevista a informante clave de Partido Político, MORENA)

“hay algunos Estados que sí tienen bastante población indígena que sí reconocen el uso y costumbre como una práctica de norma política social, Nuevo León no es el caso, soy diputado local y por lo mismo que aquí ya la mayoría del Estado esta urbanizada y la mayoría de los ciudadanos no vienen de descendencia indígena no se le ha dado la debida importancia” (Entrevista a informante clave de Partido Político, MC)

Como se puede observar, los Partidos Políticos entrevistados, en donde dos de ellos son de izquierda y uno de derecha, navegan a través de la ignorancia en el tema de Usos y Costumbres. El actor informante clave del PT siquiera presta atención en que los Usos y Costumbres indígenas son culturalmente y ancestralmente diferentes a los de la población no-indígena; la persona informante de MORENA mantiene un discurso propio de mitad del Siglo pasado en donde los trabajos de homologar un solo tipo de ciudadano mexicano imperaban y todo con la visión de asimilar una cultura distinta para sobrevivir en el sistema político vigente; y en cuanto a la persona informante MC, el desconocimiento de la ley de derechos de personas indígenas en Nuevo León es evidente, afirmar que el Nuevo León no están reconocidos los Usos y Costumbres de las personas indígenas es transitar por terrenos sensibles en lo que visiblemente desconoce, pues todo el Capítulo I de la Ley –De las culturas, identidades y formas de representación– habla de ello.

Ahora bien, la interpretación de cómo los aspectos políticos comunitarios de los Usos y Costumbres pueden ayudar tanto a organizar como a participar de manera activa en la política en Monterrey y su área metropolitana a la población indígena, precisa de realizarse al margen de lo que estipulan los partidos políticos. Y para comenzar, resulta esclarecedor que el compromiso con la comunidad y lo que acontece en ella es grande:

“De hecho en la voz de las mismas personas de comunidad es algo que lamentan que se pierda aquí al llegar a la ciudad, porque, si allá en el pueblo quieren hacer una obra sabe la comunidad, que la comunidad tienen que aportar la mano de obra, tienen que aportar el material, que a persona que no puede ir a trabajar en la obra paga a alguien para que lo haga en su representación y aquí las obras se hacen con

recursos 100% del gobierno, allá no, allá no es así, entonces esas formas de organización comunitaria en algunas comunidades se han replicado no en todas, no es fácil replicar las formas de organización aquí” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

El compromiso e involucramiento en lo público es notable. Y es tanto que hay población indígena que vive en Monterrey y sigue conservando el sistema organizativo de su comunidad:

“hay comunidades que siguen manteniendo los cargos allá, se van a la comunidad a ejercer el cargo a que tienen, el que les toque porque van eh digamos les toca desde topil hasta agente municipal y es un año y es sin pago y es dedicado completamente a la comunidad” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Entonces de lo que se trata es que una suerte de adaptabilidad estratégica se está dando en Monterrey y su Área Metropolitana. Es decir, por un lado se está intentando replicar las formas de organización comunitaria en la entidad y, por otro lado, algunos siguen conservando las responsabilidades propias de la comunidad y que las rigen los Usos y Costumbres. Aunque esas adaptabilidades estratégicas encuentran grandes problemáticas:

“Hay comunidades que saben bien que trabajan más desde la autonomía, ellos mismos se organizan como para conseguir espacios sin tener ningún compromiso político con nadie y eso está bien porque están en su derecho como todas las personas, pero si es mucho más difícil si no estás relacionado con organizaciones o con dependencias si no te excluyen” (Entrevista a informante clave, Activista Indígena)

Y por ello, las brechas en donde la población indígena se encuentra vulnerable es precisamente en una suerte de tránsito entre un sistema normativo regido por los Usos y Costumbres y un sistema normativo propio de la tradición formalista de la democracia:

“hay una cuestión muy importante que aparte de esas brechas de vulnerabilidad se suma la cuestión de que muchos están en un proceso de adaptación a la ciudad, un

proceso de transitar culturalmente a otros modelos y esto dificulta también el acceso a estas necesidades, ahí pues deben existir políticas de pertenencia cultural, como interpretes a doctores que conozcan la lengua y la cultura para poder iniciar dialogo entre gobierno y necesidades indígenas” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L Árbol de Todas las Raíces)

De manera tal que cuando la adaptabilidad estratégica llega a una cierta madurez, se pueden distinguir varios principios en la forma de darse a sus representantes que bien se podrían replicar en Monterrey y su Área Metropolitana:

“hay organización indígena comunitaria, porque hay organización indígena muchas veces o una cultura que los ha reunido en el estado de Nuevo León, pero a pesar de ello siempre he servido como apoyo a otra iniciativa de consolidar una representación y participación política real” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L Árbol de Todas las Raíces)

Es decir, hasta el momento del trabajo de campo se puede reconocer que la forma de organización en base a Usos y Costumbres y de identidad indígena ha operado para apoyar a otras inciativas que por los resultados visibles no han podido consolidar ni la participación electoral indígena, ni procurar espacios de representación indígena en la entidad. Sin embargo lo que sí se puede reconocer con claridad es que la constante en cuanto a la organización con base en los Usos y Costumbres es sumamente clara para los actores entrevistados:

“Y ¿qué papel tienen los usos y costumbres, en este proceso?

Entrevistado: tienen un papel muy importante porque por ejemplo, algunas comunidades que viven mas congregadas tienen un, un esquema de toma de decisiones mas complejo y mas lento, porque la toma de decisión si se tendría que consultar al interior de esas organizaciones, ejemplo claro, los mixtecos, tu les dices a ver nombren al representante que será nombrado en el estado y entonces en ese sentido hay que echar mano el experiencia que se tiene en eso, los representantes

de esa comunidad por llegar aun consejo entre ellos, y bueno también otra de la cosas es que traería gastos, seria un órgano, la participación en ese consejo no seria reenumerada, el único beneficio que traería seria llevar acciones publicas a sus comunidades, estos consejos a nivel nacional no son reenumerados es una representación honorifica y que pues lo único mínimo que se puede ofrecer es que les paguen viáticos y alimentos, solamente ese sentido y sí tener un órgano ejecutivo muy ejecutivo muy pequeño y se consolidaría como un órgano, una dirección, una instituto, lo que sea un órgano que atienda los asuntos indígenas con carácter ejecutivo” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L Árbol de Todas las Raíces)

Es destacable cómo el tema de remuneración cuando se ejerce un cargo cuando está la visión de Usos y Costumbres no es prioridad. El que los cargos no sean remunerados y generen tanto compromiso y conocimiento político por parte de la población indígena contrasta con la realidad imperante en Monterrey y su Área Metropolitana donde el dinero destinado a sueldos y a mal ejercicio de los recursos públicos provocan en la población todo lo contrario, como lo es apatía, desinterés y desconocimiento político.

La creación de concejos de participación y organización política indígena es urgente en Monterrey y su Área Metropolitana. Y de reconocer que, durante el trabajo de campo, un informante clave de la desaparecida Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Estado de Nuevo León en la legislatura de cuando la aprobación de la Ley mantiene una visión muy clara en cuanto a la regulación y organización política de las personas indígenas regidas por Usos y Costumbres y su relación con el Gobierno:

“si llegaran a tener una organización de gobierno que sean atendidos por la Secretaria de Gobierno correspondiente y se les de validez a lo que ellos digan si es por jerarquía, por rangos o cuestiones de lo que ellos tengan porque se eligen de manera personal, las elecciones políticas y electorales se cuecen aparte tienen sus propias elecciones” (Entrevista a informante clave, Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Estado de Nuevo León)

Es necesario destacar que el conocimiento político de organización por parte de la población indígena a la que se tuvo acceso por medio de los grupos de enfoque demuestra que es muy claro las autoridades que tienen y los procedimientos de elección. De esto se realizó el análisis en un apartado previo en cuanto a las variables clásicas de voto indígena. Sin embargo, eso no influye en el voto indígena dentro del sistema político formal imperante en Monterrey y su Área Metropolitana.

Para contrarrestar lo anterior, y como síntesis de este último espacio de discusión, se puede establecer que, en cuanto al aspecto político comunitario, los Usos y Costumbres pueden influir para una nueva configuración de la forma en cómo se organiza políticamente la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana y con ello provocar la participación electoral indígena. Y todo esto se puede advertir en los elementos de esa organización política indígena posible reconocidos en el análisis anterior:

- a) Mediante una adaptabilidad estratégica que combinen los sistemas normativos y que tiene cobijo en el primer capítulo de la Ley
- b) Mediante el aprovechamiento de los principios de elección de autoridades y de resolución de conflictos propios de los Usos y Costumbres e internalizados por la población indígena en Monterrey

7.4 Las variables emergentes. Una interpretación sobre los nuevos componentes y las formas en cómo se materializa el voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana

Producto del trabajo de campo, y la posterior codificación de los datos, se pudieron reconocer variables que, para fines conceptuales de la presente entrega, tomarán por nombre Variables Emergentes. Tales variables emergentes están sustentadas en la Teoría Fundamentada propia de la investigación cualitativa y que permite conocer a detalle cómo es que se da la participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana y el surgimiento de nuevos actores, dinámicas políticas y problemáticas que no han sido contempladas en trabajos previos.

Cabe señalar que los trabajos previos en materia de participación electoral indígena en Monterrey son escasos y el tema con un enfoque político es relativamente nuevo. Por ello, el sustento teórico para la aproximación empírica fue tomado desde aproximaciones realizadas en las comunidades propiamente indígenas en México y otras regiones de América Latina, principalmente de la region andina, y de las teorías clásicas del voto en democracias occidentales.

Sin embargo, ahora toca dar cuenta de lo nuevo, de lo que emerge de una realidad tan particular como lo es la situación y participación político-electoral indígena en la ciudad industrial por excelencia en México: Monterrey, y que representa el lugar de destino de una considerable cantidad de persona proveniente de diversos pueblos indígenas del país. Lo anterior supone un contacto cultural que provoca diferencias en la esfera de lo político y que a partir de las siguientes variables emergentes se pretenderá conocer a detalle lo que provoca y/o desalienta la participación electoral indígena a través de variables que no habían sido pensadas, identificadas ni sistematizadas.

Para tal empresa, el siguiente apartado se divide en siete secciones diferentes que corresponden a las siete variables emergentes. Cada una de estas variables tienen sub-nodos que permiten un mayor entendimiento de su configuración y su vinculación entre todas las variables emergentes y su influencia en la variable dependiente del presente trabajo que es el voto indígena. Para efectos de de organización, en el siguiente cuadro se puede observar las variables emergentes y los sub-nodos que las construyen.

Tabla 6. Variables-categorías emergentes y sub-nodos

Variables Emergentes	Sub-nodos que las construyen
Voluntad Política	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Política • Sinergia Institucional • Información
Discriminación	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminación social • Discriminación Institucional
Inoperabilidad de la Ley	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento • Presupuesto
Padrón de Personas Indígenas	*La variable del Padrón Indígena carece de sub-nodos, pues es una variable que es interpretada a partir de la Ley
Organización política indígena	<ul style="list-style-type: none"> • Comité Interinstitucional • Consejo Estatal de Población Indígena • Líderes Indígenas • Delegado Municipal
Proximidad indígena a la Academia	<ul style="list-style-type: none"> • El papel de la Academia • Importancia de la Educación

Fuente. Elaboración Propia

7.4.1 La Voluntad Política como variable emergente. Aproximaciones desde la construcción de una Agenda Política Indígena, la Sinergia Institucional y el papel de la información y su relación con el voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana

El papel que tiene una construcción de agenda política propiamente indígena sustentada en la información y ejecutada a través de una sinergia institucional, llega a considerarse de suma importancia para hacer posible la participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana. La importancia de esto radica en que por razón de que el tema indígena en la entidad es considerado relativamente nuevo en cuanto a reconocimiento jurídico y de promoción de derechos diferenciados, mucha información sobre la situación indígena en la ciudad no ha sido socializada de la manera correcta y las instituciones no han trabajado en hacer lo propio desde una visión integral del tema.

La Voluntad política en materia indígena es escasa en Monterrey y su área metropolitana. A pesar de que en cantidad poco a poco se va vislumbrando la importancia en el tema, las autoridades, más allá de las voluntades reunidas cuando la promulgación de la Ley, han hecho caso omiso a lo que por ley les compete. Como bien señala un informante clave entrevistado, casi 7 de cada 100 personas que habitan Monterrey y su área metropolitana

y eso debería de reflejarse en la incidencia de la población indígena en las decisiones políticas, cosa que no ha sucedido. Y una de las respuestas que surgen al preguntarse sobre por qué no sucede lo anterior, es que falta voluntad política:

“No hay voluntad ni del gobierno del Estado ni del Congreso, ni de los municipios...es falta de voluntad, necesitas sentirlo en carne propia, necesitas vivirlo, tenerlo a tu lado para poder tener esa identidad y ese sentido de pertenencia a los problemas que ellos puedan tener” (Entrevista a informante clave de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso)

Además, se puede identificar a los actores que especialmente carecen de voluntad política: 1) Gobierno municipal, 2) Gobierno Estatal y 3) Diputados locales:

“los municipios no quieren cumplir con la ley de asuntos indígenas, de tener una oficina que atienda los asuntos de los indígenas... los municipios ponen de pretexto que no hay dinero, y tiene que buscar las diferentes formas de ahorrar las dependencias que ya tienen pero pues pónganlo en el presupuesto de noviembre para el siguiente año, hay un periodo en el que ustedes deben de presentar su presupuesto pero tampoco el Congreso del Estado dice se te olvido poner algo para los indígenas” (Entrevista a informante clave de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso)

Lo anterior se ha confirmado en el interés y conocimiento del tema indígena que tienen los dirigentes estatales de los partidos políticos entrevistados. Si se toma en cuenta que la democracia formal en México es una democracia de partidos y el sistema político mexicano es propiamente un sistema de partidos, las bancadas dentro del Congreso en Nuevo León al no prestar atención ni voluntad política han hecho que los pocos avances en materia indígena se estanquen o desaparezcan. Esto último es visible con el hecho de que la Comisión de Asuntos Indígenas desapareció.

En cuanto a la voluntad política del gobierno del Estado de Nuevo León, el trabajo de campo arrojó un caso específico en donde la voluntad política en materia indígena es poca:

“nosotros cuando estaba en proceso de elección el gobernado actual, un grupo de personas que aglutinamos un órgano colegiado...que iniciara una interlocución y un reconocimiento real del gobierno estatal y gobiernos municipales para la construcción de políticas publicas concretas en beneficio y con fundamento en la ley de derechos indígenas para la población indígena, esto no se consolidó a pesar de haber un acuerdo oral y escrito de este acuerdo con el gobierno estatal, no se dio y no ha habido como una, digamos una voluntad política, no se en su cabeza de las que coordinan la organización pública, la organización pública estatal que valor tiene es tema” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Entonces, la voluntad política en materia indígena es muy poca en Monterrey y su área metropolitana. Esto conduce a una baja participación política indígena en la entidad que es provocada por varios factores que influyen en la construcción de la voluntad política indígena como lo son: 1) Agenda política, 2) sinergia institucional y 3) acceso a la información en la materia:

“en los municipios el tema de sensibilización y la desinformación que existe porque los municipios no conocen de recursos a los cuales se puede acceder, no conocen o no saben que ellos también están obligados a dar una atención especializada a población con estas características entonces la parte municipal si hace falta también reforzarla mucho...Pero es la coordinación de voluntades que se debe fortalecer en el estado y sí ser muy insistentes en procurar una mayor participación de la población en los procesos generales de la administración pública. Y yo creo que principalmente eso, fortalecer o promover, procurar mas la participación porque sin participación los esfuerzos nunca van a ser aterrizados” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Como se puede observar, se reconoce una relación directa entre la falta de voluntad con la participación política y político-electoral indígena en Monterrey. Por ello, a continuación se

dará paso a reconocer los factores que cosntruyen la voluntad política; primero se espediciará lo concerniente a la creación de una agenda política indígena, para después dar cuenta de la relación de una agenda política con el desarrollo institucional y se finaliza con el acceso a la información indígena por parte de los principales actores que precisan de promover y forjar una mayor voluntad política indígena en la entidad.

1) En cuanto a la Agenda Política Indígena:

En el trabajo de campo se puede observar que la falta de una agenda política indígena es clara, y que además es expresa. Los actores principales de la participación electoral, que son los partidos políticos, y más aún, los dirigentes estatales de los partidos entrevistados, dejan en claro que no hay una agenda política indígena:

“en el caso de los municipios de Nuevo León posiblemente porque no hay una masa suficientemente grande de indígenas pero la otra es también porque no esté en la agenda de los alcaldes o de los gobernadores, quienes me atrevo a pensar que no necesariamente saben lo que la ley les ordena en materia de asuntos indígenas”
(Entrevista a informante clave de Partido Político, PT)

Y hasta se identifican las consecuencias de la falta de una agenda política indígena en las decisiones gubernamentales y de participación política:

“son comunidades que tienden a crecer, que no se hace eco un censo adecuado a ellas y pues sobre todo que no se les ha dado suficiente voz o suficiente presencia en los temas comunitarios y sobre todo que se atienda en los planes municipales de desarrollo ese mandato de que las comunidades indígenas sean atendidas específicamente en los planes que hacen los gobiernos” (Entrevista a informante clave de Partido Político, PT)

El problema se acentúa cuando los mismos partidos políticos no diferencian las características propias de los sectores de la población a la que, en teoría, deberían de representar, y optan por un discurso homogéneo que dista mucho de la realidad

pluricultural en Monterrey y su área metropolitana y por lo tanto de la conformación de una agenda política indígena:

“te digo es que MORENA es un partido que, que integra todos los sectores ¿no? nosotros promovemos la participación de TODA la ciudadanía ¿no? aunque tenemos una secretaría específica que atiende estos temas, , si nosotros no tenemos distinción a la hora de estar trabajando en la comunidad” (Entrevista a informante clave de Partido Político, MORENA)

El no forjar una agenda política indígena, provoca que no se le de la atención correcta a las necesidades de una considerable parte de la población que habita la ciudad. Además de que las acciones de la administración pública no estén en sintonía con la realidad regiomontana:

“puedes o no atender a la población indígena, pero la población va a seguir viniendo, y ya empiezan otros contextos...ya empieza una migración de jóvenes que buscan el estudio, es decir, ya no migran por cuestiones de trabajo sino migran por cuestiones de estudio. Y lo que entendemos de esos contextos: falta mucho en políticas públicas, falta avanzar mucho en políticas públicas” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Es decir, la agenda política indígena influye mucho en la calidad y trascendencia de las políticas públicas en la entidad. Empresa compleja si se toma en cuenta que las políticas públicas están incentivadas por las visiones y propuestas que van en bloque realizadas por los partidos políticos y son éstos mismos, resaltando a sus dirigentes, los que carecen del conocimiento, sensibilidad y de agenda política en materia indígena.

Ahora bien, se tiene ya explicado que los Partidos Políticos carecen de una agenda política indígena. Esto asu vez provoca que las bancadas dentro del Congreso no tengan el conocimiento mínimo ni el interés de que para hacer operable la ley se precisa de la asignación de presupuesto para llevar a cabo el ejercicio de los derechos estipulados:

“Pero también hace falta que los diputados, quienes deciden por los presupuestos digan bueno, para que una ley se operante con los fines que esta tiene se necesita

la donación de recursos, entonces yo te voy a decir, de los cuatro grupos de atención comunitaria, el de atención a indígenas es al único al que no se le ha destinado presupuesto” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Entonces, consecuencia de lo anterior, ni Partidos ni Congreso provocan que la administración pública municipal se preocupe por el cumplimiento de la Ley ni por crear y/o promover una agenda política indígena a nivel municipal:

“también es necesario que los municipios empiecen a normar, es decir, que pasen por cabildos, protocolos de atención a indígenas, sino existe eso va a pasar lo que fuera en el 2012 que todos dijeron: “si tenemos áreas de atención a indígena”, pero que duraron un cambio de administración y ya nadie sabía, ni había el entendimiento, ni la prioridad de atender a los indígenas” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

De tal manera que mientras esos tres actores –partidos, diputados y municipios– no conformen ya sea por separado o ya sea en conjunto una agenda política indígena, la situación de la población indígena seguirá igual y la participación electoral indígena insuficiente, pues no habrá quien opte por trabajar en la solución y atención de los problemas y particularidades de la población indígena en monterrey y su area metropolitana.

A seis años de la promulgación de la Ley de derechos indígenas en el Estado de Nuevo León, es claro que la Voluntad Política se puede lograr pero que dependerá en gran medida de la generación de una agenda política indígena que haga sostenible la suma de voluntades. La problemática que se pudo visualizar fue en cuanto al protagonismo. Es decir, algunos informantes clave han considerado que el afán de protagonismo en el tema por determinados actores locales ha socavado la generación de una agenda política indígena y, por lo tanto, el sostenimiento del Voluntades Políticas:

“Sabemos como se consiguen las reformas, pero tuvo que haber una voluntad política, luego suele haber actores que llegan al final y se cuelgan las medallas... y

hubo gente de instancias gubernamentales que llegan al final y se cuelgan todo y quieren decir que ellos fueron los que impulsaron e hicieron mejor ya nos quedamos callados” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Y esa suma de voluntades a partir de una agenda política indígena no es competencia solamente de los partidos, diputados y municipios, sino también de las OSC y de la academia:

“enemos que sumar voluntades y tenemos que realmente sumarnos las organizaciones y consolidarnos más dejando a un lado los ceros o dejando a un lado el querer figurar, el decir yo soy y que abramos espacio en nuestras agendas para la agenda común” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Sin embargo, la suma de voluntades políticas y la generación de una agenda política indígena que provoque una participación electoral indígena ideal, es por demás un ejercicio complejo en Monterrey. La coalescencia de intereses tarea difícil y actor involucrado deberá tomar y efectuar el papel que le corresponde sin perjuicio de otros actores:

“la construcción de una agenda mínima en común para poder estar avanzando porque si yo me reúno con una asociación mi reto es que quiero una dirección de indígenas, pues si compadre pero faltan muchas otras cosas más. Si yo voy con los indígenas me van a decir pues mi prioridad es que exista un espacio para que yo venda y si es cierto, y si yo voy con aquel me va a decir “es que necesitas espacios de participación y democratización” y pues si es cierto” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Lo que resulta importante es que en solamente un actor dentro del tema indígena, y que corresponde a una OSC indígena, mantiene que en Nuevo León es difícil efectuar un agenda política cien por ciento indígena y opta más por una agenda integral que abarque a otros sectores que siguen estando vulnerables con la finalidad de generar empatía dentro de la población:

“nosotros también si participamos pues no vamos a hacer una agenda 100% indígena en este contexto, al no haber condiciones todavía para hacer agendas 100% indígenas, pues tenemos que aglutinar una agenda indígena y una agenda con las poblaciones mas vulnerables que existen... más integral porque pues un diálogo únicamente en un sector no va a tener la empatía, entonces en ese sentido tenemos que abrir nuestras ideas más incluyentes” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

No obstante, el informante clave establece siempre la necesidad de diferenciar las necesidades indígenas en la entidad de las que no son propiamente indígenas pero a manera de establecer acciones interculturales y empatía por el tema. Esto a diferencia de los partidos que simplemente optan por homologar las carencias y las diferencias culturales.

En síntesis, la generación de una agenda política indígena es urgente. La voluntad política solamente se podrá materializar en la medida en que los actores más relevantes dejen afuera egos y protagonismos y se sumen a una misma causa. También el llamado a la Academia es visible:

“pero cuando ves la película completa de atención a indígenas es enorme y se necesita la incidencia de cada uno de ellos, y que cada uno de ellos asuma compromisos y asuma así como desarrollo social tiene que hacer compromisos y el área de la administración estatal necesita asumir compromisos, necesitamos que la academia asuma compromisos, no en lo particular sino en una agenda común” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Por lo tanto, una vez reconocida la necesidad de la agenda política indígena para la materialización de la voluntad política en la materia, es preciso continuar el análisis interpretativo a partir del siguiente factor que influye y contruye a la voluntad política indígena: la sinergia institucional

2) En cuanto a la Sinergia Institucional

El reconocimiento expreso por parte de los actores entrevistados sobre la falta de sinergia institucional es claro. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la ausencia de trabajo en conjunto es reconocida y se mencionan los nichos de oportunidad institucional:

“hay esfuerzos de organismos tanto federales como estatales, ha habido acciones coordinadas; sin embargo, si se necesita algo más estructurado” (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SEDESOL)

La coordinación de acciones entre los tres niveles de gobierno es de suma importancia para la participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana. Para esto, también se reconoció una situación particular que le compete al nivel federal y estatal, que es la creación de una delegación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI):

“ Por ejemplo en el tema de CDI, es una oficina mas no es una delegación de la comisión, entonces si es necesario gestionar o coordinar acciones con la federación para que esa representación, ya tenga más peso aquí en el Estado, porque así como no tenemos población nativa si recibimos mucha población de origen indígena entonces, se da mucho que ellos no registran su cambio de domicilio, a veces por propio arraigo de su población de origen; entonces, eso ya se traduce a cuestiones presupuestales porque si ellos no cambian su registro al estado de Nuevo León, su número sigue contando presupuestalmente para sus estados de origen” (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Se puede establecer que para que exista una sinergia institucional correcta el gobierno federal, junto con el estatal, tendrían que coordinar sus trabajos y visiones. Debido a la importancia de la población indígena en Nuevo León, la promulgación de la Ley y lo urgente de que la administración pública local incluya en las acciones y políticas públicas a la población indígena, el primer paso para incentivar una sinergia institucional debería de estar a cargo del gobierno federal. Ya no es concebible que Monterrey tenga solamente una oficina de vinculación con la delegación de la CDI en San Luis Potosí, pues esto solamente retrasa las acciones y quita peso institucional al tema indígena.

Lo anterior también se puede reconocer en que el gobierno estatal no ha podido cumplir con las expectativas, en términos políticos y de administración pública, de la población indígena en la entidad. Y esta falta de sinergia institucional hace notar una falta de voluntad política que a su vez se traduce en un bajo interés, conocimiento y participación indígena en el Estado:

“el estado sigue sin estar enteramente preparado para recibir y mas que nada para atender las expectativas de trabajo, económicas y de bienestar social en general por las que ellos deciden cambiar su residencia... Pero es la coordinación de voluntades que se debe fortalecer en el estado y si ser muy insistentes en procurar una mayor participación de la población en los procesos generales de la administración pública. Y yo creo que principalmente eso, fortalecer o promover, procurar mas la participación porque sin participación los esfuerzos nunca van a ser aterrizados”
(Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Entonces, se tiene por sentado que el gobierno federal no ha provocado la sinergia por la falta de interés en siquiera mostrar a nivel nacional la importancia de Nuevo León y de Monterrey y su Área Metropolitana para mucha población indígena originaria de otros Estados, esa falta de interés se muestra en la ausencia de una delegación de la CDI. También, el gobierno estatal se ha quedado corto en la atención; para esto, basta con dar cuenta de que si bien es cierto que la SEDESOL pareciera ser la única dependencia gubernamental estatal interesada en el tema, por particularidades de las personas que ocupan los puestos institucionales la sinergia, apoyo y trabajo institucional varía:

“eso es estacional, es decir, depende del, del tipo de gobierno, en el gobierno estatal ha habido épocas en las que con una Secretaria de Desarrollo Social muy eficiente con un sentido social y épocas en donde quienes están a cargo de la SEDESOL pues realmente no le entienden al, al problema, no le interesa, y lo mismo ocurre con el gobierno federal, depende del temperamento de los secretarios y de los delegados que estén a cargo en ese momento impulsar o dejar de impulsar programas”
(Entrevista realizada a informante Partido Político, PT)

Esa información se puede corroborar si establecemos una revisión histórica de las acciones por parte del gobierno estatal. Como ya se ha dado a conocer en la presente entrega, hubo esfuerzos institucionales a finales de los 90's, a más de 10 años de la promulgación de la Ley, que establecían la creación de un Departamento de Educación Indígena en la Secretaría de Educación del Estado, pero las acciones se han quedado cortas a la luz de lo recaudado en el trabajo de campo:

“Desde el ámbito educativo a veces no hay, no es porque queramos que nos regalen todo el tiempo cosas si, no por ejemplo en cuestiones de beca nos... o bueno al menos a mí en lo particular sí me gustaría que hubiera como más en esa cuestión, porque si hay muchos chicos y chicas que trabajan y estudian y o sea con tantos trabajos no les da o sea no les da para cumplir con las tres cosas o dos cosas que tienen que hacer entonces yo creo que sí es un obstáculo, el hecho que no haya como suficientes recursos destinados a becas para los jóvenes que están estudiando y en cuanto a la sociedad pues yo creo que desde todo” (Entrevista realizada a informante de OSC, Zihualkán)

Es decir, las acciones institucionales del DEI no han trascendido desde su creación a la fecha. Y la trascendencia de las últimas acciones por parte del gobierno del Estado y del gobierno Federal se han quedado cortas:

“Llevamos ya casi tres años de esta administración y deberían de generar acción puntual y único que sea promovido, es como darle continuidad a la educación indígena que eso viene desde el 97 que está aquí en Nuevo León, departamento de la educación indígena del estado, una certificación de intérpretes y traductores que es un avance significativo pero eso fue impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el apoyo del gobierno estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Cámara del Congreso del Estado, hasta ahí yo creo que se quedaron” (Entrevista realizada a informante de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Y a pesar de todo lo anterior, el balance que se puede establecer en materia de sinergia institucional es que el Gobierno del Estado es el nivel de gobierno que más acciones ha realizado tomando en cuenta la temporalidad de las acciones y la cantidad:

“yo creo que hace falta conducción, claridad, para poder aterrizar lo que establece la ley. Yo si creo que hay unas instancias gubernamentales principalmente del poder ejecutivo, que ya hay claridad sobre ciertos proyectos, sobre ciertas políticas en materia de protección a los derechos indígenas. Pero creo que eso no fluye en toda la estructura gubernamental y mucho menos en los municipios” (Entrevista realizada a informante de la Academia, UANL)

Y como se puede observar, estas acciones, aunque con problemas, no ha permeado al nivel municipal y no ha provocado una reacción a nivel federal.

Pero ¿qué ha faltado a nivel estatal? Es decir, ¿es posible determinar qué factores son lo que han influido a nivel estatal para dar cuenta de la falta de sinergia institucional? Para responder lo anterior la revisión y codificación realizada a los datos es clara, si a nivel estatal no hay acciones concretas es porque el presupuesto etiquetado a la SEDESOL –trabajo del Congreso– no está dirigido a la atención de la población indígena y por más planes y visiones que existan, sin presupuesto ello quedará en eso, en planes. Y más aún, se pudo constatar que, si cada municipio no hace lo suyo, pues la concepción de libertad administrativa municipal así lo requiere, no habrá jamás buenos resultados institucionales. Por todo ello, se puede establecer que la disfunción institucional por radica en que el único nivel de gobierno que tiene planes y visiones se ve impedido a realizarlos por la esclerosis gubernamental a nivel municipal, la falta de apoyo a nivel federal y un desconocimiento y desinterés por parte del Congreso del Estado:

“Nosotros hemos tratado de darle un orden, de empezar la construcción de un plan de atención a migrantes que estamos tratando de hilar el Plan Estatal de Desarrollo en esta administración, se amplió a los tres grupos de atención comunitaria que son las jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad...en esta legislación se incluyo a los grupos indígenas como grupos de atención política comunitaria,

entonces nosotros nos apalancamos del Plan Estatal de Desarrollo” (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Es decir, los nichos institucionales propiciaron el trabajo en materia indígena por parte de la SEDESOL a través de los centros comunitarios. Y el actor clave entrevistado continúa:

“hemos tratado de crear un precedente de políticas públicas, es decir, ponerlo en áreas donde el día de mañana, vengan cambios o no vengan cambios, se va atener que seguir dando continuidad por una normativa...Todavía no llegamos a bajarlo a temas de presupuestos, si tenemos una matriz de indicadores y tenemos objetivos definidos, líneas de acción definidas pero todavía no tenemos presupuestos asignados entonces buscamos la coordinación con otras instancias, con otras dependencias, es muy importante sumar a los municipios porque en la ley estatal de derechos indígenas aparece la figura de los municipios en que debe de existir y no todos tienen” (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SEDESOL)

De tal manera que las acciones en la materia por parte de la SEDESOL caminan en la siguiente dirección: 1) planeación estratégica de política pública para su sostenibilidad, 2) incidencia en la comunidad pero con presupuesto etiquetado y 3) la sinergia con los gobiernos municipales. Sin embargo, para esto último:

“es poco el animo que nosotros percibimos de las administración publicas por atender, tal ves porque no tienen bien la información o no tienen bien el contexto pero son pocos los ejercicios en los que los municipios levantan la mano y dicen ok voy a cumplir con lo que establece la ley” (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SEDESOL)

De manera tal que se puede observar que la sinergia institucional entre los tres niveles de gobierno en México, así como el poder legislativo local, esta ausente.

Además de lo anterior, se pudieron reconocer dos actores institucionales clave que deberán aportar a la sinergia institucional de la que se está analizando: OSC y Academia. En ese

sentido, es de suma importancia que la voluntad política en materia indígena se construya a partir de la sinergia institucional de todos los actores involucrados:

“Otro de los retos es como, sumamos a las otras organizaciones de sociedad civil para formar una agenda conjunta, inclusive para la academia también para nosotros es complicado, no hemos tenido los diálogos con la academia o no ha existido la interacción con la academia para que también tengan ese empuje o puedan ser ese factor, así como la sociedad civil la academia tiene un reto fundamental en la incidencia o en incentivar la incidencia en las políticas públicas, por ejemplo yo no puedo ir al congreso y decir “oye congreso, necesito que hagas un foro” no pues, al final de cuentas, ese foro lo tendríamos que estar creando entre todos que estén participando.- creo que legitima mas cuando es un ejercicio que viene de la sociedad civil o de las academias” (Entrevista realizada a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Ahora bien, ya se estableció que la Agenda Política Indígena está ausente y que la Sinergia Institucional es débil, por ello solo queda un elemento a analizar: el acceso a la información en materia indígena.

3) Acceso a la información en materia indígena

La falta de información sobre la situación indígena más allá del folclor es considerable. Esto hace vulnerable el acceso a derechos estipulados en la Ley desde 2012 por motivo de que los principales agentes que deberían de materializar la ley omiten su responsabilidad en la materia.

Durante el trabajo de campo fue visible que los municipio mantienen poco interés por motivo de una falta de información pues “el tema de sensibilización y la desinformación que existe porque los municipios no conocen de recursos a los cuales se puede acceder, no conocen o no saben que ellos también están obligados a dar una atención especializada a población” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL). Y también se puede

observar en la imagen que tienen los municipios para los dirigentes de partido: “Yo creo que principalmente ignorancia de quienes hacen los planes municipales de desarrollo” (Entrevista a informante clave de Partido Político, PT)

Y la Institución encargada de la promoción de derechos también ha tenido escasos resultados al menos en la atención y socialización de la información: “como tal el programa para prevención de derechos de las personas y comunidades indígenas no existe como tal” (Entrevista a informante clave institucional, CEDH). Esto a pesar de que las denuncias en materia de violación de derechos pareciera ser una constante:

“Una queja que si se ha repetido es sobre todo los inspectores de la dirección de comercio, porque algunos de ellos repito, se dedican sobre todo al comercio de manera informal en la vía pública y aquí tanto esta, esta dirección del instituto ha detectado pues al menos un choque de culturas” (Entrevista a informante clave institucional, CEDH)

El acceso a la información en materia indígena se sitúa entre la falta de interés y la ignorancia por parte de diversos actores institucionales. A pesar de los mecanismos que en teoría deberían de incentivar a la población indígena a participar políticamente, la realidad es muy distinta como se puede observar a continuación:

“si para el grueso de la población es complicada la participación, en las comunidades indígenas se acentúa por el desconocimiento de la ley, de los términos de lenguaje, de los tiempos de la organización se complica... existe, como tú ya sabes, la ley de participación ciudadana que es abierta y que, sin embargo, es un reto socializar información” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

De manera tal que se puede observar que hay una falta de socialización de la ley que, en conjunto con la falta de una agenda indígena y de una débil sinergia institucional, provoca una falta de voluntad política para la atención de la población indígena. Esto también se refleja en una falta de información a la sociedad en general como se puede ver a continuación:

“falta más socializar la ley, no solo las dependencias sino también en el público en general, abrirlo o que se entere la mayor parte de la población del estado porque de alguna manera los que conocen son porque están empapados en el tema o porque trabajan en alguna institución del gobierno” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

“Pero principalmente de comunidades indígenas hay esos temas que limitan el acceso de derechos y el tema de funcionarios y personas que compiten un cargo de elecciones populares con conocimiento y voluntad política real para poder asumir el tema de la agenda indígena en la entidad, eso es todo yo creo” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

En síntesis, la voluntad política difícilmente podrá materializarse en acciones concretas mientras 1) el acceso a la información en materia indígena sea estrecho, se tenga una 3) sinergia institucional –entre los tres niveles de gobierno, congreso, OSC y academia– débil y 3) una agenda política indígena ausente.

7.4.2 Discriminación hacia la población indígena. Análisis de la discriminación social y discriminación institucional como variables que influyen en la participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana

La discriminación hacia la población indígena ha sido una constante desde la formación del México independiente, la construcción del México posrevolucionario y, a lo que la literatura consultada y la recogida de datos para la presente entrega lo demuestra, la operacionalización de la democracia y buen gobierno del México del Siglo XXI. Tal discriminación, de acuerdo a los datos recabados, puede establecerse desde dos lentes; el primero, la discriminación social entendida como la discriminación que se realiza de manera sistemática por parte de la sociedad en general a causa de la ignorancia y el miedo al otro, y, el segundo, la discriminación institucional, entendida como la discriminación que se realiza también de manera sistemática e incentivada por la ignorancia pero con la particularidad de que se efectúa desde una Institución política y/o gubernamental.

A pesar de que ambos tipos de discriminación están relacionados, es la discriminación institucional la que se alimenta de la discriminación social para desalentar la participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana. Así pues, primero se dará a conocer el análisis en torno a la discriminación social y, después, lo concerniente a la discriminación institucional.

1) Discriminación social

La discriminación social se puede distinguir en la mayoría de los actores clave entrevistados y en las personas indígenas que participaron en los grupos de enfoque. Para darle claridad y organización al presente apartado, primero se especificará cómo es que la discriminación social era identificada por parte de los informantes clave de las instituciones políticas y sociales a las que se entrevistó.

Las instituciones gubernamentales tienen claro que la discriminación social en Monterrey y su área metropolitana existe y que resulta alarmante para una buena convivencia social:

“discriminación la discriminación si, mucha gente, buen vi... estamos en un municipio muy elitista, y este, es un municipio modelo, pero si hay muchas personas que todavía no, no reconocen a, a las demás personas entonces creo que el principal problema al que se enfrentan los indígenas pues es la discriminación y también que muchas veces no cuentan con algún seguro de gastos médicos o de para salud”
(Entrevista a informante clave gubernamental, SPGG)

La cita anterior corresponde al informante clave del municipio de San Pedro Garza García. Es preciso señalar que el municipio de San Pedro en 2018, y posterior a la realización del trabajo de campo para la presente entrega, es el primer municipio del área metropolitana de Monterrey en cumplir con la Ley de Derechos de las Personas Indígenas en el Estado. De manera tal que la información en cuanto a la percepción de la discriminación social por parte de los funcionarios municipales, es de suma importancia y refleja lo problemático que es conpaginar dos culturas sumamente distintas, en donde la situación económica principalmente distancia una cultura de la otra.

El reto al que se enfrentó el municipio de San Pedro en términos de discriminación social es muestra de las dificultades operativas del municipio y de lo urgente que resulta la sensibilización de la sociedad en torno a la situación de la población indígena en la entidad:

“o sea que el mismo ciudadano no, no reconoce a las personas y por más que el municipio lleve acciones para que los conozcan, para que los reconozcan o sea este, es donde más yo creo que, siento que es el, el principal obstáculo o sea que la gente entienda la política que está haciendo el municipio que es para el bienestar de los indígenas que realmente convivimos con ellos en el hogar o en la calle o como vecinos y no, no, no se les reconoce entonces creo que es el principal obstáculo o sea que la apatía de la gente” (Entrevista a informante clave gubernamental, SPGG)

Por parte de los Partidos Políticos entrevistados también salió a la luz el tema:

“sí hay un grado importante de racismo y de discriminación aun cuando no esté en el imaginario social o no se reconozca como tal, pero si suceden esos fenómenos” (Entrevista a informante clave de Partido Político, PT)

Y en lo que compete a instituciones gubernamentales también la discriminación pareciera ser considerada como un factor que menoscaba la atención de la población indígena, el cumplimiento de la Ley y la participación electoral indígena en Monterrey:

“Existen contextos sociales donde la discriminación es un factor fundamental y esta discriminación no solamente es dentro de las personas que toman decisiones, es decir, no solamente los políticos han hecho como a un lado la obligación de atender a las comunidades indígenas, sino la misma sociedad, es decir, gente que no tiene nada que ver con el tema y que si tú hablas de los indígenas primero es como: ¡ah si! Alguien con un sarape y debajo de un árbol y que no progresa porque es flojo. Sigue muy presente esa idea en el colectivo” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Y es precisamente en esto último, en el imaginario colectivo, en donde radica el mayor reto de sensibilización en el tema indígena en Monterrey y su área metropolitana. Para dar

cuenta de la magnitud de esto, se puede observar cómo la discriminación social es interpretada por actores de la Academia:

“Hacíamos unos grupos de discusión en otra investigación aparte, sobre cómo perciben los jóvenes de prepa de esta ciudad a los indígenas se les preguntaba si llegas al salón de clases y ves que el profesor es indígena los chavos decían, se reían, decían no pues que se equivocó de lugar ja ja ja, no pues me saldría de clase y preguntaría a un profesor que ¿qué onda? que ¿por qué está?” (Entrevista a informante clave de la Academia, UERRE)

Es decir, en el imaginario colectivo es imposible concebir que un profesor indígena imparta clases, o más aún, que siquiera se imaginan que una persona indígena pueda ser profesor; que pueda enseñarles, educarlos y guiarlos en su formación académica. Y todo esto sucede en etapas tempranas de la formación cognitiva y social.

Sin embargo, esta situación de discriminación social pareciera acentuarse cuando de mujeres indígenas se trata. Es decir, la violencia hacia la mujer aumenta en la medida en que es una mujer indígena. Existe una suerte de doble discriminación en ese sentido, una es ser discriminada por el simple hecho de ser mujer y la otra por ser mujer indígena:

“específicamente del tema de violencia estamos viendo una doble discriminación, aparte de que... de la discriminación generalizada por ser mujer esta también la discriminación por ser mujer indígena” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

La doble discriminación hacia la mujer indígena va de la mano con una doble violación de derechos pues, como menciona la persona informante clave, el primer fenómeno de esa doble violación de derechos se refleja en la falta de atención por parte de las instituciones y falta de concientización de la sociedad en general y, como segundo fenómeno, existe una especie de revictimización que vulnera la situación de las mujeres indígenas y priva del ejercicio de sus derechos políticos:

“entonces la atención, que se brinda o que se alcanza a brindar o que se alcanza a percibir de las instancias que están en pro de la mujer es una doble violación a sus derechos porque no las atienden, no les dan la atención o el servicio que requieren y además de que las revictimizan, las hacen sentir culpables de su... de su propia situación que estén viviendo” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

La discriminación social también puede reconocerse en la forma en cómo la sociedad estereotipa a la población indígena. En Monterrey y su área metropolitana se estereotipa en sentido negativo lo que es considerado un derecho; es decir, está tan arraigado en el imaginario colectivo del regiomontano promedio que una lengua indígena y vestimenta tradicional está relacionada con el pasado, con lo subdesarrollado y con lo que motiva a burlas y señalamientos:

“a veces el querer ejercer tus derechos como simplemente hablar tu lengua ya te discriminan, el querer hacer este el, como replicar de alguna manera las cosas que hace uno en la comunidad en la colonia donde vives tampoco es como bien visto por los, por los este por los de ahí mismo... también un obstáculo es la forma, bueno discriminan mucho como se visten porque todavía hay unos que son más grandes de edad pues ellos no han cambiado su vestimenta o sea se siguen vistiendo como antes” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Por lo tanto, se puede determinar que la discriminación social socava la participación político-electoral y el acceso a derechos. La ignorancia imperante en la sociedad regiomontana hace que el tema indígena sea 1) tratado de manera despectiva, 2) ajeno a la realidad regiomontana y 3) con desconocimiento total de los derechos políticos y sociales propios de la población indígena en Nuevo León.

Por parte de las personas indígenas a las que se pudo tener acceso mediante los grupos de enfoque realizados, la discriminación social está muy presente. Es por ello por lo que se puede señalar que es esta discriminación la que socava en demasía la participación política de la población indígena en Monterrey y la electoral, principalmente:

“por parte de los patrones, yo antes trabajaba en una casa porque soy empleada doméstica, trabajé y mis patrones pues igual decían o hacían comentarios hacia la persona de la empleada, discriminatorio, decían que nosotros somos indios, cosas así, no nada mas a mi, hasta todas las empleadas que tenia allí la familia” (Grupo de enfoque con población indígena)

Los relatos de discriminación social que se pudo identificar en los grupos de enfoque con población indígena están muy marcados en la relación patrón-trabajador dentro del mundo del empleo doméstico. Es de suma importancia dar cuenta del nivel de discriminación social que se da por el simple hecho de ser diferente. A pesar de que la presente entrega no tiene fines antropológicos o sociológicos, se considera que estos niveles de discriminación social identificados provocan la gran mayoría de los males que repercuten de manera directa y determinante con la participación política y participación electoral indígena en México en general y en Monterrey y su área metropolitana en lo particular:

“todos se reunían en la casa y empezaban a criticar a las empleadas que decían que la empleada hizo esto o que la empleada huele así, y pues no sé a que olemos pero que nosotros tenemos sangre de indio, nos tratan como ignorantes pero no lo somos” (Grupo de enfoque con población indígena)

“yo si tengo un poquito de coraje con la gente de colonia porque pues yo pienso que no tienen educación, están hasta peor que yo, no tienen ni..., yo creo que ni la secundaria terminaron y por qué discriminarnos así” (Grupo de enfoque con población indígena)

Además de la discriminación expresa, la población indígena también identifica aquella discriminación que se expresa por medio de miradas despectivas:

“Participante 1: te ven con una cara de que “habla bien feo, de dónde vendrá”, eso es la discriminación de que no te dicen pero te ven raro o los gestos que te hacen...

Participante 2: cuando nos escuchan hablar nuestro idioma, de que se rían o se burlen...

Participante 3: mi hija si lo sabe hablar, pero le da pena... porque una niña que también es de allá pero le dijo que aquí no hable así, dice “mami me dijeron que aquí no hable así porque no estamos en el rancho, estamos en la ciudad y en la ciudad no se habla así”, entonces desde ese día le digo “a ti que no te de pena” le digo “¿yo no hablo con tu papa? Y en todos lados, en todos lados lo hablamos, en donde sea y así; a ti que no te de pena, tu háblalo porque son nuestras raíces y nuestra cultura, no te sientas avergonzada” y le me dice “es que la maestra a veces me pregunta pero me da pena hablar” (Grupo de enfoque con población indígena)

La discriminación es muy visible en el relato de los varones que participaron en el grupo de enfoque. El ocultamiento de la identidad indígena expresada mediante la lengua para los hombres indígenas significa evitar problemas:

“¿y ustedes señor? ¿ha sentido algo así?

Entrevistado 7: no porque, no pues yo desde que llegué a la ciudad pues de mi dialecto, yo así no... me acuerdo que mi mamá me enseñó desde niño a hablar, pero ya vine aquí a la ciudad y pues ya no por esa razón

Entrevistado 5: sí, porque yo escuchaba la gente que habla así y les empezaban a decir cosas ¿verdad?, y pues yo me quedaba callado para evitar problemas... pues me preguntan allá en el trabajo y “no pues yo no sé nada”, si por ejemplo que tú les dices y te preguntan cosas como maldiciones y... no te preguntan así cosas buenas, pura grosería, por eso les digo mejor que no” (Grupo de enfoque con población indígena)

Identificar tales formas de discriminación aporta elementos de interpretación y análisis más real y profunda de la participación electoral indígena en Monterrey y su área metropolitana, considerando que es la ciudad que más discrimina en México. Y, en ese orden de ideas, a continuación, se realizará el análisis e interpretación de la discriminación institucional.

2) Discriminación institucional

La discriminación institucional resulta un tipo de discriminación que es difícil identificar de manera empírica, pues el trabajo de campo se realizó con actores institucionales. Sin embargo, los datos recabados están susceptibles a una interpretación de cómo a pesar de su investidura como actores institucionales existen resquicios por donde se pueden identificar declaraciones y visiones que provocan discriminación de carácter institucional.

Primero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, identificó y señaló un caso de discriminación institucional que, de comprobarse, se podría considerar como un factor decisivo en la situación política en Nuevo León y su bajo entendimiento e interés de la situación de las personas indígenas en la entidad:

“desgraciadamente también van a tener que pelear con algunas cuestiones culturales porque incluso hasta el jefe del ejecutivo los trata como foráneos siendo que algunos ya tienen dos- tres años asentados en la localidad” (Entrevista a informante clave institucional, CEDH)

Ante esa situación en torno al ejecutivo se pudo observar también por parte de la persona informante clave de la OSC:

“no es posible que diga que la gente viene aquí y que allá nada más estira la mano y tiene el mango, la naranja y aquí no, aquí o se ponen a trabajar o no se puede ¿Cómo? Y luego lo que decían esta amiga dijo bueno yo se que les gusta ponerse sus garras, yo me pongo no se que garras o sea hizo referencia a los atuendos indígenas en términos de garras y a la propia a la de el también, a mi no me interesa, si tu consideras que tu te vistes con garras muy tu gusto, pero a mi no me digas que son mis garras eh ¿okey?” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuame)

Lo anterior, sopesa de comprobarse, significaría una grave falta y claro ejemplo de discriminación institucional hacia la población indígena.

Segundo, por parte de los partidos políticos existe un alto grado de visión condescendiente de la población indígena hacia aquellos. Basta con identificar la semántica de su discurso:

“mira nuestras comunidades indígenas pues ya no se distinguen por un vestuario especial o porque estén agrupadas de cierta manera, tienden a mezclarse con, con las zonas mestizas entonces comparten problemáticas urbanas de inseguridad, o de desempleo o de falta de acceso a la educación” (Entrevista a informante clave de Partido Político, PT)

El hecho de que el discurso mantenga y reluzca una visión de “nuestras” comunidades indígenas denota falta de sensibilidad, ignorancia y un halo de paternalismo propio del siglo pasado. Y las consecuencias de esto es que la visión partidista imperante en Monterrey y su área metropolitana en torno a la situación política, jurídica, económica, social y cultural de la población indígena, sea incorrecta e ineficaz:

“nosotras en el trabajo territorial en MORENA no hacemos distinción ¿no? O sea a todas las personas llegamos y les damos la información y les decimos ¿no? Que, que tienen derecho a votar, que tienen derecho a tener su credencial de elector, que, que, este, que se fijen” (Entrevista a informante clave de Partido Político, MORENA)

Una visión totalmente ineficiente e ineficaz. Aunado a lo anterior, los partidos a pesar de saber que existe discriminación y racismo, no dan cuenta que ellos mismos son parte de esa discriminación institucional sistemática que ha perdurado durante años en la región:

“si hay un grado importante de racismo y de discriminación aun cuando no esté en el imaginario social o no se reconozca como tal, pero si suceden esos fenómenos” (Entrevista a informante clave de Partido Político, PT)

Y tercero, la discriminación institucional es tan real que se pudo identificar un relato de la manera en que instituciones de salud están compuestas por profesionales carentes de sentido común, sensibilidad y conocimiento sobre los detalles sociales que existen en Monterrey y su área metropolitana:

“y en cuestión salud pues casi no las atienden cuando se acercan a ... y nada más te ven por tu aspecto y ya ¿no? No pues no ha de traer dinero, no pues no ah de tener esto” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

Es clara la relación que existe entre el estereotipo que hay de la población indígena; es decir, aquel marginalismo integral que los estudios de sociología mencionaban a mediados del Siglo XX en México, pareciera no modificarse. Esto, porque resulta interesante recalcar que en el imaginario colectivo la pobreza está altamente relacionada con la población indígena:

“ a nosotros nos toco una vez en una esté en un hospital privado y esa vez me acuerdo de que era cuando mi sobrina se puso así mala ¿no? Entonces la llevamos de urgencia ahí a ese hospital y así como que primero fue, pero ¿si tienen con que pagar? Y nosotras nos quedamos, y mi hermano le dice si, o sea mi hija está mal o sea lo que quiero es que la atiendan, pero primero fue así como que tienen con que pagar? O sea y es un privado y entonces me imagino que, digo no me imagino también se que en las otras instancias pues tampoco no, si a las personas que son de aquí o tienen el seguro o tienen IMSS tampoco las atienden bien pues imagínense alguien de comunidad” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

En suma, la discriminación hacia la población indígena es una variable que no deberá dejarse a un lado cuando de participación política y electoral indígena se trata. Mucho menos en un contexto tan adverso como lo es en Monterrey y su Área Metropolitana, pues toda decisión gubernamental, acción por parte de las diversas instituciones políticas y el conocimiento por parte de la sociedad en general podrán tener un efecto negativo y discriminatorio hacia la población indígena que provocará un desinterés, falta de conocimiento de derechos y por lo tanto baja participación electoral.

7.4.3 La inoperabilidad de la Ley de Derechos Indígenas en Nuevo León como variable emergente. Análisis de las causas de la inoperabilidad y su influencia en el voto indígena

Como se ha demostrado con anterioridad, la falta de conocimiento de derechos políticos por parte de la población indígena y de las instituciones políticas que deberían de promover, salvaguardar y respetar los derechos indígenas, es la paradoja nodal en el tema de participación político-electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana. La contradicción radica en que, por Ley, están establecidas las obligaciones por parte de los

diferentes niveles de gobierno e instituciones propias de cada nivel de gobierno, y son pocas las acciones en la materia.

La falta de cumplimiento de la Ley provoca que la población indígena tenga una baja representación y participación política. Por ello, el trabajo de campo realizado estuvo atento a todas las particularidades que salieran a la luz en torno al por qué no hay cumplimiento de la Ley; y en ese orden de ideas, se pudieron reconocer dos elementos claves que provocan la inoperabilidad de la Ley: la falta de un reglamento y la escasez de presupuesto.

1) Carencia de un Reglamento

A seis años de haberse promulgado la Ley de Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, ha quedado en el aire la pregunta de por qué no se cumple con la Ley. Las acciones concretas en torno al cumplimiento de la Ley quedan resumidas a la apertura de la oficina de atención a personas indígenas por parte del municipio de San Pedro Garza García en 2018, creación de la Coordinación de Intervención Intercultural de la SEDESOL, la continuación del Departamento de Educación Indígena de la SEP y, en cambio, se reflejan también en graves retrocesos como la eliminación de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado de Nuevo León, así como el caso omiso por parte de gobiernos municipales y partidos políticos.

En el proceso del trabajo de campo se pudo identificar que en gran medida la falta de cumplimiento con la Ley se debe, según las personas entrevistadas, a la carencia de un Reglamento. Es decir, a pesar de la existencia de la Ley, la falta de reglamento y el caso omiso a los transitorios de cuando la promulgación su promulgación ha repercutido de manera negativa en el acceso de derechos, espacios de representación política y desarrollo de la participación política y electoral de la población indígena en la entidad.

La inoperabilidad de la ley se debe a esa falta de reglamento, pues en comparación con otras leyes en el Estado de Nuevo León, el reglamento en materia indígena está ausente:

“no hay un mecanismo efectivo, la Ley del Seguro Social por ejemplo tiene 12 reglamentos, la Ley de Derechos Indígenas no tiene ninguno porque a pesar de que en los transitorios se establecía que el ejecutivo tenía que dictar un reglamento es fecha de que todavía no se hace” (Entrevista a informante clave institucional, CEDH)

Es decir, la Ley, en sus transitorios han especificado que es el ejecutivo el encargado de la elaboración del reglamento. Sin embargo, la única secretaría que ha establecido programas en función de la atención a la población indígena en la entidad también reconoce la falta de un reglamento, pero advierte que también la falta de sinergia y el cumplimiento de las obligaciones por otras instituciones y niveles de gobierno es ausente, lo que provoca la inoperabilidad de la ley en cuanto a la creación de su reglamento:

“sin duda hace falta los reglamentos de esa ley es decir bueno, a quién le corresponde, de quién son las atribuciones, cómo van a ser qué plazos... a veces parecería que todo le toca a la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, las reglas de operación, el reglamento de la ley...evaluación del presupuesto, pues eso es netamente los diputados, la atención primaria de las comunidades indígenas es de los municipios, la atención de vivienda es de otra área de la administración, la atención de salud y el tema de educación pues son de otras áreas” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Por lo tanto, queda claro que las instituciones gubernamentales de los distintos niveles de gobierno han tomado cartas en el asunto sobre la creación de un reglamento de la Ley. Esto solamente agrava la problemática, pues la población indígena en la entidad seguirá en aumento, el incumplimiento de la ley será constante y comenzarán a surgir nuevos contextos que deberá de asimilarse por la mayoría de los actores involucrados. Y aunado a ello, la asignación de presupuesto, que es materia que le corresponde al Congreso, también es determinante en la inoperabilidad de la Ley como se verá a continuación.

2) Falta de Presupuesto

La falta de presupuesto ha sido una constante en el trabajo de campo. La inoperabilidad de la Ley, o es decir, el que la ley no se materialice tiene que ver directamente con que la Institución encargada de la asignación de presupuesto, que es el Congreso del Estado de Nuevo León, carece de sensibilidad, interés, conocimiento y voluntad política para incentivar el desarrollo integral de la población indígena.

El principal factor que se distingue en la falta de presupuesto radica en que no existe un registro real de la población indígena en el Estado. Es decir, mientras no exista un registro, padrón, sistema de información o algún mecanismo de identificación de la población indígena, difícilmente el pragmatismo propio de la administración pública y de voluntades políticas parlamentarias se efectuará:

“mientras no exista de parte de estas comunidades un asentamiento estable cambios de domicilio para efectos electorales, inclusive todo tipo de registros INEGI, CONEVAL, CEPAL, etc. Que les tome en cuenta mientras no se mida y las autoridades no tengan esas mediciones pues no se les va a destinar recurso y mucho menos programas” (Entrevista a informante clave de Partido Político, MC)

Además, mientras sigan existiendo obstáculos dentro de los mismos actores relevantes en materia indígena en Monterrey y su Área Metropolitana en torno a la identificación de la población indígena, la situación presupuestal seguirá siendo carente:

“Y como por parte de las, bueno de –se omite nombre– porque no puedo decir que las organizaciones indígenas o sea porque –se omite nombre– era alguien muy importante y la CDI estaba convencidísima que se tiene que tener un padrón ¿por qué? Porque son los primeros interesados en poder decir, tengo tantos sujetos de derecho que este, que justifica mi trabajo y que hace que justifica mi presencia aquí, o sea hay un interés instrumental, yo personalmente he militado duramente contra el padrón de población indígena en San Pedro y el padrón de trabajadoras domésticas” (Entrevista a informante clave de la Academia, CIESAS)

Todo pareciera virar más a que no se trata y no es tema propiamente de justificación de trabajos, sino más bien de pragmatismo político que permita la operabilidad de la Ley y, por lo tanto, del respeto, promoción y salvaguarda de derechos políticos de la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana:

“por presiones internacionales parece que hay que dar una serie de reconocimiento, sobre, de la, a través de la ley a ciertas minorías, pero que, desde que se, de que sirve una ley si no destina una partida presupuestaria... Se que los maestros bilingües andan malviviendo con cuatro pesos les siguen dando una limosnita... como sí hablas de la importancia del respeto a sus derechos como colectiva etc. todo lo que diga el artículo, si no pones los medios para que se, de qué sirve” (Entrevista a informante clave de la Academia, UERRE)

Es decir, mientras esos mecanismo que hagan cumplir la Ley: reglamento y presupuesto, que a su vez están supeditados a la voluntad política e identificación o registro de la población indígena, difícilmente podrá materializarse lo establecido en la ley. Además, existen particularidades conceptuales en torno a la administración pública, por ejemplo, a falta de presupuesto y de un Reglamento de la Ley, sólo han existido acciones institucionales y no programas:

“hay acciones pero no hay programas que tengan así como que presupuesto asignado... entre las acciones y los programas es que uno es la construcción, los programas son acciones que ya tienen un presupuesto, tienen niveles de operación, tienen indicadores hay un árbol de problemas, hay una normativa” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Por lo tanto, de lo que se necesita es que a raíz de 1) la identificación y registro real de la población indígena en la entidad, 2) asignación de presupuesto por parte del Congreso y de la 3) generación de un reglamento de la Ley, sean los programas con los que cuente la administración pública local los que estén por encima de las acciones institucionales para la materialización de la ley. De caso contrario, lo que seguirá existiendo versará solamente en acciones institucionales que no resuelvan las problemáticas propias de la población

indígena, y no incentiven el desarrollo político y la participación electoral de las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana. Todo lo anterior, a la luz de la inoperabilidad de la Ley de Derechos Indígenas en Nuevo León.

7.4.4 El Padrón de Personas Indígenas y su categorización como variable emergente. Un análisis de su influencia positiva y negativa en el voto indígena en Monterrey

El artículo 35 de la Ley de Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León establece que el poder Ejecutivo estatal deberá implementar y operar un Sistema de Información Indígena que permita identificar las particularidades sociales, económicas, políticas e identitarias de la población indígena con la finalidad de crear un registro que sustente el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con miras en la garantía de participación y representación indígena en la entidad. Además, tal Sistema de Información deberá estar desarrollado con las autoridades municipales y federales competentes y como intermediario estatal la SEDESOL del estado, que, a su vez, revise e interprete los criterios dispuestos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de orden federal y estatal.

Lo imprescindible que resulta el artículo 35 de la Ley, así como sus múltiples interpretaciones, versa sobre 1) la importancia del Sistema de Información para el diseño e implementación de políticas públicas y 2) la muestra clara de las autoridades competentes en la materia: SEDESOL, Ayuntamientos, Secretarías competentes y autoridades federales como la CDI.

No obstante, el sistema de información no se ha efectuado. De acuerdo con los informantes clave de la SEDESOL en Nuevo León, aún hace falta un reglamento que estipule los lineamientos y materialice la ley:

“eso genera muchas dudas. ¿Qué es un sistema de información? Es un Excel donde yo te diga: van 10 personas, con estas necesidades y están asentados aquí, o puede ser hay algunos que lo hacen una lectura que es un censo, sin embargo, hacer un censo o un muestreo es muy complicado en términos de recursos, recursos más

recursos que se tuvieron; hacer un censo donde la dispersión es tan pulverizada, es totalmente complicado” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Como se puede observar, mientras no exista un reglamento de la Ley un Sistema de Información será difícil. Entonces, la importancia del tema se encuentra en que mientras no exista un registro que sustente la presencia indígena en la entidad, así como su participación y consecuente representación política, los principales actores en la materia seguirán divagando entre interpretaciones de la Ley y acciones institucionales sin presupuesto y sin impacto real en políticas públicas.

Cuando se comienza a reflexionar y analizar sobre el tema, ha salido a la luz el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí. En esta entidad, que además de mantener un contacto cercano con el tema indígena en Monterrey por dos razones: 1) gran parte de la población indígena en Monterrey y su área metropolitana proviene de alguna comunidad indígena de la zona huasteca de San Luis y 2) la CDI depende operativamente de la Delegación de San Luis, la identificación de las comunidades indígenas, así como la materialización de sus derechos colectivos de cultura y autonomía, ha sido posible gracias al Padrón Estatal de Comunidades Indígenas impulsado por el Colegio de San Luis en el marco del proyecto: Universo y Configuración de las Comunidades Indígenas en San Luis Potosí.

Ahora bien, la situación de la población indígena en Monterrey y su área metropolitana es distinta a la que habita en San Luis por dos razones, principalmente: 1) en Monterrey y su área metropolitana no existen comunidades originarias provocando que 2) los derechos colectivos y de autogobierno sean complejos de cristalizar. No obstante, el hecho de que la población indígena migre hacia Monterrey representa también el derecho de conservar su cultura y sus múltiples expresiones; derechos reconocidos en la Ley de Derechos Indígenas en Nuevo León y estipulados principalmente del artículo 6 al artículo 9.

A razón de tales diferencias, se puede establecer que a pesar de que el contexto no sea el mismo, los derechos concedidos dan pie para la elaboración de un Padrón Estatal de Personas Indígenas en Nuevo León. El principal motivo es que la réplica de un Padrón

Indígena coincide con lo establecido en el artículo 35 de la Ley y operativamente puede significar el comienzo de la inclusión de la población indígena en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, además supone el registro y sustento para la designación de presupuesto estatal y federal a la atención gubernamental de temas específicamente indígenas. Pero ¿qué es lo que se piensa de esta posibilidad?:

“Si, siempre, nos vienen con sus padrones de San Luis Potosí

Entrevistador: Si, pero dijeron, ellos dijeron algo

Entrevistada: Es un padrón de comunidades indígenas y aquí estamos personas indígenas

Entrevistador: Si, pero...

Entrevistada: Son dos sujetos distintos de derechos, derecho colectivo, derecho

Entrevistador: Individual, si

Entrevistada: Y aquí no son, el sujeto de derecho es, son personas indígenas, no son comunidades, es muy distinto, empadronar comunidades para cuidar el derecho colectivo, empadronar personas es una violencia muy grande” (Entrevista a informante clave de la Academia, CIESAS)

El primer problema con el que se topa el padrón de personas indígenas es en la interpretación en torno a derechos. Si bien es cierto que el padrón de San Luis es un padrón diseñado para las comunidades y los derechos colectivos, no se ha hablado de la manera en cómo un padrón de personas indígenas en Nuevo León puede ser la punta de lanza para el reconocimiento de derechos individuales y colectivo como los estipulados en trabajos como los de Flores Cruz (2003) y González Galván (2013) en torno a la dualidad de derechos que son reconocidos para la población indígena en México.

El segundo problema radica en que existe un peligro latente en cuanto a la utilización de un padrón de personas indígenas que sirva para cooptar y utilizar con fines meramente electorales y de manipulación político-electoral a las personas indígenas en la entidad:

“es un, yo si lo vi como un, algo de control que no está muy bien yo creo que reflexionado, pero bueno, de todos modos, no lo han puesto en practica, porque es imposible ponerlo en práctica” (Entrevista a informante clave de la Academia, CIESAS)

“eso es un tema que también estamos trabajando es un tema que se tiene que garrar con mucho cuidado porque no es tema meramente electoral” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Y como tercer problema, el Padrón de Personas Indígenas podría suponer además de 1) falta de sustento jurídico, según académicos, 2) de estar proclive a ser usado para fines meramente político-electorales, supone 3) una herramienta de discriminación. Esto, principalmente se interpreta por la declaración explícita de un informante clave:

“Y también podríamos poner en el tema de la localidad porque es un tema que tiene que ver con discriminación, el tema de quienes son de aquí y quienes no son de aquí” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

De manera tal que si el Padrón de Personas Indígenas en Nuevo León, o el Sistema de Información Indígena, va más allá de las visiones conceptuales como lo deja entrever un actor clave entrevistado: “para el ejercicio de derechos políticos es necesaria la credencial, el asunto que lo que si decíamos para que no se escuchara así como padrón un sistema de información indígena” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces) y se posa en términos operativos para hacer valer los derechos individuales y colectivos de la población indígena en la entidad, se puede establecer su influencia positiva.

En tal tenor, es preciso reconocer que es imprescindible generar una real y operativa identificación de la población indígena –con sus particularidades y diferencias culturales– que propicie el cumplimiento, promoción, goce y disfrute de los derechos establecidos en

la Ley. En lo concerniente a la presente entrega, el registro o Padrón de Personas Indígenas en Nuevo León puede significar la punta de lanza para mayor representación, participación y agenda político-electoral propiamente indígena:

“y por la otra estén suficientemente identificadas las comunidades indígenas porque, si tú te vas a lo que dice la ley, un indígena es quien se reconoce como tal, entonces, bueno no necesariamente están bien identificados, por vestuario definitivamente no, por físico tampoco, entonces a lo mejor por ahí viene parte del problema que no se les identifica” (Entrevista a informante clave de Partido Político, PT)

“hay mucha gente que todavía tiene la credencial de elector del Estado de donde viene y así pueden pasar diez años, quince años y no la cambian o no la renuevan y creo que eso es, eso es algo muy importante porque al final de cuentas tenemos este, datos incorrectos de la gente que vive aquí y de la gente que está en el padrón, de la gente que necesita ciertos servicios, entonces creo que eso es algo muy importante para quien, quien quiera tener un proyecto de gobierno, quien quiera ofrecer un proyecto de gobierno en el Estado de Nuevo León” (Entrevista a informante clave de Partido Político, MORENA)

“mientras no exista de parte de estas comunidades un asentamiento estable cambios de domicilio para efectos electorales, inclusive todo tipo de registros INEGI, CONEVAL, CEPAL, etc. Que les tome en cuenta mientras no se mida y las autoridades no tengan esas mediciones pues no se les va a destinar recurso y mucho menos programas” (Entrevista a informante clave de Partido Político, MC)

La urgencia de la identificación real para presupuesto, trabajo focalizado, generación de agenda indígena y materialización de la Ley resulta evidente. Las evidencias positivas y negativas del Padrón presentadas con anterioridad reflejan la necesidad de un estudio profundo y la apertura de interpretación del derecho para hacer viable tal identificación de personas indígenas en Monterrey y su área metropolitana:

“identificar las zonas de donde hay población indígena congregada, centros de reunión y un sistema de información que permitiera ver maso menos donde se concentra un núcleo importante población, para ir consolidando un esquema mas de representación y participación indígena en el estado” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

En síntesis, el Padrón de Personas Indígenas en el Estado de Nuevo León o Sistema de Información, es un nicho de oportunidad operativo para el cumplimiento de la Ley de Derechos Indígenas en Nuevo León. Sin embargo, se deberán tener presente los aspectos positivos y negativos anteriormente señalados.

Mientras no exista una identificación real de la población indígena en la entidad difícilmente la situación en los ayuntamientos, en cuanto a políticas públicas y de representación y participación político-electoral indígena, cambiará.

7.4.5 La Organización Política Indígena como variable emergente del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana. Un análisis del Comité Interinstitucional, el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas y los Líderes Indígenas

Durante el trabajo de campo realizado se pudo observar un fenómeno que llamó la atención: la organización política indígena en la entidad. Si bien es cierto que la participación y representación política indígena en Nuevo León es incipiente, han existido esfuerzos de organización por parte de actores clave.

Debido a lo nuevo de ese fenómeno de organización política indígena, y que para la presente entrega será considerada como una variable emergente, el análisis que se enarbolará a continuación tiene más el carácter descriptivo y una breve interpretación de las formas en cómo es que esta variable emergente influye en el voto indígena en la región. De manera tal que se describirán los 3 mecanismos de organización indígena más visible y se terminará el apartado con un breve análisis de su influencia sobre el voto.

1) El Comité Interinstitucional

Al comienzo de las entrevistas se pudo reconocer los esfuerzos por parte de la SEDESOL del Estado para incentivar y promover la organización indígena. Durante la entrevista con los informantes clave de la SEDESOL se confirmó que la creación del Comité Interinstitucional pretende generar una sinergia institucional, primero, que permita establecer una agenda indígena dentro de las diversas dependencias gubernamentales, académicas y de la OSC; para después, como un segundo momento, provocar acciones y programas dirigidos a la población indígena y poner las bases institucionales para incentivar la organización.

“creo que la creación del comité interinstitucional, en gran medida va a dar solvencia a lo que establece la ley, es decir, se va a poner sobre la mesa cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, qué se puede hacer y qué no se puede hacer; entonces, es empezar a hablar y a dialogar con los demás, con las demás dependencias que les corresponde poner su granito de arena” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Se puede observar que a nivel institucional el Comité Interinstitucional pretende dar solvencia a la Ley y a establecer mecanismo de participación en conjunto entre las dependencias gubernamentales. Sin embargo, se pudo identificar una problemática en torno a el desarrollo del Comité:

“nos invitaron desde antes a SEDESOL a participar y fuimos y en la mesa previa a su instalación hicimos la observación de que era necesario que incluyeran a personas, comunidades y asociaciones con indígenas en la mesa, que no era posible que se instalara este comité con la ausencia de, de quienes son principales autores, pero a pesar de esa recomendación que tuvieron a tiempo y forma bueno siguieron adelante y lo hicieron” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuatepec)

Esta problemática radica principalmente en los señalamientos en torno a la falta de inclusión de personas indígenas en el Comité. A pesar de reconocerse como legítimo el señalamiento, puede considerarse que la finalidad del primer esfuerzo de la realización del Comité Interinstitucional radicaba en poner en sintonía a las dependencias gubernamentales que 1) no han cumplido con sus obligaciones de trabajar con perspectiva

de atención a la población indígena y que 2) carecen de sensibilidad y conocimiento de esas obligaciones. Esto se puede establecer por la declaración de los informantes clave de la SEDESOL:

“Nos apalancamos también de la Ley de Derechos de Personas indígenas en el estado de Nuevo León y recientemente con la creación del comité Interinstitucional para el desarrollo integral de indígenas en el Estado... hemos tratado de crear un precedente de políticas públicas, es decir, ponerlo en áreas donde el día de mañana, vengan cambios o no vengan cambios, se va a tener que seguir dando continuidad por una normativa” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Ahora bien, se pudo reconocer que el Comité Interinstitucional solamente era un primer paso para los esfuerzos de incentivar la organización comunitaria indígena en el Estado. Por ejemplo, el plan de acción era que una vez ya desarrollado el comité interinstitucional y puesto en sintonía a las dependencias gubernamentales participantes, el siguiente paso era establecer los términos de cómo promover la organización de las personas indígenas a partir de los centros interculturales:

“El estado tiene 43 centros comunitarios, 4 de ellos se consideran interculturales, sabemos que hay presencia en más, que hay más indígenas, que no están limitados en esos cuatro centros comunitarios, sino hay presencia en otros 16 pero hemos empezado con estos cuatro centros el proceso de consulta es básicamente para conocer cuales son sus prioridades, cuales son sus expectativas y generar compromisos para trabajar en conjunto. Ese es un trabajo donde participan centros comunitarios, nosotros y gente de la comunidad” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Además, se pudo identificar también que las acciones llevadas a cabo en los centros interculturales tienen estructura y visión a corto, mediano y largo plazo:

“si se trata sobre tres ejes, es la vigencia a los derechos, el desarrollo de habilidades de emprendimiento, desarrollo de emprendimiento, pero basado en la identidad; el

primero es la vigencia a los derechos, el segundo es desarrollo de migrantes basado en un proyecto que nosotros denominamos TEQUIO y el tercer eje es el modelo de organización comunitaria” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Es decir, el Comité Interinstitucional puede ser interpretado a partir de dos ópticas: 1) como respuesta institucional para el desarrollo de las acciones llevadas a cabo en los centros interculturales y, una vez madurado el proceso de participación y organización por parte de la población indígena, 2) establecer a los líderes y representantes indígenas, elegidos por la propia población indígena, que mantengan contacto, voz y voto dentro del comité interinstitucional. Esto pareciera responder a la obligación de la SEDESOL para la atención de manera integral a la población indígena:

“¿qué es el comité interinstitucional? Es un órgano donde están participando las trece dependencias que son anunciadas en la ley de derechos indígenas del estado de Nuevo León, donde periódicamente se reúnen para ver los avances y coordinar acciones en favor de la población en los distintos sectores, es decir, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

En síntesis, la visión intercultural de organización política se puede entrever en la figura del Comité Interinstitucional. Por un lado, se tienen identificadas a las dependencias gubernamentales obligadas a la atención, desarrollo e implementación de programas dirigidos a la población indígena y, por el otro lado, se tiene la visión de un trabajo de organización política y de participación desde dentro de la población indígena:

“Cada centro comunitario tiene un comité de participación ciudadana, lo que buscamos es que ahorita en estos 4 interculturales exista la voz de, por lo menos, una persona de comunidad indígena. Ese es un primer ejercicio donde incluimos a la población indígena e la construcción de políticas públicas” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

A pesar de los comentarios en contra hacia la iniciativa presentada y llevada a cabo por la SEDESOL, y a la luz de la comprensión y análisis de las acciones emprendidas por los demás actores clave involucrados en el tema indígena, se puede establecer que el Comité Interinstitucional es la única acción a nivel estatal que pretenda generar sinergia institucional para el cumplimiento de la Ley.

2) El Consejo Estatal de Pueblos Indígenas

Por parte de los actores clave indígenas entrevistados también apareció a relieve una forma de organización ya establecida que pretende influir en las decisiones gubernamentales, en el diseño e implementación de políticas públicas, así como en la generación de espacios de representación política y en acciones que promuevan la participación política indígena en la entidad.

Esta forma de organización lleva por nombre Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, es un consejo que ya sesiona, que está constituido por diversas asociaciones civiles indígenas y que tiene por objetivo incidir en la vida pública y política de Monterrey y su Área metropolitana:

“Este consejo estatal de pueblos indígenas existe, tratamos de seccionar una vez al mes, por cualquier cosa... principalmente personas que hemos trabajado en otras organizaciones de la sociedad civil, pero principalmente la idea es que sea compuesta por personas indígenas que geográficamente estén representadas en el estado de Nuevo León... ahorita en el acta que tenemos de Constitución de ese consejo estatal de pueblos indígenas tenemos representación en 18 municipios, hemos bajado un poco, como el trabajo en algunas zonas pero si nos queremos concentrar para como poder ser parte de este proceso de toma de decisiones a través de estos procesos electorales donde se designan a personas que ocupan cargos de elección popular digamos centrar nuestras fuerzas en lugares como el poniente de la zona de Monterrey, en la zona metropolitana digamos García, Escobedo, El Carmen que es principalmente donde tenemos que enfocar nuestros

esfuerzos donde hay numero muy significativo de la población indígena y que es en donde vemos que si podemos participar” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Se puede reconocer que este Consejo pretende influir de manera organizada en la generación de una agenda política y en el establecimiento de mecanismos de participación e influencia en la toma de decisiones. Además, se deja entrever que los procesos electorales, como vía de participación indígena, es una opción y la representación política indígena una meta a alcanzar.

Es preciso dejar claro que el Consejo de Pueblos Indígenas no tiene nada que ver con el Comité Interinstitucional ni con los proyectos de organización comunitaria de la SEDESOL:

“¿la SEDESOL tiene algo que ver con este consejo?

Entrevistado: ¿Desarrollo social? ¿Del estado? No, tiene ese carácter de consultivo, es que esta parte, todos los órganos de representación que tiene el gobierno federal y los estados de la república que si ya han avanzando en eso es un consejo consultivo de los pueblos y personas indígenas que habitan el estado y en la federación, en este caso seria el mismo carácter consejo consultivo” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Es decir, además de la búsqueda de influencia dentro de la toma de decisiones y en los procesos electorales, tal Consejo pretende mantener un carácter de consultivo en materia indígena en el Estado. Por lo tanto, el Consejo de Pueblos Indígenas no tiene el carácter de representativo de la población indígena en la entidad:

“este consejo no es un consejo 100% representativo porque es algo muy, muy complejo y complicado, es un consejo que tiene la autoridad para hablar de los temas indígenas en la entidad, este consejo estatal de población indígena pretendía ser el órgano colegiado que iniciara una interlocución y un reconocimiento real del gobierno estatal y gobiernos municipales para la construcción de políticas publicas concretas en beneficio y con fundamento en la ley de derechos indígenas para la

población indígena” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

También se reconoció hasta qué punto estaba ese reconocimiento por parte del ejecutivo estatal que busca el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas:

“Nosotros a través del consejo la propuesta principal que les hemos hecho a algunos municipios y al estado, por escrito formalmente le hemos dicho, porque primero fue así algo que se hizo como compromiso de campaña al gobernador actual y de forma ya cuando tomó posesión como gobernador el estado, que el consejo estatal de pueblos indígenas sea reconocido como un órgano de participación y representación de los asuntos indígenas en Nuevo León” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

Tal reconocimiento por parte del gobierno estatal no se dio. La voluntad política estuvo ausente y los problemas operativos para el Consejo y la materialización de sus visiones fueron en aumento. De igual manera que con el Comité Interinstitucional, hay voces que denuncian el mal manejo de la organización, por ejemplo:

“no, de hecho, querían este ahorita formar el consejo creo que no se les hizo entonces estaban muy estaban frustrados porque el Bronco les prometió que sí les iba a dar ese consejo y después no, entonces la verdad estaban muy molestos

Entrevistada: traen todo un pleito ahí que luego quieren sumas a otras personas que no son nada, que no tienen nada que ver, pero es eso y también ahí vemos esa situación de que van y dicen, muchos no nada más ellos, muchos que dicen somos los representantes o yo como representante cuando que si vemos que ya están de plano como que por ocupar un cargo” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

En síntesis, el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, en principio, parece ser un mecanismo de participación que permita la generación de una agenda política indígena a nivel estatal y una vía para la inclusión de los temas indígenas en el diseño e implementación de políticas

públicas y de participación electoral indígena; sin embargo, queda en tela de juicio 1) la voluntad política por parte del ejecutivo estatal para su reconocimiento, así como 2) las verdaderas finalidades del Consejo. Pero al menos, los términos operativos, de visión y organización política indígena, el Consejo representa uno de los mayores logros para promover la representación y participación político-electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana.

3) Los líderes indígenas

El liderazgo dentro de las comunidades indígenas ha sido pieza fundamental en la irrupción indígena en las arenas políticas a lo largo y ancho de la América Latina. En el caso de México, el liderazgo a final de 1994 estuvo marcado por la figura del sub-comandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); sin embargo, a nivel local, y en un contexto tan adverso por las circunstancias de migración, territorio, lengua etc., cómo es el liderazgo indígena en Monterrey y su Área Metropolitana.

El tema del liderazgo indígena en Monterrey y su Área Metropolitana contiene múltiples problemáticas. Por ejemplo, la SEDESOL reconoce que un gran problema de la situación política de la población indígena, además de su identificación, es que está dispersa y los mecanismos de participación propiamente indígena se complican precisamente por esa dispersión:

“una de las complicaciones de trabajar con comunidades indígenas, hay varias, una es la dispersión, es muy complicado hacer una asamblea donde se estén representando los 350 mil indígenas en el estado es complicado” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Y otra problemática se encuentra en que han surgido personas que se autoproclaman líderes indígenas:

“el problema es cuando llegan personas que se auto adjudican como la representación estatal de los indígenas” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Lo anterior ha conllevado problemas dentro de la misma comunidad. Es decir, la población indígena ha sabido reconocer a los actores que se autodenominan indígenas y obtienen algún tipo de beneficio personal ya sea con un partido político o con una dependencia gubernamental, y han creado disputas hacia el interior de las comunidades:

“más bien no tienen ubicados a buenos líderes, que están en pro de la comunidad, sino más bien líderes que han aprendido de la política... que en ocasiones no representan los intereses de la comunidad verdad, que son líderes indígenas sí, pero que no, no representan a la población indígena... hay líderes, que se dicen líderes de la comunidad pero que no los reconocen como tal, pero son esas, son esos líderes que están en mesas de trabajo” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihualtepec)

Es importante destacar de la cita anterior que si bien es cierto existen personas indígenas que son líderes por el hecho de mantener un alto grado de pragmatismo político y aprovechar las circunstancias que los hacen entrar en contacto con dependencias gubernamentales o partidos políticos, también es cierto que esto no necesariamente significa que sea un líder que represente a la comunidad indígena, sus visiones y/o necesidades. Además, la población indígena identifica a esos líderes que no representan los intereses de la comunidad por el hecho de que mantienen un discurso político muy elaborado.

Esta dinámica de liderazgo sin legitimidad por no representar los intereses de la comunidad y de la población indígena, ha quedado señalado cuando en la entrevista con una persona informante clave se tocó el tema del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas. Si bien es cierto que con anterioridad se mencionó la importancia de ese mecanismo, en el trabajo de campo pareciera que la percepción algo distinta:

“es que ellos se denominan un consejo que nos representan, pero pues nadie los ha nombrado o sea la comunidad no los ha nombrado que diga ¡ay! el me representa... ellos políticamente o que siempre están peleando que quieren formar un consejo que hasta las comunidades que si bajas un proyecto o algo que se les pide permiso, que se les avise entonces...sí, luego ellos si nos atacaban a nosotros en las reuniones

y decían pues si, empoderas a la mujer, le das todos esos temas, pero ¿qué le das? Nada, ellos quieren algo a cambio que tu les des, le digo no entonces pos ahí no nos poníamos de acuerdo porque ellos quieren mucho lo del asistencialismo” (Entrevista a informante clave de OSC, Zihuakali)

En suma, el liderazgo indígena en Monterrey y su Área Metropolitana existe, sin embargo, que eso represente a las personas y a las comunidades indígenas pareciera que es cosa muy distinta. Más allá de los conflictos de intereses y protagonismo político, también salió a la luz que la mayoría de los líderes indígenas son hombres, llevando con esto a otro nivel de análisis el papel de las mujeres indígenas que será tratado más adelante.

7.4.6 La proximidad de las personas indígenas a la Academia como variable emergente. Análisis del papel de la academia y de la educación y su influencia en el voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana

La irrupción política de los pueblos indígenas en las arenas nacionales en la década de los 90`s estuvo de la mano con la participación activa de los aliados políticos internacionales, principalmente las Organizaciones de la Sociedad Civil. Sin embargo, a la luz de ya casi 25 años de aquello, el panorama parece cambiar de aliado –al menos para el caso de la situación política de las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana– para asirse a los esfuerzos en conjunto de un actor imprescindible: la Academia.

El papel de la Academia y de las Universidades en Nuevo León en sus trabajos con la población y la situación indígena no ha recibido el énfasis, importancia y seguimiento como debería. Desde comienzos de la apertura del Departamento de Educación Indígena a finales de los 90`s y en los trabajos previos a la promulgación de la Ley de Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León en el 2012, los académicos de distintas universidades, tanto públicas como privadas, han estado presentes y trabajando de cerca con la población indígena en la entidad.

De acuerdo con el trabajo de campo realizado para la presente entrega, el mismo afán de protagonismo identificado con el tema de los líderes indígenas ha sido identificado con actores académicos, investigadores principalmente, en cuanto al desarrollo e investigación

de la situación de la población indígena en Nuevo León. Si bien es cierto que la presente entrega es de carácter meramente académico, resulta imposible hacer caso omiso a los fenómenos no institucionales y de lucha de egos dentro de las mismas investigaciones académicas y, por supuesto, de los investigadores que trabajan el tema indígena.

La importancia de esto radica en dos situaciones principalmente: 1) la población indígena resulta cansada de que año tras año investigadores vayan a sus comunidades a realizar ya sea encuestas, entrevistas o grupos de enfoque y al final la situación social, económica y política de las personas indígenas no ha cambiado y 2) el mismo ego de investigadores por mantener el protagonismo socava avances que bien podrían significar la materialización de derechos, principalmente de representación y participación política indígena. El presente apartado solo dejará lo anterior como una pincelada, pues si bien no es de carácter científico lo anterior, sí es preciso señalarlo y tenerlo en cuenta, pues se ha podido determinar e identificar a esos actores institucionales que detienen a causa de egos el desarrollo político de la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana.

Ahora bien, la importancia de la Academia no es discutible, lo que sí lo es radica en el papel que ha realizado la academia y cómo los demás actores clave perciben el trabajo de la Academia y Universidades:

“no hemos tenido los diálogos con la academia o no ha existido la interacción con la academia para que también tengan ese empuje o puedan ser ese factor, así como la sociedad civil la academia tiene un reto fundamental en la incidencia o en incentivar la incidencia en las políticas públicas, por ejemplo yo no puedo ir al congreso y decir “oye congreso, necesito que hagas un foro” no pues, al final de cuentas, ese foro lo tendríamos que estar creando entre todos que estén participando.- creo que legitima mas cuando es un ejercicio que viene de la sociedad civil o de las academias”
(Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

No se discute la capacidad que tiene la Academia para pensar y mostrar la realidad, pero el compromiso, como se pudo observar en la cita anterior, para más bien laxo. La crítica y señalamientos de las acciones, por un lado, y de los nichos de oportunidad por el otro lado,

debe de pasar de meras cavilaciones teóricas y empíricas al aporte e incidencia en la realidad, o, es decir, en los esfuerzos por materializar los cambios que precisan las personas indígenas en la entidad:

“Si yo voy con los indígenas me van a decir pues mi prioridad es que exista un espacio para que yo venda y si es cierto, y si yo voy con aquel me va a decir “es que necesitas espacios de participación y democratización” y pues si es cierto, pero cuando ves la película completa de atención a indígenas es enorme y se necesita la incidencia de cada uno de ellos, y que cada uno de ellos asuma compromisos y asuma así como desarrollo social tiene que hacer compromisos y el área de la administración estatal necesita asumir compromisos, necesitamos que la academia asuma compromisos, no en lo particular sino en una agenda común” (Entrevista a informante clave gubernamental, SEDESOL)

Empero, la situación de la academia, en el sentido de involucrarse en los cambios de la situación de la población indígena en la entidad, tiene un punto de partida totalmente distinto:

“Lo único que queremos es conocer la realidad como es y proyectarla y que la conozca la gente, entonces respondiendo a tu pregunta ceo que el papel de las universidades es clave, por eso porque es alguien que si hace bien las cosas va a conocer un problema determinado una forma sistemática, científica y no, pues no es parte interesada” (Entrevista a informante clave de la Academia, UERRE)

En tal sentido, de acuerdo para el actor clave académico se tiene que ser parte interesada para estar inmiscuido en las acciones generadoras de cambio. Sin embargo, lo anterior también puede ser contrastado con lo que informantes clave indígenas advierten:

“Lo usas a veces dices para chingarnos más, para darle información al estado, qué pensamos, cómo nos organizamos, que planeamos a veces dices no manches tampoco somos rata de laboratorio... o ya viste que está allá dando una conferencia

sobre el tema y tu dices órale eso está loco a la vez te da risa y coraje que hagan lo que quieran” (Entrevista a informante clave, Activista Independiente)

“Pues mira, los investigadores yo reo que en el tema de derechos indígenas, pues o sea investigas porque hay un tema económico detrás de ello que puedes tener como un trayectoria, eso es un tema de proyecto de vida del investigador, de la labor que uno hace, yo creo que el tema de la investigación s hacer visible esta realidad indígena” (Entrevista a informante clave de OSC, N.L. Árbol de Todas las Raíces)

De manera tal que hay todo un camino de crítica y autocrítica que tanto investigadores, como actores gubernamentales y de instituciones políticas deberán recorrer para establecer una visión más panorámica de la situación indígena en la entidad. Y quizá cuando esa relación Academia-Gobierno madure, la participación y mecanismos de representación política indígena también lo haga.

Por otro lado, la Educación para las personas indígenas participantes en los grupos de enfoque resultó ser el mayor incentivo que se tiene para que los cambios sucedan. Esto también se interpreta como un sustento del por qué de la importancia de la academia, pues, como se puede observar, la esperanza en la educación y en las Universidades, principalmente, es tan latente para la población indígena que resulta un atropello que la Academia ignore su papel como agente de cambio:

“para mí es que mis hijos tengan una mejor educación, que a veces nuestros padres no nos la pudieron dar, eso ha sido mi mayor ilusión, bendito Dios ahorita mi hijo acaba de entrar a la universidad” (Grupo de enfoque con población indígena)

La ilusión que es la Educación para el mexicano promedio, y más para la población indígena, quizá sea lo que ha motivado los casos de migración; pues resultó claro en el trabajo de campo que si bien una gran parte de la población adulta indígena está en el trabajo doméstico o en áreas de la construcción, una cantidad de jóvenes indígenas han optado por la vía del estudio y la Universidad representa la opción de cambio:

“Entrevistado 2: de hecho piden que sean de rancho, “no, que sea de rancho porque son mas trabajadoras”

Entrevistado 1: ellas ya saben el trato que les van a dar, por eso quieren de rancho

Entrevistado 7: para hacerlos trabajar de más

Entrevistado 1: pues sí, como un burro

Entrevistado 4: por eso queremos luchar para la educación de nuestros hijos, para que no pasen lo mismo que nosotros, yo no quisiera que mi hija trabaje igual que yo” (Grupo de enfoque con población indígena)

En síntesis, el papel del académico, la Universidad y la educación resulta ser importante para el cambio de la situación de la población indígena en Monterrey y su Área Metropolitana, así como el incentivo de cambiar la situación política y político-electoral indígena en la entidad.

7.5 A manera de conclusión. Las variables independientes como influyentes del voto indígena en Monterrey y su Área Metropolitana: las variables clásicas, étnicas y emergentes

La participación político-electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana tiene que ser interpretada desde 3 tipos de variables: las clásicas, las étnicas y las emergentes. La empresa que conlleva concomitar los tres tipos de variables independientes antes mencionadas, tiene por complejidad nodal el simple hecho de contrastar un tipo con otro, pues las tres parten de supuestos que van desde el eurocentrismo hasta las que son propias de una visión del mundo distinta a la occidental que se representa en los pueblos indígenas en México.

Tal ejercicio aumenta de complejidad cuando se trata de dar cuenta del fenómeno de participación electoral indígena en un contexto totalmente adverso, relativamente reciente y con múltiples actores involucrados. No obstante, y a través de los esfuerzos teóricos y empíricos realizados, se pudo establecer una suerte de organización y tipología de variables independientes que permiten interpretar el fenómeno de participación electoral indígena

desde nuevas perspectivas que será presentado en un capítulo final de conclusiones y recomendaciones.

A continuación se darán a conocer las conclusiones del presente capítulo de análisis interpretativo a partir de las preguntas específicas de investigación:

- 1) ¿Cuáles son las características de la participación política de las personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana para incidir en las decisiones gubernamentales, políticas, económicas y sociales?

Par dar respuesta a esta pregunta específica de investigación, es preciso tomar lo establecido a partir de las variables emergentes. En éstas, las características de la participación política en la incidencia de decisiones gubernamentales, políticas, económicas y sociales son escasas, pero se reconocen los nichos de oportunidad para que se den. Es decir, para que la población indígena pueda incidir en el sistema político vigente en Monterrey y su Área Metropolitana se deberá de tomar en cuenta lo siguiente:

- a) El fortalecimiento de una Voluntad Política que provoque una Agenda Política Indígena y que ésta, a su vez, incentive la Sinergia Institucional.
- b) El combate a los dos tipos de Discriminación que aparta a la población indígena de las instituciones políticas y gubernamentales y del interés en los asuntos públicos dentro del sistema político vigente: Discriminación Social y Discriminación Institucional
- c) En Nuevo León está presente la Inoperabilidad de la Ley, mientras no exista un reglamento a la Ley y se carezca de asignación de presupuesto, la participación política indígena e incidencia en las decisiones gubernamentales será escasa, sino ausente
- d) Una de las características presentes en la relación personas indígenas-gobierno, es que no existe un registro que sustente una incidencia gubernamental; ante tal situación, es conveniente señalar que el Padrón de Pueblos Indígenas es un tema

presente y puede significar una característica clave de la relación personas indígenas-gobierno

- e) La característica principal en la relación personas indígenas-gobierno es que ya existe una suerte de Organización Política Indígena que podría fortalecer relaciones político-institucionales: el Comité Interinstitucional y el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas. Aunque se deberá mantener distancia de prácticas clientelares
 - f) Nuevos actores que podrían incidir en la relación personas indígenas-gobierno: la Academia
- 2) ¿Cuál es la relación entre el votante indígena y los partidos políticos en Nuevo León?
- a) La relación entre partidos políticos y personas indígenas es poca
 - b) La desafección política por parte de las personas indígenas hacia los partidos políticos estatales está marcada por la falta de confianza a raíz de las manipulaciones políticas sufridas en el pasado
 - c) Hay una relación de desconocimiento de derechos políticos indígenas por parte de los partidos políticos
 - d) La población indígena mantiene un conocimiento político indígena amplio, sin embargo, esto contrasta con el poco conocimiento político del sistema político vigente en Monterrey y su Área Metropolitana
- 3) ¿De qué manera influyen los Usos y Costumbres de los migrantes indígenas en la lógica electoral en Monterrey y su Área Metropolitana?
- a) Los Usos y Costumbres influyen de manera negativa en la participación electoral de mujeres indígenas, el machismo está marcado
 - b) Las mujeres indígenas han encontrado en las OSC una vía para integrarse en las nuevas formas de participación política que, en un futuro, podría influir en la participación electoral en la entidad

- c) El sistema de Usos y Costumbres, como forma de organización y de gobierno, ha sido identificada como posibilidad de cambio en la forma de organizarse en Monterrey y su Área Metropolitana

En suma, se puede observar que la complejidad y la aparición de actores relevantes en el fenómeno de participación política y participación electoral indígena es amplia. Los sistemas políticos presentes, así como las visiones de los actores, confluyen a veces de manera positiva y otras veces de manera negativa, pero en ambos momentos se pudieron identificar nichos de oportunidad que pueden ayudar a contrarrestar el efecto negativo o, en su caso, nutrir el efecto positivo.

CAPÍTULO VIII. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES GENERALES

La presente entrega estuvo orientada al conocimiento de las múltiples formas en cómo la participación electoral indígena se materializa en Monterrey y su Área Metropolitana. Es decir, la transversalidad y el enfoque integral para conocer tanto la participación política como la participación electoral indígena en la entidad fueron explicadas e interpretadas a lo largo del trabajo y a la luz de las diversas interacciones entre las instituciones gubernamentales, políticas, académicas, de la sociedad civil y por parte de la población indígena.

En este capítulo se presentan los principales hallazgos de la investigación realizada. Tales hallazgos se postulan dentro de la amplia gama de estudios en torno a la participación política en democracias modernas en la región latinoamericana; sin embargo, lo innovador del contenido radica en que el análisis se centró en la participación electoral indígena en ciudades industriales, tema poco analizado en México. De igual manera, se pudo establecer el análisis a partir de las categorías clásicas del voto, categorías etnitizadas de la literatura disponible sobre participación político-electoral indígena, y, como proceso a destacar, se

establecieron categorías emergentes para entender el fenómeno de participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana, profundizando con ello el análisis y aportando de manera sustantiva información enriquecedora a la investigación en la materia.

Durante los primeros cuatro capítulos se establecieron las bases teóricas que sostienen el trabajo empírico y su análisis. Mediante la revisión clásica de la teoría del Estado y su contextualización desde la región latinoamericana, se pudo entrever las formas en que se da la democracia en la región y se determinó la importancia de la participación política indígena como pilares de la pluralidad propia de las democracias modernas, sobre todo la mexicana. Después se establecieron las pautas de cómo es la participación político-electoral indígena en México y las vías de interpretación del fenómeno en Monterrey y su Área Metropolitana.

Una vez que se establecieron las bases teóricas para la aproximación empírica, se presentan los análisis, fruto del trabajo empírico, que permiten dar respuesta a las preguntas de investigación y comprobar o rechazar las hipótesis de investigación. Para lo anterior se realizó una aproximación de corte cualitativo al problema de investigación; siendo el método de entrevista semiestandarizada y el método de grupo de enfoque, los métodos de trabajo de campo utilizados. La aproximación mediante dos métodos cualitativos permitió profundizar el análisis, interpretación y comprensión del fenómeno de participación electoral indígena; además de confirmar que la aproximación empírica al problema de investigación precisa de sensibilidad para con la población indígena, así como una amplia confianza por parte de los actores involucrados, tal confianza y sensibilidad pudieron ser suministradas mediante el acercamiento personal del autor de la presente entrega y que responde a los principios de la investigación propiamente cualitativa.

Los resultados obtenidos del análisis fueron presentados por categorías y en dos capítulos diferentes. Para el capítulo VI, se estableció el análisis de la variable-categoría dependiente: el voto indígena. Este capítulo se estableció para dar respuesta a la pregunta general de investigación: ¿cómo se ha desarrollado la participación electoral de las personas indígenas

en Monterrey y su Área Metropolitana? Los principales hallazgos para dar respuesta fueron los siguientes:

- 1) En caso de existir el voto, éste se ejerce de manera desinformada,
- 2) Debido a que no existe una agenda política indígena por parte de los Partidos Políticos ni de las Instituciones encargadas de la promoción del voto,
- 3) Reforzando con ello los problemas de clientelismo por parte de partidos y líderes indígenas,

Además, se pudo entrever en temas institucionales que:

- 4) Las instituciones políticas no hacen distinción alguna en la atención y promoción de derechos político electorales indígenas, y
- 5) La academia, a pesar de su interés en las investigaciones de corte indígena, se encuentra ajena y desinteresada al problema de participación electoral

Y en términos instrumentales del voto, los principales hallazgos fueron los siguientes:

- 6) Falta de un empadronamiento indígena en Monterrey que visibilice cuantitativamente la urgencia de una agenda indígena y la promoción de derechos político-electorales indígenas
- 7) Falta de armonización entre los Usos y Costumbres de las comunidades indígenas y los requerimientos oficiales para el voto como lo es la credencial de elector
- 8) Falta de circunscripciones electorales indígenas que promuevan acciones afirmativas y cuotas indígenas dentro de los partidos políticos

Para el capítulo VII se establecieron las variables-categorías independientes para dar respuesta a las preguntas específicas e hipótesis de investigación. A través del análisis del material recaudado en las entrevistas a informantes clave y grupos de enfoque a personas indígenas se pudo contestar las preguntas específicas:

- 1) ¿Cuál es la relación entre el votante indígena y los partidos políticos en Nuevo León?
 - a. Existe poca relación

- b. La desafección política está marcada por la falta de confianza política fruto de las manipulaciones del pasado
- c. Existe una relación de desconocimiento político indígena por parte de los partidos políticos
- d. Las personas indígenas mantienen un amplio conocimiento político en cuanto a sus formas de organización y elección de autoridades, pero un poco conocimiento del sistema político vigente y del sistema de partidos

2) ¿De qué manera influyen los Usos y Costumbres de la población indígena en la lógica electoral en Monterrey y su Área Metropolitana?

- a. En primera instancia los Usos y Costumbres en Monterrey influyen de manera negativa para las mujeres indígenas, todo a causa del machismo; sin embargo esto radica en función del pueblo indígena al que se pertenezca,
- b. Las mujeres indígenas de pueblos menos marcados por el machismo, encuentran en las OSC nuevas vías y formas para participar activamente en la política, y
- c. Existe la posibilidad de que los Usos y Costumbres, como formas de organización y de gobierno puedan significar un cambio en la forma de organización indígena en Monterrey y su Área Metropolitana

3) ¿Cuáles son las características de la participación política de personas indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana para incidir en las decisiones gubernamentales, políticas, económicas y sociales?

Para dar respuesta a esta pregunta específica, se realizó la elaboración de variables-categorías emergentes del trabajo empírico:

- a) voluntad política
- b) discriminación social e institucional
- c) inoperabilidad de la Ley
- d) organización política indígena

e) nuevos actores

De manera tal que la falta de voluntad política que genere una agenda política indígena, la amplia discriminación social e institucional, la inoperabilidad de la Ley por la falta de un reglamento, hacen que la participación política indígena sea de incidencia negativa. Mientras que la organización política indígena por medio del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas y el Comité Interinstitucional, y nuevos actores como la academia, pueden incidir de manera positiva en las decisiones gubernamentales, políticas, económicas y sociales en Monterrey y su Área Metropolitana.

Es por lo anterior, que se puede establecer que la hipótesis teórica esbozada al comienzo de la investigación: el conocimiento de los derechos políticos, el previo conocimiento y práctica del Sistema de Usos y Costumbres y la proximidad a los partidos políticos, inciden en la participación político-electoral de las personas indígenas y en las decisiones gubernamentales, políticas, económicas y sociales en un contexto migratorio en ciudades industriales como lo es Monterrey y su Área Metropolitana, se confirma para el caso de la participación político-electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana.

Sin embargo, debido a que la poca participación electoral indígena se da por motivos del poco conocimiento de derechos políticos, poca práctica del Sistema de Usos y Costumbres y poca proximidad a partidos políticos, las categorías emergentes del trabajo de campo permite establecer las siguientes hipótesis sustentadas en la Teoría Fundamentada:

- 1) La generación de voluntad política y de una agenda política indígena por parte de las instituciones políticas, provoca la participación electoral indígena
- 2) La eliminación de la discriminación social e institucional, incide en la participación electoral indígena
- 3) La creación de un reglamento a la Ley y la asignación de presupuesto etiquetado, provocará la participación política indígena
- 4) La organización política indígena por medio del Comité Interinstitucional y el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, fortalece las relaciones político-institucionales y la participación electoral indígena

- 5) El compromiso de la academia, incide en la relación política entre las personas indígenas y el gobierno

En síntesis, y como conclusión final, se establece que la participación electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana es poca y las variables clásicas del voto no determinan la participación electoral indígena. Ésta, más bien, está determinada por las variables emergentes que, en su mayoría, no están materializadas en la realidad regiomontana pero que sirven de punto de partida para los siguientes trabajos empíricos y teóricos en investigaciones similares a la presente, así como conceptos y variables a tomar en cuenta por funcionarios, políticos y activistas en tema de participación política y electoral indígena en Monterrey y su Área Metropolitana.

El desarrollo político, social, económico y cultural de Monterrey y su Área Metropolitana estará supeditado a la capacidad de atención, respeto y promoción de derechos, eliminación de prejuicios y respeto a la pluralidad en general. Es por ello que la población indígena, por términos históricos y de consolidación democrática con miras humanísticas, es agente axial en la cultura política en la región. Atrás deberán de quedar los trabajos académicos que ven a la población como un mero objeto de investigación, así como los prejuicios por parte de las instituciones y funcionarios que solamente exacerban su afán ignorante de rechazo hacia el Otro.

Es preciso destacar que los límites de la presente entrega fueron tanto de corte teórico como empírico. Por un lado, la teoría especializada sobre la participación electoral indígena en México es poca, y lo es más aún cuando de participación electoral indígena en Monterrey se trata; mientras que, por el otro lado, la aproximación empírica implicó un esfuerzo mayor, pues el desconocimiento de los actores clave, así como la falta de confianza hacia los investigadores por parte de la población indígena en Monterrey, complica en demasía el trabajo.

Sin embargo, lo que se pretende es que la presente entrega sirva de base teórica y empírica para futuros trabajos académicos –de corte cuantitativo, principalmente–, de políticas

públicas y, sobre todo, para el mejoramiento, goce y disfrute de los derechos políticos de las personas indígenas que viven en Monterrey y su Área Metropolitana.

Referencias

- Adorno, T. (2007). *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid: Akal.
- Adorno, T. (2011). *Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad*. Madrid: Akal.
- Aguilar, J., Trejo, G., & Pintado, A. (1999). *Usos y costumbres en comunidades indígenas y procesos políticos electorales*. México: IFE.
- Aguilera, R. (2011). Capital social y confianza en procesos políticos de construcción de ciudadanía democrática. En C. M. (Ed), *Comunicación política y ciudadanía. Aportaciones actuales al estudio de la comunicación política* (págs. 1-34). México: Fontamara.
- Alcántara, M., & Freidenberg, F. (2001). Los partidos políticos en América Latina. *América Latina Hoy*, 27, 17-35.
- Almond, G., & Verba, S. (2014). La cultura política. En *Diez textos básicos de Ciencia Política* (págs. 171-201). Barcelona: Ariel.
- Althusser, L. (2008). *Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Práctica teórica y lucha ideológica*. México, D.F: Tomo.
- Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Angosto Ferrández, L. (2012). Participación y representación indígena en los procesos electorales Venezolanos. *América Latina Hoy*, vol. 60, 153-182.
- Apel, K.-O., & Dussel, E. (2005). *Ética del Discurso; Ética de la Liberación*. Madrid: Trotta.
- Aristóteles. (2001). *Tratados de lógica. Categorías y Tópicos sobre las refutaciones sofísticas*. Madrid: Gredos.
- Aristóteles. (2014). *Ética Nicomachea*. México: Tomo.
- Assies, W. (2009). Pueblos indígenas y sus demandas en los sistemas políticos. *CIDOB d'Afers Internacionals*. núm. 85-86, 89-107.
- Bakunin, M. (2009). *Dios y el Estado*. Barcelona: Biblioteca de Pensamiento Crítico.
- Barbour, R. (2001). Checklists for improving rigour in qualitative research: A case of the tail wagging the dog? *British Medical Journal*, 322, 1115-1117.
- Bartolomé, M. (2006). *Procesos interculturales. Antropología política del pluralismo cultural en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Bartra, R. (1998). Violencias salvajes: usos, costumbres y sociedad civil. En A. (. Sánchez Vázquez, *El mundo de la violencia* (págs. 187-188). México: Fondo de Cultura Económica.
- Bartra, R. (2013). *Territorios de terror y la otredad*. México: FCE.
- Bazant, J. (1977). *A Concise History of Mexico, from Hidalgo to Cárdenas, 1805-1940*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Beals, C. (1932). *Porfirio Díaz: Dictator of Mexico*. Filadelfia: J.B. Lippincott Co.
- Béland, D. (2005). Ideas, Interests, and Institutions: Historical Institutionalism Revisited. En A. (. Lecours, *New Institutionalism. Theory and Analysis* (págs. 29-50). Toronto: Toronto University Press.
- Benjamín, W. (1991). *Para una crítica de la violencia*. Madrid: Taurus.
- Berlín, I. (1958). Dos conceptos de libertad. *Dos conceptos de libertad* (págs. 1-31). Oxford: Clarendon Press.
- Blais, A. (2000). *To Vote or Not to Vote? The merits and limits of Rational Choice*. Pittsburgh: Univ. Pittsburgh Press.
- Blais, A. (2006). What effects Voter Turnout? *Annual Review of Political Science*, vol. 6, 111-125.
- Bobbio, N. (1985). *Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Bobbio, N. (1986). *El futuro de la democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bodin, J. (1973). *Los seis libros de la República*. Madrid: Aguilar.
- Bohm et al, D. (1992). *El paradigma holográfico. Una exploración en las fronteras de la ciencia*. Barcelona: Kairós.
- Bonfil, P. (2010). Caso México. *Seminario internacional sobre la participación política y liderazgo de las mujeres indígenas en América Latina* (págs. 58-61). México: PNUD.
- Bovero, M. (2002). *Una gramática de la democracia*. Madrid: Trotta.
- Brussino, S., Rabbia, H., & Sorribas, P. (2009). Perfiles socio-cognitivos de la participación política de los jóvenes. *Interamerican Journal of Psychology* 43(2), 279-287.
- Brysk, A. (1994). Acting globally: Indian rights and international politics in Latin America. *Indigenous peoples and democracy in Latin America*, 129-151.
- Bulmer-Thomas, V. (1994). *The economic history of Latin America since Independence*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Cabrero, E. (1997). *Del Administrados al Gerente Público*. México: INAP.
- Cabrero, F. (2013). Ejercer los derechos, refundar el Estado. Cómo los indígenas amplían la ciudadanía. En F. (. Cabrero, Á. Pop, Z. Morales, M. Chuji, & C. Mamani, *Ciudadanía intercultural. Aportes desde la participación política de los pueblos indígenas en Latinoamérica* (págs. 12-103). Quito-Ecuador: La Caracola Editores.
- Cadena, M. (2006). Escribir otra historia en el Perú (segunda vuelta). *Indéele, No. 176, mayo*.
- Calhoun-Brown, A. (1998). While Marching to Zion: Otherwordliness and Racial Empowerment in the Black Community. *Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 37, No. 3*, 427-439.
- Canetti, E. (2005). *Masa y Poder*. Barcelona: Debolsillo.
- Carbonell, M. (2003). La reforma constitucional en materia indígena. Un primer acercamiento. En T. E. Federación, *Derechos Indígenas y Elecciones* (págs. 49-70). México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Cárdenas, E. P. (2014). Migración interna e indígena en México: enfoques y perspectivas. *Intersticios Sociales, núm. 7, marzo-agosto*, 1-28.
- CDI. (2005). *Los pueblos indígenas en el proceso de Distritación 2005*. México: Dirección General de Investigación del Desarrollo y las Culturas de los Pueblos Indígenas.
- CDI. (2007). *La vigencia de los derechos indígenas en México*. México: CDI.

- Cerroni, U. (2010). *Política. Método, teorías, procesos, sujetos, instituciones y categorías*. México: Siglo XXI.
- Cerroni, U. (2013). *Introducción al pensamiento político*. México: Siglo XXI.
- Chomsky, N. (2005). Construcciones mentales y realidad social. *CIC. Cuadernos de Información y Comunicación*, núm. 10, 47-83 .
- Cohen, J., & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge y Londres: The MIT Press.
- Comaroff, J. (1992). *Ethnography and the historical imagination*. Colorado: Westview Press.
- CONAPRED. (2011). *Encuesta Nacional sobre Discriminación en México*. México: CONAPRED.
- Conway, M. (1987). *La participación política en Estados Unidos*. México: Guernika.
- Córdova, A. (1973). *La ideología de la Revolución mexicana: La formación del nuevo régimen*. México: Era.
- Córdova, A. (1974). *La política de masas en el cardenismo*. México: Ediciones Era.
- Correas, O. (2007). *Derecho indígena Mexicano I*. México: UNAM-CONACYT, EDICIONES COYOACÁN, CEIICH.
- Cosío Villegas, D. (1955). *Historia moderna de México*. México: Editorial Hermes.
- Cosío Villegas, D. (1972). *El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio*. Austin: Institute Of Latin American Studies, The University Of Texas.
- Crewe, I. (1981). Electoral Participation. En D. Butler, E. Penniman, & A. (. Ranney, *Democracy at the Polls*. Washington, D.C.: American Enterprise Institute.
- Dahl, R. (1992). *La democracia y sus críticos*. España: Paidós.
- Dalton, R., & Wattenberg, M. (1993). The not so simple act of voting. En A. (. Finifter, *Political Science: The State of the Discipline II*. Washington (D.C): American Political Science Association.
- De Almeida, J. M. (2011). El dorso de la ciudad: los sin tierra y la concepción de otro tipo de ciudad. En B. d. Santos, *Producir para vivir. Los caminos de la producción no capitalista* (págs. 219-254). México: FCE.
- De Artaza, M. (2015). La Ciencia Política, la Historia y las Instituciones. *Ivs Fvgit*, 18, 45-74.
- De la Peña, G. (1999). La ciudadanía étnica y la construcción de los indios en el México contemporáneo. En A. O. (coord), *La sociedad civil. De la teoría a la realidad*. México: El Colegio de México.
- de la Peña, G. (1999). Territorio y ciudadanía étnica en la nación globalizada. *Desacatos*, núm. 1.

- Denzin, N. (1989). *The Research Act*. Englewood cliffs: Prentice-Hall.
- Dewey, J. (1946). *Libertad y Cultura*. Rosario: Ed. Rosario.
- Díaz Polanco, H. (2005). Los dilemas del pluralismo. En P. D. (comp.), *Pueblos indígenas, estado y democracia*. Buenos Aires: CLACSO.
- Domínguez Cuevas, A., & Santiago Benítez, G. (2014). Un acercamiento a la participación político electoral de los pueblos indígenas de México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, vol. XLIV, núm. 3, 83-135.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Row.
- Durín, S. (2007). ¿Una educación indígena intercultural para la ciudad? El departamento de Educación Indígena en Nuevo León. *FRONTERA NORTE, VOL. 19, NÚM. 38, JULIO-DICIEMBRE*, 63-91.
- Durin, S. (2008). *Entre luces y sombras. Miradas sobre los indígenas en el área metropolitana de Monterrey*. México: Publicaciones de la Casa Chata, Ciesas.
- Dussel, E. (2007). *20 tesis de política*. México: Siglo XXI.
- Dussel, E. (2007). *Política de la liberación. Historia mundial y crítica*. Madrid: Trotta.
- Dussel, E. (2009). *Política de la liberación. Volúmen II: Arquitectónica*. Madrid: Trotta.
- Duverger, M. (2014). Influencia de los sistemas electorales en la vida política. En A. VV, *Diez textos básicos de Ciencia Política* (págs. 37-76). Barcelona: Ariel.
- Easton, D. (2012). *Esquema para el análisis político*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Echeverría, B. (2010). *Modernidad y blanquitud*. México: Era.
- Educativos, C. d. (2013). *Proyecto de sistematización de la información existente sobre la participación electoral de los pueblos indígenas en México*. México: Centro de Estudios Educativos.
- Engels, F. (2010). *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. Barcelona: Biblioteca Pensamiento Crítico.
- Evans, V. (2007). *A Glossary of Cognitive Linguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Favre, H. (1999). *El indigenismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Flick, U. (2007). *Introducción a la Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata.
- Flick, U. (2007). *La gestión de la calidad en Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata.

- Flick, U. (2014). *La gestión de la calidad en Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata.
- Flores Cruz, C. (2003). Características, regulación y perspectivas del istema electoral por Usos y Costumbres. En T. E. Federación, *Derechos Indígenas y Elecciones* (págs. 31-48). México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Foucault, M. (2009). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. México: Siglo XXI.
- Freidenberg, F. (2016). *Los Sistemas de Partidos en América Latina*. México: INE/UNAM/IIJ.
- Fromm, E. (1982). *El miedo a la libertad*. Barcelona: Paidós.
- Galeano, E. (2015). *Las venas abiertas de América Latina*. México, D.F: Siglo XXI.
- Gallardo, M. (2007). *Elecciones y pueblso indígenas. Participación política de los Distritos indígenas. Estudio de caso en el nuevo Distrito 04 Zacapoaxtla, Puebla*. Obtenido de http://pac.ife.org.mx/colmex2012/docs/03_Gallardo.pdf
- Gaos, J. (1973). *Historia de Nuestra Idea del Mundo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- García, D. (2013). La espacialidad de los indígenas en el área metropolitana de Monterrey . *Relaciones 134, primavera* , 57-92.
- Glaser, B., & Strauss, A. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Nueva York: Aldine.
- Gómez, C. (2015). *De la administración pública tradicional a la nueva gestión pública. Evolución, conceptos y desafíos*. México: McGrawHill.
- González Casanova, P. (2013). *La democracia en México*. México: Era.
- González Galván, J. (2010). *El Estado, los Indígenas y el Derecho*. México: UNAM.
- González Galván, J. (26 de Junio de 2013). *Hechos y Derechos*. Obtenido de <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/6848/8784>
- González Oropeza, M., & Martínez, F. (2002). *El derecho y la justicia en las elecciones de Oaxaca*. México: TEEO.
- Goodman, N. (1990). *Maneras de hacer mundos*. Madrid: Visor.
- Gorostiza, M. (2006). *Cartilla política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gramsci, A. (2009). *La política y el Estado moderno*. Barcelona: Biblioteca de Pensamiento Crítico.
- Granados, A. (2005). Las nuevas zonas de atracción de migrantes indígenas en México. *Investigaciones Geográficas, núm. 58*, 140-147.

- Gruening, E. (1928). *Mexico and Its Heritage*. Nueva York: Century Co.
- Guerrero, O. (1996). *Ciencia del Estado. Juan Enrique Von Justi*. México: Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C.
- Guerrero, O. (2010). *Las Administración Pública a través de las Ciencias Sociales*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gutiérrez Saenz, R. (1995). *Historia de las doctrinas filosóficas*. Estado de México: Esfinge.
- Gutmann, A. (2003). *Identity in Democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Habermas, J. (1998). *Más allá del Estado nacional*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Habermas, J. (2008). *Teoría y Praxis*. Madrid: Taurus.
- Habermas, J. (2014). *Teoría de la acción comunicativa*. Madrid: Trotta.
- Hall, E. (1990). Las voces del tiempo. En E. Hall, *El lenguaje silencioso* (págs. 15-32). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Alianza Editorial Mexicana.
- Hall, P., & Taylor, R. (1999). Enfoques Contemporáneos en Ciencia Política. *Revista Conmemorativa del Colegio de Ciencias Políticas y de la Administración Pública, A. C.* , 15-51.
- Hardt, M., & Negri, A. (2005). *Imperio*. Barcelona: Paidós.
- Harvey, D. (1977). *Urbanismo y desigualdad social*. Madrid: Siglo XXI.
- Hasen, R. (1971). *The Politics of Mexican Development*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Hay, C. (2002). *Political analysis: a critical introduction*. Nueva York: Palgrave.
- Hegel, F. (2007). *Fenomenología del Espíritu*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Heidegger, M. (2014). *El ser y el tiempo*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Hémond, A., & Recondo, D. (2002). *Dilemas de la democracia en México. Los actores sociales ante la representación política*. México: IFE.
- Henrard, K. (2005). 'Participation', 'Representation' and 'Autonomy' in the Lund Recommendations and their Refleltions in the Supervision of the FCNM and Several Human Rights Conventions. *International Journal on Minority and Group Rights*, 12, 133-168.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (1999). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.

- Hernández, S. (1999). *Culturas y acción comunicativa. Introduccoon a la pragmática intercultural*. Barcelona: Octaedro.
- Hobbes, T. (1994). *Leviatán*. Barcelona: Altaya.
- Hoffmann-Riem, C. (1980). Die Sozialforschung einer interpretativen Soziologie: Der Datengewinn. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 32, 339-372.
- Horkheimer, M. (2007). *Crítica de la razón instrumental*. La Plata: Terramar.
- Hunt, S., Benford, R., & Snow, D. (1994). *Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construcción social de los movimientos*, en Laraña, Enrique *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad pp.221-249*. Madrid: CIS.
- INEGI. (2010). *Migración interna a partir del Censo de Población y Vivienda 2010*. México: INEGI.
- INEGI. (2015). *Encuesta Intercensal*. Nuevo León: INEGI.
- Kahn, K., & Kenney, P. (1999). Do negative campaigns mobilize or suppress turnout? Clarifying the relationship between negativity and participation. *American Political Science Review*, Vol. 93, No 4.
- Kant, E. (1968). *Principios metafísicos de la doctrina del derecho*. México: Dirección Geneal de Publicaciones.
- Kaplan, M. (1983). *Formación del Estado nacional en América Latina*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Kaplan, M. (1996). *El Estado Latinoamericano*. México: UNAM-III.
- Kirk, J., & Miller, M. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills: Sage.
- Kueger, R. (1991). *El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplicada*. Madrid: Pirámide.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlicka, W. (2009). Categorizing Groups, Categorizing States: Theorizing Minority Rights in a World of Deep Diversity. *Ethnics & International Affairs*, 371-388.
- Kymlicka, W., & Norman, W. (1997). El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. *Ágora núm. 7*, 5-42.
- Lakoff, G. (1987). The cognitive model of anger inherent in American English. En D. H. (eds.).
- Lartigue, F., & Morales, L. (2008). *Diagnóstico para la operación de procesos electorales en ocho regiones indígenas de México*. México: Fundación Ford.

- Lasswell, H., & Kaplan, A. (1950). *Power and Society*. New Heaven: Yale University Press.
- Lee Van Cott, D. (1994). Indigenous peoples and democracy: issues for policy makers. *Indigenous peoples and democracy in Latin America*, 1-27.
- Leighley, J. (1990). Social interaction and contextual influences on political participation. *American Politics Quarterly*, 18, 4, 459-475.
- Levinas, E. (2012). *Totalidad e Infinito: Ensayos sobre la exterioridad*. Salamanca: Sígueme.
- Lewis, O., & Steinmo, S. (2012). How Institutions Evolve. Evolutionary Theory and Institutional Change. *Polity*, Vol. 44, N.º 3, 314-339.
- Leyva, X., & Vázquez, J. (2008). El consejo municipal plural ampliado de Ocosingo: demandas de ciudadanía étnica en tiempos de guerra. En X. Leyva, A. Burguete, & S. S. (coords.), *Gobernar (en) la diversidad: experiencias indígenas desde América Latina. Hacia la investigación de co-labor*. México: CIESAS.
- Lijphart, A. (1997). Unequal participation: Democracys unresolved dilemma. *American Political Science Review*, 1-14.
- Linares, S. (2013). Derecho de consulta indígena e innovación democrática: un debate complejo. En S. Martí, C. Wright, J. Aylwin, & N. Yáñez, *Entre el desarrollo y el buen vivir* (págs. 99-129). Madrid: Catarata.
- Lipset, S. (1959). *Political Man: The Social Basis of Politics*. New York: Doubleday.
- Locke, J. (1990). *Segundo tratado sobre el gobierno civil*. Madrid: Taurus.
- Maquiavelo, N. (2013). *El Príncipe*. México: Taurus.
- Marañón, F., Saldierna, A., & Muñiz, C. (2013). La presencia indígena en los programas de ficción y entretenimiento de la televisión mexicana. En C. Muñiz, *Medios de comunicación y prejuicio hacia los indígenas* (págs. 51-66). México, D.F: Fontamara.
- March, J., & Olsen, J. (1993). El nuevo institucionalismo: factores organizativos de la vida política. *Zona Abierta*, 1-41.
- March, J., & Olsen, J. (1997). *El redescubrimiento de las instituciones. La base organizativa de la política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Marcuse, H. (1968). *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. México: Ariel.
- Martí, S. (2008). Las razones de presencia y éxito de los partidos étnicos en América Latina: los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú (1990-2005). *Revista Mexicana de Sociología*, año. 70, vol. 4, 675-724.

- Martí, S. (2013). Balance y retos de la lucha de las poblaciones indígenas en el cambio de ciclo. En S. Martí I Puig, C. Wright, J. Aylwin, & N. Yáñez, *Entre el desarrollo y el buen vivir* (págs. 21-42). Madrid: Catarata.
- Martí, S., Wright, C., Aylwin, J., & Yáñez, N. (2013). *Entre el desarrollo y el buen vivir. Recursos naturales y conflictos en los territorios indígenas*. Madrid: La Catarata.
- Martínez Espinoza, M. I. (2015). Reconocimiento sin implementación. Un balance sobre los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Nueva Época, Año LX, núm. 224, mayo-agosto*, 251-278.
- Martínez, J. d. (2015). *Factores que se relacionan o explican la participación política de los jóvenes en el Área Metropolitana de Monterrey. Disertación doctoral publicada*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Martínez-Espinoza, M. (2012). La paradoja irresuelta. Apuntes para el estudio de los derechos y la ciudadanía de los pueblos indígenas en México. *Elecciones, vol. 11, núm. 12, enero-diciembre*, 235-264.
- Martos, A. (2007). *Panblo de Tarso, ¿Apóstol o hereje?: La perturbadora verdad sobre el origen de la religión más influyente en la historia de occidente*. Madrid: NOWTILUS.
- Marx, C. (1992). *La ideología alemana*. Valencia: Servei de Publicacions.
- Marx, K. (1968). *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*. Barcelona: Ariel.
- Marx, K. (1976). *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*. México: Ediciones de cultura popular.
- Marx, K. (1991). *El capital. Crítica de la economía política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Mazzoleni, G. (2010). *La Comunicación Política*. Madrid: Alianza .
- Melgar, R. (1991). Las categorías utópicas de la resistencia étnica en América Latina. *Cuicuilco, núm. 27, julio-septiembre*.
- Melucci, A. (2010). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.
- Mena, P. (1999). Actitudes lingüísticas e ideologías educativas . *Alteridades, vol. 9, núm. 17, enero-junio*, 51-70.
- Mendoza, J. (2010). *La comunidad indígena en el contexto urbano. Desafíos de sobrevivencia*. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
- Mercer. (2017). *Quality of Living City Rankings*. Nueva York: Mercer.

- Merino, M. (2012). *La participación ciudadana en la democracia*. México: Instituto Federal Electoral.
- Meyer, L. (1977). *Lecturas de política mexicana*. México: Colegio de México.
- Migdal, J. (2011). *Estados débiles, Estados fuertes*. México: FCE.
- Milbrath, L., & Goel, M. (1977). *Political participation*. Chicago: Rand McNally.
- Miller, W. (1992). The Puzzle transformed: explaining declining turnout. *Political Behavior*, 14, 1.
- Monsiváis, C. (2004). México a principios del siglo XXI: La globalización, el determinismo, la nación ampliada y globalizada. En E. Subirats, *América Latina y la guerra global* (págs. 27-56). México, D.F: FCE.
- Montemayor, A. (1971). *Historia de Monterrey*. Monterrey: Asociación de Editores y Libreros de Monterrey.
- Mouffe, C. (2011). *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Muñiz, C. (2012). Creando ciudadanos comprometidos (Aportación de los hábitos comunicativos al desarrollo de la sofisticación política entre los jóvenes). *Revista Mexicana de Opinión Pública*, 55-74.
- Muñoz, H. (2014). En pos del derecho con mandato y recursos: una consulta sobre educación a comunidades indígenas de México. En A. Tomaselli, S. Ordóñez, & C. Wright, *Justicia y Formas de participación indígena* (págs. 75-103). Bilbao: Universidad de Deusto.
- Nietzsche, F. (2014). *Genealogía de la moral*. México, D.F: Editorial Tomo.
- Nohlen, D. (1999). *Sistemas de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos políticos*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-IFE-Friedrich Naumann Stiftung.
- Nohlen, D. (2004). La participación electoral como objeto de estudio. *Elecciones* 3,, 137-157.
- North, D. (1995). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Nuncio, A. (1982). *El Grupo Monterrey*. México: Nueva Imagen.
- Nuncio, A. (1997). *Visión de Monterrey*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León/Fondo de Cultura Económica.
- O'Donnell, G. (1993). Estado, democratización y ciudadanía. *Revista Nueva Sociedad*, 128, 62-88.
- O'Donnell, G. (2009). Democracia Delegativa. *Journal of Democracy en español*. Vol. 1, 7-23.
- OMS. (2016). *Informe*. OMS.

- Orozco, J. (1997). *El Estado Pragmático*. México: Fontamara.
- Orozco, J. L. (2004). *La revolución corporativa*. México, D.F: Fontamara.
- Osorio, J. (2014). *El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto del poder*. México: FCE.
- Osorio, J. (2014). *El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto del poder*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Padilla Villamour, J. (2017). *Monterrey a través de sus élites: hacia una configuración regional del poder*. Ciudad de México: Disertación de licenciatura.
- Pajuelo, R. (2006). *Participación política indígena en la sierra peruana. Una aproximación desde las dinámicas nacionales y locales*. Lima: IEP, Fundación Konrad Adenauer.
- Pajuelo, R. (2007). *Reinventando las comunidades imaginadas. Movimientos indígenas, nación y procesos sociopolíticos en los países centroandinos*. Lima: Institut français d'études andines.
- Pasquino, G. (1988). Participación política, grupos y movimientos. En G. Pasquino, *Manual de Ciencia Política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Pasquino, G. (1994). Naturaleza y evolución de la disciplina. En G. y. Pasquino, *Manuela de Ciencia Política* (págs. 15-38). Madrid: Alianza Editorial.
- Peñaranda Correa, F. (2013). The Evaluation of Qualitative Research. A Reflection From a Justice Perspective. *Qualitative Inquiry*, Vol 19, Issue 3, 209 - 218.
- Pérez, C. (2006). Enfoques teórico-metodológicos en el estudio de la participación electoral. *Cuestiones Políticas* 37, julio-diciembre, 74-93.
- Pérez-Luño, A. (2002). Ciudadanía y definiciones. *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 25, 177-211.
- Peters, B. G. (2003). *El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política*. Gedisa.
- Peters, G. (1999). *Institutional Theory in Political Science. The New Institutionalism*. London: Pinter.
- Peterson, S. (1992). Church participation and political participation. The spillover Effect. *American Political Quarterly*, 20, 1, 123-139.
- Platón. (2012). *La República*. Madrid: Edimat.
- Poulantzas, N. (2005). *Las clases sociales en el capitalismo actual*. México: Siglo XXI.
- Powell, G. (1982). *Comparative Democracies: Participation, Stability and Violence*. Cambridge: Harvard University Press.

- Powell, G. (1986). American Voter Turnout in Comparative Perspective. *American Political Science Review*, 80, 17-43.
- Putnam, R. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78.
- Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. En B. d. (eds), *Epistemologías del Sur (Perspectivas)* (págs. 67-107). Madrid: Akal.
- Ramos, S. (1934). *El perfil del hombre y la cultura en México*. México: Colección Austral.
- Ramos, S. (1997). *El perfil del hombre y la cultura en México*. México, D.F: ESPASA-CALPE, MEXICANA, S.A.
- Rapley, T. (2007). *Los análisis de la conversación, del discurso y de documentos en Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata.
- Recondo, D. (2007). *La política del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca*. México: CIESAS.
- Redención. (27 de febrero de 1903). *Redención*, pág. 3.
- Revueltas, J. (1978). *México 68: Juventud y Revolución*. México: Ediciones Era.
- Revueltas, J. (1979). *Los días terrenales*. México: Ediciones Era.
- Reyes, A. (1942). *La Última Tule*. México: Imprenta Universitaria.
- Reyes, A. (2015). *Alfonso Reyes, "un hijo menor de la palabra"*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Rodríguez, A. (2013). Entre la integración y la exclusión. Procesos de aculturación hacia la población indígena regiomontana. En C. Muñiz, *Medios de comunicación y prejuicio hacia los indígenas* (págs. 125-141). México, D.F: Fontamara.
- Rodríguez, Gil, & García. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Maracena: Ediciones Aljibe.
- Rorty, R. (1996). *Objetividad, relativismo y verdad*. Barcelona: Paidós.
- Rosaldo, R. (2000). La pertenencia no es un lujo: procesos de ciudadanía cultural dentro de una sociedad multicultural. *Desacatos*, núm. 3, CIESAS.
- Rose, R., & Mishler, W. (1998). Negative and positive party identification in post-communist countries. *Electoral Studies*, 17, 2, 217-234.
- Ross, S. (1955). *Francisco I. Madero: Apostle of Democracy*. Nueva York: Columbia University Press.
- Rousseau, J. (1996). *El contrato social*. Madrid: Alba.

- Rousseau, J. (2008). *El Contrato Social o Principios de Derecho Político*. México: Época.
- Ruiz, J. (2003). *Democracia y participación política de los pueblos indígenas en América Latina*. París: UNESCO.
- Ruiz, R. (1980). *The Great Rebellion, Mexico, 1905-1924*. Nueva York: W.W. Norton.
- Rull, M. (2005). Rompiendo mitos y barreras. La participación indígena en los procesos electorales de Guatemala. *Trace. Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre*, núm. 48, 72-89.
- Sabogal, S. (2012). Las mujeres indígenas latinoamericanas en busca del acceso a la justicia. Enfrentándose a la exclusión y discriminación. *Contenido Arte, Cultura y Ciencias Sociales*, núm. 2,, 26-40.
- Salazar, A. (2006). *¿Existe una filosofía de nuestra América?* México: Siglo XXI.
- Saldaña, J. (1970). El general don Porfirio Díaz en Monterrey. *Humanitas*, núm. 11, 413-452.
- Salinas Rocha, I. (1978). *Nostro Grupo*. Monterrey: Editorial Isaro.
- Sánchez, F. (2011). *La cultura política, identidad política y gobernabilidad en Monterrey. Disertación doctoral publicada*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Santiago Benítez, G., & Domínguez Cuevas, A. (2014). Un acercamiento a la participación político electoral de los pueblos indígenas de México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, XLIV, 83-135.
- Santos, B. d. (2010). *Refundación del Estado en América Latina: perspectivas desde una epistemología del Sur*. México: Editorial Siglo XXI, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes.
- Saragoza, A. (2008). *La élite de Monterrey y el Estado Mexicano 1880-1940*. Monterrey: Fondo Editorial de Nuevo León.
- Sartori, G. (2002). *La política: lógica y método en las ciencias sociales*. México: FCE.
- Sartori, G. (2004). ¿Hacia dónde va la Ciencia Política? . *Política y Gobierno*. vol. XI, núm. 2, , 349-354.
- Sartori, G. (2005). *Partidos y Sistemas de Partidos*. Madrid: Alianza Editorial.
- Schilling-Vacaflor, A. (2008). Identidades indígenas y demandas político-jurídicas de la CSUTCB y el CONAMAQ en la constituyente Boliviana. *T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales*, núm. 23-24.
- Schopenhauer, A. (2003). *El mundo como voluntad y representación, vol. I*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Schumpeter, J. (1983). *Capitalismo, socialismo y democracia*. Barcelona: Orbis.

- Scott, W. (1987). *Organizations: Rational, Natural and Open Systems*. Englewood Cliffs: Prentice/Hall.
- Scott, W. (1995). *Institutions and organizations: Ideas, Interests, and Identities*. Thousand Oaks: Sage.
- Sierra, M. (2000). Derecho indígena y mujeres: viejas y nuevas costumbres, nuevos derechos. En P. R. (coords.), *Debates actuales en los estudios de género*. México: CIESAS.
- Sommano, M. (2005). Más allá del voto: Modos de participación política no electoral en México. *Foro Internacional*, 45(1), 65-88.
- Sousa, E. (2008). El espacio urbano y su transformación metropolitana en la sobremodernidad. El caso Monterrey, N.L., México. *Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, vol. 17, núm. 34, agosto-diciembre, 168-203.
- Spencer, H. (1985). *El individuo contra el Estado*. Madrid: Orbis.
- Spitz, J.-F. (2001). Estado de naturaleza y contrato social. En P. Raynaud, & S. Rials, *Diccionario Akal de Filosofía Política* (págs. 262-268). Madrid: Akal.
- Stavenhagen, R. (2000). *Conflictos étnicos y Estado nacional*. México: Siglo XX/Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.
- Stavenhagen, R. (2009). Los pueblos indígenas como nuevos ciudadanos del mundo. En N. Álvarez Molinero, D. Oliva Martínez, & N. Z.-F. (Eds), *Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia un mundo intercultural y sostenible* (págs. 19-36). Madrid: Catarata.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basic of Qualitative Research*. Londres: Sage.
- Tarrow, S. (2012). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Taylor, C. (2014). *Hegel y la sociedad moderna*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Tejera, H. (1994). Indígenas y cultura política, democracia y participación política en las regiones étnicas de México. En J. A. (coord), *Cultura política y educación cívica*. México: Porrúa.
- Tomaselli, A. (2016). *Indigenous People and their Right to Political Participation*. Baden-Baden: Nomos.
- Torres Espinosa, E. (2015). El nuevo Institucionalismo: ¿hacia un nuevo paradigma? *ena época*, núm. 34 (enero-abril), 117-137.
- Tricot, V. (2010). Sociología y Mundo indígena en Movimiento. *Kutral N°1*.

- Tyler, R. (1968). *The Age of Cotton: Santiago Vidaurri and the Confederacy, 1861-1864*. Texas: Texas Christian University.
- Van Cott, D. (2003). Cambio institucional y partidos étnicos en Sudamérica. *Análisis Político*, vol. 48, enero-abril, 26-51.
- Van Cott, D. L. (2004). LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y SUS LOGROS: LA REPRESENTACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO JURÍDICO EN LOS ANDES. *América Latina Hoy*, 36, 141-159.
- Van Dijk, T. (2009). *Discurso y Poder*. Barcelona: Gedisa.
- Vann Cott, D. (2002). Movimientos indígenas y transformación constitucional en los Andes: Venezuela en perspectiva comparativa. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 8, 3, 41-60.
- Vasconcelos, J. (2014). *La Raza Cósmica*. México, D.F: Editorial Porrúa.
- Verba, S., Lehmans, K., Brady, H., & Nie, N. (1993). Citizen activity: who participates? What do they say? *American Political Science Review*, 87, 2, 303-318.
- Villegas, A. (1972). *Positivismo y porfirismo*. México: Sep/Setentas.
- Villoro, L. (2017). *Ensayos sobre indigenismo. Del indigenismo a la autonomía de los pueblos indígenas*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Vizcaya, I. (2006). *Los orígenes de la industrialización de Monterrey 1867-1920*. Monterrey: Fondo Editorial de Nuevo León/sep.
- Von der, E. (2004). El secuestro de la palabra. En E. S. (coordinador), *América Latina y la guerra global* (págs. 11-26). México: FCE, ITESM.
- Von Justi, E. (1996). *La Ciencia del Estado*. México: Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C.
- Weber, M. (1969). *Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Weber, M. (2007). *Sociología del poder. Los tipos de dominación*. Madrid: Alianza Editorial.
- Weber, M. (2016). *El político y el científico*. México: Colofón.
- Wilhelmi, M. (2007). La construcción de la autonomía indígena: hacia el Estado intercultural como nueva forma de Estado. En S. M. (ed.), *Pueblos indígenas y política en América Latina. El reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI* (págs. 247-279). Barcelona: CIDOB.

- Wilk-Racieska, J. (2012). *Entre la visión del mundo temporal y la aspectual. Casos del español sudamericano*. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- WILK-RACIEŃSKA, J. (2012). Esbozo del estudio de las funciones semántico-pragmáticas del YA. *ELUA*, 26,, 383-404.
- Wright, C. (2011). Una aproximación empírica a la construcción de la identidad indígena: Los marcos interpretativos y conflictos sociales en Cusco. En P. Ibarra, & M. Cortina, *Recuperando la Radicalidad. Un encuentro entorno al Análisis Político Crítico* (págs. 421-442). Barcelona: Editorial Hacer.
- Wright, C. (2013). Perú: El estado de emergencia como mecanismo de represión de la protesta indígena en el contexto de conflictos sobre recursos naturales. En S. Martí I Puig, C. Wright, J. Aylwin, & N. Yáñez, *Entre el desarrollo y el buen vivir* (págs. 265-292). Madrid: Catarata.
- Wright, C., & Aguirre, V. (2015). Grupos vulnerables en el escenario político. En X. Arango, & A. Hernández, *Ciencia Política. Perspectiva Multidisciplinaria* (págs. 169-182). México, D.F: Tirant lo blanch.
- Wright, C., & Aguirre, V. (2015). Grupos Vulnerables en el Escenario Político. En X. Arango Morales, & A. Paz Hernández, *Ciencia Política. Perspectiva Multidisciplinaria* (págs. 167-180). México, DF: Tirant lo Blanch.
- Wright, C., & Hinojosa, A. (2014). NVivo. En K. Sáenz López, & G. Tamez González, *Métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas aplicables a la investigación en ciencias sociales* (págs. 459-477). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Yáñez, A. (2015). *Las tierras flacas*. México: Grupo Planeta.
- Zea, L. (1953). *La conciencia del hombre en la filosofía*. México: Imprenta Universitaria.
- Zea, L. (1968). *El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Zea, L. (1978). *Conciencia y posibilidad del mexicano, El occidente y la conciencia de México, Dos ensayos sobre México y lo mexicano*. México: Editorial Porrúa.
- Zegada Claire, M. (2012). *Indígenas y mujeres en la democracia electoral: análisis comparado*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Zolla, C., & Zolla, E. (2004). *Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas*. México: UNAM.

